POR QUÉ SE ROMPIÓ ESTADOS UNIDOS

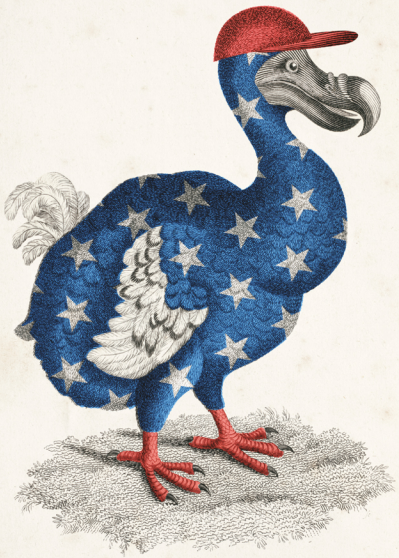
Populismo y polarización en la era Trump

ROGER SENSERRICH

DEBATE

POR QUÉ SE ROMPIÓ ESTADOS UNIDOS

Populismo y polarización en la era Trump



ROGER SENSERRICH

DEBATE

Por qué se rompió Estados Unidos

Populismo y polarización en la era Trump

ROGER SENSERRICH

DEBATE

1

La (no) excepción de Trump

Una imagen para definir una presidencia

Un hombre con el torso desnudo, envuelto en tatuajes, blandiendo una bandera de Estados Unidos. Su cabeza está cubierta por un inverosímil gorro de piel con cuernos. Su cara, pintada con colores patrióticos, se desencaja en un grito a medio camino entre la indignación y la euforia. El hombre se llama Jacob Chansley, y está de pie, desafiante, orgulloso y audaz, presidiendo la cámara del Senado de la nación más poderosa de la tierra.

El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 definió, en gran medida, la presidencia de Donald Trump. Durante cuatro años caóticos, el otrora magnate inmobiliario y estrella televisiva dirigió Estados Unidos entre escándalos y polémicas constantes. Trump siempre había mostrado un abierto desdén por las instituciones de su país, incluso durante la campaña de primarias. Cualquiera que hubiera escuchado con atención sus palabras hasta entonces no se sorprendió cuando la misma madrugada electoral se negó a aceptar los resultados. Tampoco fue una sorpresa que, durante los dos meses largos entre la votación y el 6 de enero, el presidente y una estrafalaria banda de acólitos, chiflados y lamebotas hicieran todo lo posible para intentar revertir su derrota en las urnas.

La lista de demandas judiciales, bobadas y pleitos espurios, intentos chusqueros de enviar a electores fraudulentos, presiones a responsables electorales y maniobras ineptas en los tribunales del presidente tras perder los comicios fue extensa y probablemente ilegal. Trump se enfrenta a múltiples imputaciones judiciales por esas tramas. El asalto al Capitolio era un intento a la desesperada de mantenerlo en el poder, recurriendo a la violencia si fuera necesario.

El Congreso, ese 6 de enero, se reunía para hacer el recuento de votos emitidos por el Colegio Electoral y así confirmar formalmente la victoria de Joe Biden. Durante más de un siglo, esta sesión había sido un trámite; los legisladores leían los resultados, hacían la cuenta y proclamaban a un presidente. Trump y sus cómplices, sin embargo, querían invocar un puñado de artículos de una ley medio olvidada de 1877 (la Electoral Count Act) y, basándose en esta norma, legisladores de ambas cámaras presentarían objeciones a los resultados de varios estados, alegando fraude. El vicepresidente, Mike Pence, en su rol de presidente del Senado, debería rechazar esos votos, enviando la decisión final a la Cámara de Representantes o al Tribunal Supremo, o arrogándosela él mismo para mantener a Trump en la Casa Blanca.

Era, sin demasiados ambages o discusión posible, un golpe de Estado. Cuando Mike Pence, la figura indispensable en este complot, se negó a saltarse la Constitución y dejó claro a Trump que iba a certificar los resultados, decidieron ir más allá. Tras semanas diciéndoles a sus seguidores que se «prepararan» para «algo salvaje», el 6 de enero Trump les pidió en su mitin junto a la Casa Blanca que marcharan hacia el Capitolio y «lucharan» por su país.

No está del todo claro, por ahora, quién estuvo detrás del asalto al Capitolio. Personajes cercanos a la Casa Blanca (Roger Stone, Mike Flynn,

Steve Bannon) llevaban semanas en contacto con milicianos de ultraderecha (Proud Boys, Oath Keepers y Three Percenters, los más destacados) hablando sobre posibles protestas. Fue, indudablemente, un ataque organizado por el que muchos de los líderes de estas milicias recibieron largas condenas de cárcel por sedición. Es posible que nunca lleguemos a saber con certeza si hubo una coordinación tácita o explícita entre *alguien* en la Casa Blanca y los manifestantes o si todo fue una infeliz coincidencia.

Lo que es obvio, sin embargo, es que los hechos que acabaron con Jacob Chansley vestido de chamán aullando por los pasillos del Capitolio rodeado de exaltados, paramilitares, activistas, manifestantes y periodistas horrorizados haciendo fotos nunca deberían haber sucedido. La imagen de un hombre estrafalario y cornudo con la bandera americana pintada en el rostro asaltando la sede del poder legislativo del país más poderoso de la tierra quedará para siempre asociada a la era Trump.

La pregunta, por supuesto, es por qué. Mi intención, en las páginas de este libro, es tratar de explicar las causas y eventos que llevaron a Estados Unidos a elegir a un personaje como Donald Trump presidente en 2016, tras una de las campañas electorales más extrañas de la historia del país. Con ello, quiero también intentar responder si la era Trump y los sucesos del 6 de enero son una anomalía o una consecuencia natural de años de disputas y conflicto en la política americana, y si representan el fin de una era de populismo antiélites o el principio de algo nuevo y peligroso.

Responder a estas dos preguntas no es en absoluto sencillo, porque Estados Unidos es un lugar de una complejidad casi inabarcable. Cualquier democracia es, por definición, un sistema complicado, y la americana es especialmente barroca. Estados Unidos es un país enorme, colosal, mucho más diverso cultural e ideológicamente que cualquier nación del Viejo Continente. Es más del doble de grande que toda la Unión Europea y,

aunque tiene menos habitantes, su población no se queda atrás (333 millones por los 446 de la UE). Al contrario que el resto del mundo desarrollado,[1] la población del país sigue creciendo con fuerza, merced de su casi infinita capacidad de atraer inmigración.

Esto hace muy complicado hablar de Estados Unidos como de un país, ya que en muchas ocasiones parece comportarse como varios. Es un sitio confuso, caótico y a menudo ingobernable, donde hablar de grandes tendencias se topa con la realidad de que medio país está tirando en una dirección y el otro medio en la contraria.

UNA DEMOCRACIA DISFUNCIONAL

Antes de empezar la historia y la búsqueda de respuestas, fijémonos en un detalle que suele pasarse por alto al hablar de Trump y de la crisis política en años recientes: el asalto al Capitolio quizá fuera extraordinario, pero no fue inusual. La política americana siempre ha sido mucho más caótica de lo que parece, y el recuerdo de un pasado estable, gentil y razonable es más la excepción que la regla. El mito de una democracia que avanza lenta y decididamente en una senda de progreso inevitable es eso, un mito; esta siempre ha sido una democracia extraordinariamente disfuncional, con años de cambio seguidos con frecuencia por décadas de estancamiento político o retroceso.

Durante la campaña electoral y la presidencia de Donald Trump, una de las palabras más repetidas en todos los medios fue «unprecedented», sin precedentes. Trump hablaba, actuaba y se comportaba como ningún otro candidato presidencial lo había hecho nunca y, una vez en el cargo, tomó decisiones y respondió a problemas de forma completamente inusual. Su

apego por las astracanadas, los insultos infantiles y las reacciones impulsivas lo diferenciaban de cualquier presidente anterior. No lo hacían, sin embargo, dentro del mundillo del movimiento conservador, tanto en el Partido Republicano como alrededor de él.

El Grand Old Party (GOP, el apodo tradicional de los republicanos) siempre ha tenido gente peculiar en el Congreso, o incluso cerca de la Presidencia. Este es, al fin y al cabo, el partido que nombró a Sarah Palin como candidata a la vicepresidencia en 2008. Listar todos los legisladores extravagantes del partido es un ejercicio que ocuparía varios libros. Tenemos desde libertarios inefables milenaristas como Rand Paul hasta gente que cree que existen láseres espaciales controlados por los judíos para provocar incendios forestales como Marjorie Taylor Greene. El Partido Republicano llevaba años tolerando a figuras la mar de estrafalarias entre sus filas, y sus bases siempre han regado sus campañas con donaciones.

El partido, además, lleva décadas rodeado de un ecosistema de medios y activistas increíblemente radicales. Pat Robertson, uno de los fundadores del activismo religioso conservador en los setenta y ochenta, fue un furibundo antisemita capaz de decir repetidas veces que desastres naturales como el Katrina o el terremoto de Haití eran una forma de castigo divino contra los homosexuales o las revueltas contra la esclavitud. Su cadena de televisión, Christian Broadcasting Network, precede a Fox News en más tres décadas (fue fundada en los sesenta), y ha movilizado a sus fieles contra políticos pecaminosos mucho antes que Roger Ailes.

La derecha evangélica ha creado todo un ecosistema paralelo de medios de comunicación, escuelas y universidades. Jerry Falwell, un pastor evangélico que tendría acceso directo a senadores y presidentes del GOP durante décadas, inició su carrera como activista a finales de los años sesenta abriendo un colegio religioso privado para estudiantes blancos en

respuesta a las leyes de desegregación. Fue gente como Falwell, como veremos, la que fundó Moral Majority e hizo campaña a favor de Reagan en el sur. La retórica profamilia y pro valores tradicionales siempre ha estado a dos pasos del conflicto racial; no en vano, Falwell era de la clase de persona capaz de defender con vehemencia el régimen de *apartheid* en Sudáfrica.

Ni Reagan ni Bush padre, ni Bush hijo rehuyeron nunca la compañía de estos dos pastores. Para ellos, eran líderes de organizaciones amigas capaces de movilizar el voto conservador. Aunque evitaban repetir su retórica más extrema, no dudaron en cortejarlos y adoptar parte de su agenda.

En paralelo, surgió también un ecosistema de emisoras de radio AM con *talk shows* sobre política liderado por el carismático (y ultraconservador) Rush Limbaugh. Ningún político republicano que osara contradecir o criticar a Rush solía llegar muy lejos. Su estilo, una mezcla de humor, grandilocuencia, egomanía, diatribas reaccionarias y lenguaje patriótico, generó una horda de imitadores como Michael Savage, Mark Levin, Sean Hannity, Glenn Beck o Tucker Carlson. Basta con haber escuchado a cualquiera de ellos para reconocer los orígenes de la retórica populista y de las tendencias conspiranoicas en Trump.

Aunque hablaremos del movimiento conservador más adelante, alrededor del GOP existen multitud de organizaciones bien financiadas e ideológicamente extremas que sus líderes y candidatos no sólo deben tolerar, sino también cortejar sin tapujos. La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) es, obviamente, la más célebre y extrema, pero grupos como Americans for Tax Prosperity (Americanos a Favor de la Prosperidad Fiscal) de manera rutinaria exigen a los candidatos que prometan, por escrito, que nunca van a subir impuestos. Durante el mandato de Obama, el Tea Party, una constelación de organizaciones más o menos

espontáneas, opuestas al gasto público y la reforma de la sanidad, hizo la vida imposible a muchos legisladores.

Veamos un ejemplo de esta tendencia del GOP a cortejar a sus extremistas. Allá por 2012, un conocido personaje televisivo se pasó varios meses insistiendo en que Obama había nacido en Kenia, y por lo tanto no podía ser escogido presidente. Esto, no hace falta decirlo, era del todo falso, un ataque abiertamente racista por parte de un famosete excéntrico con ganas de atraer la atención. El Partido Republicano en bloque, empezando por todos los medios de comunicación asociados a este, se sumó al «clamor» de este individuo exigiendo que Obama hiciera público su certificado de nacimiento, mientras le jaleaban como un héroe. Obama, nacido en Hawái, acabó por hacerlo público.

Lejos de alejarse de alguien que había quedado en evidencia y flirteado con mensajes racistas durante media campaña, los republicanos le aplaudieron. Alguien había retado al presidente y le había forzado a responder. Se había hablado, por fin, de su pasado e infancia fuera de Estados Unidos, de cómo su padre había sido un radical africano. Lo alabaron tanto que Mitt Romney, una vez nominado como candidato a la presidencia, tuvo que acercarse a su mansión para que le diera su apoyo oficialmente en las generales. El personaje que inició toda esta polémica sobre el certificado de nacimiento de Obama, por supuesto, era Donald J. Trump.

Del mismo modo que la retórica extrema lleva décadas instalada en las cercanías del Partido Republicano, su tendencia a intentar utilizar las instituciones en su propio beneficio, o a redefinir qué se espera de estas, tampoco es estrictamente nueva; los republicanos también llevaban años utilizando estrategias de tierra quemada desde las instituciones antes de que Trump llegara al poder. Hasta la presidencia de Bill Clinton, los cierres del

Gobierno federal debidos a desacuerdos presupuestarios en el Congreso eran algo casi desconocido.[2] Tras la derrota demócrata en las legislativas de 1994, Newt Gingrich, ya como *speaker* («portavoz»; el líder de la Cámara de Representantes), forzó un cierre que duró casi un mes, exigiendo recortes presupuestarios. Esta clase de estrategias las repitieron contra Obama, llegando incluso a amenazar con forzar una suspensión de pagos del Gobierno federal.

El GOP también ha utilizado estrategias de obstrucción legislativa cada vez con mayor frecuencia. Tradicionalmente, el Senado de Estados Unidos opera bajo la costumbre de que el debate sobre una ley debe continuar mientras haya algún legislador que así lo quiera. Para evitar que un grupo de senadores bloquee la cámara de forma indefinida hablando sin cesar en contra de una ley que no les guste (un *filibuster*, de donde procede la palabra en español «filibustero»), el líder de esta institución puede invocar una moción de cierre, o *cloture*, para cerrar el debate y empezar a votar sobre la norma en sí. Esta moción requiere una mayoría de tres quintos para ser aprobada.

La del *filibuster* no es una regla nueva. Durante décadas fue utilizada por senadores sureños para bloquear cualquier intento de aprobar leyes de derechos civiles, manteniendo intocables los sistemas de segregación racial en sus estados. No fue hasta la segunda mitad de los años cincuenta cuando Lyndon Johnson, entonces jefe de la mayoría demócrata del Senado, se las ingenió para derrotar a uno de estos bloqueos y aprobar las primeras leyes sobre derechos civiles. Y no fue hasta la década siguiente cuando desde la Presidencia se forzó a la cámara a poner fin a los regímenes racistas de la vieja Confederación.

El uso de estas estrategias de bloqueo fue relativamente limitado en años sucesivos. Aunque el partido que controlaba la Cámara Alta raramente tenía

los sesenta votos necesarios para levantar un *filibuster*, ejecutar uno era complicado. Para empezar, el Senado no podía votar sobre nada más mientras hubiera uno activo, bloqueando por completo la producción legislativa del país y haciendo que otras leyes que quizá sí querían ver aprobadas languidecieran eternamente. Segundo, los filibusteros tenían que estar en la cámara hablando sin cesar, algo que no sólo podía llegar a ser agotador (la Ley de Derechos Civiles de 1964 tuvo a gente dando discursos durante setenta y cinco horas), sino que hacía bien visible quién era la persona que estaba obstaculizando una ley popular.

Supongo que en 1972 los demócratas se hartaron de escuchar discursos y decidieron cambiar las reglas. La norma de que el debate podía seguir hasta el infinito de no ser por un voto de *cloture* siguió en vigor, pero el líder del Senado podía decidir aparcar la ley bajo *filibuster* y llevar otros asuntos al pleno, permitiendo que se siguiera legislando. Parecía una idea razonable, hasta que algunos senadores se dieron cuenta de que esto hacía posible bloquear una ley de manera indefinida sin apenas esfuerzo: les bastaba con objetar a que fuera votada, amenazando con empezar a dar la turra sin cesar, pero sin la necesidad física de hacerlo. La norma que hacía exigible una supermayoría de sesenta votos, hasta entonces invocada sólo de forma ocasional y con gran esfuerzo de todos los presentes, se convirtió en una que exigía sesenta votos para casi cualquier legislación.

El resultado inmediato fue un aumento considerable del uso de esta estrategia durante la década de los setenta, hasta estabilizarse en alrededor de treinta *flibusters* al año durante la presidencia de Reagan. Su uso empezó a crecer durante el mandado de Bush padre, subió con fuerza bajo el de Clinton y se disparó durante la presidencia de Obama, superando ampliamente el centenar de *filibusters* anuales. A efectos prácticos, los

republicanos han hecho que el Senado sólo pueda operar con supermayorías.

Hartos de no poder gobernar, los demócratas reaccionaron cambiando las normas del Senado, eliminando el uso del *filibuster* para confirmar nombramientos judiciales y a cargos en el Ejecutivo. La única excepción que los demócratas mantuvieron fueron los jueces del Supremo, que aún iban a requerir sesenta votos para cerrar debate.

Incluso eso les salió mal. En febrero de 2016, Anthony Scalia, un juez del Alto Tribunal, murió de forma inesperada, dejando una vacante para Obama a siete meses de las elecciones. Los republicanos respondieron bloqueando cualquier nominación hasta después de los comicios, con la excusa de que era mejor que los votantes decidieran quién nombraría a otro juez. Tras las elecciones, cambiaron la norma del *filibuster* sin el más mínimo remordimiento para que su sucesor pudiera ser confirmado por mayoría simple. Como colofón, cuando Ruth Bader Ginsburg murió inesperadamente en 2020 a menos de dos meses de las presidenciales, se olvidaron de eso de que «los votantes decidan» y nombraron a una jueza para ocupar su lugar en apenas treinta días.

Queda, por supuesto, el ejemplo más célebre de toda esta clase de estrategias políticas marrulleras que tanto ha apreciado el GOP en años recientes: el recuento de Florida de 2000. Todo el proceso fue un sainete absurdo repleto de abogados, fruto de máquinas de votación obsoletas, papeletas mal diseñadas y una administración electoral tan partidista como chapucera. En última instancia quien acabó decidiendo sobre la votación y el recuento no fueron los votantes, sino una sentencia del Supremo, controlado (por descontado) por jueces nombrados por presidentes republicanos.

Por muy extrema entonces que fuera la presidencia de Donald Trump y su infame, triste final, es importante recalcar que Trump es el fruto de la evolución del Partido Republicano hacia posiciones políticas y retóricas cada vez más extremas. Las bases del GOP llevaban años escuchando a gente como Rush Limbaugh en la radio, viendo Fox News, recibiendo la retórica apocalíptica de la NRA y con la gente del Tea Party anunciando el advenimiento del comunismo si Estados Unidos aprobaba una muy modesta reforma de la sanidad. También llevaban años viendo cómo la dirección del partido asentía y aplaudía a estos líderes, aunque nunca llegaran a igualar su pasión, indignación e ira.

Trump cambió esta dinámica. Era un *outsider*, un antipolítico que hablaba como uno de los chiflados cercanos al partido, con el fuego y la furia de un exaltado cualquiera. No era el típico republicano educado y formal de Washington, era un tipo *auténtico*. Lo que hacía inusual a Trump no era el hecho de que alguien, dentro del movimiento conservador, dijera barbaridades racistas. Lo que cambió es que quien lo decía era un candidato a presidente, no un congresista excéntrico, una personalidad radiofónica o un líder religioso al que los candidatos que le precedieron habían rendido pleitesía.

A su vez, esta tendencia de Trump a romper con las normas y utilizar el Gobierno federal según más le conviniera no era algo nuevo. Hay una evolución natural entre el obstruccionismo radical de los republicanos ya desde Clinton y el usar todas las artimañas legales e ilegales conocidas para mantenerse en el poder. Intentar chantajear al Gobierno de Ucrania para hacer que atacara a su oponente en las elecciones, que es lo que provocó su primer *impeachment,* no es mucho más radical que amenazar con forzar una suspensión de pagos si el presidente no cede a tus demandas presupuestarias. Trump fue más allá de sus predecesores, pero no era algo

nuevo; era, tan sólo, cualitativamente peor. Trump es una consecuencia, no una causa, de los cambios en la política americana en tiempos recientes.

Lo que es necesario responder, entonces, no es tanto «por qué Trump», sino cuáles han sido los pasos que han llevado a la política americana a su situación actual. Y, para ello, es necesario empezar por las propias instituciones del país.

POLÍTICOS Y DECISIONES

Estados Unidos es en muchos aspectos un lugar que vive profundamente atado a sus instituciones; la guerra de Independencia, los padres fundadores y su Constitución representan el núcleo no sólo de su ordenamiento legal, sino de su propia identidad como nación. Sobre la mitología de la Declaración de Independencia y la Revolución americana se han escrito cientos de libros, historias y varios musicales de Broadway,[3] así que no me detendré demasiado. Me centraré, sobre todo, en las instituciones que emergieron de la revolución, fruto de una compleja serie de acuerdos, concesiones y equilibrios políticos entre los ganadores de la guerra.

La Constitución de Estados Unidos es una obra maestra, uno de los documentos más importantes del pensamiento político de los tres últimos siglos. Es también un texto que cumplirá en breve 235 años desde su entrada en vigor en 1789 y que muestra síntomas inequívocos de su avanzada edad. Aunque ha sido enmendada en veintisiete ocasiones (la última vez en 1992),[4] es casi completamente inamovible, dado su complicado proceso de reforma. La Constitución ha sido interpretada y aplicada de muchas maneras desde su creación, y dice mucho del talento de los que la redactaron que haya sido posible hacerlo. Sin embargo, la

profunda desconfianza de los fundadores ante las «pasiones» de las masas democráticas le otorgaron un profundo sesgo conservador, con importantes consecuencias para el sistema político actual.

El pacto constitucional americano se quebró con extraordinaria violencia en 1861. El gran tema que quedó sin resolver en 1789, la esclavitud, finalmente acabó por dividir al país de forma irremediable. Mi intención, nuevamente, no será repasar la historia de la guerra civil estadounidense, un conflicto de una brutalidad extraordinaria; hay miles de libros, películas y análisis (y también, inevitablemente, un musical de Broadway) que explican esa historia en detalle. Lo que me interesa, para lo que estamos contando, son sus consecuencias, o, más en concreto, la *refundación* después del conflicto. Las guerras civiles son, parafraseando mal a Carl von Clausewitz, la continuación de la negociación constitucional por otros medios. Tras Appomattox y la rendición del sur, el Congreso adoptó una miríada de enmiendas constitucionales y un ambicioso programa legislativo redefiniendo gran parte del armazón legal existente.

Los años posteriores a la guerra civil son uno de los periodos más fascinantes e incomprendidos de la historia del país. Es la era de la Reconstruction (Reconstrucción), entre 1865 y 1877; es en esta época cuando Estados Unidos decide qué clase de paz va a tener después del conflicto, y se negocia un nuevo equilibrio constitucional entre los estados del norte y los del sur. No es un acuerdo explícito; las enmiendas posteriores a la guerra no sufren alteraciones. Lo que sí cambia, sin embargo, es la interpretación e implementación tanto de estas enmiendas como del texto constitucional en sí. Estados Unidos en 1878 es un país muy distinto al de 1860, pero dista mucho de ser una democracia completa.

El equilibrio político y constitucional salido del final de la Reconstruction dominará la nación, con ligeras alteraciones, como mínimo

hasta 1932, en el lado económico, y finales de los años cincuenta, en el lado político. Fue un sistema extraordinariamente estable, que generó una enorme prosperidad material y crecimiento económico. Estaba construido, no obstante, sobre unos cimientos en gran medida reaccionarios, y en él se mezclaron décadas de progreso material con profundas desigualdades y un brutal régimen de discriminación racial.

El final de este consenso, y el nacimiento del sistema político «moderno» de Estados Unidos, tuvo su origen en 1954 con el caso Brown contra el Consejo de Educación, la sentencia del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas. El movimiento por los derechos civiles provocó un cambio profundo en el sistema constitucional del país, o, para ser más específico, en la interpretación de lo que la Constitución representaba.[5] Esto inevitablemente provocó una profunda transformación política, con demócratas y republicanos buscando, negociando y peleándose entre ellos para encontrar una nueva coalición que les permitiera ganar elecciones. En Estados Unidos se habla de *realineamiento* para referirse al enorme cambio que experimentó el sistema de partidos a finales de los sesenta. Aunque no fue el primero (según a quien preguntes, este es el cuarto o quinto),[6] es sin duda el más importante para la historia que queremos contar aquí. Su principal autor, y alguien que será una figura central en este libro, fue Richard Nixon y su campaña presidencial en 1968.

La revolución institucional de los años sesenta no sólo cambió el electorado, sino que también modificó la forma en que estos escogían a sus líderes y candidatos, así como a la misma estructura interna de los partidos. Supuso el nacimiento del sistema de primarias presidenciales, y abrió la puerta a una nueva generación de activistas y estrategias de movilización electoral, incluyendo cambios sustanciales en la financiación de las

campañas. Estos cambios crearon, de nuevo, toda una serie de incentivos para políticos y activistas que redujeron el papel de las formaciones políticas y dieron más poder a las bases y grupos externos.

No es hasta los años noventa cuando el sistema americano de partidos se consolida en un mapa más o menos reconocible para el observador actual. Es entonces cuando nos tocará hablar sobre cómo la evolución de partidos y activistas, por un lado, y los cambios en los medios de comunicación, por otro, empezaron a reforzar las fracturas presentes en el sistema político. El llamado «estilo paranoico» de la política americana[7] (el de McCarthy y la caza de brujas, el nativismo y el populismo antiélites) tomó, poco a poco, el control del Partido Republicano, hasta finalmente acabar en Trump.

Esta no será sólo una historia del movimiento conservador americano, con los demócratas como observadores pasivos a cada paso. Del mismo modo que el Partido Republicano fue adaptándose a los cambios hasta construir una mayoría social aparentemente inalcanzable a mediados de los ochenta (Ronald Reagan ganó las presidenciales de 1984 con 18 puntos de ventaja, 59-41), los demócratas también intentaron responder. Lo hicieron, por un lado, redefiniendo (repetidamente) qué querían ser como partido y, por otro, cambiando de forma sustancial cómo gobernaban allá donde alcanzaban el poder.

Cuando miras un mapa sobre indicadores sociales, económicos o de salud pública en Estados Unidos, se dice a menudo que todos los mapas son en el fondo el mismo. Tenemos, por un lado, los estados del norte y la costa oeste (la sombra de la guerra civil, siempre presente), que tienen cifras de pobreza, esperanza de vida, desigualdad o criminalidad quizá no «europeas» pero sí relativamente normales. Tenemos, por otro, los estados del Viejo Sur y del centro del país, que son más pobres y cuyas cifras en cualquier indicador imaginable son peores, desde mortalidad infantil hasta

sobredosis. Estas diferencias son el resultado de decisiones políticas tomadas a escala estatal, no federal. Son también relativamente recientes, fruto de un cambio de tendencia que se inicia a finales de los setenta y continúa hasta hoy.

Este es un elemento crucial al hablar sobre la evolución política de Estados Unidos y sobre hacia dónde se encamina. La fractura política de finales de los años sesenta provocó la aparición de dos modelos, dos ideas de país diferenciadas, a menudo tirando en direcciones opuestas. Una de estas dos coaliciones, la conservadora, acabó evolucionando en el trumpismo; la otra, la liberal (progresista, en lenguaje político americano), ha acabado escogiendo como líder a un octogenario llamado Joe Biden.

Ambas coaliciones distan mucho de ser monolíticas; el hecho de que hayan terminado donde están ahora es, a su vez, el resultado de décadas de conflictos internos, coaliciones, accidentes, errores y azares variados. Aunque las semillas que acabaron por hacer que un chiflado ataviado como un chamán presidiera el Senado en representación de una de ellas fueron plantadas por Richard Nixon, no hay nada inevitable en esa evolución o en este resultado. Muchos, dentro del movimiento conservador americano, querían otro futuro para su partido y para el país, y acabaron perdiendo ese debate. Del mismo modo, el Partido Demócrata no terminó en manos de los moderados por accidente, pero eso no significa que otras voces no quisieran algo distinto hasta llegar hasta aquí.

Es importante recalcar, sin embargo, la tremenda asimetría entre los dos bloques. En el lado republicano, los chiflados han acabado por tomar el control del partido, hasta el punto de intentar un golpe de Estado. Los demócratas, a pesar de los devaneos histéricos de Fox News, son un partido firmemente en manos de los moderados; la izquierda de la formación tiene su influencia, pero los radicales son expulsados sin dudarlo. Esta asimetría,

como veremos, no se debe a que los demócratas son más sensatos o virtuosos, sino a incentivos institucionales claros. Los republicanos, por su lado, se radicalizan porque pueden hacerlo, gracias a un sistema político que los empuja en esa dirección.

Una nota final, antes de entrar en materia. Durante el libro me referiré a los habitantes de Estados Unidos de América y a todos aquellos eventos, historias, personajes e instituciones provenientes de este país como «americanos», no como estadounidenses. Esto se debe, primero, a que Estados Unidos es el único país del continente que tiene «América» en su designación oficial, así que veo aceptable que reclamen para sí este gentilicio. Segundo, quiero evitar la confusión con los *otros* Estados Unidos, Estados Unidos Mexicanos; del mismo modo que solemos referirnos a estos como «mexicanos», haré lo propio con los americanos. Tercero, la gente aquí utiliza «americans» para referirse a ellos mismos, y creo que es una cuestión de respeto a su cultura utilizar la expresión que ellos prefieren. Cuarto, y más importante, «estadounidenses» es una palabra francamente horrible, larga, complicada y que no hace más que convertir cualquier frase en una parrafada desagradable. Dado que parte de mi trabajo es escribir prosa legible, me tomaré la libertad de usar un vocablo más amigable.

Por si os preguntáis dónde acabó Chansley, el tipo fue condenado a cuarenta y un meses de prisión tras llegar a un acuerdo con las autoridades. Después de una reducción de condena por buena conducta, salió de la cárcel el 25 de mayo de 2023. Desde entonces no ha participado (hasta ahora) en ningún pronunciamiento o golpe de Estado. Chansley sigue soltando teorías de la conspiración alegremente en Twitter, viviendo feliz como un famoso de tercera en la periferia del movimiento conservador americano y de los fans de QAnon.

Dicho todo esto, entonces, creo que es hora de empezar a hablar sobre política en Estados Unidos.

2

Problemas de origen

La Constitución de Estados Unidos de América entró en vigor el 4 de marzo de 1789. Es, sin duda alguna, un documento revolucionario; la ley fundamental de una república federal y democrática, con separación de poderes, Estado de derecho y Gobierno representativo. Aunque sus redactores, como es inevitable en estos casos, bebieron de muchas fuentes y tomaron ideas e inspiración de intelectuales y pensadores de la Ilustración y la Antigüedad, el producto final era radicalmente nuevo, imposiblemente moderno. Si pensamos en las constituciones como «tecnologías de gobierno», fue pasar de un bote de remos a un avión a reacción.

Los americanos están muy muy orgullosos de su constitución. Hay una profunda veneración hacia los padres fundadores, y sus debates, escritos y argumentaciones durante la Convención de Filadelfia, donde fue redactada en 1787, son tratados como textos de los antiguos profetas. La Constitución se considera a veces casi como un objeto sagrado, la verdad revelada que contiene las esencias del país.

Estados Unidos no es un Estado nación según la concepción clásica europea, donde sus habitantes comparten una cultura, historia y lengua comunes. El patriotismo americano no es identitario, sino constitucional, en el sentido de Dolf Sternberger y Jürgen Habermas. Lo que define América como nación son los valores incluidos en su constitución y en la Declaración de Independencia, el respeto al marco institucional y legal del

país desde su fundación. Hay algo (mucho) de religión cívica, de ritual, en el tratamiento de los orígenes del país y sus leyes. El hecho de que los valores primordiales del país en su fundación fueran francamente admirables ha contribuido, sin duda, a la enorme durabilidad y fortaleza del experimento político americano.

En todas las religiones, sin embargo, siempre surge el problema de la interpretación de los textos, y en esto el constitucionalismo americano no es una excepción. En sentido general, podemos hablar de que existen dos ideas o concepciones de patriotismo, ambas intentando responder qué significa ser americano y el sentido último de la Constitución.

El patriotismo progresista ve la historia de Estados Unidos como un camino, un avance constante hacia algo mejor. La Revolución americana, la guerra de Independencia, la Constitución, la declaración de derechos fundamentales son grandes saltos adelante, gestas de una América que es el faro que ilumina al mundo desde la colina, marcando el sendero.

El punto de partida en este patriotismo es la idea implícita de que Estados Unidos no es perfecto. Saben que América comete errores y que el avance nunca será fácil o inmediato. El verdadero patriotismo es trabajar en conseguir «a more perfect union» (una unión más perfecta), una frase recurrente en discursos y proclamas en la historia política americana: un país cada vez mejor que sirva de guía incansable para el resto del mundo. La guerra civil y el final de la esclavitud, la Sociedad de Naciones, el New Deal, la victoria contra los nazis o el movimiento de los derechos civiles son hitos en el camino hacia ese futuro al que aspiramos.

El patriotismo conservador tiene un punto de partida distinto: los ideales de los padres fundadores son la verdadera esencia de Estados Unidos y lo que hace de este país algo único. «Life, liberty, and the pursuit of happiness» (vida, libertad y la búsqueda de la felicidad) son las bases del

sueño americano, lo que realmente los distingue del mundo y convierte en guía. América debe buscar de forma incesante cómo profundizar el sueño de los fundadores, siendo el foco de libertad en el mundo. Para los conservadores, la Constitución es la base de la fortaleza del país. Los ideales constitucionales han hecho de Estados Unidos el país más rico, justo y poderoso de la Tierra. El verdadero patriotismo es defenderla y exportar esos ideales.

La política de Estados Unidos es a menudo un debate sobre si el proyecto americano está o no terminado. Ninguno de los dos patriotismos es exclusivo de demócratas o republicanos ni son estrictamente contradictorios. Hay, sin embargo, un cierto conflicto latente, y la política americana, en gran medida, es la historia del desacuerdo entre estas concepciones.

TRES CONSTITUCIONES

Podemos dividir la historia de Estados Unidos en tres regímenes constitucionales distintos, definidos por cómo se ha interpretado el texto constitucional. A pesar de que apenas ha habido reformas o cambios desde que fue aprobado, los políticos (y jueces) han ido variando su lectura de la ley fundamental, oscilando entre entenderla como un punto de partida o la expresión de un *statu quo* que debe ser protegido.

El periodo inicial, comprendido entre 1789 y 1861, es el del primer acuerdo constitucional tras la fundación del país. Esta primera constitución de 1789 es, como veremos a continuación, una criatura tan notable como imperfecta. Por muy geniales que fueran sus creadores (y nadie duda de que es un documento extraordinario), no deja de ser un primer borrador de las

democracias liberales y democráticas que se han convertido en el régimen político dominante hasta nuestros días. Los padres fundadores eran inteligentes, cultos y pragmáticos, pero no tenían ningún modelo cercano comparable a lo que estaban intentando construir, más allá del fracaso relativo de los artículos de confederación que precedieron el texto constitucional. Aunque es remarcable lo mucho que acertaron, el diseño institucional que decidieron dista mucho de ser perfecto, e incluye múltiples elementos que constituciones posteriores han buscado evitar.

El segundo periodo abarca los años 1865-1965, entre el final de la guerra civil y la aprobación de la Ley de Derecho a Voto durante el mandato de Lyndon Johnson. En esta etapa, gran parte del territorio de Estados Unidos no era una democracia en absoluto debido a la existencia de un sistema de partido único en los estados del sur, con un despiadado régimen de segregación racial. Este sistema constitucional dual, en el que algunos estados son sistemas autoritarios de facto mientras otros son democracias convencionales, se consolida con la salida de Ulysses Grant de la presidencia en 1877, a pesar de la aprobación de varias enmiendas constitucionales de derechos civiles en la década anterior. El sistema empezará a debilitarse en la década de 1930, con el New Deal, pero no es hasta los años sesenta, con las leyes de derechos civiles, cuando el sur tiene una transición democrática.

La tercera época, la de la «Constitución de 1965», es el régimen político actual. Este es un régimen nuevo en muchos aspectos, y su extensión de derechos políticos y libertades democráticas a millones de nuevos votantes provocará una redefinición casi completa del sistema de partidos. Las reformas de los años sesenta y setenta cambiaron profundamente la política del país, y son el origen de los conflictos que nos llevarán hasta Trump.

Es importante recalcar, por cierto, que la Constitución no sufre reforma o modificación alguna en los sesenta; los cambios políticos salen del Supremo, del Congreso y de la Presidencia, no de un proceso constituyente con enmiendas. Lo que vemos es una *reinterpretación* de la Constitución, de la lectura literal del texto a un idealismo de «a more perfect union». Esta reinterpretación es el resultado de una serie de cambios económicos, demográficos y políticos que veremos más adelante.

Los problemas de la Constitución

Volvamos, entonces, al texto constitucional en sí. Todas las constituciones son el resultado de acuerdos y consensos en los temas donde las élites saben qué futuro quieren, y de ambigüedades y de lagunas legales en los apartados donde no están del todo seguros. También hay una mezcla entre apartados bien diseñados y racionales, donde los políticos pueden crear instituciones fuertes, y pegotes no del todo bien construidos allá donde los equilibrios entre facciones exigen ceder poder a algún grupo.

La Constitución de Estados Unidos no es una excepción, y en su diseño hay un puñado de torpezas, agujeros legales y errores. Estos problemas del texto constitucional, como veremos, son la causa de muchos de los conflictos políticos en la historia del país. Son estas ambigüedades y parches variados lo que ha permitido que la Constitución, a pesar de conservar el texto original, tenga tres lecturas completamente distintas a lo largo de su historia.

Repasemos, entonces, la Constitución de 1789, el texto en el momento en que fue escrito y diseñado. A partir de ahí hablaremos, en capítulos sucesivos, sobre sus cambios.

Presidencialismo y separación de poderes

El debate entre presidencialismo y parlamentarismo es una de las discusiones teóricas clásicas en ciencia política. La disciplina se decanta, con bastante claridad, por el segundo modelo; los regímenes parlamentarios suelen ser más estables, menos propensos al bloqueo y más eficaces que los presidenciales, al no tener dos actores con dos fuentes de legitimidad popular distinta intentando imponer su voluntad.

El actor central en la Constitución era, en un principio, el Congreso. El Legislativo ocupa el lugar preeminente en el texto (el artículo I; la Presidencia va en el II), e incluso lo hace de forma física en la misma Washington: el Congreso está en el centro del National Mall, en la cima de una colina que domina la ciudad, mientras que la Casa Blanca se halla apartada a un lado, al final de un parque adyacente. Los padres fundadores no tenían intención de crear un sistema político con un Gobierno fuerte donde el presidente fuera el actor dominante. El mismo vocablo escogido para designar el jefe del Ejecutivo señalaba esa debilidad; en el inglés de la época, «president» era alguien que presidía reuniones y coordinaba agendas, no un actor que tomara grandes decisiones.

Con el tiempo, sin embargo, la Presidencia fue ganando prestigio y poder institucional. El presidente es el único cargo público que es escogido y votado a escala nacional, cosa que le da de por sí un estatus que no tienen otras figuras públicas. El progresivo aumento de atribuciones y poderes de los estados modernos ha hecho que no sólo legislen, sino que actúen directamente, dando más trabajo al Ejecutivo. Dado que la Constitución atribuye al presidente la mayoría de las competencias en defensa y política

exterior, el propio poder y la proyección internacional de Estados Unidos hicieron que su cargo ganara importancia.

Este aumento de prestigio y del poder percibido, sin embargo, no vino acompañado de mayores atribuciones constitucionales. Estados Unidos siempre ha vivido preso de la contradicción de tener presidentes simbólicamente poderosos que parecen ser el centro del sistema pero tienen poderes formales bastante limitados.[1] Esto no sería un problema grave si la institución que tiene el poder real fuera más o menos funcional, pero ese no es el caso del Congreso de Estados Unidos.

El congreso

El Congreso de Estados Unidos es uno de esos capítulos de la Constitución en el que las necesidades políticas durante su redacción dictaron más su diseño que su funcionalidad o eficacia posterior.

El problema inicial era la profunda desconfianza de los delegados de las colonias más pequeñas. En 1780, Virginia, con sus 538.000 habitantes, tenía más de diez veces la población de Rhode Island, Vermont o Delaware, las tres colonias menos poblabas. El temor de que las tres o cuatro colonias más grandes (Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte y Massachusetts) formaran un bloque coordinado y simplemente gobernaran el país sin presar atención al resto era evidente.

Para evitar que esto sucediera, Roger Sherman, un delegado de Connecticut (un estado de «media tabla» por aquel entonces), propuso la idea de un poder legislativo bicameral con una cámara de representantes donde los legisladores serían distribuidos por población y el Senado, donde cada estado tendría dos senadores sin que importara su tamaño. Para asegurarse también de que las élites locales tuvieran voz y voto en el

Gobierno nacional, los senadores serían escogidos por los legislativos estatales, no por los votantes.[2]

Un par de siglos después, el estado más poblado de la Unión, California, tiene sesenta y siete veces más ciudadanos que el menos habitado, Wyoming, pero la misma representación en el Senado.

Esto genera algunos problemas importantes. Para empezar, hay muchos más estados pequeños que estados grandes; las zonas rurales están muy sobrerrepresentadas. Los quince estados más poblados contienen dos tercios de la población del país, pero menos de un tercio de los senadores.

En términos políticos, esto da al Senado un marcado sesgo conservador. En 2020, Joe Biden ganó las elecciones con un 51,3 % del voto, cosa que le dio la victoria en 26 estados. Trump, a pesar de sólo tener un 46,8 % del voto total, se impuso en 24. En unas elecciones en las que los dos partidos se repartieran el voto de manera idéntica, el candidato republicano habría ganado en 31 estados. El estado mediano del país en composición partidista (Carolina del Norte) favorece a los republicanos en tres puntos, haciendo que la Cámara Alta tienda a sobrerrepresentar al GOP.

Este sesgo prorrepublicano en el Senado ha ido variando a lo largo de la historia del país. Antes de la guerra civil, el Senado era el bastión de los estados demócratas del sur, que gozaban de la misma representación que sus equivalentes más poblados del norte. Durante décadas, el país añadió nuevos estados a una ratio uno-a-uno entre esclavistas y emancipados (el llamado Compromiso de Missouri),[3] asegurando que el norte nunca pudiera tener una mayoría legislativa suficiente para abolir la esclavitud. Tras la guerra, los republicanos intentaron añadir tantos estados favorables en el oeste del país como fuera humanamente posible (Nevada entró en la Unión en 1864, cuando tenía menos de siete mil habitantes censados), apelando al populismo expansionista que les caracterizaba. El New Deal

rompió la hegemonía republicana en la Cámara Alta, abriendo la puerta a décadas de dominación demócrata. Es a partir de mediados de los setenta del siglo XX cuando empezamos a ver una creciente polarización entre las zonas rurales, cada vez más conservadoras, y las zonas urbanas, cada vez más demócratas, que vuelve a dar al Senado un marcado sesgo conservador.

Esto no quiere decir, por supuesto, que el sesgo favorable a los republicanos en el Senado sea inamovible. Los demócratas están intentando adaptarse y escoger candidatos competitivos en esos estados, a menudo con cierto éxito; Montana y Virginia Occidental tienen senadores demócratas. Pero la Cámara Alta es un problema significativo dentro del armazón constitucional, ya que condiciona enormemente las estrategias de los partidos. El senador mediano ahora mismo es escogido por un electorado que está considerablemente más a la derecha que el votante mediano a escala nacional. Legislativamente, el efecto de que el voto decisivo en el Senado responda al electorado de Virginia Occidental, un estado muy conservador, en vez de al de Pensilvania o Michigan, es considerable.

Por cierto, algo que merece ser comentado: la práctica de requerir sesenta votos en el Senado que mencionaba en el capítulo anterior no está en la Constitución, sino en el del reglamento del Senado. La Cámara Alta puede alterar esta regla cuando quiera con 51 votos sin impedimento constitucional alguno.

El Colegio Electoral

Los padres fundadores eran en el fondo una panda de elitistas consumados que no se fiaban de sus votantes, así que decidieron establecer un filtro para evitar que pudieran escoger accidentalmente a un cretino para la presidencia: el Colegio Electoral.[4] En las presidenciales, los votantes

escogen a los delegados del Colegio Electoral de su estado; uno por cada representante y senador que tienen asignado. Y dado que el Senado sobrerrepresenta a los estados rurales, el sistema favorece (otra vez) a los republicanos.

Durante las últimas tres décadas, los demócratas han ganado el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales: Clinton ganó en 1992 y 1996; Bush sacó menos votos que Gore en 2000; Obama obtuvo la victoria con claridad en 2008 y 2012; Clinton consiguió más papeletas que Trump en 2016, y Biden se impuso en 2020. A pesar de ello, los republicanos ganaron la presidencia en tres ocasiones; desde 1992, el único candidato presidencial republicano que sacó más votos que sus oponentes fue Bush hijo cuando fue reelegido en 2004.

El Colegio Electoral, además, es increíblemente chapucero y abierto a toda clase de abusos y situaciones extrañas. Los estados tienen plena libertad sobre cómo asignan sus votos tras los comicios. Por ejemplo, Maine y Nebraska los reparten según los resultados en cada distrito en el Congreso, no en bloque. Nada impide (como sucedió en muchos estados, de hecho, a principios del siglo xix) que las legislaturas estatales envíen a quien les plazca, incluso dando la espalda a sus votantes. Por añadido, no hay una normativa o reglas constitucionales claras y razonables sobre qué hacer en caso de que un candidato no saque una mayoría absoluta en el Colegio Electoral.[5] Parte del desbarajuste previo al intento de golpe de Estado de Trump proviene, directamente, de las disfunciones de este sistema absurdo y obsoleto que ha sido una fuente de problemas constante a lo largo de la historia del país.

Como consuelo, podría ser aún peor. En su formato original, el ganador del Colegio Electoral era escogido presidente, y el segundo clasificado pasaba a ser su vicepresidente, con consecuencias tan hilarantes como

previsibles.[6] La decimosegunda enmienda, en 1804, solucionó al menos este problema.

El Tribunal Supremo

La judicatura es uno de esos apartados del ordenamiento jurídico americano donde la Constitución no ofrece apenas respuestas. El artículo III, el que define los tribunales, es excepcionalmente impreciso; tan sólo dice que tiene que haber un tribunal supremo, y da al Congreso libertad casi completa para legislar sobre el resto de los detalles. Esto quiere decir que todo lo que respecta al Supremo, desde el número de jueces a la duración de los mandatos, está en manos de los legisladores.

El motivo detrás de esta indefinición es, como suele ser habitual en procesos constituyentes, la falta de acuerdo entre sus redactores. Los antifederalistas temían que un poder judicial federal centralizado pudiese terminar convirtiéndose en un potencial instrumento de tiranía, con los tribunales desautorizando las leyes de los estados.

Esa clase de decisiones judiciales, no obstante, han sido más la excepción que la regla en la historia del Supremo. Los jueces son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, con nombramientos vitalicios. Eso hace que el Supremo refleje las opiniones de políticos que ostentaron el cargo hace una o dos décadas. En tiempos recientes, debido al sesgo conservador de la Cámara Alta, los azares de la biología y el Colegio Electoral, el tribunal ha acabado con una supermayoría de jueces conservadores, a pesar de que los republicanos han perdido el voto popular (insisto) en siete de las últimas ocho elecciones. Los magistrados conservadores no han dudado en utilizar al tribunal como una cámara

legislativa de «tercera lectura», a menudo derogando leyes y precedentes judiciales que parecían inamovibles.

La gran ironía de todas estas sentencias judiciales es que la Constitución no otorga al Supremo en ningún momento la potestad de revisar la constitucionalidad de las leyes. La idea de *judicial review* (revisión judicial) formaba parte de la tradición jurídica anglosajona (y algunas cortes estatales habían invalidado leyes contrarias a la Constitución estatal), pero no está listada como una de las potestades del poder judicial. Fue el mismo Tribunal Supremo, en una sentencia de 1803 (Marbury contra Madison), el que se otorgó a sí mismo esa autoridad, alegando que era un poder *implícito* derivado del artículo VI de la Constitución.[7]

Esto nos lleva, otra vez, al problema de interpretación de la Constitución. El texto original es con frecuencia ambiguo (y en ocasiones, ambiguo adrede), y su lectura ha ido variando, a veces radicalmente, a lo largo de la historia del país. El concepto de derechos y poderes implícitos[8] ha sido utilizado en ocasiones por la misma corte para defender una cosa y su contraria. Roe contra Wade, la sentencia que legalizó el aborto en todo el país en 1973, basaba su argumentación en la existencia de un derecho implícito a la privacidad. Ese mismo razonamiento lo utilizaron para derogar la prohibición de usar anticonceptivos (Griswold contra Connecticut, en 1965) o la sodomía (Lawrence contra Texas, 2003). En 2022, sin embargo, el mismo Supremo, esta vez con una supermayoría conservadora (Dobbs contra Jackson), llegaba a la conclusión de que el derecho a la privacidad no existe al hablar del aborto.

El Supremo, además, tiene una larga y bien poco ilustre tradición de validar leyes de discriminación racial con lecturas caprichosas de la Constitución (Plessy contra Ferguson, 1896), o incluso para derogar leyes de derechos civiles (Civil Right Cases, 1883). A principios del siglo XX, les

dio por invalidar legislación limitando la jornada laboral a diez horas (Lochner contra Nueva York, 1905) o el trabajo infantil (Hammer contra Dagenhart, 1918).

Todos estos casos fueron revertidos (afortunadamente) en sentencias posteriores, pero si hay algo que debe quedar claro al hablar de tribunales en Estados Unidos es que no hay nada estrictamente sólido en cómo se lee la Constitución. Lochner, por ejemplo, es una sentencia que descansa en la idea de que existe un derecho implícito a la «libertad de firmar contratos», y que eso invalida gran parte de la legislación de derechos laborales. Hay muchos juristas conservadores que creen que Lochner era una *buena* sentencia, y varios magistrados en la corte actual se han pronunciado en ese sentido. Esto no quiere decir que vayan a legalizar el trabajo infantil de forma inminente, pero las leyes que lo prohíben están a un capricho judicial de dejar de existir siempre. Este es un tribunal que hace política, y sus decisiones están más motivadas por el oportunismo y la ideología de sus miembros que por una lectura consistente de la ley.

Los derechos fundamentales

Hablando de interpretaciones y derechos, el texto original de la Constitución de Estados Unidos no incluye una carta de derechos, porque (para variar) no hubo acuerdo durante su redacción. El Bill of Rights fue debatido por el primer Congreso, una vez la Constitución entró en vigor, y adoptado como enmiendas en 1791.[9]

Los derechos recogidos en el Bill of Rights, como el resto de la Constitución, eran excepcionalmente avanzados para su época, y conforman aún hoy el armazón legal de las democracias liberales modernas. Su redacción, sin embargo, es muy dieciochesca y abierta a interpretaciones

increíblemente creativas en cualquier dirección. El texto no contiene un buen puñado de derechos que han sido añadidos como estándar en constituciones posteriores (privacidad, voto, sindicación, huelga, igualdad de género, libre empresa…), dejando muchos de ellos para enmiendas posteriores o en la «penumbra» que decida encontrar el Supremo. Los fundadores, además, incluyeron algún derecho adorablemente arcaico (como el derecho a no albergar tropas en casa contra tu voluntad, recogido en la tercera enmienda) y uno que ha pasado de ser visto como una antigüedad a convertirse en un problema legislativo enorme, la posesión de armas de fuego.

Dada la extraordinaria dificultad para reformar la Constitución americana, el Congreso ha añadido derechos fundamentales sólo en dos ocasiones: inmediatamente después de la guerra civil, durante la Reconstrucción, y en 1919, con la adopción del sufragio femenino.[10] Las enmiendas del periodo de la Reconstruction son especialmente importantes, tanto por cómo redefinieron el pacto constitucional de arriba abajo como por las interpretaciones enormemente restrictivas que hizo el Supremo en años posteriores. Hablaremos de esto con más detalle un poco más adelante.

Partidos políticos

Los menciono, aunque es una idea complicada que desarrollaremos más adelante. Los padres fundadores no anticiparon la existencia de partidos como elemento organizativo del debate político del país, algo que ha generado no pocos problemas después. Otro error comprensible, pero que tendrá, como veremos, un impacto considerable.

Nativos americanos

El estatus constitucional de los «indios» es bastante peculiar. Las tribus indias son reconocidas como naciones soberanas bajo jurisdicción federal, no de los estados. Son listadas junto con las «naciones extranjeras» y los «estados» como entes con los que Estados Unidos comercia y que el Congreso puede regular.

Este aparente respeto y simetría, por supuesto, era bastante ficticio. En la Declaración de Independencia, los padres fundadores incluyeron, como uno de sus agravios contra la Corona, el siguiente texto:

> Ha provocado insurrecciones intestinas entre nosotros y se ha esforzado por lanzar sobre los habitantes de nuestras fronteras a los inmisericordes indios salvajes, cuya conocida disposición para la guerra se distingue por la destrucción de vidas, sin considerar edades, sexos ni condiciones.

La realidad es que, durante gran parte de su historia, Estados Unidos vio a los americanos nativos como obstáculos en su expansión territorial que debían largarse, en el mejor de los casos, o salvajes que tenían que ser extinguidos o pacificados a cañonazos en tiempos peores. Los documentos legales que regulaban la relación entre el Gobierno federal y las tribus eran tratados, no leyes; los indios no recibieron el estatus de ciudadanos hasta 1924. No fue hasta 1934 cuando su derecho al autogobierno fue reconocido por el Congreso.

Incluso hoy, el ordenamiento constitucional sobre derecho indio es francamente confuso y está sujeto a frecuentes revisiones por parte del Supremo. En general, en los lugares donde hay una reserva india con una tribu reconocida por el Gobierno federal conviven dos gobiernos y jurisdicciones en paralelo. Para los no-nativos, el Gobierno estatal es el que manda y regula el derecho civil y penal. Para los nativos, que pueden estar

viviendo en la misma ciudad o territorio, son las leyes y los tribunales tribales, primero, y las autoridades federales, en última instancia, los que rigen sus vidas.

No hablaré demasiado sobre nativos americanos y tribus indias en el resto del libro. Es una historia trágica, dolorosa, un genocidio a cámara lenta de toda una cultura a lo largo de más de un siglo. Es también, tristemente, una historia que apenas generó conflicto político entre las clases blancas dirigentes en Washington. El consenso sobre el «problema indio» fue, durante décadas, lo que reza esa cláusula de la Declaración de Independencia. Cuando el Congreso empezó a legislar, poco a poco, de manera algo más favorable, el daño ya estaba hecho. Su historia merece ser contada, pero no será el foco de este libro.

Esclavitud

Los derechos de la era de la Reconstruction, por descontado, son el resultado directo de la gran omisión de la Constitución en 1789, y la causa de muchas de las disfuncionalidades descritas hasta ahora: la esclavitud, el «pecado original» de Estados Unidos.

La esclavitud es la causa del extraño sistema de representación en el Senado, la estricta limitación de competencias del Gobierno federal, la ausencia de un derecho a voto en el Bill of Rights, el errático rol del Supremo o la sobrerrepresentación del sur, al permitir contar esclavos (parcialmente, como tres quintos por persona) en la población para asignar escaños. La Constitución incluye explícitamente una cláusula que prohíbe al Congreso limitar la importación de personas durante veinte años (artículo I, sección 9) y otorga el derecho al propietario de un esclavo huido a reclamarlo si ha escapado a otro estado (artículo IV, sección 2).

Hay un amplio debate sobre si los padres fundadores creían que la esclavitud era inmoral o no, y si sintieron reparos o remordimientos acomodándola en la Constitución. ¿Eran Madison, Adams, Jefferson, Hamilton y Sherman gente honorable que accedió a las demandas de los esclavistas con pesar, creyendo que estaban actuando en favor del bien mayor de una nación de hombres libres, no lo tenían claro o simplemente eran gente que tenía esclavos y todo les parecía bien?

La verdad, creo que el debate sobre los motivos es bastante inane, y es mucho más importante centrarse en las consecuencias de lo que escribieron. La esclavitud fue legal en Estados Unidos hasta 1865, legitimada mediante multitud de sentencias judiciales atroces y protegida activamente desde las instituciones y el Gobierno federal. Ese es el diseño constitucional que escogieron, y eso es lo que llevó al país a la guerra civil años después, cuando la opinión pública del norte dejó de tolerar estos acuerdos.

Reescribiendo la Constitución a cañonazos

En la década de 1850 estaba cada vez más claro que el equilibrio constitucional acordado por los padres fundadores en 1789 no era sostenible. El sistema otorgaba, de facto, el mismo poder y representación a los estados del norte (veintidós millones de habitantes) que a los del sur (nueve millones). Una abrumadora mayoría social en el norte se oponía a la esclavitud. Sin embargo, una tristemente célebre lista de sentencias judiciales y acuerdos legislativos no sólo la protegían, sino que expandían su alcance. En Kansas, partidarios y detractores de la esclavitud estaban en algo parecido a una guerra civil no declarada, con asesinatos y ataques terroristas en ambos bandos.

En 1860, Estados Unidos escogió a Abraham Lincoln, el primer presidente abolicionista del país. Los estados del sur,[11] algunos incluso antes de que jurara el cargo, se declararon en rebeldía y fueron a la guerra para proteger la esclavitud.

Durante décadas ha habido un intento por parte de apologistas del sur, nostálgicos y revisionistas de tratar de convencerse a sí mismos y al mundo de que hubo otra causa, otra motivación que llevó a los estados confederados a la secesión y a los del norte a reprimir la rebelión con violencia. Las explicaciones sugeridas van de supuestos derechos democráticos («derechos de los estados») a capitalistas del norte exigiendo políticas proteccionistas o incluso a la voluntad del sur de «proteger sus tradiciones». Estas explicaciones son, uniformemente, erróneas, y sabemos que lo son porque todos los actores implicados en la guerra civil dijeron, por escrito, que la esclavitud era el motivo del conflicto.

Podemos empezar, sin ir más lejos, por la Constitución de los Estados Confederados de América, el Gobierno creado por los estados sureños rebeldes. Este texto legal es muy similar a la Constitución del Gobierno que estaban abandonando, con algunos cambios significativos. El texto prohíbe explícitamente al Ejecutivo confederal limitar o restringir la esclavitud (artículo I, sección 9.4) o incluso interferir en temas relacionados con esta (artículo IV, sección 2). El documento también garantiza que en cualquier nuevo territorio que entre en la Confederación será legal tener esclavos (artículo IV, sección 3.3). Muchos líderes de los estados sureños ambicionaban colonizar Cuba, Santo Domingo y amplias zonas de Centroamérica, y querían mantener su derecho a esclavizar al prójimo plenamente en vigor.

La Constitución de Estados Unidos, en su texto original, permitía abolir la esclavitud. Los estados individualmente podían decretar que esa práctica

era ilegal en su territorio. La Constitución de la Confederación prohibía abolirla, y hablaba con claridad sobre expandirla a otros lugares.

Los estados secesionistas, además, mencionaron en sus declaraciones de independencia una y otra vez que el motivo de la secesión era proteger la esclavitud. Mississippi habla sobre cómo la posición del estado está «completamente identificada con la esclavitud», acusando al norte de pedir «igualdad social y política para los negros». Georgia y Carolina del Sur hablan, casi en exclusiva, sobre cómo el norte quiere abolir la esclavitud y sus gobiernos se niegan a devolver esclavos fugados. Texas habla sobre la necesidad de defender la sumisión de la «raza africana».

Alexander Stephens, el vicepresidente de la Confederación, comparaba los valores de su Gobierno con la Constitución original, basada en la idea de «asumir la igualdad entre las razas», de la siguiente manera:

> Nuestro nuevo Gobierno está basado exactamente en la idea contraria: sus cimientos, su piedra fundacional, descansan en la gran verdad de que el negro no es igual al hombre blanco; de que la esclavitud es su estado natural. Este es nuestro Gobierno, el primero en la historia del mundo, basado en esta gran verdad.[12]

El sur antes de la guerra civil, además, apenas era una democracia. Sólo un millón y medio de sus nueve millones de habitantes tenía derecho a voto. Era una sociedad casi tan clasista como racista; sus soldados de leva eran abrumadoramente pobres, mientras aquellos que poseían esclavos estaban exentos de servir en el frente.

Con la elección de Lincoln, las élites del sur temen perder los privilegios constitucionales que habían protegido la esclavitud, y van a la guerra por ello. El norte gana en el campo de batalla y reescribe el pacto constitucional, con tres enmiendas al texto entre 1865 y 1870.

Es importante insistir y recalcar que la guerra civil fue una guerra para abolir la esclavitud, porque sin ello es imposible entender el orden político que surgió después de esta. El cambio de régimen que veremos en los años posteriores al conflicto y su evolución hasta el retorno (y la aceptación tácita) de los regímenes de segregación racial en el sur no tiene nada que ver con aranceles, industrias o derechos políticos locales. La guerra fue sobre esclavos, la posguerra sobre raza. Todos los políticos implicados parecen tener bien claro sobre qué estaban negociando.

Reconstrucción

El periodo entre 1865, con la rendición de Lee en Appomattox, y 1877, con el fin de la presidencia de Ulysses S. Grant y la llegada al poder de Rutherford B. Hayes, es conocido como los años de la Reconstruction (Reconstrucción) en Estados Unidos. Durante estos doce años, el Congreso aprobó leyes de derechos civiles y utilizó tanto el Estado de derecho como las tropas federales para protegerlas. Grant creó el Departamento de Justicia para combatir y extinguir el terrorismo del primer Ku Klux Klan. Mientras tanto, los estados del sur fueron obligados a redactar constituciones abolicionistas para reintegrarse de nuevo en la Unión.

Las tres enmiendas constitucionales aprobadas durante estos años son la primera (y última, hasta el sufragio femenino) gran expansión de derechos civiles en el texto constitucional. La decimotercera enmienda abole la esclavitud en todo Estados Unidos.[13] La decimocuarta extiende la ciudadanía a toda persona que haya nacido en el territorio del país y le da protecciones e igualdad legales, además de prohibir a cualquiera que haya participado en una insurrección contra Estados Unidos ocupar un cargo

público federal o cuestionar la validez de la deuda.[14] Finalmente, la decimoquinta enmienda prohíbe restringir o denegar el derecho a voto por motivos de raza, color o servitud.

Estas enmiendas representaron un cambio de régimen político completo en los estados del sur. La reforma no sólo desmanteló la base económica de gran parte de su agricultura, sino que alteró radicalmente la composición del electorado y los derechos políticos de este. En los años de la Reconstruction, más de mil quinientos afroamericanos ocuparon cargos electos en la vieja Confederación. Mississippi envió dos senadores de color al Congreso;[15] veintiún legisladores fueron escogidos en la Cámara de Representantes. Cientos de legisladores negros obtuvieron cargos en cámaras estatales.

La resistencia a estos cambios fue feroz. Los linchamientos, los disturbios raciales y la violencia política fueron constantes. Por todo el sur emergieron milicias y grupúsculos de descontentos que lanzaron verdaderas campañas de terror contra afroamericanos, políticos republicanos «colaboracionistas», agentes federales y cualquier cargo electo que consideraran desleal. En repetidas ocasiones, cuando tras un homicidio o disturbios graves las autoridades detenían a los responsables, turbas indignadas asaltaban las cárceles para liberarlos.

Muchas de estas matanzas quedaron completamente impunes. En 1866, una muchedumbre de blancos armados atacó una manifestación de esclavos liberados en Nueva Orleans que estaba pidiendo el derecho a voto. Murieron más de doscientas personas, sin que se practicara una sola detención. En septiembre de 1868, más de doscientas cincuenta personas fueron asesinadas en la parroquia de Saint Landry, también en Luisiana, en respuesta a un editorial de un periódico republicano criticando la campaña de intimidación contra los negros en la zona.[16] Nadie fue detenido. En

Colfax, en 1873, otra turba enfurecida de milicianos y miembros del Klan asesinó a más de un centenar de milicianos negros atrincherados en un juzgado. Agentes federales detuvieron y acusaron de homicidio a nueve perpetradores. Una combinación de jueces sureños «comprensivos», intimidación a jurados y desidia de las autoridades estatales hizo que nadie acabara siendo condenado.

Los primeros años de la Reconstruction se vieron marcados por las agrias disputas entre el Congreso republicano (recordatorio: Lincoln y los estados del norte eran republicanos) y Andrew Johnson, el vicepresidente del asesinado Lincoln, que era sureño y sentía cierta simpatía por la vieja Confederación. No fue hasta la presidencia de Grant, elegido en 1868, cuando el Gobierno federal realmente hizo todo lo posible para obligar al sur a aceptar los cambios. Grant movilizó al Departamento de Justicia y a tropas federales para reprimir al Ku Klux Klan con dureza, tomó medidas para garantizar la seguridad de las elecciones y de los cargos electos por todo el sur, y exigió a los nuevos gobiernos de la región que cumplieran con las nuevas leyes federales de derechos civiles, con los tribunales federales actuando cuando fuera preciso.

A mediados de la década de 1870, sin embargo, la mayoría republicana en la Cámara Baja que había hecho posible las enmiendas y leyes de derechos civiles empezó a debilitarse. La reentrada de los estados sureños permitió que los líderes del viejo Partido Demócrata del sur recuperaran cuotas de poder. La violencia política contra negros y republicanos, aunque menos organizada, siguió extendiéndose.

El GOP, mientras tanto, empezó a fracturarse. En el norte, el partido se dividió entre una facción pro-Reconstrucción y otra que se oponía a Grant y quería cambios más graduales. En la vieja Confederación los republicanos se dividieron en un ala radical y una que quería apaciguar a los demócratas.

Los demócratas sureños vieron una oportunidad. Dejaron de oponerse con estridencia a las políticas de reconstrucción y empezaron a hablar de desarrollo económico. Ofrecieron una tercera vía, una oferta para seguir adelante: las élites del sur aceptarían el fin de la esclavitud y renunciarían a la secesión, pero mantendrían la segregación racial.

La terrible crisis económica de 1873 hizo el resto. Los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes. La economía ocupó el centro del debate; la violencia política en el sur pasó a segundo plano. Sin mayoría en el Congreso, con una administración asediada por escándalos de corrupción y con su partido cada vez más dividido, Grant hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. Las elecciones de 1876 traerían consigo el final de la Reconstrucción y la consolidación de un nuevo sistema político.

El culpable fue el Colegio Electoral. Los dos candidatos a presidente eran Rutherford Hayes, republicano, y Samuel Tilden, demócrata. Tilden se impuso en votos, 51-48, obteniendo 184 votos en el Colegio Electoral por los 165 de Hayes. En cuatro estados (Florida, Luisiana, Oregón y Carolina del Sur), que sumaban 20 votos electorales, el fraude en los comicios fue generalizado, y ambos candidatos declararon haber ganado las elecciones. La mayoría requerida en el Colegio Electoral era de 185 votos, y, dado que esos cuatro estados enviaron dos delegaciones con resultados contradictorios, la crisis constitucional era inevitable.

La solución fue una ley aprobada a toda prisa por el Congreso saliente, aún en funciones, creando una comisión electoral de quince miembros para resolver la disputa y decidir sobre esas elecciones dudosas. El plan original era que tuviera siete republicanos, siete demócratas y un juez del Supremo sin afiliación partidista. Los demócratas de Illinois intentaron comprar la lealtad del juez nombrándole senador por el estado (en esa época, los senadores eran aún nombrados por los legislativos estatales), pero la jugada

les salió espectacularmente mal. David Davis, el juez en cuestión, dimitió de su puesto en el Supremo y fue reemplazado por Joseph Bradley, un republicano nombrado por Grant a la corte. Con una mayoría de 8-7 en el comité, los republicanos «descubrieron» que todas las alegaciones de fraude de Hayes eran ciertas y le declararon ganador en los cuatro estados en disputa, dándole los 185 electores requeridos.

Lo que sucedió después es aún hoy motivo de debate. La historia generalmente aceptada es que los demócratas exigieron una serie de condiciones a los republicanos a cambio de aceptar el resultado de la comisión y darles la presidencia de Hayes, poniendo fin a la Reconstruction. El Gobierno federal retiraría las tropas de la Confederación, construiría otro ferrocarril transcontinental que cruzaría el país por el sur y aprobaría un paquete colosal de inversiones económicas. Hayes, además, nombraría a un demócrata sureño en su gabinete. El punto más importante, sin embargo, es que los republicanos aceptarían la existencia de un régimen de segregación racial en el sur, sin injerencias federales.

Nadie dejó un acuerdo por escrito; lo único que tenemos son entrevistas y conversaciones de políticos de la época, y una idea general de que «todo el mundo lo sabía», pero sin que nadie hiciera constar nada en ningún documento. Sea o no una leyenda, lo cierto es que tras el Compromiso de 1877 ese acuerdo «intermedio» de lealtad federal a cambio de supremacía racial fue lo que acabó por implantarse.

El final de la Reconstrucción

El cambio fue gradual pero implacable. Los estados sureños aprobaron, poco a poco, una larga lista de leyes segregacionistas, vaciando de

contenido las tres enmiendas de la Reconstruction casi por completo. Lo hicieron, además, con la inestimable ayuda del Supremo, que validó y refrendó todas y cada una de ellas con interpretaciones cada vez más restrictivas de la Constitución.

A partir de 1877, Estados Unidos tendrá la misma Constitución formal, pero con dos regímenes políticos distintos. En los estados del norte, el país era una democracia imperfecta pero más o menos funcional, con dos partidos políticos compitiendo electoralmente, sufragio masculino universal y derechos civiles para todas las razas. En los estados del sur, se impuso un sistema político de carácter autoritario basado en un sistema de segregación racial. Estos sistemas recibieron el nombre de Jim Crow, una referencia peyorativa a un personaje de los *minstrels* racistas del siglo XIX, y permanecieron casi inamovibles durante más de ocho décadas.

La Constitución de 1877 resultó ser increíblemente estable. Es hora, por tanto, de analizar los motivos de su longevidad, así como su posición en la memoria política y cultural de Estados Unidos.

3

La Constitución de 1877 y las dos Américas

En la memoria colectiva americana, esa que reflejan en series, películas, novelas y obras de teatro, el periodo comprendido entre el final de la Reconstruction y la Segunda Guerra Mundial es a menudo el de los «buenos viejos tiempos». Es una época de cambio, de transformación, los años en los que Estados Unidos pasa de ser una nación en la periferia de Occidente a convertirse en el centro industrial y financiero del planeta.

UN PAÍS PRÓSPERO

Estados Unidos siempre había sido un país relativamente próspero:[1] en 1820, su renta per cápita rondaba los 3.200 dólares anuales,[2] algo por encima de Francia, pero alrededor de dos tercios de la británica. En 1860, a las puertas de la guerra civil, Estados Unidos superaba a Francia, Alemania o Italia (España en 1860 seguía por debajo del nivel de Estados Unidos en 1820), y se acercaba a Gran Bretaña (80 % de su renta).

En los años posteriores a la guerra, sin embargo, el crecimiento económico americano se disparó, superando a los británicos en la primera década del siglo XX, habiendo dejado muy atrás al resto del continente ya en 1870. El nivel de prosperidad de Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial era comparable al de España en 1965 —el país tenía algo parecido

a una economía de consumo a principios del siglo XX—. Aunque era extraordinariamente desigual (y lo fue hasta la época del New Deal y la posguerra), hay una incipiente clase media ya a finales del siglo XIX, y estaban establecidos muchos de los hábitos sociales que sólo empezaremos a ver en gran parte de Europa bien pasada la Segunda Guerra Mundial.

Esta es la época del surgimiento de Sears y su inmenso negocio de ventas por catálogo, o el auge de los grandes almacenes y cadenas nacionales de tiendas. Se asiste a la electrificación y a la proliferación de electrodomésticos, marcas de ropa y productos de consumo. Es cuando vemos también la aparición de una economía del ocio, con estadios, parques de atracciones (presentes en casi cualquier ciudad americana, no sólo en las capitales) y espectáculos de masas. Aparecen cosas como las palomitas (el típico carrito para fabricarlas se inventa en 1893) o el algodón de azúcar (1897), dos productos inseparables de los días ociosos del verano en América. Coca-Cola (1888) es, en cierto modo, un ejemplo paradigmático de esta era: una bebida dulce que no existe para responder a ninguna necesidad concreta, la clase de capricho de clase media que sólo puede aparecer en un país rico.

Estados Unidos, además, también se motorizó muy temprano comparado con Europa. Así, tenía en 1925 más automóviles per cápita que prácticamente cualquier país europeo en 1960 (sólo Francia y Suecia tenían cifras parecidas). Más de la mitad de los hogares americanos tenían coche propio antes de la Gran Depresión.[3]

Existe una profunda nostalgia hacia los «buenos viejos tiempos», y las distracciones y la comida popular de esa época forman un cierto pasado mágico en la mentalidad americana. Dada la prodigiosa producción artística del periodo, esta es la era en la que Estados Unidos también se define a sí mismo, desde novelas a música o incluso deportes. Cuando un guionista o

escritor americano quiere contar una fábula situada en algún pasado mítico del país, suelen situar su historia en esta época, o bien en el cambio de siglo o en los felices años veinte.

El poderío económico de Estados Unidos, sin embargo, sólo se explica en parte con las cifras de renta per cápita. Durante estos años, la población americana también estaba creciendo increíblemente deprisa.[4] En 1820, Europa occidental rondaba los 132 millones de personas. Esa cifra básicamente se duplicó en el siglo escaso hasta 1913 alcanzando los 261 millones. Durante ese mismo periodo, Estados Unidos pasó de tener menos de diez millones de habitantes en el censo de 1820 a más de 92 en 1910, el último antes de la Gran Guerra. Es decir, mientras Europa multiplicó por dos su población en noventa años, Estados Unidos la multiplicó casi por diez.

No sólo hablamos, entonces, de un país de gente rica, sino de un país que crecía a toda prisa y que rápidamente se estaba convirtiendo en una colosal potencia económica. En 1820, el PIB de Estados Unidos era un tercio del francés o el británico, y más o menos parecido al de España. En 1913, la combinación de población y renta hizo que su economía fuera casi el doble de grande que la del Reino Unido, tres veces y media la de Francia y más de diez veces la de España. La diferencia, además, no hizo más que acentuarse; en 1950, en el zénit del poder imperial americano, la economía de Estados Unidos, por sí sola, era mayor que la de toda Europa occidental.[5]

El prodigioso crecimiento demográfico de Estados Unidos nunca se ha detenido por completo. En 1950, mientras Europa crecía hasta los 305 millones de habitantes, Estados Unidos superaba los 151 millones. Y esta evolución dispar se ha mantenido hasta nuestros días; Europa occidental tenía, en 2020, apenas un 60 % más de habitantes que en 1910; Estados Unidos los ha multiplicado por 3,5.

El motivo de este crecimiento es, obviamente, la inmigración. Estados Unidos siempre ha atraído inmigrantes a un ritmo muy superior a cualquier otro país del mundo.[6] A partir de 1830, el país empieza a importar mano de obra a buen ritmo, con la promesa de su expansión hacia el oeste. El porcentaje de habitantes nacidos fuera del país superó el 10 % a principios de la década de 1850 y se mantuvo por encima del 13 % hasta 1920.[7] La combinación de ser un destino rico con un crecimiento económico boyante, fronteras casi completamente abiertas y el mito de la tierra de las oportunidades creó una corriente casi inacabable de familias en busca de su oportunidad.

Como es habitual en Estados Unidos, los datos presentan una disparidad regional considerable, con dos destinos de migración principales. Por un lado, tenemos los estados del oeste del país, que, literalmente, se dedican a conquistar tierras casi vírgenes (cometiendo un genocidio en el proceso). La «frontera» se fue desplazando según pasaban los años y, si en 1850 los estados con mayor porcentaje de recién llegados estaban en el Medio Oeste (Wisconsin y Minnesota), en 1900 aparecen nombres como Montana o Dakota del Norte. La otra región que vio llegadas masivas de inmigrantes fue el noreste y los estados más «viejos» del Medio Oeste, el corazón industrial de la enorme economía americana. Las cifras son mareantes; en 1900, más de un 30 % de la población de Rhode Island y Massachusetts había nacido fuera de Estados Unidos, al igual que una cuarta parte de los habitantes de Nueva York.[8]

Las grandes oleadas migratorias de este periodo dejaron de lado casi por completo a los estados del sur. En 1900, menos de 0,5 % de los habitantes de las dos Carolinas habían nacido fuera del país. El porcentaje no superaba el 1 % en Mississippi, Georgia, Alabama, Tennessee y Virginia. El estado de la vieja Confederación con más inmigrantes (Texas) rondaba el 6 %.

Esto sucedió por tres motivos. Primero, el sur de Estados Unidos era más pobre que los estados del norte incluso antes de la guerra civil. La devastación del conflicto (porque los ejércitos de la Unión arrasaron gran parte de la Confederación) y el final de la esclavitud acentuaron aún más estas diferencias. Segundo, el racismo del sur era público y conocido, y, aunque se cebara en su población de color, no se limitaba a esta; los inmigrantes no eran tolerados o aceptados social ni políticamente. Nadie se muda a América para vivir en un régimen autoritario, y eso es lo que eran los estados sureños en esta época. Tercero, los estados del sur podían bloquear nuevas entradas legalmente, ya que eran los estados, no el Gobierno federal, los que controlaban la mayoría de las políticas de inmigración. No fue hasta 1891 cuando el país tuvo una ley medio decente sobre la materia, organizando una burocracia federal y un sistema de puertos de entrada. Fue entonces cuando abrió Ellis Island (y Angel Island, en San Francisco), con los consabidos cientos de historias de inmigrantes que pueblan películas y novelas.

Durante su primer siglo de historia, Estados Unidos tuvo una política migratoria de puertas abiertas; la única excepción fueron las leyes de exclusión china en la década de 1870. Los años de políticas permisivas se alargaron hasta 1921, cuando se creó un sistema de cuotas nacionales para reducir la entrada de inmigrantes del sur y del este de Europa (italianos, polacos y judíos rusos, principalmente). El sistema, por cierto, era abiertamente racista; Harry Laughlin, un famoso experto en eugenesia de la

época (y un furibundo antisemita muy admirado por los nazis), asesoró al Congreso en su elaboración.

Aunque la inmigración desde fuera de Estados Unidos cayó de forma dramática (de más de 1,2 millones de entradas legales en 1914 a menos de 300.000 en 1925), el norte siguió recibiendo nuevas llegadas, aunque de procedencia más cercana: los estados del sur. Entre 1910 y 1940, 1,6 millones de afroamericanos se mudaron de las zonas pobres rurales de la vieja Confederación hacia el norte. Entre 1940 y 1970, cinco millones dejaron atrás la segregación para mudarse a las zonas industriales de esta parte del país. En 1910, casi un 90 % de los afroamericanos vivían en el sur; en 1970, ese porcentaje había caído al 53 %; es la conocida como la Gran Migración, que tendría consecuencias políticas importantes después de la guerra.

Los afroamericanos no encontraron, por supuesto, una arcadia posracial en la que eran bienvenidos. En Nueva Inglaterra o Nueva York quizá las leyes fueran menos abiertamente discriminatorias, pero los ayuntamientos y gobiernos estatales no tardaron en desarrollar estrategias de segregación racial. Fue entonces cuando las ciudades del norte descubrieron la «planificación urbanística», barrios excluyentes y estrategias para concentrar a aquellos que molestan en barrios y municipios más pobres, con peores servicios y menos inversión (*redlining*). Aun así, eran mucho más acogedores que el brutal *apartheid* en el sur. Gracias a la Gran Migración los estados norteños siguieron creciendo con fuerza durante años, incluso con las fronteras casi cerradas, mientras la Confederación siguió languideciendo.

Es imposible hablar sobre inmigración en este periodo sin hablar de asimilación, racismo e identidad. Estados Unidos, como hemos comentado, no es un país con una identidad nacional clara y definida. Aunque existía un grupo étnico y culturalmente dominante desde tiempos coloniales (hombres blancos), la definición de quién es «blanco» ha ido variando en el tiempo, siguiendo luchas por la representación política y oleadas migratorias.

El grupo dominante «tradicional» eran los WASP, los *white*, *anglo-saxon*, *protestant*s (blancos, anglosajones, protestantes) de tiempos coloniales. La primera gran oleada de inmigrantes, a partir de 1820, se compone principalmente de irlandeses, británicos y alemanes. Los británicos son aceptados como «blancos» y entran a formar parte del grupo dominante con cierta facilidad, al igual que los alemanes protestantes.

Los irlandeses, sin embargo, debido a su condición de católicos, fueron discriminados y a menudo perseguidos. Estos respondieron construyendo instituciones paralelas para ellos mismos, como colegios, centros sociales, hospitales y universidades católicos, creando las infraestructuras que necesitaban para prosperar y, con ellas, una rica subcultura católica que sobrevive hasta nuestros días. No fue hasta finales del siglo xix cuando al fin empezaron a ser aceptados como «blancos», es decir, como un grupo que podía formar parte de la cultura dominante del país. En ese momento empezamos a ver a políticos irlandeses, funcionarios y policías; entran en las «máquinas políticas» en áreas urbanas y empiezan a escalar socialmente.

Después de la guerra civil llega la primera gran oleada de inmigración escandinava, especialmente suecos y noruegos que se asientan en Minnesota y Wisconsin. Fueron mejor recibidos que chinos, rusos e italianos, que también empezaron a llegar en esta época. Los chinos fueron considerados «no blancos» por completo, y su entrada fue prohibida a los

pocos años. Los italianos pasaron a sustituir a los irlandeses en el escalón más bajo de grupos étnicos blancos, junto con los judíos rusos.

La historia sobre cómo los italianos se convirtieron en «blancos» es parecida a la de los irlandeses. Se encontraron una red de instituciones católicas bien desarrolladas, que crecieron aún más. Con la población italiana en aumento, en muchas ciudades del noreste se convirtieron en bloque electoral significativo, chocando en ocasiones con los descendientes de irlandeses que controlaban las instituciones. A principios del siglo XX, como una forma de reivindicar su cultura, los italianos impulsaron la celebración del Columbus Day (día de Colón) el 12 de octubre, homenajeando al genovés que descubrió el continente. Todas esas estatuas de Colón desperdigadas por ciudades del noreste son de esta época y constituyen, en esencia, una forma de recordar al resto del país que ellos también eran europeos «de verdad».

Los italianos, con el tiempo, se abrieron camino y fueron aceptados como «blancos». Ser de ascendencia italiana, o irlandesa, o polaca, significa relativamente poco estos días, más allá de haber comido más pasta, patatas o *borscht* en casa y tener un apellido peculiar. Aunque hay ciertas diferencias políticas y culturales (los italianos son más republicanos que los irlandeses; los alemanes siguen siendo los más conservadores), socialmente son parte del *mainstream*, de cómo América se ve a sí misma.

Las oleadas de inmigrantes a partir de los ochenta están siguiendo un patrón similar. Esta vez son en su mayoría latinos (con un contingente chino considerable) y son vistos, al principio, como un grupo «nuevo» que no forma parte de la cultura dominante del país. Hablan su propio idioma, viven en sus propios barrios, son más pobres y tienen niveles educativos más bajos. No pueden traer nada bueno.

Poco a poco, sin embargo, estos inmigrantes latinos empiezan a abrir negocios y prosperar. Sus hijos empiezan a ir a la universidad. Celebran sus propias fiestas y festivales para reivindicar su presencia (Cinco de Mayo), como hicieron los irlandeses e italianos antes que ellos. Estas fiestas, inevitablemente, no tardan en ser cooptadas por los «blancos» como una excusa para salir de fiesta y emborracharse.[9] El uso social de su propio lenguaje empieza a disminuir; los hijos dejan de utilizar el español como lengua habitual. Al cabo de un tiempo, muchos de ellos empiezan a hablar sobre ellos mismos no como latinos (o mexicanos, peruanos…), sino como americanos o blancos. Un 92 % de americanos con ascendencia hispana se identifican como tales, pero la cifra baja a un 77 % para los de tercera generación, y a un 50 % para la cuarta.[10]

Lo que está sucediendo de nuevo es algo que caracteriza a Estados Unidos y que es una de las señas de identidad del país: su inmensa capacidad de asimilación. No es sólo un país de inmigrantes, sino que es un país con una capacidad infinita de absorber cada oleada de recién llegados al *mainstream* cultural y político del país. La historia de América es en parte la historia de cómo irlandeses, italianos, alemanes, polacos, noruegos, suecos, judíos y católicos se convierten en «blancos», entrando poco a poco en las instituciones, mientras que sus tradiciones y costumbres son adaptadas y absorbidas dentro de la cultura dominante. Es fascinante, al escuchar los debates sobre inmigración actuales, como los mitos de esta época persisten en la memoria colectiva de los americanos, y cómo la inmigración de los últimos cuarenta años poco a poco repite los patrones del siglo pasado.

Hay una historia recurrente en la América de principios del siglo XX, la del inmigrante que llega de algún lugar de Europa del este a Ellis Island. Al ser procesado en Inmigración, alguien escribe mal su nombre. Gershhovitz,

por ejemplo, se convierte en Gershwine, o Beilin en Baline. Los padres, un poco hartos de deletrear su apellido, o con ciertas ganas de darles a sus hijos la oportunidad de pasar desapercibidos, cambian la ortografía a algo más sencillo, como Gershwin o Berlin, o cambian su nombre completo a algo más americano y sonoro, como de Lazar Meir a Louis Mayer. Estos recién llegados envían a sus hijos al colegio, trabajan duro y (si quieren asimilarse a la tremenda) se afilian al Partido Republicano y se vuelven todo patriotas. Años después quizá siguen siendo judíos, o rusos, o polacos, pero escriben canciones o hacen películas *americanas*, hasta el punto de ser imposibles de separar de la historia del cine o de la música del país.

Siempre me ha parecido maravilloso que el autor de «Good Bless America» o «White Christmas», dos de las canciones más americanas, sea un judío nacido en Tyumen, Siberia. O que el autor del tema musical que define el Nueva York de los años veinte, «Rhapsody in Blue», sea hijo de dos judíos rusos. El mito de la inmigración, de la América abierta al mundo, quizá tenga algo de fantasía, pero no anda lejos de la realidad. Estados Unidos no es de nadie; es de todos.

LA POLÍTICA BAJO LA CONSTITUCIÓN DE 1877

Estos años de crecimiento económico acelerado, expansión, cambios sociales, revoluciones científicas y optimismo se vieron acompañados por un sistema político contradictorio, confuso y a menudo inoperante que excluía a gran parte de su ciudadanía de cualquier derecho político. El Estados Unidos en las décadas prodigiosas que siguió a la guerra civil era una democracia profundamente imperfecta atada por convenciones políticas reaccionarias.

Política económica

El periodo comprendido entre 1877 y 1932 es el de los años de gloria del capitalismo salvaje americano, la época de los *robber barons*, las grandes fortunas salidas de la nada y las depredaciones de la Segunda Revolución Industrial. La combinación de mercados sin regular, innovación tecnológica acelerada y rápido crecimiento económico trajo consigo la creación de grandes fortunas empresariales dominadas por cárteles o empresas monopolísticas, lo que hizo a sus fundadores inmensamente ricos.

Hay un fuerte componente entre los titanes de la industria de esta era de estar en el momento adecuado en el lugar más propicio. Casi todos ellos nacieron en la década de 1830 (Henry Flager, 1830; Marshal Field, 1834; Andrew Carnegie, 1835; J. P. Morgan, 1837; Jay Gould, 1836; John Rockefeller, 1839)[11] o poco tiempo después. Todos ellos lanzaron sus empresas justo después de que apareciera alguna nueva tecnología en su sector o en sectores adyacentes (ferrocarriles, distribución, acero, petróleo…). Gracias a su enorme talento (y falta de escrúpulos) consiguieron posiciones dominantes en esos mercados, acumulando fortunas nunca vistas en el proceso.

El Gobierno federal dejó hacer, con contadas excepciones. Los republicanos, que dominaron las instituciones durante estos años, eran poco proclives a intervenir o entrometerse demasiado en el mercado. Aun así, hubo algunos conatos de reforma, como la ley Sherman antimonopolios (1890), medidas anticorrupción o campañas variadas de salud pública y seguridad en el trabajo, además de intentos de regular (con cierto éxito) las empresas privadas más odiadas del país, los ferrocarriles.

El Tribunal Supremo, por desgracia, se encargó también de poner coto a muchas de estas leyes. Este es el periodo de interpretación constitucional conocido como la «era Lochner», que se alargó hasta bien entrada la década de 1930. En 1895, la corte debilitó considerablemente la ley antimonopolios recién aprobada (Estados Unidos contra E. C. Knight Co.). En años sucesivos, se emplearon a fondo tumbando cualquier normativa que protegiera al trabajador. Eso incluyó derogar la jornada laboral de sesenta horas semanales (Lochner contra Nueva York, 1905), permitir que las empresas obligaran a sus trabajadores a no sindicarse (Adair contra Estados Unidos, 1908), eliminar protecciones contra el trabajo infantil (Hammer contra Dagenhart, 1918) o prohibir leyes de salario mínimo (Adkins contra el Children's Hospital, 1923). Aunque Estados Unidos tuvo en esa época un movimiento sindical y una militancia obrera considerables, muchas de sus victorias políticas nunca terminaron por convertirse en realidades legislativas por culpa de los tribunales.

Coaliciones

El Compromiso de 1877 creó un equilibrio político persistente, una serie de arreglos, instituciones y decisiones legales que eran satisfactorios para que una coalición dominante de actores no tuviera intención de cambiarlos.

A los republicanos, su posición mayoritaria en el norte y el oeste del país prácticamente les garantizaba la Casa Blanca. Entre 1876 y 1932, el GOP controló la presidencia durante cuarenta años, por dieciséis de presidencia demócrata. Exceptuando a Woodrow Wilson, ninguno de los ocupantes del cargo procedía de la vieja Confederación.[12] El GOP también ejerció su dominio de forma abrumadora en el Congreso en este periodo; los

demócratas sólo controlaron el Senado durante ocho años y la Cámara Baja (más representativa) durante veintidós.

La coalición republicana se basaba en dos pilares fundamentales. Por un lado, era el partido de la industria, defendiendo tanto el patrón oro como mantener aranceles altos. Eso le favorecía en el norte, donde el proteccionismo era popular entre empresarios y obreros, y el patrón oro era visto como símbolo de Gobierno responsable y estabilidad. Por el otro, fue capaz de aglutinar al puritanismo protestante, atrayendo el voto de grupos religiosos pietistas (baptistas, metodistas, presbiterianos) interesados en llevar a la política creencias morales como la ley seca. El partido solía acusar a los demócratas de ser el partido del «ron, romanismo y rebelión», es decir proalcohol, procatólicos (inmigrantes irlandeses e italianos) y heredero de los insurrectos de la guerra civil.[13] La retórica antiinmigrante, anticiudades y antidrogas del GOP ciertamente viene de lejos.

A partir de 1896, un sector de los republicanos abrazó un cierto reformismo progresista, centrado en un populismo contra los monopolios y la gran industria para apelar a los pequeños negocios y la incipiente clase media. Esto les dio una cadena de victorias electorales absolutamente colosales, con Teddy Roosevelt siendo reelegido por diecinueve puntos en 1904. Este reformismo, sin embargo, acabó por dividir el partido. Cuando su sucesor, William Howard Taft, resultó ser mucho más conservador, esto provocó que se presentara de nuevo en 1912 como tercer candidato del Partido Progresista, fundado por él mismo. Roosevelt al menos tuvo la satisfacción de sacar más votos que su antiguo compañero de partido, Woodrow Wilson, el candidato demócrata, y acabó por imponerse.[14]

Wilson era un académico de carrera con reputación de reformista que en la presidencia impulsó varias reformas de calado. Su agenda de «nueva libertad» (New Freedom) incluyó la lucha contra los monopolios, la

prohibición de la mano de obra infantil,[15] derechos laborales, reducción de aranceles, un impuesto federal sobre la renta y la creación de la reserva federal.[16] Durante la Primera Guerra Mundial movió al país del aislacionismo a un intervencionismo idealista, impulsando la creación de la Sociedad de Naciones e intentando crear una paz duradera basada en la autodeterminación de los pueblos.[17]

El pequeño problema de Woodrow Wilson, sin embargo, fue que era increíblemente racista. Como académico, Wilson fue uno de los principales proponentes de la Lost Cause, una escuela de historiadores revisionistas que buscaban perpetuar el mito de un sur gentil y pacífico que fue víctima de la «guerra de agresión norteña». Su libro *History of the American People* era lo suficientemente racista como para que D. W. Griffith utilizara una cita de este en *El nacimiento de una nación*, su épica película que glorificaba el Ku Klux Klan. Durante su mandato, Wilson resegregó gran parte de la burocracia federal y las Fuerzas Armadas. El país sufrió la peor oleada de violencia racial desde los años de la Reconstruction, sin que hiciera apenas nada para detenerla.

Esta dualidad entre un reformismo moderado y un racismo furibundo está en el centro de la política americana durante este periodo. Porque si los demócratas toleraron un sistema político en que básicamente estaban condenados a perder elecciones una y otra vez, salvo durante la ocasional batalla interna de los republicanos, fue precisamente por la cuestión racial.

SEGREGACIÓN Y AUTORITARISMO EN EL SUR

El Partido Demócrata posterior a 1877 era, en muchos aspectos, el reverso de la coalición republicana. En el norte, los demócratas se erigieron como el

partido de los emigrantes, representando a católicos irlandeses e italianos y luteranos alemanes. Era también el partido de las zonas rurales y de los que menos tenían, aliado con los sindicatos y el movimiento obrero. A la vez, también representaban a los estados del sur. A partir de un brutal régimen de segregación racial, el Partido Demócrata dominaba completamente la política de esos estados, convirtiéndolos de facto en regímenes autoritarios.

El Compromiso de 1877, en el fondo, estaba construido sobre una idea muy sencilla: los perdedores de la guerra civil aceptaron dejar que los republicanos del norte dominaran las decisiones sobre política económica a cambio de que les dejaran ser tan racistas como quisieran. Entre 1876 y 1910, las enmiendas constitucionales de los años de la Reconstruction fueron totalmente vaciadas de contenido, tanto respecto al voto como en igualdad ante la ley.

La decimoquinta enmienda prohibía denegar o limitar el derecho a voto debido a raza, color de piel o haber sido esclavo. A pesar de la oleada de violencia política en los estados del sur durante la Reconstruction, la participación electoral afroamericana en las décadas posteriores a la guerra civil se mantuvo tozudamente alta. Temerosos de perder el control de las instituciones (y de que un abuso de la violencia política trajera otra intervención federal), los líderes demócratas en la región aprobaron a finales del siglo xix una auténtica batería de reformas institucionales para instituir un régimen de *apartheid* en la zona.

Los *dixiecrats* (el mote de los demócratas sureños) se dieron cuenta de que, aunque una ley no podía decir «negro», era relativamente sencillo encontrar otros factores o condiciones legales que tuvieran una fuerte correlación con el color de piel y los añadieron con presteza a sus leyes y constituciones. Aprovechando que en Estados Unidos el censo electoral no es automático, sino que es necesario registrarse previamente para poder

votar, crearon toda clase de obstáculos para bloquear el acceso a las urnas a sus ciudadanos de color. Establecieron el requisito de ser propietario de tierras para poder votar, impusieron *poll taxes* (impuestos electorales) o exigieron pruebas de «alfabetización» o «conocimientos» para poder acceder al sufragio. Exámenes que eran, inevitablemente, mucho más difíciles si el aspirante a votar era negro. El Supremo dejó pasar todas estas leyes.

El Partido Demócrata, además, adoptó normas que prohibían a los negros votar en sus elecciones primarias. El Supremo había sentenciado en 1876 (Estados Unidos contra Cruikshank) que el Gobierno federal y la Constitución protegían a individuos de actos por parte de administraciones públicas y leyes, no de las decisiones de actores particulares. Los partidos políticos eran, legalmente, «clubes privados» con capacidad de decidir de forma autónoma sus reglas de funcionamiento interno, así que los tribunales ni siquiera podían evaluar la constitucionalidad de esta medida. La violencia política, la inoperancia federal y la exclusión de los afroamericanos de las urnas habían hecho que el Partido Republicano poco menos que desapareciera como actor político en los estados del sur, creando un régimen de partido único en la región. Esto hacía que el ganador de las primarias demócratas fuera, de facto, el ganador de las elecciones siguientes. Excluir a los afroamericanos de las primarias les denegaba incluso el derecho de a qué candidato no podrían votar en las generales.

La reacción del Tribunal Supremo a estas leyes obviamente discriminatorias fue reinterpretar la Constitución para hacerlas legales. Ya en 1876, con Estados Unidos contra Reese, el tribunal dictaminó que la vigesimoquinta enmienda sólo prohibía restringir el derecho a voto por motivos raciales. En años sucesivos, el tribunal aceptó como constitucionales leyes abiertamente discriminatorias de manera consistente,

creando un armazón legal alrededor del régimen de Jim Crow. En Giles contra Harris (1903), sentenciaron que la corte no tenía que prestar atención a la intencionalidad o los efectos prácticos de las leyes sobre voto, sólo a su texto, y establecieron que un particular no podía denunciar a un Gobierno estatal en un tribunal federal. En Plessy contra Ferguson (1896), el Supremo daba por legal la segregación de los servicios públicos por raza siempre que fueran de una «calidad equivalente». Este «separados pero iguales» fue la base de la discriminación racial en el sur durante décadas.

A la discriminación por parte del Estado se añadió la impunidad de los actores privados. La sentencia de Cruikshank también abrió la veda a campañas de violencia indiscriminada en el sur, ya fuera por parte de milicias organizadas (el Klan, la White League, los Red Shirts), turbas más o menos espontáneas, campañas de intimidación toleradas por las autoridades o linchamientos que quedaban inevitablemente impunes. Las fronteras entre grupos de «espontáneos» y fuerzas de seguridad locales o estatales eran a menudo borrosas, permitiendo que tanto los tribunales como las autoridades federales se lavaran las manos ante cualquier conato de violencia. Y dado el clima de impunidad generalizado, era habitual que, en cuanto alguien de color conseguía superar todos estos obstáculos y votaba, este perdiera su trabajo, fuera desahuciado, acosado, maltratado o algo peor.

Estos requisitos en ocasiones excluían a muchos votantes pobres blancos. Para evitar que esto sucediera, los estados sureños adoptaron las llamadas *grandfather clauses* o «cláusulas de abuelo», garantizando el derecho a voto a aquellos que tuvieran padres o abuelos que hubieran podido votar antes de la guerra. La ironía de todo este andamiaje racista era que, en su afán por excluir a los negros, el sur acabó por dejar a muchos blancos sin representación política.

En 1915, el Supremo declaró las *grandfather clauses* inconstitucionales (Guinn contra Estados Unidos), en otro de sus cambios de opinión de este periodo. Eso dejó a muchos votantes blancos pobres (que o no tenían propiedades o no sabían leer o no podían pagar una *poll tax*) sin derecho a voto. Aunque muchos estados aprobaron revisiones de las cláusulas de abuelo para hacerlas algo menos discriminatorias, la sentencia acabó por dejar a millones de blancos sin derecho a sufragio.

El resultado fue que, tras conseguir que la participación electoral entre afroamericanos cayera hasta esencialmente cero a principios del siglo XX, la participación electoral entre votantes blancos pobres también cayera en picado. El del sur no sólo era un sistema autoritario de opresión racial, sino un régimen oligárquico que restringía la participación política a una minoría exigua de votantes blancos.[18] Los sistemas políticos que oprimen a una minoría no suelen conformarse con oprimir a un solo grupo, y los blancos pobres, sin sufrir (ni de lejos) los niveles de violencia o exclusión de los afroamericanos, se vieron también excluidos del sistema político.

Aparte de la opresión política, las leyes de Jim Crow eran un sistema de opresión económica. La legislación de segregación racial creó dos sociedades paralelas, una para negros, otra para blancos. Los primeros no tenían acceso a buenos trabajos ni viviendas; se educaban en peores colegios y tenían peores hospitales, médicos y servicios públicos. El sur, en esos años, es un mundo de restaurantes, bares y lavabos separados, de trenes con coches segregados por raza. Un lugar donde artistas negros mundialmente famosos no podían alojarse en el mismo hotel que los músicos blancos de su banda porque los mejores establecimientos no admitían huéspedes de piel oscura.

La persistencia de muchos usos y costumbres del Viejo Sur en la sociedad americana actual es a menudo sorprendente. Por ejemplo, Estados

Unidos es un país donde tienes que dar propinas. Los camareros, empleados de limpieza y muchos trabajadores de hoteles, restaurantes, casinos y otros lugares parecidos tienen salarios muy bajos, y la convención social es que gran parte de sus ingresos vienen de este pago adicional de los clientes.

Esta forma de pagar a los trabajadores del sector servicios tiene su origen en los estados del sur, en los años posteriores a la guerra civil. Muchos empleadores de la región se resistían a pagar salarios a empleados que habían sido esclavos, así que establecieron la norma de que serían los clientes los que pudieran compensarles si les ofrecían un buen servicio. La práctica se institucionalizó con rapidez y, en el clima abiertamente hostil a los trabajadores de la *gilded age*, fue adoptada poco a poco también en el norte. Hoy, en Estados Unidos el oficio de camarero, así como otros similares, tiene un salario mínimo distinto y mucho más bajo que el del resto de trabajos en la mayor parte del país, de modo que se mantiene esta práctica nacida del racismo sureño ciento cincuenta años después. La mayoría de los trabajadores con esta clase de empleos, por supuesto, son negros, latinos, mujeres e inmigrantes.

Los demócratas también utilizaron el racismo como arma arrojadiza para mantener a los trabajadores blancos en sus estados tan pobres como fuera posible. La economía del sur, tras la guerra, siguió siendo eminentemente rural, con una jerarquía laboral en la que los afroamericanos ocupaban la parte más baja de la escala, trabajando de jornaleros, limpiadores, sirvientes o camareros, separados de los empleados blancos pobres que ocupaban oficios justo por encima en fábricas, talleres o tiendas. La amenaza de que los negros empezaran a ocupar los puestos de trabajo de los blancos es una constante en la política del sur de esta era y un instrumento central en la lucha contra el sindicalismo en la región.

Estados Unidos siempre ha sido un país donde el sindicalismo ha sido recibido con cierta hostilidad por parte de las autoridades, pero en la Confederación los legisladores hicieron todo lo posible para limitar cualquier conato de movilización obrera. Aunque la industrialización fue tardía en la zona, los segregacionistas sureños percibían el movimiento obrero como un intento de crear una solidaridad entre razas basada en la clase social, algo que era contrario a su ideología racista.

Este es el motivo de la extraña segmentación de la legislación laboral en Estados Unidos; en los estados sureños es mucho más difícil formar y mantener un sindicato debido a la existencia de las llamadas *right to work laws*, leyes que prohíben forzar a los trabajadores a pagar cuotas sindicales en empresas donde hay representación sindical. Aunque trataremos este tema con más detalle en otro capítulo, es importante recalcar que estas diferencias son fruto de una campaña explícitamente racista en las décadas de 1930 y 1940 para que blancos y negros no «se trataran como hermanos». [19]

Los estados del norte, por supuesto, también tuvieron instituciones y prácticas racistas, aunque nunca fueron ni tan explícitas ni tan extremas como en el sur. Los afroamericanos eran mucho más libres allí, tanto política como económicamente. El hecho de que muchas de las leyes discriminatorias fueran más sutiles, no obstante, hizo que nunca fueran atacadas y desmanteladas con la misma energía que los sistemas de Jim Crow. Algunas, especialmente las relativas a educación y urbanismo, han pervivido hasta nuestros días.

INOPERANCIA FEDERAL

Aunque el Supremo toleró esta clase de prácticas por parte de los gobiernos estatales, en ningún momento cerró la puerta por completo a que el Congreso interviniera. En una sentencia de 1884 (*Ex parte* Yarbrough) el tribunal reconoce explícitamente que el Gobierno federal puede tomar medidas para garantizar el derecho a voto. El problema, sin embargo, es que los demócratas sureños podían bloquear cualquier intento de que eso sucediera en el Senado.

Volvemos, otra vez, al *filibuster*. En 1891, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó el Federal Elections Bill, una ley que, de ser aprobada, federalizaría la regulación de las elecciones a la Cámara Baja. [20] La propuesta fue enviada al Senado, donde los demócratas sureños la bloquearon de inmediato. Los republicanos dejaron de intentar aprobar nada relacionado con derechos civiles durante las siguientes tres décadas. En 1922, una ley muy limitada dirigida a perseguir a los autores de linchamientos fue llevada al Senado y sometida a tres *filibusters*, con la delegación sureña bloqueándola cada vez que era llevada al pleno. No lo volvieron a intentar más.

Detrás de esta decisión, indudablemente, había un cálculo electoral bastante simple. Los demócratas habían blindado su dominio político en el sur por completo, pero, al hacerlo, debilitaron su postura en el resto del país. El populismo ruralista de William Jennings Bryan era insuficiente para ganar en un norte y Medio Oeste cada vez más urbanos. Dado que el GOP no necesitaba el voto de la Confederación, sencillamente decidieron sacrificar a los votantes afroamericanos si eso les garantizaba el poder político a escala nacional.

Esto es, en el fondo, lo que entendemos por un equilibrio político: un régimen institucional donde nadie que pueda cambiar las cosas tiene incentivos para hacerlo. Los racistas del sur tenían su régimen de *apartheid*.

Los republicanos e industrialistas del norte podían gobernar y enriquecerse en paz. Todo el mundo con poder ganaba. Negros, inmigrantes y obreros perdían. Así de simple.

No hay que ser demasiado observador, no obstante, para percatarse de que las coaliciones políticas dentro de los dos grandes partidos americanos eran internamente contradictorias. Los demócratas norteños eran un partido proinmigración y prosindicatos, con una sólida tradición populista. En los lugares donde ostentaron el poder, no dudaron en aprobar medidas pioneras para proteger los derechos de los trabajadores y crear las primeras piezas del estado de bienestar. En el sur, sin embargo, el partido no sólo era increíblemente hostil a la inmigración, sino que además era furibundamente antisindical. Los republicanos, mientras tanto, eran un partido proindustria y empresa, antiinmigración y pro valores tradicionales que sólo existía en el norte. Pero esa combinación de religión, ley seca y crecimiento económico era incoherente desde el punto de vista ideológico y muy dependiente de su capacidad de generar prosperidad.

El sistema político nacido de 1877 era extraordinariamente estable, pero los partidos resultaron no serlo. En las siguientes páginas veremos cómo la Gran Depresión alteró la política americana e inició el proceso que nos lleva al sistema político actual.

UN PEQUEÑO PARÉNTESIS: LA LEY SECA Y EL MOVIMIENTO *WOKE*

Una de las grandes rarezas de la historia de Estados Unidos siempre será la decimoctava enmienda de la Constitución. Ratificada en enero de 1919, prohibió la venta y el consumo de bebidas alcohólicas casi por completo en todo el país.[21] Hablar sobre las causas y consecuencias de la ley seca

merecería uno o varios libros como este, sin duda, pero hay un par de detalles relevantes que vale la pena comentar.

Primero, el origen religioso del «movimiento de temperancia» que organizó la movilización que llevó a prohibir el alcohol. Hay una fuerte tradición en el protestantismo americano, especialmente en las iglesias pietistas, de lanzarse a grandes cruzadas morales e intentar intervenir en el sistema político. Gran parte del activismo en Estados Unidos ha nacido en los púlpitos, no en organizaciones sociales. Esto explica por qué muchos movimientos sociales americanos adoptan usos, formas y modos de comunicarse que parecen salidos de una iglesia baptista; discursos, sermones, canto y respuesta, y una aproximación casi devocional a la causa.

El moralismo político protestante ha generado causas y cruzadas morales tanto de izquierdas como de derechas. El abolicionismo que precedió a la guerra civil era profundamente religioso (y muchas de las canciones de guerra del norte así lo atestiguan),[22] al igual que el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta (liderado por un reverendo, Martin Luther King). En el lado conservador, esta misma tradición trajo la ley seca a principios del siglo XX y la Moral Majority durante la era Reagan.

Si alguna vez os ha chocado el tono religioso-mesiánico del movimiento *woke* americano en tiempos recientes, por cierto, este es el motivo. Aunque no es confesional de origen (la religiosidad, incluso en Estados Unidos, ha disminuido muchísimo), los métodos, las tradiciones, la estética y el espíritu son los mismos que los de estos movimientos pasados; beben de esta tradición religiosa. Eso hace que a menudo sean muy cargantes y explica por qué lo *woke* suena a veces francamente extraño en Europa; el Viejo Continente no tiene una tradición de militancia religiosa comparable, así que suena impostado.

Es también digno de mención que esta tradición religiosa es muy distinta a los usos y prácticas del sindicalismo y el movimiento obrero, que es bastante menos mesiánico y se centra mucho más en la solidaridad de clase y la acción colectiva que en la sentimentalidad. Estas aproximaciones divergentes producen muchas veces fricciones dentro de la izquierda americana, para la eterna frustración del Partido Demócrata.

La ley seca, mientras tanto, resultó ser un fracaso rotundo; una de las promesas electorales de Franklin Delano Roosevelt en 1932 fue su abolición inmediata. La vigesimoprimera enmienda, la única escrita para abolir una enmienda anterior, fue ratificada en 1933.

Pero este es un país diverso. Muchos estados se mantuvieron «secos» durante décadas; Mississippi no autorizó la venta de alcohol en su territorio hasta 1966. Incluso hoy en día, hay más de quinientos condados donde no se puede comprar alcohol. Entre ellos está Moore County, Tennessee, famoso por albergar la destilería de Jack Daniels.

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT Y EL FINAL DE UNA ERA

Los años comprendidos entre 1932, con la victoria electoral de Franklin Delano Roosevelt (FDR), y 1965, con la aprobación de la Voting Rights Act, son un periodo extraño. Por un lado, el sistema constitucional nacido del Compromiso de 1877 sigue vigente en el lado político. Se mantiene esa división interna entre un norte con un sistema democrático liberal reconocible y un sur esencialmente autoritario, segregado, racista y controlado con mano de hierro por el Partido Demócrata.

En el lado económico, sin embargo, 1932 supone un vuelco trascendental tanto en los partidos como en las instituciones americanas. Con Roosevelt

tendremos un presidente con una supermayoría en ambas cámaras y una firme voluntad de utilizarla. El Supremo, al principio, intentará detener muchas de las iniciativas del presidente y mantener al país bajo el régimen antitrabajador de la era Lochner, pero acabará por ceder a la realidad política (y a los intentos de controlarlo de FDR) y permitirá que esos cambios entren en vigor.

Es decir, a mediados de los años treinta, la Constitución americana vuelve a ser «reformada», porque su interpretación cambia. Y esta «reforma», acompañada de la batería de medidas legislativas del New Deal primero y de los efectos de la Segunda Guerra Mundial después, provocará un cambio profundo en el sistema de partidos americano que dejará vía libre al movimiento de los derechos civiles de los años sesenta y a la redemocratización del sur.

La Gran Depresión y sus consecuencias

El debate sobre las causas de la Gran Depresión es largo y complicado, y desde luego excede lo que podemos cubrir en este libro. Pero en 1932 los americanos tenían claro quiénes eran los culpables que merecían ser castigados: el Partido Republicano en general y el presidente Herbert Hoover en particular. El GOP pasó de tener 218 escaños en la Cámara de Representantes, con un 53 % del voto, a 117 escaños, con un 42 % de apoyos. Hoover, que había sido escogido en 1928 con un 58 % de apoyos en 1928, perdió en 1932 por 57-39, ganando sólo en seis estados. Roosevelt se convirtió así en el primer presidente demócrata en ochenta años en acceder al cargo, sacando una mayoría tanto en el Colegio Electoral como en el voto popular.[23]

Estados Unidos tuvo mala suerte en esa época. Primero, por haber escogido a Hoover, alguien que carecía de las ideas, la flexibilidad y el temperamento adecuados justo antes de que empezara la crisis, y, segundo, por haber votado en unas legislativas apenas empezada esta (1930), cuando no estaba clara aún la profundidad de la recesión. Eso hizo que el país retrasara cualquier respuesta efectiva al colapso económico durante años, metiendo la economía en una espiral deflacionaria mucho peor que prácticamente cualquier otro país desarrollado.

Cuando llegó a la Casa Blanca, Roosevelt se encontró con un panorama económico absolutamente desolador. La tasa de paro rozaba el 25 %, la economía se había contraído casi un 13 % el año anterior y los precios se habían desplomado en más de diez puntos. Todos los indicadores estaban cayendo en barrena desde 1930 y empeorando rápidamente. La suerte, para Estados Unidos, fue que Roosevelt era el tipo de político energético, creativo y dinámico que el país necesitaba para salir de la crisis.

El New Deal, el enorme paquete de medidas de FDR elaborado a todo correr durante los cien primeros días de su mandato, distaba mucho de ser perfecto; no todo lo que fue aprobado funcionó como esperaban. Las dos medidas más importantes durante este periodo (abandonar el patrón oro y el seguro de depósitos bancarios) no eran exactamente populistas. Pero la actitud de Roosevelt, su retórica de hacer, de experimentar con persistencia y valentía («bold, persistent experimentation», una de mis figuras retóricas favoritas de cualquier presidente) buscando soluciones a problemas, le hizo inmensamente popular. Es posible que la economía americana hubiera tocado fondo en 1932, pero la recuperación fue fulgurante. El PIB creció un 10,8 % en 1934, un 8,9 % en 1935 y un 12,9 % en 1936, el año de las elecciones.

Roosevelt y los demócratas barrieron a los republicanos en los comicios de aquel año. El presidente se impuso 61-37, perdiendo sólo en dos estados (Maine y Vermont, que era entonces un fortín republicano). Su partido amplió la mayoría en la Cámara de Representantes a un demencial 334-88. [24] El equilibrio de fuerzas nacido en 1877, con un Partido Republicano dominante a escala nacional y un Partido Demócrata hegemónico en el sur había desaparecido por completo; los demócratas habían construido una nueva coalición de gobierno.

La coalición del New Deal

Hablar de la New Deal Coalition con los resultados de 1936 es un poco engañoso, básicamente porque Roosevelt ganó en todas partes. Más relevante es ver cómo estas dos elecciones (1932 y 1936) fueron las primeras de un largo ciclo de dominación abrumadora del Partido Demócrata. Entre 1932 y 1968, esta formación tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso durante veintiocho años, por cuatro años de control republicano. Coparon la presidencia durante veinticuatro años, por sólo ocho del GOP. Las mayorías solían ser amplias, a menudo rozando dos tercios de los escaños.

El apoyo de esta coalición era una combinación de dos bloques electorales. Por un lado, los demócratas mantuvieron, casi sin fisuras, sus abrumadoras mayorías en el sur. Estas mayorías eran obtenidas con la habitual combinación de racismo, autoritarismo y opresión, porque el sistema constitucionalmente refrendado de segregación y tiranía seguía en vigor en toda la región.

Lo que cambia con Roosevelt es que los demócratas consiguen volver a ser competitivos en el norte. Hasta 1932, los indicadores de voto más

predecibles en esa región habían sido ascendencia migratoria e identidad religiosa, con algo de voto de clase en las zonas con fuerte presencia sindical. En 1932, sin embargo, los protestantes dejan de votar según valores morales y religiosos (la tremenda impopularidad de la ley seca fue de gran ayuda) y pasan a tener algo más parecido a un voto económico tradicional. El voto de clase en Estados Unidos nunca llega a tener la misma fuerza que en Europa, pero con el New Deal gana suficiente fuerza como para construir una coalición electoral casi imbatible. La suma de votos progresistas, sindicalistas, de minorías étnicas y religiosas del norte y del voto blanco sureño era abrumadora.

La coalición del New Deal, además, se vio reforzada gracias a dos factores adicionales. Por un lado, tenemos el fenómeno de la Gran Migración, el éxodo de afroamericanos de estados del sur hacia el norte, que se acelera durante todo este periodo; por el otro, la gran expansión del sindicalismo durante los años treinta, gracias a una serie de cambios legales impulsados por la Administración Roosevelt que facilitaron enormemente sindicarse.

PARÉNTESIS: SINDICATOS EN ESTADOS UNIDOS

Esta es una idea que merece ser desarrollada con algo de detalle, porque tiene un impacto considerable en el sistema político.

La primera legislación de la era Roosevelt para regular los sindicatos es la National Industrial Recovery Act (NIRA) de 1933. Esta ley autorizaba al Gobierno federal a regular los precios y salarios en Estados Unidos para estimular el crecimiento económico. La NIRA es más conocida en su intento de formular una política industrial, permitiendo que las empresas

elaboraran «códigos de competencia» que les permitieran pactar precios y regularse a ellas mismas durante un periodo de tiempo limitado (dos años). Esto creó montañas de papeleo, montones de normas y reglamentos y resultó ser una mala idea; en 1935, el mismo Roosevelt decidió cambiar de estrategia.

La parte realmente interesante de la NIRA era el resto de la ley. Por un lado, tenemos la creación de la Public Works Administration, el primero de los grandes programas de infraestructuras del New Deal. Estados Unidos está plagado de obras ejecutadas en esta época, desde parques a presas, canales u oficinas de correos. Por el otro, la ley incluye una enorme batería de derechos sindicales, normas para regular la negociación colectiva, cuotas y la prohibición de que las empresas exijan no afiliarse a un sindicato como condición de empleo. Como parte del andamiaje de los códigos de competencia, además, los acuerdos salariales podían ser sectoriales, creando convenios colectivos que cubrieran industrias enteras.

La NIRA, para variar, también se topó con el Tribunal Supremo. La corte interpretó que excedía las competencias del Congreso bajo la cláusula de regulación del comercio de la Constitución[25] y la derogó por completo. Esto provocó la ira de Roosevelt (era parte de una serie de sentencias del tribunal que invalidaron múltiples leyes del New Deal) y forzó la aprobación de la National Labor Relations Act de 1935 (o ley Wagner, el nombre de su autor), la piedra fundacional de las relaciones laborales en Estados Unidos.

La ley Wagner fue diseñada explícitamente para facilitar y favorecer la creación de sindicatos, buscando igualar el poder de negociación entre trabajadores y empresas. Para ello, establece un mecanismo legal de creación de sindicatos y una agencia federal, la National Labor Relations Board (NLRB), dedicada a supervisar el proceso. El contrato sindical (*labor*

contract) es el principio rector básico de las relaciones entre sindicato y empresa. Este era el producto final de una negociación entre los dos agentes que produce un documento con valor legal pleno. Con ello se formaliza una constante en el movimiento obrero americano que sin embargo se convertiría en su talón de Aquiles: los contratos son de empresa o cubren a una determinada categoría profesional dentro de una empresa. No son sectoriales.

Durante los primeros años de vigencia de la legislación ese detalle no tuvo demasiada importancia. La descomunal movilización de la Segunda Guerra Mundial dio a los trabajadores un poder de negociación tremendo. Combinado con una Administración que se situaba netamente en el lado de los empleados, esto contribuyó a una expansión descomunal del sindicalismo en el país.

En 1945 y 1946, este crecimiento del movimiento sindical trajo consigo una gran oleada de huelgas y conflictividad laboral. Cuando los republicanos recuperaron el Congreso brevemente en 1946, en medio del pánico anticomunista, decidieron que las cosas se estaban saliendo de madre y sacaron adelante la llamada Taft-Harley Act para pinchar ese globo.

La Taft-Harley no parece demasiado agresiva, pero es una de esas leyes cuya implementación y desarrollo legal acabarán siendo claves a largo plazo. En principio, el texto sólo prohíbe varias «prácticas sindicales injustas», como huelgas solidarias, huelgas salvajes (*wildcat strikes*) y algunas clases de piquetes. También ilegaliza las llamadas *closed shops*, contratos que hacían obligatorio sindicarse para poder trabajar en una empresa.

Los dos cambios más significativos fueron más sutiles. Primero, prohibir donaciones políticas directas a campañas federales. Esto elimina la

posibilidad de que los sindicatos se coordinen con candidatos en algo parecido a un partido laborista. Aunque siguieron interviniendo en campañas electorales, tuvieron que hacerlo con comités independientes de acción política, no financiando candidatos directamente.

Segundo, T-H permite que los estados aprueben las leyes de «derecho al trabajo» (*right to work*) que mencionábamos en este mismo capítulo. Hasta 1947, los sindicatos podían negociar contratos que incorporaban una cláusula que hacía que todos los empleados incluidos en aquel pagaran obligatoriamente una cuota sindical, sin importar si estaban afiliados o no. T-H posibilita que los estados prohíban esta clase de cláusulas, en la práctica permitiendo que los trabajadores puedan escoger no pagar pero sí seguir recibiendo los beneficios de la negociación colectiva. Esto crea situaciones en las que un sindicato puede intentar representar a los trabajadores pero no tiene fondos para cubrir los costes de una negociación. Dado que los empresarios inevitablemente intentan que esta se encarezca tanto como sea posible, las cláusulas de *right to work* hacen casi inviable organizar a los trabajadores.

Las leyes de «derecho al trabajo» no tardaron en extenderse, sin remedio, en los estados del sur. La idea de que trabajadores blancos y negros pudieran compartir sindicato era algo que les parecía tan reprobable a muchos que preferían matar el sindicalismo antes de mezclar razas.

El impacto de la Taft-Harley fuera del sur, sin embargo, no fue inmediato. Durante los años cincuenta, el zénit del poder imperial americano, la tasa de desempleo era tan minúscula que los trabajadores seguían teniendo un poder de negociación considerable. En un mundo donde la capacidad industrial de Estados Unidos era dominante, las empresas se podían permitir ser paternalistas. Los reguladores, además, eran aún *newdealers* de corazón, así que la NLRB siguió alineándose con

los trabajadores más que con los patronos. Hubo cierta caída de afiliación, sobre todo en el sur, pero el movimiento sindical se mantuvo. El poder obrero detrás de la coalición del New Deal siguió más o menos intacto hasta finales de los sesenta.

«REFORMANDO» LA CONSTITUCIÓN

Volvamos al Supremo. Durante los primeros años del New Deal, la corte se dedicó a torpedear gran parte de las reformas económicas de Roosevelt, siguiendo con la lectura literalista y restrictiva pos-Lochner.

Eso irritó profundamente al presidente. Con su colosal victoria electoral de 1936 bajo el brazo, Roosevelt decidió que era hora de reformar la institución para que reflejara mejor la opinión pública (siendo generoso) o sacársela de encima (no siéndolo). En 1937, propuso al Congreso la Ley de Reforma del Proceso Judicial para ampliar el tribunal de nueve a quince jueces, nombrando él a los nuevos miembros.

La Constitución, como comentamos en el capítulo 2, no dice nada sobre la composición o el tamaño del Supremo, y deja en manos del Congreso establecer su organización interna. La ley era constitucional, con precedentes similares en el siglo xix. Que la última alteración fuera en 1869, sin embargo, dejaba claro que todo el mundo entendía el papel del Supremo en el juego político del país, especialmente en mantener los delicados equilibrios legales de la Constitución de 1877. Los senadores sureños temían que un Supremo más progresista empezara a revisar todas las sentencias judiciales que permitían la segregación racial en sus estados, así que la propuesta de Roosevelt no tardó en encallarse en la Cámara Alta.

Aun así, los jueces del Supremo parece que entendieron que la reforma representaba una amenaza real para su autoridad. FDR iba a llegar a un acuerdo con los senadores sureños tarde o temprano sobre nombramientos, abriendo paso a cambios en la corte. A los pocos meses, el Supremo publicó la primera sentencia que rompía con las doctrinas de la era Lochner al validar la constitucionalidad de una ley de salario mínimo en el estado de Washington.[26] Poco después Willis van Devanter, uno de los jueces más conservadores, anunció su jubilación, dándole una vacante al presidente. Otro de los magistrados que le había dado problemas constantes, Owen Roberts, comenzó misteriosamente a votar como un progresista convencido, dándole victorias a la Casa Blanca en varias leyes polémicas.

Quizá hubieran captado el mensaje. Quizá no. Aunque no está claro que la reforma propuesta por FDR influyera en la decisión de estos dos magistrados, lo cierto es que a partir de 1937 el Supremo dejó de torpedear el New Deal. Lo que en la década anterior eran violaciones inaceptables del sacrosanto derecho (implícito y no escrito en el texto constitucional) a firmar contratos ahora eran aplicaciones razonables de la cláusula de comercio interestatal. La Constitución había sido reformada, otra vez, debido al cambio de interpretación del tribunal a una más políticamente conveniente.

DERECHOS CIVILES Y EL FIN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1877

La coalición del New Deal tenía, desde su origen, una enorme contradicción en su centro. Los demócratas se habían convertido en el partido de los trabajadores y de las minorías en el norte del país, pero seguían siendo el partido de las élites blancas racistas del sur.

Esta dualidad empezó a generar conflictos dentro del partido desde los primeros días de la presidencia de Roosevelt. Los demócratas tenían mayorías abrumadoras en el Congreso, pero en su grupo parlamentario pervivía esa misma facción de representantes y senadores racistas del sur, con su minoría de bloqueo a un *filibuster* y su capacidad de hundir cualquier propuesta legislativa. A los *dixiecrats* no les gustaba que «the negro» recibiera el mismo trato, apoyo o consideración que los hombres blancos. Como consecuencia, exigieron que muchas leyes del New Deal incluyeran provisiones o restricciones especiales destinadas a excluir a tantos afroamericanos como fuera posible de sus prestaciones.

¿Recordáis las propinas de las que hablábamos en este mismo capítulo? La Fair Labor Standards Act de 1938 dejó fuera del salario mínimo federal a los trabajadores que dependían de ellas a petición de los legisladores del sur, que no querían que sus camareros cobraran sueldos dignos. La ley que creó la seguridad social, en 1935, excluía del sistema de pensiones a trabajadores agrícolas y del hogar, los dos sectores que empleaban a dos tercios de los asalariados afroamericanos. Esta exclusión fue, de nuevo, el resultado de las condiciones de legisladores sureños para votar a favor de la ley.

Quizá la reforma con un efecto racial más persistente fue la Ley Nacional de Vivienda de 1934, que creó el sistema hipotecario moderno de créditos a treinta años garantizado por el Gobierno federal. La agencia a cargo de gestionar el sistema, la Federal Housing Administration, diseñó un modelo estandarizado para evaluar el riesgo de los préstamos. Uno de los factores de riesgo de impago se determinaba por criterios raciales. Los barrios de mayoría negra eran considerados de «alto riesgo»[27] y no recibirían subvenciones. Hoy, un siglo después de la aprobación de la ley, uno podría superponer los mapas elaborados por la FHA a finales de los años treinta en

el de cualquier ciudad americana e identificar, casi calle por calle, los barrios degradados del país.[28]

Estas concesiones al racismo del sur se extendieron a leyes de derechos civiles. En 1934, Eleanor Roosevelt se unió a una campaña de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y dos senadores demócratas norteños, Edward Costigan y Robert Wagner para aprobar una ley antilinchamientos. A pesar de tener a su esposa pidiendo que llevaran la ley al Senado, FDR se opuso, diciendo directamente al mismo líder de la NAACP que si apoyaba la ley la facción sureña del partido bloquearía el New Deal por completo. Tres años después, cuando la urgencia por salvar la economía había pasado, lo intentaron de nuevo, pero la ley fue objeto de un *filibuster* en el Senado y nunca fue votada.[29]

Con este trasfondo, el confinamiento de más de cien mil americanos de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial resulta menos sorprendente, al igual que la infame sentencia del Tribunal Supremo (Korematsu contra Estados Unidos, 1944) justificando su constitucionalidad. Simplemente, este era el poso social y legislativo del país en esa época; si eran capaces de racionalizar la segregación, los campos de concentración no estaban demasiado lejos.

Aún con todos estos problemas, las mismas contradicciones del New Deal también hicieron que incluyera medidas y provisiones que iban en dirección contraria a la segregación racial y que sirvieron para plantar las semillas del movimiento de los derechos civiles después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los arquitectos del New Deal (Harold Ickes, Frances Perkins, Harry Hopkins y la misma Eleanor Roosevelt) eran extremadamente críticos con Jim Crow, y trabajaron para incluir a «no blancos». Los programas de empleo público creados en esos años eran no

discriminatorios, y pagaron el mismo sueldo a todos los trabajadores, sin que importara la raza. Roosevelt revirtió muchas de las prácticas racistas impuestas por Woodrow Wilson en el Gobierno federal, creó un consejo de asesores presidenciales afroamericanos en la Casa Blanca y nombró al primer juez federal negro. El auge del sindicalismo contribuyó decisivamente a crear la coalición que sacaría adelante las leyes de derechos civiles años después.

Lo que resultaba obvio para todos tras la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, fue que el Partido Demócrata tarde o temprano iba a tener que tomar una decisión sobre estos temas, ya que la coalición no era sostenible a medio plazo. El conflicto llegó pronto, con la decisión de Harry Truman de crear un comité presidencial para los derechos civiles e iniciar la desegregación de las Fuerzas Armadas. En la Convención Nacional de 1948, el encendido discurso a favor de los derechos civiles del joven y carismático alcalde de Minneapolis, Hubert Humphrey,[30] hizo que el partido adoptara por estrecho margen un programa electoral contrario a la segregación. La respuesta de varias delegaciones sureñas fue abandonar el pleno indignadas.

Fue una escisión con consecuencias inmediatas. Los *dixiecrats*, indignados con las medidas de Truman sobre derecho civiles, apostaron por presentar a Strom Thurmond como candidato a la presidencia, dividiendo el voto demócrata.

LAS ELECCIONES DE 1948 Y LAS SEMILLAS DEL CAMBIO

Lo que distingue la coalición del New Deal (al igual que la coalición republicana pos-Reconstruction) es que fue lo bastante sólida tanto para

permitir que los demócratas se mantuvieran en el poder durante varias décadas como para forzar un cambio de estrategia en el GOP si quería volver a ser políticamente viable.

Tras cuatro palizas consecutivas a manos de Roosevelt, el Partido Republicano finalmente decidió moverse hacia el centro, abandonando gran parte de su oposición al New Deal. En 1948 nombraron candidato a presidente al gobernador de Nueva York, Thomas Dewey, esencialmente un *newdealer* en todo menos en afiliación partidista. Su vicepresidente era Earl Warren,[31] el también muy liberal gobernador de California.

Con los demócratas divididos, en la noche electoral todo el mundo esperaba una victoria republicana. En una de las grandes sorpresas electorales de la historia de Estados Unidos, sin embargo, Truman derrotó a Dewey por tres puntos. Incluso con la facción pro «derechos estatales» demócrata ganando en cuatro estados (Alabama, Luisiana, Mississippi y Carolina del Sur), la coalición de FDR seguía siendo demasiado fuerte.

La victoria de Truman en 1948 hizo entender a los republicanos que un candidato moderado les podía dar la Casa Blanca. En 1948, las élites demócratas llegaron a la conclusión de que el partido podía ganar las elecciones sin necesitar los votos del sur. El movimiento por los derechos civiles tendría, desde entonces, a (parte) de un partido político dispuesto a luchar junto a ellos.

En 1952, el Partido Republicano eligió a Dwight Eisenhower, general victorioso de la Segunda Guerra Mundial y alguien tan ideológicamente moderado que ambos partidos llegaron a disputarse la posibilidad de nominarle candidato. Eisenhower nombró a un joven senador por California que combinaba apoyo a los derechos civiles, pragmatismo e impecables credenciales anticomunistas llamado Richard Nixon[32] para reforzar aún más esta imagen, y ganó las elecciones por casi once puntos.

La presidencia de Eisenhower fue, a todos los efectos, una continuación del New Deal, e incluyó el programa de obras públicas más grande de la historia (la Red Nacional de Autopistas Interestatales). Aunque redujo el gasto público, Ike declaró intocables programas como la seguridad social (pensiones), salario mínimo o vivienda pública, y aumentó el gasto en educación. No fue un presidente ambicioso pero sí efectivo. Su reputación no ha hecho más que mejorar en tiempos recientes, con Estados Unidos aprendiendo a respetar su liderazgo tranquilo y su hábil política exterior.

Al buen nombre de Eisenhower ha contribuido, sin duda, la constatación de que la década de los años cincuenta fue, probablemente, el zénit de imperio americano. Su presidencia coincide con «los buenos viejos tiempos», la América de Elvis, Buddy Holly, el béisbol y el *apple pie*; la «verdadera» América de cuando los hombres eran hombres, los políticos, honestos, y el mundo nos respetaba.

Excepto, claro está, que detrás de esta América tranquila persistía ese problema de fondo que había acompañado al país desde la guerra: los derechos civiles. Durante la presidencia de Eisenhower, una serie de casualidades y accidentes históricos forzó que ambos partidos tuvieran que darle al fin una respuesta.

4

Derechos civiles, Nixon y la invención del resentimiento

Siempre he sentido cierta debilidad por Richard Milhous Nixon.[1] No ha habido ningún político en la historia reciente del país que haya sido más estudiado y psicoanalizado que él. Es indudable que Nixon era, en muchos aspectos, una persona bastante horrible, y su total falta de escrúpulos no sólo provocó su caída, sino también la muerte de decenas o cientos de miles de inocentes en Vietnam y Camboya, y el fin de varios regímenes democráticos.

Lo que es indudable, sin embargo, es que Richard Nixon era un líder excepcional, con un increíble olfato estratégico y capacidad de conectar con los votantes. Gracias a este talento, redefinió por completo el sistema político americano. Muchas de sus ideas, su retórica y algunas de sus decisiones electorales siguen marcando la agenda del país; Estados Unidos vive bajo su sombra, más que bajo la de cualquier otro político. A los republicanos les gustaba decir que eran el partido de Lincoln y Reagan, pero es el viejo Milhous quien realmente los define.

Checkers

Empezaremos la historia con su primer discurso televisado, el 23 de septiembre de 1952.

Nixon, por aquel entonces, era el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos y andaba metido en un problema. La

prensa había descubierto una cuenta especial en la que donantes adinerados depositaban fondos legalmente cuestionables para financiar sus campañas políticas. El senador, que había saltado a la fama en parte por su celo anticorrupción, se convirtió en objeto de críticas desde dentro y fuera de su partido. Muchos pidieron a Eisenhower, el candidato a presidente, que lo reemplazara.

A sus treinta y nueve años, el joven Nixon no iba a permitir que un escándalo tan irrelevante destruyera su carrera. De familia humilde, parte de la nueva generación de cargos electos que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, Nixon era inteligente, ambicioso, incansable y demasiado testarudo para rendirse de primeras. Junto con Murray Chotiner, su director de campaña, decidió que la mejor opción era pasar al ataque, contratando un bloque de media hora en las tres cadenas nacionales para dar un discurso televisado en horario de máxima audiencia.

El hilo conductor del discurso era, en apariencia, bastante simple. Ante las acusaciones de utilizar donaciones para uso personal, Richard Nixon, hombre hecho a sí mismo, explicó que él era trabajador, austero y honesto, y que vivía sin lujos. Habló en detalle de sus finanzas, desde lo que pagaba de hipoteca hasta el dinero que aún debía a sus padres. Contó que su mujer no tenía ni siquiera un abrigo de visón, sino un austero y republicano abrigo de lana. También explicó orgulloso que en toda su carrera política sólo había aceptado un regalo: Checkers, un *cocker spaniel* que un votante de Texas les había enviado cuando escuchó en la radio que su hija quería un perrito. Nixon se despidió poniendo su carrera en manos de los votantes, pidiendo a la audiencia que llamaran o escribieran al Partido Republicano diciendo si le creían o debía renunciar como candidato.

Fuera como fuera, sin embargo, a Checkers se lo iban a quedar igualmente.

El discurso de Checkers, como fue inmediatamente conocido, fue visto por muchos comentaristas como una telenovela cursi e insufrible. Nixon había

recurrido a los tópicos más gastados del político que antepone el servicio a la riqueza, así como a la historia de su humilde familia, e incluso sacó literalmente a pasear un perrito y mostró la ilusión de sus hijas para dar lástima, pero no contestó a las acusaciones. Era un discurso tramposo, vacuo, sentimentaloide; politiqueo de tercera de un político sin clase.

Para una inmensa mayoría de votantes, sin embargo, el discurso fue extraordinariamente convincente. El Partido Republicano fue inundado con más de cuatro millones de cartas, telegramas y llamadas de teléfono a favor del candidato. Eisenhower superó sus dudas y lo mantuvo en la papeleta.

El «truco de Checkers», que los comentaristas pasaron por alto entonces, es que Nixon sólo parece estar hablando sobre su vida como humilde servidor público, pero ese no es el mensaje real. Nixon era alguien que venía de una familia pobre, con una infancia trágica (dos de sus hermanos murieron de tuberculosis cuando era niño), y entendía perfectamente que la mayoría de los votantes asumían que todos los políticos les mienten y que no querían una disculpa. En vez de concentrarse en negar la acusación, lo que hizo fue insinuar que los ataques contra él se debían no a sus actos, sino a quién era: un hombre humilde, no un político adinerado.

Nixon lo hizo de manera sutil, sin aspavientos, abusando de preguntas retóricas. Explicó que sus oponentes también tenían esta clase de fondos de campaña y donaciones, y que si se estaban metiendo con él era porque él era alguien honesto y sin nada que ocultar. Nixon era alguien como tú, alguien que tiene una hipoteca, no puede permitirse un abrigo de piel y ha trabajado toda su vida. Los listos de la clase, las élites, el *establishment*, no querían que un hombre común como Nixon se codeara con ellos, y por eso le atacaban a él, un intruso en la élite, por hacer lo mismo que hacían ellos. ¿De quién te vas a fiar, de esos periodistas e intelectuales que miran para otro lado cuando los ricos hacen sus chanchullos, o de Richard Nixon, uno de los tuyos, que hace lo que debe hacer para poder competir?

Lo fascinante es que, al menos en este punto, no estaba mintiendo. Nixon no era «realeza» como los Kennedy, ni el heredero de una familia WASP con tradición senatorial, ni un descendiente de *old money* del Upper East Side, ni un miembro de los círculos intelectuales del país. Era, realmente, un tipo común que tuvo una infancia dura y llena de tragedia y se había abierto paso hasta el Senado a base de dentelladas, trabajar como un poseso y algo de suerte. Durante toda su carrera, Nixon siempre estuvo convencido de que esas élites le despreciaban, y no andaba demasiado errado. El victimismo implícito en Checkers no era algo impostado, sino el fruto de un resentimiento real ante la estructura de poder americana. El genio de Richard Nixon consistió en entender que ese resentimiento podía ser una extraordinaria arma política.[2]

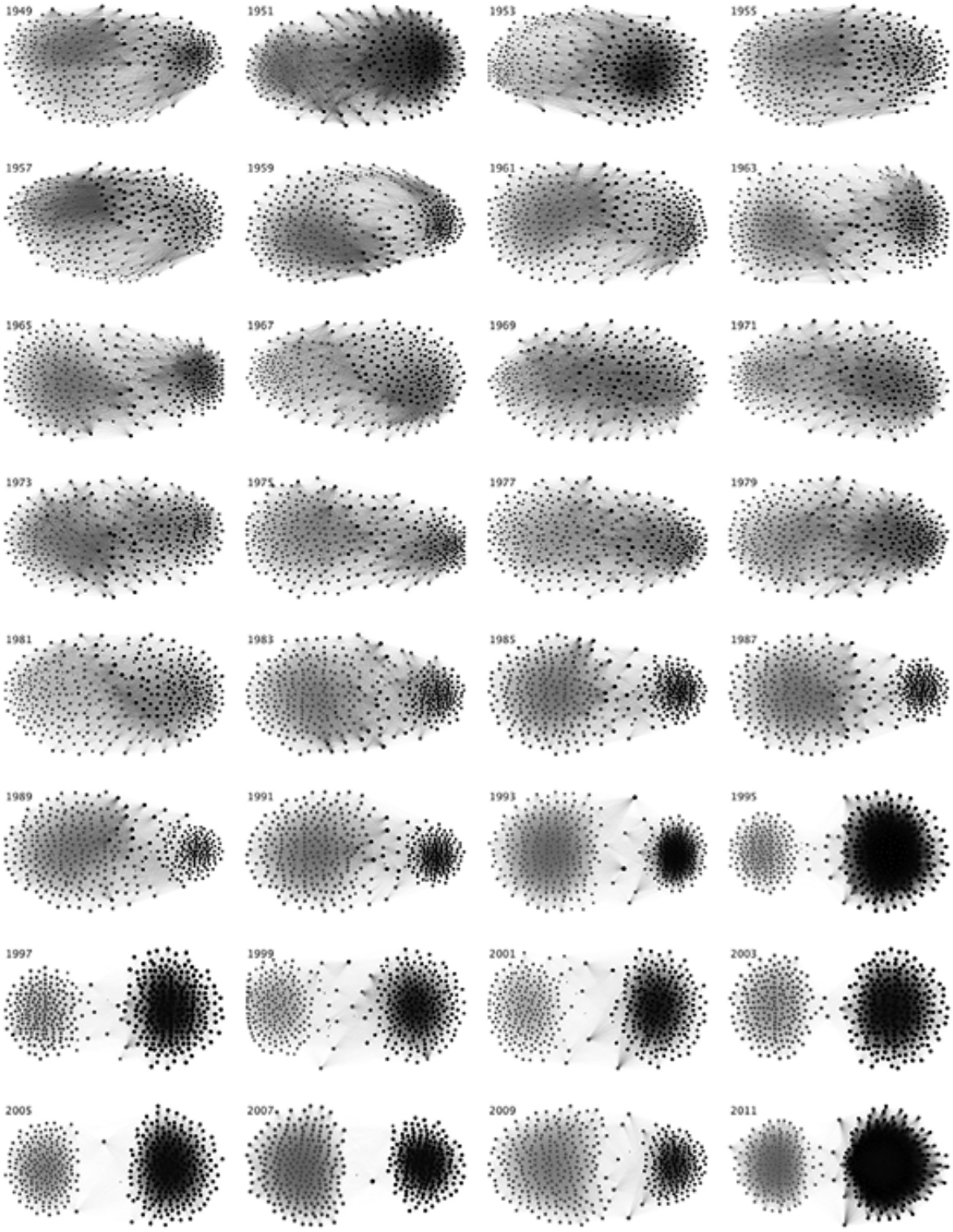
Durante toda su carrera, Nixon utilizó la desconfianza contra las élites como el punto de partida de todos sus mensajes. Lo hizo para ganar en un distrito que todos veían como imposible en 1946 y para llegar al Senado en otras elecciones durísimas en 1950. Su talento para ganar elecciones disputadas, el anticomunismo militante y la juventud, le hicieron ser un buen candidato a la vicepresidencia. Es entonces cuando viene este discurso de Checkers, la victoria holgada de Eisenhower y sus ocho años a la sombra del general.

El de vicepresidente, tanto entonces como ahora, es un trabajo desagradecido, sin atribuciones constitucionales claras más allá de romper el ocasional empate en el Senado y esperar a que el presidente muera accidentalmente. Así que este es un buen momento para aparcar por un segundo a Richard Nixon y hablar sobre la política americana en esa época y las primeras grietas en el sistema constitucional de 1877.

LA ERA DORADA DEL BIPARTIDISMO

Parte de la nostalgia por la América de las décadas de los cincuenta y los sesenta se basa en la idea de que la política, en esos años, era mucho más tranquila y civilizada de lo que vemos en el siglo XXI. El país sufrió tremendos conflictos, traumas y cambios sociales, se enfrentó a retos enormes y vivió oleadas de protestas, pero los líderes de entonces fueron capaces de sentarse a una mesa, sin que importara de qué partido vinieran, y llegaron a acuerdos. En vez de polarización y divisiones partidistas, había consenso y dirigentes responsables.

Esta no es una idea del todo errónea. Durante los años cincuenta y sesenta, demócratas y republicanos a menudo votaban en contra de su propio partido. Las leyes eran aprobadas, casi siempre, con votos procedentes de ambos bloques, fruto del acuerdo entre los moderados de ambas formaciones. La figura de la página anterior dibuja su evolución de forma muy clara.



División de miembros del Partido Demócrata (puntos grises) y Republicano (puntos negros) entre 1949 y 2011. Clio Andris et al., «The Rise of Partisanship and Super-Cooperators in the U.S. House of Representatives», PLoS ONE, 10(4), 21 abril de 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123507.

Es fácil ver que, entre 1948 y finales de los ochenta, hay una amplia área en el centro de la distribución donde habita un número considerable de moderados, que oscila ligeramente según quién controla la presidencia. También observamos como la cooperación entre partidos suele disminuir en los años anteriores a elecciones presidenciales (porque nadie quiere ayudar al presidente del partido contrario) y que acaba reconstituyéndose poco después. El pico del consenso bipartidista se alcanzó irónicamente en los años setenta, una década a menudo vilipendiada en Estados Unidos debido al estancamiento económico, la inflación y un pesimismo generalizado.

Lo que estas gráficas muestran, sin embargo, no son los felices años de consenso bipartidista previos al advenimiento de Bill Clinton, sino un cambio de la naturaleza de los partidos políticos. En realidad, los puntitos azules de 1973 representan a los miembros de una coalición muy distinta de la de los puntitos azules de 2005.

Ya hemos visto que, durante la «era de consensos», bajo la etiqueta de Partido Demócrata convivían dos facciones completamente distintas: una racista y sureña (los *dixiecrats*), y otra del norte/oeste mucho más integradora. En el Partido Republicano, mientras tanto, seguían conviviendo un grupo esencialmente moderado y reformista, norteño y urbano, y otro más rural, tradicionalista y conservador. Dada la incoherencia interna de los dos grandes partidos, el senador o representante republicano más progresista era alguien que estaba considerablemente a la izquierda del legislador demócrata más conservador. Los *dixiecrats* tenían mucho más en común con el ala derecha del GOP que con moderados de su propio partido y, en consecuencia, votaban con ellos frecuentemente.

Lo que veíamos, entonces, no era tanto un consenso bipartidista como un sistema donde ser de un partido político determinado era un mal predictor de tu ideología política. Aunque en este mapa político parece que mandan los

moderados de ambos partidos, que llegan a acuerdos entre ellos, lo que sucede realmente es que hay un contingente considerable de republicanos que hoy en día serían demócratas y de demócratas que estarían hoy en el Partido Republicano. Durante los cincuenta y sesenta, el único motivo por el que los *dixiecrats* no cambiaban de bando fue que los demócratas moderados les permitían mantener la segregación racial. Los republicanos progresistas, mientras tanto, se mantenían en el partido porque lo cierto es que no tenían adonde ir; los demócratas estaban dominados por *newdealers*, y en el sur no había democracia ni alternativa posible.

En la década de los cincuenta, sin embargo, el Partido Demócrata empieza a cambiar. La enorme migración de afroamericanos hacia el norte crea un grupo de presión considerable de votantes que se oponen a la segregación racial. Tienen un público receptivo: muchos de los cuadros del New Deal eran, de corazón, poco amigos del régimen de Jim Crow en el sur, y los votantes norteños sienten un rechazo visceral por la segregación. Ya he mencionado los intentos de Harry Truman por desegregar el Gobierno federal y empezar a hablar de derechos civiles. Cuando el partido acaba (finalmente) en la oposición en 1952, saben que deberán resolver este problema tarde o temprano, y eso implicará redefinir su coalición electoral de forma significativa.

La marcha de los demócratas hacia la defensa de los derechos civiles se hará fuerte en la segunda mitad de los años cincuenta, cuando Lyndon Johnson, como líder del partido en el Senado, abraza la causa. La lucha culminará en 1965, cuando Johnson, ya presidente, firma la Voting Rights Act, el último clavo en el ataúd del régimen de segregación en el sur, tras conseguir una victoria abrumadora en las elecciones presidenciales de 1964. En ese momento parecía que los demócratas habían conseguido redefinir la Constitución en un marco de justicia e igualdad para todos, expandir decisivamente el New Deal con nuevos programas de estado de bienestar y

mantener a la vez su aplastante dominio sobre las instituciones, construyendo una nueva coalición gobernante en el proceso.

El genio de Richard Nixon fue encontrar la receta política para evitar que eso sucediera.

La marcha hacia los derechos civiles

Todo empezó, una vez más, en el Tribunal Supremo. A finales de 1953, Eisenhower decide nominar para el puesto vacante de juez jefe a un republicano reformista y moderado que había sido candidato republicano a la vicepresidencia, Earl Warren.

De ascendencia escandinava, hijo de ferroviarios, Warren estudió Derecho antes de la Gran Guerra y se alistó en el ejército como soldado raso para servir en el frente. Hizo carrera política en la California de entreguerras, como fiscal de distrito, fiscal general y finalmente como gobernador, un moderado salido de la tradición progresista republicana de buen defender a los humildes contra los poderosos. Warren creía que la ley podía y debía ser utilizada para proteger derechos y libertades individuales, no sólo refrendar y pulir las decisiones del Congreso. Eso fue, de hecho, lo que hizo en el Tribunal Supremo.[3]

Brown contra el Consejo de Educación (1954) ocupa merecidamente un lugar preeminente en el panteón de la jurisprudencia del Supremo. El caso trataba sobre un padre de Topeka, Kansas, que demandó al consejo escolar de la ciudad para que le permitiera llevar a su hija al colegio que tenía más cerca de su domicilio en vez de obligarla a ir a un centro sólo para negros en la otra punta de la ciudad. El caso llevaba meses dando tumbos por la corte, sin que los jueces fueran capaces de llegar a un consenso. Nadie en el Supremo era segregacionista, pero tenían dudas sobre si tenía que ser este tribunal el que

decidiera sobre este tema o si debían dejarlo en manos de los estados. Warren les convenció de que era hora de que el Supremo recuperara el sentido original de la decimocuarta enmienda y declarara la segregación racial inconstitucional. Lo hizo con tal elocuencia y poder persuasivo que la sentencia, redactada por él mismo, fue unánime.

Brown contra el Consejo de Educación es clara y sin ambages: blancos y negros debían tener los mismos derechos y oportunidades. «Separados pero iguales» era una falacia; la separación era motivo y causa de desigualdad. La cláusula de igualdad incluida en la Constitución por los ganadores de la guerra civil recuperaba, al fin, su significado original.

La sentencia fue un terremoto. De un día para otro, el régimen de segregación racial que el Supremo había legitimado desde 1896 con Plessy contra Ferguson había sido declarado inconstitucional. Los estados fronterizos (Delaware, Maryland…) lo abandonaron con relativa rapidez. En el corazón de la vieja Confederación, la reacción fue de indignación e ira, de un «lunes negro» que iba contra el espíritu y la cultura del sur. Por toda la región, políticos sureños adoptaron toda clase de medidas para resistir a la imposición de Washington.

En Virginia, las autoridades cerraron los colegios públicos por completo durante meses para evitar la integración racial. En Arkansas, el gobernador envió a la Guardia Nacional para impedir que nueve estudiantes negros accedieran a un instituto «sólo para blancos». En Mississippi las autoridades poco menos que dijeron en voz alta que no iban a desegregar ninguna escuela y que, si alguien denunciaba a un distrito escolar, no podrían protegerlo. Nadie se atrevió a hacerlo hasta 1963, cuando Medgar Evers llevó a la ciudad de Jackson a los tribunales. Fue asesinado a sangre fría poco después. El hombre que le disparó no pudo ser condenado por homicidio hasta 1994; dos jurados (compuestos sólo por blancos) fueron incapaces de alcanzar un veredicto cuando el asesino fue juzgado en 1964. Por todo el sur proliferaron

colegios privados segregados para los hijos de familias racistas pudientes. La creación de los sistemas de cheques escolares y de la *school choice* (poder escoger a qué colegio envías a tus hijos) nace en esta época.

Brown contra el Consejo de Educación, sin embargo, era sólo el principio. Durante los catorce años siguientes, la Warren Court (corte Warren) básicamente reescribió media Constitución, una sentencia tras otra. En Bowder contra Gayle (1956) declararon inconstitucional la segregación en el transporte y los servicios abiertos al público; en Heart of Atlanta Motel, Inc. contra Estados Unidos (1964) hicieron lo mismo en hoteles y acomodaciones. En Griswold contra Connecticut (1965) establecieron que un estado no podía prohibir el acceso a anticonceptivos (esta es la sentencia que «crea» el derecho a la privacidad), abriendo el paso a la legalización del aborto. En Loving contra Virginia (1967) declararon inconstitucional la prohibición de matrimonios interraciales.[4] En Gomillion contra Lightfoot (1960) se prohibió el uso del *gerrymandering* (redibujar distritos electorales con fines políticos) para limitar la representación de votantes de color.

El mensaje de la corte al Congreso era claro: la época en que el Tribunal Supremo no iba a tumbar leyes sociales o de derechos civiles alegando «derecho a firmar contratos» o «derechos de los estados» había terminado. Los derechos recogidos en la Constitución no sólo afectaban a las actuaciones del Gobierno federal, sino que debían ser protegidos y respetados por todos los gobiernos del país, locales y estatales.

Si el hecho de que los derechos constitucionales recogidos en la Constitución no fueran directamente aplicables o estuvieran vigentes ante actuaciones de los estados durante la mayor parte de la historia del país os parece sorprendente, este es otro recordatorio de la tremenda inconsistencia del sistema constitucional americano. El Supremo había decidido, en 1833 (Barron contra Baltimore), que ese era el caso; la misma corte ha ido revirtiendo esa sentencia desde entonces. Incluso en nuestros días, hay varias

enmiendas del Bill of Rights en las que el Supremo aún no ha decidido qué cubren los estados. Y, por supuesto, no todas las incorporaciones son bienvenidas; este es el caso de Columbia contra Heller (2008), que reconoció el derecho a poseer armas de fuego.

Hora de la política

Con esta puerta abierta en el Supremo, los derechos civiles inevitablemente pasaron a ocupar el centro del debate político en Estados Unidos.

Eisenhower (que se arrepintió toda su vida de haber nombrado a Warren) se vio obligado a decidir si el Gobierno federal iba a obligar a los estados a cumplir con Brown contra el Consejo de Educación. El presidente no dudó, y en 1957 envió a la 101.º División Aerotransportada a Arkansas (invocando una ley de 1807, nada menos) para abrir las escuelas a cañonazos si fuera preciso. Su Departamento de Justicia, mientras tanto, se empleó a fondo intentando desmantelar las barreras y «alternativas» de los estados sureños para ignorar la sentencia. Ese mismo año, el presidente propuso una ley de derechos civiles para proteger a los afroamericanos en el sur.

Las atrocidades del régimen supremacista en el sur eran cada vez más difíciles de ignorar. En 1955 Emmett Till, un chaval de catorce años de Chicago que estaba visitando a unos familiares en Mississippi, fue secuestrado, torturado y linchado por dos blancos porque (decían) había flirteado con una chica blanca en un supermercado. Los asesinos fueron absueltos por un jurado integrado sólo por blancos. En su funeral, la madre de Till insistió en mantener el ataúd abierto; las fotos del cadáver de Emmett, mutilado y deforme, horrorizaron al país. En medio de una movilización social sin precedentes, los demócratas no podían quedarse de brazos cruzados.

Tuvieron suerte. El político al que le cayó la responsabilidad de contestar a la propuesta de Eisenhower fue Lyndon B. Johnson, el líder de la mayoría demócrata en el Senado y alguien capaz de combinar un extraordinario talento político con un firme rechazo a la segregación racial.

Johnson es, en cierto sentido, el reflejo simétrico de Richard Nixon en el Partido Demócrata. Hijo de un político y ranchero fracasado en una de las zonas más pobres de Texas, Johnson era quizá aún más ambicioso y falto de escrúpulos que el republicano. Su carrera política empezó como ayudante de un congresista en Washington, en 1931; de ahí se las arregló para ocupar un cargo en el Ejecutivo implementando programas del New Deal en su estado, que utilizó para ganar la fama suficiente para sacar un escaño en la Cámara de Representantes. Johnson era un hombre con prisas, aterrado de su propia mortalidad; los varones en su familia solían morir jóvenes. Así que en 1941 intentó dar el salto al Senado, perdiendo las primarias por un puñado de votos. Inquieto, se alistó en la Marina, sirvió (sin demasiada distinción) en el Pacífico y volvió a intentar dar el salto al Senado en 1948.

Según Robert Caro, el gran biógrafo de Johnson, fueron unas elecciones extraordinariamente corruptas, con compra de votos, urnas que aparecieron de la nada y abundante matonismo en varios condados de la frontera con México.[5] El caso llegó al Supremo, donde Johnson prevaleció porque, por aquel entonces, la doctrina del tribunal seguía siendo que las primarias de los partidos eran «cuestiones privadas» y no tenían poderes para intervenir. Irónicamente, fue una interpretación racista de la ley electoral lo que hizo posible que el hombre que acabó con Jim Crow llegara al Senado.

En la Cámara Alta, Johnson rápidamente se distinguió por ser un pelota incansable, capaz de ganarse las simpatías de los senadores más reaccionarios del sur. En menos de cuatro años consiguió ser nombrado líder de la minoría demócrata en la cámara (las de 1952 fueron unas de las raras elecciones en las que los republicanos ganaron el control del Legislativo), la persona más

joven de la historia en ostentar el cargo. Dos años después se convirtió en el líder de la mayoría en la cámara y, como tal, en la persona encargada de sacar adelante la ley de derechos civiles propuesta por Eisenhower.

La historia de cómo la Ley de Derechos Civiles de 1957 fue aprobada en el Senado, la primera ley de este tipo desde 1875, excede, con mucho, las páginas de este libro. Robert Caro dedicó la práctica totalidad del tercer volumen de su biografía de Johnson, de 1.167 páginas, a la estrategia política y las artimañas para conseguir los votos necesarios a fin de romper el bloqueo de los legisladores del sur y sacar la ley adelante. La resistencia de sus propios compañeros de partido fue atroz, incluyendo un *filibuster* del senador Strom Thurmond que se alargó veinticuatro horas y dieciocho minutos, con los senadores durmiendo en la cámara para mantener el *quorum*.[6] Pero Johnson fue capaz de conseguir, uno a uno, los votos necesarios para cerrar el debate y aprobar la ley.

El texto final de la normativa era mucho menos ambicioso que la propuesta original de Eisenhower. Johnson, siempre pragmático, ansioso de conseguir victorias en su casillero, prefirió recortarla a perder otro *filibuster*. Su idea fue que esta ley abriera un resquicio en el umbral de los derechos civiles. En años sucesivos, seguiría empujando hasta abrirla de par en par. En 1960, de nuevo respondió a la llamada del presidente a profundizar y ampliar la ley, y de nuevo la sacó adelante, con la oposición de los sureños de su propio partido y el apoyo unánime de los senadores republicanos.[7] Esta segunda ley era más fuerte que la primera, y ofrecía por primera vez medidas efectivas para proteger el derecho a voto en el sur. La causa de los derechos civiles estaba avanzando.

Las elecciones de 1960 y la nueva Constitución

Llegamos a las elecciones de 1960, entonces, con el país en una verdadera encrucijada. Los demócratas estaban intentando reconstruir su coalición política y llegar al poder manteniendo tantos votos del Solid South como fuera posible, ganando terreno en Nueva Inglaterra y el Medio Oeste para compensar las pérdidas. Para ello escogieron como candidato a un patricio de Boston, John F. Kennedy, y como segundo a un sureño reformista, Lyndon B. Johnson. Los republicanos, mientras tanto, buscaron ganar peso en la Costa Oeste y centrar la campaña en la política exterior. Para ello nominaron a Richard Nixon, el primer vicepresidente en ser candidato a la presidencia en cien años, y a Henry Cabot Lodge hijo, otro patricio de Massachusetts, de segundo.

A los politólogos nos gusta pensar que la historia de los países puede explicarse por motivos estructurales e indicadores sociales. Hablamos de los motivos de que las cosas fueran en un sentido y no en otro, de sobre cómo el peso de la demografía o de las fracturas y estrategias electorales deciden una votación. Las elecciones presidenciales de 1960 son el recordatorio perfecto de que a veces las teorías no bastan y la historia realmente cambia según cae la moneda.

Los resultados fueron increíblemente ajustados, con Kennedy ganando el voto popular por menos de dos décimas. Es muy posible, de hecho, que Nixon fuera el ganador real de esos comicios. La victoria de Kennedy en Illinois fue como mínimo sospechosa (especialmente en Chicago, una ciudad controlada por una máquina demócrata), y en Texas, donde el recuento tuvo un número considerable de rarezas y fenómenos inusuales no del todo sorprendentes sabiendo cómo Johnson había ganado su escaño en 1952.

Fuera o no la victoria de Kennedy limpia, lo cierto es que cuando unas elecciones son tan ajustadas es muy fácil sobredeterminar sus causas. Cualquier evento, decisión, debate, declaración o discurso capaz de mover el voto un par de décimas basta para «explicar» el resultado, así que todos los

errores, deslices o pifias del candidato perdedor son motivo suficiente, por sí mismos, para explicar su derrota. La parte más interesante del relato, y la más relevante para la historia que queremos contar, es por qué fueron unos comicios tan igualados, capaces de dividir el país en dos bloques prácticamente idénticos, y las consecuencias de que uno de esos dos bloques se impusiera.

La campaña de 1960 fue, en muchos aspectos, bastante reconocible dentro de los parámetros del New Deal. Tanto Kennedy como Nixon deseaban aumentar el gasto en educación, crear un sistema de sanidad pública para mayores de sesenta y cinco años, invertir en infraestructuras y luchar contra la amenaza comunista. Kennedy quería gastar más dinero, Nixon quería alcanzar los mismos objetivos, pero con programas algo menos generosos. Gran parte de la conversación se centró en quién tenía la experiencia necesaria para ocupar el cargo, a pesar de que ambos candidatos habían llegado al Congreso el mismo año (1947).

De lo que hablaron menos durante la campaña fue de derechos civiles. Ambos candidatos intentaron dar con la fórmula que les permitiera cortejar el voto afroamericano, de creciente importancia tanto en el norte (por la gran migración) como (pronto crucial) en el sur (según las leyes de derechos civiles entraban en vigor), sin alienar al voto blanco en la vieja Confederación.

Durante la segunda mitad de los cincuenta, Nixon se había ganado la reputación de ser alguien que apoyaba con firmeza los derechos civiles, y fue el miembro de la administración Eisenhower que más trabajó para aprobar las leyes de 1957 y 1960. Martin Luther King Jr. tenía buena relación con él (aunque dudaba de su sinceridad); muchos líderes afroamericanos, incluyendo a Martin Luther King Sr. y Jackie Robinson, le apoyaron en las presidenciales. A instancias del propio Nixon, el programa electoral del Partido Republicano en derechos civiles era en esencia idéntico al del Partido

Demócrata, y apostaba decididamente por expandir y reforzar las leyes ya aprobadas.

Kennedy, mientras tanto, apenas había hecho nada relevante en este tema antes de las elecciones. Era bien conocida su tendencia a intentar contentar y tener buenas relaciones con los senadores sureños más reaccionarios de su partido. En los debates legislativos previos a la ley de 1957, Kennedy se puso de perfil, evitando hablar demasiado a favor de la normativa, a menudo secundando lo que decían sus colegas más reaccionarios. Los líderes afroamericanos tenían serias dudas sobre sus convicciones e ideas, que no hicieron más que acrecentarse cuando escogió a un sureño como Lyndon Johnson como potencial vicepresidente. A pesar de que Johnson era quien había trabajado para aprobar esas leyes, para muchos era también el responsable de que fueran debilitadas y vaciadas de contenido antes de su aprobación.

A principios de 1960, entonces, Nixon y los republicanos tenían opciones de capitalizar el movimiento de los derechos civiles que estaba fracturando a los demócratas, e intentaron atraer su voto. En última instancia, sin embargo, todo apunta a que pecaron de timidez, careciendo de suficiente convicción sobre su programa, y, en última instancia, de cierta torpeza política.

El 19 de octubre de 1960, Martin Luther King Jr. participó en una sentada en unos grandes almacenes de Atlanta, Georgia. La policía le detuvo, junto con un puñado de manifestantes que fueron puestos en libertad a los pocos días. King, sin embargo, estaba en libertad condicional por otra protesta, y el inevitable juez racista sureño le sentenció a cuatro meses de cárcel.

A pesar de su relación con King, Nixon rechazó hacer declaraciones, incluso cuando algunos activistas le pidieran en persona que lo hiciera. Kennedy, sin embargo, llamó de inmediato por teléfono a la esposa de King y envió a su hermano Robert a presionar a la fiscalía para que lo liberaran. En una maniobra política que (como todo lo relacionado con Kennedy) ha

cobrado rasgos de leyenda, la campaña demócrata imprimió y distribuyó dos millones de panfletos en iglesias negras de todo el país explicando la historia. King Sr., emocionado, decidió declarar su apoyo a JFK en el último momento, dándole una ventaja decisiva en el voto afroamericano y con ello la victoria en las urnas.

Es una historia interesante, pero, como todo lo que rodea la elección de 1960 y a los Kennedy, tiene algo de fantasía heroica. Para empezar, no hay demasiados sondeos fiables de voto por raza en esa época, pero todo parece indicar que los demócratas se habían ganado la lealtad del voto afroamericano bastante antes, empezando con Roosevelt y consolidándolo con Truman en 1948. Eisenhower consiguió recuperar bastante terreno y alcanzó un 39 % de apoyo en 1956. Nixon, según los sondeos, se quedó en el 32 %, un margen suficiente para que fuera decisivo en el resultado final.[8]

El problema, claro está, es que en unas elecciones tan ajustadas esta anécdota es tan decisiva como cualquier otra, de los célebres debates televisados a un par de metidas de pata de Cabot Lodge hablando sobre *negroes*, o al hecho de que la mujer del inmensamente popular Eisenhower se opusiera a que hiciera demasiados actos de campaña, temerosa por su estado de salud. Kennedy, por supuesto, se gastó mucho más dinero que Nixon, así que pudo hacer cosas como imprimir millones de panfletos.

Tras perder las elecciones, Nixon no abandonó la política. En 1962 se presentó a las elecciones a gobernador de California, con la intención de utilizar el cargo como trampolín para un segundo intento a la presidencia. Volvió a perder. En una épica conferencia de prensa de despedida donde habló indignado de lo mal que lo trataban los medios («you won't have Nixon to kick around anymore»), anunció que abandonaba la escena política para nunca volver.

Más o menos.

La revolución de Lyndon B. Johnson

Fuera por el motivo que fuera, las elecciones terminaron con los demócratas en el poder. A Nixon volveremos a verle de aquí a unos años, esta vez en una campaña presidencial exitosa. Kennedy, mientras tanto, fue un presidente que habló mucho pero que hizo relativamente poco en materia de derechos civiles, siempre más interesado en política exterior que en asuntos domésticos.

La prioridad de la Administración Kennedy, en palabras de su hermano, era «mantener al presidente fuera de este lío de derechos civiles». En privado, Kennedy era muy crítico con las protestas, que veía contraproducentes. No fue hasta mediados de 1963 cuando finalmente despertó de su letargo y propuso un nuevo paquete legislativo, que no tardó en encallarse en el Senado. El Congreso no empezaría a tramitar la ley hasta después de que fuera asesinado en Dallas, con Johnson ocupando la presidencia.

Fue otro golpe de suerte. Lyndon B. Johnson era de la clase de presidente que no sólo tenía mucha experiencia en sacar cosas adelante en el Senado (no como Kennedy, que solía esconderse), sino que quería usar su poder para aprobar leyes. Utilizando su enorme talento como legislador, su capacidad de persuasión y su inusitada mala leche, Johnson rompió el bloqueo sureño en la Cámara de Representantes, primero, evitando el debate y votación en comité en esa cámara con una maniobra legislativa arcana (una *discharge petition*, táctica que hacía décadas que nadie usaba) y, segundo, peleando por los votos necesarios hasta levantar un *filibuster* de cincuenta y cuatro días en el Senado.

Desde el punto de vista político, la Ley de Derechos Civiles de 1964 representaba a la vez el final de todo un sistema de gobierno y una apuesta política arriesgada. Los demócratas esencialmente sacrificaron el voto blanco

del sur a cambio de la lealtad incondicional del voto afroamericano en las décadas venideras. Si podían cimentar el apoyo de muchos votantes republicanos moderados norteños, que al fin podían votar a los demócratas sin sentir remordimientos, eso les bastaría para ganar elecciones.

Esta apuesta política fue puesta a prueba ese mismo año. En las elecciones presidenciales de 1964, Johnson se presentó como el candidato de los derechos civiles y defensor de una expansión dramática del estado de bienestar americano. Los republicanos nominaron candidato a Barry Goldwater, un senador por Arizona ultraconservador en lo económico que había votado en contra de la Ley de Derechos Civiles alegando que «no se podía legislar sobre moralidad».[9] Johnson lo barrió del mapa, derrotándolo por 61-39. Goldwater sólo ganó en seis estados: Arizona, por un punto escaso, y cinco estados de la Confederación, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur, Luisiana y Georgia.

Con enormes mayorías legislativas en el saco, Johnson cumplió lo prometido y sacó adelante tanto la Voting Rights Act —la ley que ponía punto final a los regímenes autoritarios del sur— como una enorme expansión de programas contra la pobreza, sanidad para mayores de sesenta y cinco años y grandes mejoras en el sistema de seguridad social.

Lo que no había prometido fue la otra herencia de Kennedy, Vietnam. Johnson llegó a la presidencia con dieciséis mil tropas americanas en Indochina; al final de su mandato, había más de medio millón. La guerra se convirtió en un cenagal imposible sin objetivos claros que destruyó por completo la credibilidad del presidente. Enfermo, detestado por su partido y con varios candidatos viables anunciando que iban a presentarse a las primarias (entre ellos, Robert Kennedy), en marzo de 1968 anunció que no se presentaría a la reelección.

Johnson resultó no andar equivocado en eso de ser un hombre con prisas. El día que dejó la Casa Blanca recuperó su viejo hábito por los cigarrillos,

que había abandonado tras sufrir un infarto en 1955. Semiexiliado en Texas, jubilado y con problemas de salud constantes, murió en 1973 a los sesenta y cuatro años.

El triunfo de Nixon y la estrategia sureña del Partido Republicano

Es difícil hacerse una idea de la locura que fue el periodo 1965-1968 en Estados Unidos. Es una época de asesinatos políticos, disturbios raciales en ciudades con decenas de muertos y cientos de edificios en llamas, una guerra inacabable en el Sudeste Asiático, protestas antibélicas que acaban con la Guardia Nacional tiroteando estudiantes, panteras negras tomando edificios, Charles Manson, una escalada de la tasa de crimen nunca vista en el país, hippies, liberación sexual, drogas, el Verano del Amor, reacciones furibundas contras las leyes de derechos civiles en todo el país (no sólo en el sur; Chicago, Boston y Detroit tuvieron conflictos brutales), terrorismo de todos los colores, múltiples asesinos en serie y un presidente que parecía mentir más que hablar. El proyecto político demócrata, el de una sociedad integrada, un estado de bienestar fuerte y una América moderna y progresista, parecía haber dado paso a caos, protestas y convulsiones constantes.

Gran parte de todo este ruido era, por supuesto, el resultado de los cambios sociales que estaba sufriendo todo Occidente en este periodo. Muchos de los excesos más divertidos y extravagantes no eran consecuencia de un colapso moral, sino de la enorme vitalidad de la generación de los *baby boomer*s (en Estados Unidos, nacidos entre 1946 y 1964), que justo empezaban la edad adulta. Se encontraron el país en medio de una prosperidad económica nunca vista, la explosión creativa de la integración de la cultura y la música negras al *mainstream* (léase rock and roll), y la «invención», por llamarlo de algún

modo, de la cultura juvenil de masas. Las convulsiones derivadas del final de la segregación racial eran también casi inevitables. Lo único directamente atribuible a Johnson eran las protestas contra Vietnam y la espectacular torpeza del Partido Demócrata en su respuesta a la escalada militar del presidente.

Pero el descontento estaba allí, listo para ser movilizado. Entre todo este follón, este caos, esta serie inaudita de cambios traumáticos, revoluciones sociales y locura psicodélica, Richard Nixon resurgió de sus cenizas.

Las elecciones de 1968 son el reverso de la gran victoria demócrata cuatro años antes. El delicado equilibrio de Lyndon Johnson de moderados norteños, progresistas y minorías se estaba agrietando, y la increíble impopularidad del presidente no hacía más que empeorar las cosas para el Partido Demócrata. El candidato que asumió la difícil tarea de mantener el edificio en pie fue Hubert Humphrey, ese alcalde de Minneapolis que había saltado a la fama en la Convención Nacional Demócrata de 1948 hablando de derechos civiles. Progresista del ala liberal del partido, Humphrey fue senador antes de ser escogido vicepresidente en 1964. Su candidatura fue una carrera de obstáculos difícil de creer en la que le pasó casi de todo y que, extrañamente, estuvo a punto de ganar.

Los problemas de Humphrey empezaron en el sur, donde George Wallace, el marido de la gobernadora demócrata de Alabama,[10] recuperó la vieja tradición *dixiecrat* de dividir el voto del partido. Wallace se presentó con una candidatura independiente defendiendo los «derechos de los estados», mientras insistía en que él era segregacionista, no racista, en una pirueta verbal que realmente no engañaba a nadie. Para reforzar su imagen de mano dura, Wallace escogió a Curtis LeMay, el general de la USAF responsable de los bombardeos incendiarios contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de Wallace no era ganar la presidencia, sino imponerse

en suficientes estados para denegar una mayoría en el Colegio Electoral a los otros dos candidatos.

Esto creaba un problema obvio para Humphrey, que no iba a poder contar o competir en el sur de forma efectiva. También dejaba a Richard Nixon en una posición incómoda: tenía que conseguir ganar en los estados del sur, donde Barry Goldwater había demostrado que el GOP podía competir, pero sin alienar a votantes moderados del resto del país, donde Goldwater fracasó estrepitosamente. Wallace reducía muchísimo ese potencial granero de votos sureños, pero Nixon no podía permitirse perder toda la región y debía competir también allí con un mensaje atractivo. El problema era que un mensaje que funcionara en el sur corría el peligro de generar rechazo entre los votantes moderados del norte. Si era *demasiado* moderado, Nixon también corría el riesgo de que Wallace le quitara muchos votos por la derecha en el Medio Oeste y la Costa Oeste, abriendo la puerta a que Humphrey pudiera ganar estados por mayoría simple al dividirse el electorado más conservador. La *southern strategy* de Nixon, por lo tanto, debía cumplir con dos objetivos: necesitaba un mensaje que a la vez señalara su escepticismo hacia los derechos civiles en los estados sureños pero que fuera atractivo para votantes moderados en el norte. Su solución fue un ejercicio de doble lenguaje tan bien calibrado que el GOP nunca ha dejado de usarlo desde entonces: apelar al resentimiento.

La estructura del mensaje es bastante simple, y seguramente os resulte familiar. Los demócratas, las élites intelectuales, la izquierda biempensante, los *ivyleaguers* o los *liberales* no entienden los problemas a los que se enfrenta la gente común. Hablan de feminismo, racismo, ecologismo y misticismo, no de problemas concretos; quieren imponer sus valores y cambiar como vivimos. Ellos creen que saben lo que te conviene, que entienden lo que es mejor para tu comunidad mejor que tú. Por su culpa, la ley y el orden de este país se ha caído a pedazos, el caos, el

antiamericanismo, los disturbios y las protestas asolan nuestras ciudades, y no hacen nada para remediarlo.

Ellos, además, te miran por encima del hombro. Creen que eres tonto, que no eres más que un paleto inadaptado del sur o del Medio Oeste que no es capaz de entender los derechos civiles. Piensan que eres un racista, un antiguo, alguien con prejuicios, que se preocupa de cosas pasadas como la bandera, ir a la iglesia y respetar las leyes. Las élites progresistas han decidido que ahora debemos tratar bien a los criminales, aplaudir a los que protestan, dejar que nuestras hijas quemen sujetadores y que los hippies jueguen al pacifismo. Nuestros hijos, como buenos patriotas, van a morir a Vietnam por su país y son recibidos con insultos. Mientras tanto nosotros trabajamos como locos, sudamos para llegar a fin de mes y pagamos impuestos sin rechistar.

Pero Richard Nixon entiende por qué estás indignado. Richard Nixon, ese tipo malhumorado, cerril y tozudo hasta la extenuación, no es de una de esas élites. Es un tipo que creció pobre, trabajó duro y se abrió camino, y lucha por ti. Las élites lo odian porque dice la verdad y porque no es uno de ellos. Nixon, como tú, cree que en este país es necesario que vuelva un poco de orden, mano dura y menos tonterías progres e intelectuales, y poner en redil a estas minorías liberales que han llevado el país al caos.

Esa gente. Las élites. El mensaje de Nixon nunca era abiertamente racista, belicista o machista; era uno de resentimiento contra aquellos que querían imponer «sus ideas» sobre el país. Era una retórica que daba permiso a los votantes para ser reaccionarios. El resentimiento en ese discurso de Checkers fue el primer borrador de lo que sería el manual populista de Nixon en 1968 y (especialmente) 1972, y será el prototipo de todo lo que vendrá después en política americana.

La estrategia de Nixon fue admirablemente reforzada por el propio Partido Demócrata ese verano. La Convención de Chicago, en teoría el lugar para

mostrar la unidad del partido y la sensatez de su candidato (progresista pero de la vieja escuela; propaz pero no prorrendición), se vio rodeada de protestas de todo pelaje. Gracias a la excepcional torpeza de Richard Daley, el alcalde de la ciudad, las manifestaciones acabaron degenerando en violentos disturbios. La nominación de Humphrey, el candidato del *establishment* del partido, la persona sensata y moderada, se vio asociada a imágenes de caos. A principios de septiembre, Nixon le sacaba más de diez puntos en todos los sondeos.

La victoria republicana parecía inevitable, pero en octubre Humphrey empezó a recuperar terreno. Fue a por Wallace, llamándole lo que era (un racista), y aprovechó el enorme poder movilizador de los sindicatos (aún muy potentes en esa época) para evitar que el voto obrero se fuera hacia él. Curtis LeMay además tuvo el detalle de sugerir el uso de armas nucleares tácticas en Vietnam, recordando a todo el mundo que Wallace no era alguien a quien confiarle nada. Finalmente, el último fin de semana antes de las elecciones, Lyndon Johnson anunció el cese de los bombardeos en Vietnam y un posible acuerdo de paz. Humphrey podía ganar.

El acuerdo de paz, no obstante, no llegó nunca. En una de las maniobras políticas más marrulleras de la historia del país, Nixon pidió en secreto a los vietnamitas que no aceptaran el acuerdo, y prometió ofrecerles uno mejor una vez presidente. Un tal Henry Kissinger, que trabajaba como asesor externo de las negociaciones, había informado a la campaña de Nixon sobre un posible tratado, así que sabotearon las conversaciones. La fama de Nixon de ser un político sin escrúpulos, capaz de todo con tal de ganar, siempre fue bien merecida.

El resultado final de las elecciones de 1968 fue, de nuevo, notoriamente ajustado. Nixon sacó un 43,4 % del voto por el 42,7 % de Humphrey; George Wallace se quedó en un 13,5 %. Aunque la victoria del GOP en el Colegio Electoral fue considerable (301 electores por 191 de Humphrey y 46 de

Wallace),[11] un puñado de votos en California (donde Nixon ganó por tres puntos, con Wallace rozando el 7 %) o Illinois (mismo margen, Wallace con un 8 %) habrían dejado al candidato republicano sin la mayoría necesaria y el resultado final en manos de los *dixiecrats*.

Como sucedió en 1960 y pasa en todas las elecciones decididas por un margen minúsculo de votos, es fácil atribuir el resultado final a cualquier evento o estrategia o decisión de última hora, porque todo estaba dentro de ese margen decisivo. A diferencia de 1960, sin embargo, la victoria de Nixon no parece ser uno de esos momentos en que la historia cambia.

El GOP, con un candidato menos hábil, podría haber perdido en 1968, pero habría sido un retraso más que una derrota. George Wallace fue el último *dixiecrat* que hizo campaña por la presidencia. El Partido Republicano había dado con el mensaje para apelar al voto blanco conservador sureño sin alienar a sus bases moderadas del norte. La coalición entre conservadores, derecha religiosa, gente que no-es-racista-pero, empresarios y halcones en política exterior había dividido su voto entre dos candidatos durante este ciclo, pero esta división no se volvería a repetir. Ese fue el análisis de la propia Casa Blanca; Kevin Phillips, un asesor del presidente, lo describió en detalle en el libro *The Emerging Republican Majority*, uno de los raros ejercicios de futurología política escritos por un político que han envejecido increíblemente bien.[12]

El hombre que construyó esta coalición fue Richard Nixon. El resentimiento contra *el otro* (inmigrantes, progres, pobres, medios de comunicación) es el núcleo fundacional del populismo conservador de las cinco últimas décadas. Nixon fue quien lo envolvió en un mensaje antielitista, operacionalizando el resentimiento como un arma política. Todo el movimiento conservador americano hasta nuestros días está construido sobre estos cimientos. La gloria se la llevó Ronald Reagan (que había llegado a gobernador de California en 1966 siguiendo un modelo de campaña

nixoniano), pero el arquitecto fue ese tipo hosco, medio calvo y malhumorado que llegó a la Casa Blanca por pura obstinación.

La «mayoría silenciosa» y el legado de Nixon

El 3 de noviembre de 1969 Nixon daría con el giro retórico que definiría su estrategia tanto para él como para políticos venideros. En un discurso televisado explicando su estrategia en Vietnam (donde el hombre tuvo la jeta de declararse pacifista mientras cometía crímenes de guerra en Camboya y Laos), el ya presidente hizo referencia a las protestas, los gritos, los disturbios, el caos de aquellos que se oponían a la intervención americana en Vietnam. Habló sobre cómo las manifestaciones dominaban las portadas, las columnas de opinión, los telediarios. Pero él, como presidente, no podía sólo atender a las protestas; su deber era trabajar para la «mayoría silenciosa» que ansiaba una paz honorable en Vietnam y no una rendición incondicional de consecuencias impredecibles para Estados Unidos.

Implícito en el discurso estaba el resentimiento feroz, atizado repetidamente, de esta «mayoría silenciosa» hacia esos columnistas, intelectuales y sabios que estaban tolerando todo aquel caos. Era la destilación de su estrategia: decirles a sus votantes más reaccionarios que no estaban solos, por muy asediados que se sintieran. Las feministas, los antirracistas, los pacifistas, los progres son ruidosos, protestan mucho y controlan la narrativa y los medios de comunicación. Pero el país es nuestro. *Nosotros* somos la mayoría.

Este mensaje, junto con un Partido Demócrata sumido en disputas internas, fue tremendamente efectivo. Sin George Wallace ni ningún otro *dixiecrat* en la papeleta, hablando a ese centro que se sentía victimizado y ninguneado por las élites, Richard Nixon derrotó a George McGovern por 23 puntos de

diferencia (61-38) en las presidenciales de 1972. El Partido Republicano había dado con la estrategia para demoler la coalición del New Deal.

Trump, un político con un instinto político agudo en extremo, no suele citar con frecuencia a presidentes pasados, en parte porque tiene una idea demasiado elevada de sí mismo como para rebajarse a la altura de sus predecesores. Durante la campaña de 2020, sin embargo, se refirió en más de una ocasión a la idea de «mayoría silenciosa» de Nixon, utilizando exactamente la misma clase de discurso. Trump, por supuesto, nunca tuvo la sutileza de Milhous; él lo del resentimiento lo dice en voz alta, sin disfraces retóricos. Está claro, no obstante, dónde encontró su mensaje.

Irónicamente, el legado de Richard Nixon en políticas públicas no es el de un extremista de derechas. Durante su presidencia aprobó la creación de la Agencia de Protección Ambiental, sacó a Estados Unidos del patrón oro, lideró una extraordinaria distensión en la Guerra Fría con China y llegó a proponer un impuesto negativo sobre la renta (en esencia, una renta básica) y una ley de sanidad pública universal.[13]

Rick Perlstein, en su excepcional *Nixonland*, señala que a Nixon la política económica siempre le importó un comino. Era una persona increíblemente amoral y un racista furibundo en privado, alguien al que la política social y económica le aburría de forma intensa. A él le interesaba la política exterior, la gran estrategia; lo de leyes, sanidad, educación y hospitales le parecía una zafiedad. Esto hacía de Nixon un tipo con escasas convicciones morales y sin pasión por ayudar a sus conciudadanos, pero la imperiosa necesidad de ganar elecciones para poder jugar a hombre de Estado lo convertía también en un político tremendamente flexible y pragmático. Nixon haría lo que fuese para ganar elecciones y, si eso implicaba abrazar el ecologismo o apostar por los derechos civiles, lo hacía y punto.

La gran ironía de Richard Nixon sigue siendo su caída. El escándalo del Watergate empieza cuando un pelotón de ladrones incompetentes se mete en

el cuartel general del Partido Demócrata para pinchar los teléfonos y descubrir su estrategia de campaña. El presidente, en sus peores sondeos poco antes de las elecciones, estaba dieciséis puntos por encima de McGovern; era poco menos que imposible que perdiera esas elecciones. Pero se colaron en la sede demócrata, posiblemente bajo órdenes directas del presidente, y crearon un cenagal que acabó destruyendo su reputación y su carrera política. Es un escándalo tan estúpido, ridículo e incomprensible como para cuestionarse qué demonios estaban pensando. Aún hoy hay voces que insisten en que nunca sabremos por qué lo hicieron.

Mi intuición me dice que, como casi siempre en política, cuando alguien está cometiendo una estupidez incomprensible, lo más habitual es que lo haga porque es realmente así de estúpido, inseguro o paranoico. Nixon no era lo primero, pero los otros dos adjetivos desde luego que le sentaban bien.

PARÉNTESIS: UCRONÍAS NIXONIANAS

Hay toda una historia alternativa de Estados Unidos en la que Nixon es quien llega a la presidencia en 1960 en vez de Kennedy.

En política exterior, mi sensación es que Nixon, aun con sus paranoias, era una persona mucho más hábil que Kennedy. Nixon nunca habría consentido una chapuza como la invasión de la bahía de Cochinos, no habría provocado a los soviéticos en Berlín ni instalado misiles en Turquía sin motivo. La crisis de los misiles cubanos nunca habría sucedido. Nixon era también mucho más realista en la capacidad de Estados Unidos de arreglar problemas con marines, y dudo mucho que metiera al país en el cenagal de Vietnam. La histórica distensión con China también habría sucedido mucho antes. Aunque Nixon era un cretino sin escrúpulos en política exterior, era muy inteligente y realista, un digno heredero de Eisenhower.

La ucronía se vuelve más interesante al hablar de derechos civiles. Dado que a Nixon le importaba más ganar elecciones que programas concretos, su hipotética presidencia en 1960 se habría encontrado con una opinión pública ansiosa de reformas y a un presidente dispuesto a llevarlas a cabo. Nixon ya tenía cierta reputación en apoyo de esta causa; por muy racista que fuera, la habría visto como una oportunidad política, intentando sacar esa legislación adelante con la ayuda de un Johnson que habría seguido en el Senado.

Por supuesto, Nixon no tenía la honda empatía de Johnson ni su fervor moral,[14] así que las leyes de derechos civiles de la era Nixon habrían sido más débiles o avanzado más lentamente que bajo Johnson. Es muy probable también que un hipotético programa de medidas sociales nixoniano fuera menos ambicioso que la Great Society. Aun así, Nixon era un republicano pre-Goldwater y pre-Reagan en lo económico, un keynesiano convencido formado en la América del New Deal. En vista de lo ambiciosos que fueron sus planes en los setenta (incluyendo una renta básica universal), sus propuestas en los sesenta no habrían sido pequeñas, y más en un país con el fervor cívico de Martin Luther King de fondo, una economía esplendorosa y sin el sumidero de Vietnam.

Imaginad, entonces, Estados Unidos en 1964 con una ley de derechos civiles aprobada por un presidente republicano, una expansión significativa del estado de bienestar para complementarla y sin Vietnam. Nixon seguramente estaría haciendo trastadas amorales y corruptas en alguna parte (montando golpes de Estado por América Latina, etcétera), pero el realineamiento político de 1968 en adelante, que él mismo impulsó, habría sido imposible. La coalición republicana de este 1964 alternativo pasa a ser negros del sur y moderados en el norte; el Partido Demócrata sigue estando formado por racistas blancos en el sur y populistas en el norte.

Paradójicamente, una victoria conservadora en 1960 podría haber acabado moviendo a Estados Unidos hacia la izquierda, y el realineamiento de los

setenta nunca habría sucedido.

Por supuesto, toda esta explicación es discutible; la realidad es mucho más complicada que cualquier ucronía. Hacer predicciones sobre el pasado es igual o más difícil que hacerlas sobre el presente. Nixon es un personaje errático e irascible, y Dios sabe si habría visto a King como una oportunidad o como una amenaza. Pero siempre me ha fascinado la idea de que, en 1960, unos pocos miles de votos podrían haber cambiado la trayectoria política del país por completo.

Además, por si no lo habéis notado, no aguanto el mito de Kennedy.

5

Partidos políticos, sindicatos y leyes electorales

Si hay algo que distingue a Richard Nixon de otros presidentes es que su paso por el cargo dejó una auténtica montaña de cambios políticos e institucionales con un impacto colosal en el sistema político. Muchos de esos cambios fueron deliberados; algunos fueron accidentales. Todos acabaron por dibujar el sistema político americano en su configuración actual.

Así que antes de hablar de Carter, Reagan, Clinton y el largo camino hacia Trump, vale la pena desviarse un segundo y hablar de instituciones, o, más concretamente, de las instituciones que definen la competencia electoral en el país. Esto quiere decir que voy a omitir las reformas económicas de Nixon, a pesar de que la respuesta a la crisis del petróleo de su Administración fue errática y a menudo contraproducente. Los americanos tienden a asociar al pobre Jimmy Carter con la «era del malestar» en vez de a sus antecesores republicanos, a pesar de que tuvo mejores cifras económicas. Ser recordado como el presidente del Watergate ha hecho olvidar los fracasos de Nixon en política doméstica.

Hay una reforma económica de la era Nixon que merece ser explicada con cierto detalle, sin embargo, porque tuvo (y sigue teniendo) enormes consecuencias políticas: los sindicatos.

ATACANDO EL PODER SINDICAL

Cuando Richard Nixon alcanzó la presidencia en 1968, cerca de un 30 % de los trabajadores de Estados Unidos en el sector privado formaban parte de un sindicato.[1] Esto representaba una caída significativa desde el pico de afiliación en 1954 (cerca de un 36 %), pero modesta desde principios de los sesenta (apenas dos puntos). El sistema que regía la organización obrera en el país no había sufrido alteraciones relevantes desde la aprobación de la Taft-Harley en 1947. En el centro seguíamos teniendo la NLRB (National Labor Relations Board) como la agencia federal que dirimía las disputas entre patronos y sindicatos.

Los efectos de la T-H fueron sobre todo regionales. Las cláusulas de *right to work* fueron implementadas con entusiasmo en los estados sureños, haciendo que el porcentaje de sindicalización fuera mucho más alto en sitios como Indiana (40 %), Michigan (38 %), Ohio (37 %) o Pensilvania (36 %) que en Carolina del Sur (8 %), Texas (13 %) o Georgia (14 %).[2] Este era uno de los motivos, por cierto, de los bajos salarios en la Confederación comparados con el resto del país.

El movimiento obrero siempre había jugado un papel clave en la coalición del New Deal. Su capacidad de movilizar voluntarios en campañas electorales, hacer puerta a puerta[3] y persuadir a sus miembros había sido clave en la fortaleza demócrata en el norte. Richard Nixon no era un ideólogo antisindical y, de hecho, apenas criticó a los sindicatos en público. En su campaña por atraer a la «mayoría silenciosa» siempre entendió que uno de los grupos fundamentales eran los trabajadores blancos sin formación universitaria, es decir, el grueso de la mano de obra afiliada. Estos trabajadores apreciaban a sus sindicatos, así que cualquier guerra abierta contra ellos corría el riesgo de ser contraproducente. De modo que,

como buen político que era, Nixon buscó una forma de debilitarlos indirectamente, sin tener que sacar adelante una reforma legal en el Congreso.

Su estrategia fue esta tradición recurrente americana que consiste en «reinterpretar» las reglas del juego. Los cinco miembros de la NLRB eran nombrados por el presidente. Nixon nominó a cinco republicanos para que vaciaran de contenido la agencia. Al frente colocó a Edward Miller, un abogado que decía abiertamente que la NLRB era demasiado «protrabajador».

La «nueva» NLRB se puso de inmediato a revisar las reglas sindicales. Empezaron con cambios en el sistema para sindicarse, haciendo mucho más difícil ganar votaciones. En vez de permitir la recogida de firmas (*card check*) para establecer el porcentaje de trabajadores que querían representación, serían necesarias elecciones con voto secreto y urnas. Eso permitía a las empresas montar campañas de «persuasión» interna con «reuniones informativas» obligatorias de lo que «podía suceder» (caos, cierre de la empresa, dolor) si aparecía un sindicato. La NLRB también cambió las reglas sobre qué comunicaciones y mensajes eran aceptables durante este proceso para los sindicatos, restringiendo su capacidad para hacer campaña.

De forma simultánea, la NLRB dejó de sancionar a las empresas que vulneraban derechos sindicales. En teoría era completamente ilegal despedir a un trabajador que estaba intentando montar un sindicato, y los empresarios tienen límites estrictos y reglados sobre qué pueden hacer en sus campañas de «educación antisindical». En la práctica, la agencia dejó de prestar cualquier atención, y cuando actuaba las penalizaciones por violar esos derechos y regulaciones eran irrisorias. Las empresas empezaron a disciplinar cualquier intento de movilización sin remordimiento alguno a

sabiendas de que el único castigo sería una multa que no se haría efectiva en años y cuyo coste sería mucho menor que toda subida de sueldo que debieran negociar con sus empleados. Desde entonces, en Estados Unidos hay una industria entera de consultores y abogados que se ganan la vida ayudando a compañías a ahogar cualquier intentona de sindicalización. Es gente que conoce las tácticas, las estrategias y los límites legales en detalle y que los aplican con energía.

La NLRB era, de origen, una agencia que debía defender los derechos de los trabajadores en disputas laborales, así que, cuando una empresa hacía alguna barbaridad, era la NLRB la que representaba al empleado. Nixon primero, y Reagan después, simplemente atrofiaron la agencia hasta hacerla inoperante.

Los resultados fueron inmediatos. Ganar una votación para formar un sindicato se hizo mucho más difícil. Durante la década de los cincuenta, los sindicatos se imponían en estos comicios en dos tercios de las empresas en las que lo intentaban. En los años setenta, esa cifra había caído a un 51 %. El número de empresas donde había votaciones disminuyó también de manera dramática, pasando de más de 7.000 en los años sesenta a 3.782 en los ochenta. La cifra de trabajadores que ganaron representación pasó de más de 285.000 en los sesenta a menos de 90.000 en los ochenta.[4]

La afiliación también se desplomó. En 1976, cuando los republicanos perdieron la Casa Blanca, sólo un 21 % de trabajadores en el sector privado tenían representación sindical. Las cifras se estabilizaron ligeramente bajo Carter (apenas bajan un punto) y se hundieron por completo bajo Reagan y Bush. En 1992, sólo un 11 % de los trabajadores estaban sindicados. Con la NLRB totalmente atrofiada e incapaz de hacer su trabajo, la cifra ha seguido cayendo hasta nuestros días, y en 2020 rondaba el 6 %. Ni Clinton ni Obama se preocuparon de resucitar la agencia.

Las consecuencias políticas de estas cifras han sido enormes. La caída de los sindicatos ha venido acompañada por un enorme aumento de la desigualdad. Los salarios de los trabajadores, que durante décadas aumentaron al mismo ritmo que la productividad, empezaron a quedar por detrás de esta, mientras los salarios de ejecutivos y directores generales se disparaban. El problema se vio acentuado por la deslocalización de empresas del norte al sur del país, con leyes estatales muy hostiles a sindicatos y trabajadores.

Al hablar de elecciones, los sindicatos han dejado de ser organizaciones bien financiadas y con millones de miembros listos para ser movilizados durante campañas electorales. Aunque desde la T-H no podían hacer donaciones a los candidatos directamente, podían invertir enormes cantidades de dinero en comités independientes de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), así como dar dinero directamente al Partido Demócrata. La destrucción del poder sindical limitó en gran medida este recurso, forzando a los demócratas a tener que invertir mucho tiempo y capital en atraer nuevos donantes.

La composición de los sindicatos en sí también ha cambiado. En 2022, sólo un 6 % de los trabajadores en la empresa privada estaban afiliados. En el sector público, sin embargo, ese porcentaje asciende al 33 %.[5] Más o menos la mitad de los 14,3 millones de empleados de Estados Unidos sindicados trabajan para algún Gobierno o Administración. Esto crea todo tipo de distorsiones e incentivos contradictorios en el Partido Demócrata, ya que un sindicato lleno de funcionarios no es exactamente un sindicato de clase. Si a eso le sumamos que la categoría profesional más sindicalizada es la policía, cuyas «hermandades» a menudo oscilan entre el matonismo reaccionario y la extorsión (siendo generosos con ellos), la debilidad sindical es aún mayor de lo que parece.

Finalmente, hay también un coste intangible que hará muy difícil revertir cualquier tendencia y reconstruir el movimiento obrero a medio plazo. Hace cincuenta años, casi todo el mundo en Estados Unidos o formaba parte o conocía a alguien que era miembro de un sindicato. Había una familiaridad con lo que hacían y representaban y con la idea de la negociación colectiva. Pero hoy un puesto de trabajo con representación sindical es muy inusual, y no hay apenas experiencia directa sobre qué implica trabajar con un *union contract*. En caso de que alguien quiera formar un sindicato, no hay apenas memoria colectiva sobre cómo hacerlo. Los sindicatos son tan débiles que con frecuencia no pueden ofrecer demasiada ayuda, y, por supuesto, las reglas de la era Nixon y Reagan siguen ahí, casi intactas. Dado que hay tan pocas elecciones sindicales, cualquier conato de organización de trabajadores se enfrentará a todo el peso de las cámaras de comercio, patronales y empresas que ayudarán a extinguirlo.

A pesar de todo, incluso hoy en día los trabajadores sindicados tienen un salario medio un 18 % mayor que aquellos sin representación. Los estados con más presencia sindical siguen estando, mayoritariamente, en el norte del país (Hawái, 22 %; Nueva York, 21 %). Los que menos siguen siendo más pobres, tienen salarios más bajos y están en el sur (Carolina del Norte, 1,7 %; Carolina del Sur, 2,8 %). Este patrón se repetirá, una y otra vez, en casi todos los indicadores sociales.

A Nixon, por cierto, no se le puede negar que tuviera sentido del humor. A principios de su mandato, su Administración desempolvó una iniciativa de Johnson llamada Plan Filadelfia, que establecía un sistema de discriminación positiva para trabajadores afroamericanos en proyectos de obras públicas federales. La idea era, por un lado, ganar puntos con las organizaciones de derechos civiles y, por otro, atraer las iras de los sindicatos, cuyos miembros eran casi todos blancos.

La maniobra consiguió que la NAACP y los sindicatos, dos de los pilares de la coalición demócrata, se vieran envueltos en constantes batallas legales durante años. El rencor entre ambos bloques fue tal que la AFL-CIO (la mayor confederación sindical) renunció a apoyar al candidato demócrata en 1972, alegando que el partido había sido tomado por «estudiantes y gente de los suburbios».[6]

Los partidos políticos

Si hay algo que los padres fundadores no tuvieron en cuenta cuando diseñaron la Constitución fueron los partidos políticos. El sistema institucional americano estaba construido sobre la idea de que las disputas políticas serían, en última instancia, entre instituciones, con cada uno de los poderes del Estado aportando una perspectiva diferente. Eso explica, en parte, el hecho de que el Senado fuera escogido por los estados con mandatos más largos que la Cámara de Representantes o el papel moderador de un presidente elegido a través del filtro del Colegio Electoral. Los conflictos iban a ser sobre todo territoriales, y las mayorías legislativas irían variando de un tema a otro, fruto de la opinión ilustrada de los congresistas, no de intereses faccionales.

Se trataba de la primera constitución de su clase en el mundo y no era una mala hipótesis de trabajo, pero era una impresión equivocada. En 1796 en el Congreso ya había dos partidos políticos diferenciados, los federalistas (bajo Alexander Hamilton) y los demócratas republicanos (bajo Thomas Jefferson),[7] con su red de periódicos, organización y campañas electorales planificadas.

El motivo era muy simple: para un legislador en el Congreso es *racional* formar parte de un partido político. Construir coaliciones lo suficientemente grandes para aprobar leyes es complicado; en una cámara legislativa con más de un centenar de miembros independientes necesitas hablar con decenas de personas, convencerlas de tu idea y, además, conseguir que le den prioridad como para que entre en la agenda. Los congresistas no tardaron en darse cuenta de que era posible formar clubes de legisladores con ideas políticas parecidas y acordar agendas comunes. Con ello conseguían aprobar algunas de sus propuestas a cambio de apoyar a sus compañeros de formación en otros temas. Una vez que un club de esta naturaleza aparece en escena, la estrategia racional de quienes tienen ideas distintas a las de los miembros de este es crear una alternativa. Al poco tiempo, tendremos dos o más partidos políticos disputándose la agenda, y serán estos los que acaben por organizar el debate.

La existencia de partidos organizados tiene a veces un difícil encaje en el sistema constitucional. En épocas de Gobierno dividido, cuando el control de la Presidencia y las dos cámaras del Congreso no está en manos de un mismo partido, Estados Unidos es muy propenso a sufrir bloqueos institucionales duraderos, ya que nadie tiene incentivos para dar una victoria al otro bando. La Cámara de Representantes y el Senado no dan voz a intereses distintos, sino que reflejan el mismo resultado electoral bajo dos reglas de votación diferentes. Incluso las relaciones entre la federación y los estados se ven influidas por qué partidos las controlan; los pleitos y demandas judiciales entre administraciones de colores distintos son constantes.

Estas distorsiones son relativamente manejables cuando los dos grandes partidos americanos (el sistema electoral de distritos uninominales acaba siempre reduciendo el sistema de partidos a dos) representan a coaliciones

radicalmente incoherentes. Como hemos visto en capítulos anteriores, cuando el republicano más moderado está a la izquierda del demócrata más conservador, es posible llegar a acuerdos que permitan legislar. En los años anteriores a la guerra civil, cuando norte y sur se alinearon en dos bloques irreconciliables divididos por la esclavitud, las instituciones se rompieron.

Una de las grandes aportaciones de Nixon y sus sucesores fue, precisamente, hacer que los partidos políticos americanos se volvieran coherentes, sin superposición ideológica alguna. No sólo eso: la disciplina del voto aumentó de forma considerable a partir de los noventa, hasta el punto de que los legisladores raramente votan en contra de su partido. Esto, como veremos luego, no tiene por qué ser la antesala de una catástrofe, pero sigue siendo un factor importante para explicar la persistente disfuncionalidad del sistema político americano en las últimas décadas.

¿Cómo funcionan los partidos políticos americanos?

Los partidos políticos en Estados Unidos tienen muy poco que ver con sus equivalentes europeos. En España, el Reino Unido o Alemania estamos acostumbrados a que el líder de un partido ocupe un cargo institucional (presidente, primer ministro, jefe de la oposición) y a que sea la cabeza visible de este. En su papel al mando de la organización, tiene una influencia considerable en quiénes serán los candidatos al Parlamento, y es la voz dominante al decidir el programa electoral y la estrategia de la formación.

Los partidos europeos suelen ser máquinas (relativamente) disciplinadas que más o menos se mueven según lo que dice su dirección. Incluso en elecciones subnacionales o locales, la ejecutiva central puede vetar o bloquear candidatos que no sean de su agrado. En el otro lado de la balanza,

los partidos suelen ser despiadados con sus dirigentes si creen que no están haciendo bien su trabajo. La mitad de los jefes de Gobierno en las democracias parlamentarias europeas no pierden su cargo en las urnas, sino porque su propio partido los echa o «persuade» para que no vuelvan a presentarse.

El modelo americano es diametralmente opuesto. Es cierto que hay dos organizaciones, por llamarlas de algún modo, que denominamos «partidos», con sus logos, banderitas y símbolos, que compiten en elecciones. Si los miras de cerca, sin embargo, no son instituciones comparables a sus parientes del Viejo Continente.

Primero, los partidos políticos americanos no tienen militantes. Cuando uno se registra para votar en su estado debe decidir si lo hace como republicano, demócrata, independiente (no afiliado) o como miembro de algún otro partido minoritario. El registro no implica tener que pagar cuotas; en la mayoría de los estados, lo único que hace es darte derecho a votar en las primarias. La proporción entre votantes registrados de cada partido varía de un estado a otro; en general, los independientes son mayoría, en parte porque poca gente tiene interés en participar en primarias, en parte porque suena bien, en parte porque así recibes menos publicidad electoral.

Prácticamente todos los legisladores del país son escogidos en distritos uninominales con elecciones a una sola vuelta.[8] Si a alguien le apetece ser el candidato demócrata a un cargo como senador estatal, lo único que tiene que hacer es rellenar unos cuantos formularios, declarar su candidatura y cumplir los requisitos que impone cada estado para aparecer en la papeleta de las primarias para ese puesto. Habitualmente, estos se limitan a recoger un número determinado de firmas y pagar una tasa de inscripción. Cualquier candidato, a poco que invierta algo de tiempo y dinero reclutando

voluntarios, suele poder hacerlo en un par de semanas. El partido no puede bloquearte o excluirte; como mucho, puede designar un candidato como «favorito» en la convención (ahorrándote recoger firmas), pero poco más.[9]

Esto hace que los candidatos en Estados Unidos sean esencialmente «emprendedores políticos». Cada candidato debe montarse su equipo de campaña, contratar diseñadores para logos y pancartas y recaudar dinero para pagarlo todo. Dicho en otras palabras: un candidato americano construye su propio minipartido desde cero, contratando a su director, a su director de comunicaciones y a su coordinador de voluntarios por separado.

El número de empleados y el presupuesto aumentan exponencialmente según la importancia del cargo a votación. Una campaña de un legislador estatal puede emplear entre tres y cinco personas, según el tamaño del distrito; alguien que quiere ser escogido en el Congreso, puede que quince o veinte personas (más si es un distrito competitivo y una campaña con dinero); una campaña a gobernador puede tener un centenar en un estado pequeño o varios centenares en California o Florida. Hay un ecosistema entero de profesionales de la política trabajando en campañas, saltando de un candidato a otro cada ciclo electoral, alternando entre asesorar a políticos electos y ayudar a aspirantes a ganar elecciones. Salvo en muy contadas excepciones (algunos estados tienen financiación pública de campañas estatales), los candidatos tienen que recaudar el dinero por sí solos, así que operan de forma casi completamente autosuficiente.

Los partidos estatales (y los comités nacionales) son organizaciones pequeñas con un poder real bastante limitado. Pueden recaudar dinero de manera independiente y cederlo a candidatos prometedores o que tienen elecciones competitivas. También suelen ofrecer apoyo técnico, como acceso automatizado a la lista de votantes (algo crucial para enviar publicidad o hacer puerta a puerta) y a la plataforma del partido para

recaudar fondos en internet (cobrando una pequeña comisión), además de ayuda legal en dudas sobre ley electoral o financiación de partidos. Pero no tienen poder real, más allá de ser un instrumento jurídico para agrupar a candidatos y recaudar fondos electorales.

Esto lo vemos en la misma estructura institucional de los partidos. El comité estatal en un estado medianejo no suele tener más de una decena de empleados. Los comités nacionales demócratas y republicanos tienen algo más de un centenar; son más máquinas de recaudar dinero y organizar primarias presidenciales que una autoridad real con poder sobre los candidatos o cargos electos.

En las últimas décadas, incluso ese poder de recaudar fondos ha disminuido de forma considerable. Desde la campaña de Howard Dean (primarias presidenciales demócratas de 2004), los candidatos han descubierto que pueden recaudar fondos por internet con relativa facilidad, sin tener que depender del aparato. Eso hace que construir redes de donantes sea una de las prioridades de cualquier campaña, ya que pueden usar los fondos propios con mucha más flexibilidad. Además, si un candidato tiene más dinero del que necesita, siempre puede utilizarlo para donar fondos a compañeros de partido, una forma efectiva de ganar influencia y poder.

Este sistema de candidatos independientes significa que alguien que llega por primera vez al Congreso o al Capitolio estatal realmente le debe bien poco al partido. La campaña se la ha montado esa persona solita; el partido, como mucho, la ha ayudado a tener acceso a listas de votantes y puesto en contacto con donantes, pero poco más. Quizá le deba algún favor a un legislador que les ha echado una mano o a algún grupo externo (ahora hablaremos de ellos), pero nadie la ha nombrado al cargo; son agentes casi

independientes. Prácticamente tan sólo comparten una marca común e ideología con sus compañeros de formación.

El sistema de partidos americano es, entonces, un modelo de «emprendedores políticos» con dos «franquicias» que agrupan a los dos bandos. Las barreras a la entrada para montar una campaña a congresista, senador o gobernador de un estado son obviamente más altas, pero distan mucho de ser muros infranqueables para cualquier político entusiasta. Para un candidato con recursos, lo de montar un equipo de campaña y recoger firmas es sencillo; simplemente cuesta dinero. Para el resto, suele ser cuestión de llevar unos cuantos años en política y desarrollar una red de contactos y donantes lo suficientemente grande para poder dar ese paso.

Lo que debe quedar como lección central de todo este asunto, sin embargo, es que el Partido Demócrata y el Partido Republicano no son lo que entendemos como formaciones políticas en Europa. Los candidatos compiten primero por presentarse bajo una u otra etiqueta, pero no trabajan para el partido; cada uno es dueño de su destino.

Partidos y cambio político

La estructura radicalmente descentralizada de los partidos americanos significa que cuando decimos que «Nixon dio con la estrategia para que los republicanos ganaran elecciones» es una simplificación un poco grosera de lo que vemos sobre el terreno. En 1972 Nixon dio con la táctica para que un candidato republicano pudiera ganar elecciones presidenciales de forma consistente, pero ni su «librillo» de estrategias ni su campaña ni sus mensajes eran los del resto de candidatos del GOP. En los cientos de elecciones al Congreso y al Senado, cada candidato se enfrentaba a un oponente distinto, con sus propios fondos y equipo, en un distrito que podía

estar a la izquierda o la derecha de la media nacional. Y todos esos candidatos del GOP se toparon con candidatos demócratas que eran bastante más competentes y andaban mucho menos perdidos que George McGovern.

Pongamos, por ejemplo, a alguien como John McClellan, senador demócrata por Arkansas. McClellan fue escogido para el Senado por primera vez en 1942 y era un segregacionista convencido; participó en el *filibuster* fallido para bloquear la ley de 1964, diciendo que era una «ley de discriminación». El senador era alguien conocido en su estado, y gracias a su antigüedad en la cámara (*seniority*; los cargos en el Senado y el control de los comités se suelen asignar de este modo) era capaz de garantizar que el presupuesto federal incluyera dinero para proyectos y obras públicas en Arkansas. En las elecciones de este estado de 1972, McClellan se impuso al candidato del GOP por más de veinte puntos, tras pasarse la campaña criticando a McGovern y diciendo que estaba en contra de todo lo que defendía.

Esta historia se repitió, con variaciones, por todo el país. Legisladores como John Sparkman (Alabama) o James Eastland (Mississippi) eran nominalmente demócratas, pero sus posiciones no cambiaron siguiendo la evolución de los candidatos presidenciales de su partido. Lyndon Johnson podía ser todo lo campeón de la integración racial que quisiera; ellos representaban a su estado y tenían su equipo de campaña, y nadie del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) podía echarles si no era con unas primarias.[10] El sistema electoral americano da una ventaja considerable a los políticos en el cargo por el mero hecho de que son más conocidos y no tienen que construir una campaña casi desde cero. Muchos legisladores del Viejo Sur continuaron siendo reelegidos durante décadas, manteniendo sus posiciones conservadoras mientras el partido se

iba a la izquierda. Dado que el sistema de comités del Congreso se basa en la antigüedad y el control de la agenda lo ostenta el partido que está en la mayoría, el incentivo de los *dixiecrats* por desertar al bando republicano era bastante limitado; aunque hubo algunos cambios de afiliación sonados (Strom Thurmond, otra vez), no eran habituales.

Es esta clase de políticos la que hace que Nixon, a pesar de ganar las elecciones en 1972 por veintitrés puntos, no recupere el control de la Cámara de Representantes, que permaneció en manos demócratas (242-192). El GOP perdió el voto popular en esa cámara por un 5,6 % aun cuando arrasó en las presidenciales.

Aunque la política americana cambió de forma considerable con Nixon, ese cambio tardó décadas en filtrarse al resto del sistema político. La debilidad de los partidos y la fortaleza individual de los legisladores, la persistencia de una maquinaria electoral demócrata en el sur y las ventajas de estar en la mayoría explican esta enorme inercia política. No es hasta la segunda mitad de los años ochenta cuando los republicanos empiezan a sacar escaños de forma consistente en la Confederación, según la vieja guardia demócrata abandona la escena. Y no será hasta mediados de los noventa cuando el senador demócrata más conservador esté finalmente a la izquierda del republicano más moderado; un hito que no veríamos hasta 2005 en la Cámara de Representantes.[11]

Más allá de la historia de los cambios en el Congreso, la descentralización de los partidos crea algunas dinámicas curiosas al hablar de su evolución ideológica. Ni demócratas ni republicanos tienen un grupo de expertos que descubra estrategias ganadoras y las implemente a gran escala. Lo que vemos en realidad es el equivalente político a lo de tener mil monos con mil máquinas de escribir intentando redactar algo relevante: cientos de campañas, cada una con sus candidatos, sus analistas, su mensaje

y sus tácticas, con el objetivo de descubrir qué funciona más o menos por separado, aplicando las ideas de sus gurús, *think tanks* o expertos favoritos y copiándose unos a otros sin demasiado criterio.

Debido a esto, la evolución de los partidos americanos es algo más parecido a un proceso de «selección natural» que a algo planificado. Demócratas y republicanos prueban decenas, cientos de mensajes distintos en cada ciclo electoral, escogiéndolos según lo que creen que ha funcionado o creen que puede funcionar, las presiones internas de sus bases (porque también hay que ganar primarias), el entorno político del país en general y el distrito donde operan. Dependiendo de si ganan o pierden, los candidatos sucesivos aprenden sobre la marcha, a veces descubriendo estrategias efectivas que pueden ser utilizadas en otros distritos y elecciones, a veces sacando las conclusiones erróneas y estrellándose en el siguiente ciclo.

El debate siempre es entretenido, con múltiples teorías sobre el electorado compitiendo entre sí y expertos intentando vender su análisis a candidatos. Hay directores de campaña famosos y montañas de dinero para consultores. Porque si hay algo que tienen las campañas en Estados Unidos, como veremos después, es dinero. Mucho mucho dinero.

Las primarias presidenciales

Uno de los cambios más relevantes del sistema político en la era Nixon no fue fruto de las decisiones del presidente, sino, extrañamente, del candidato al que demolió en 1972, George McGovern.

Todo empezó con el triste espectáculo de la Convención Nacional Demócrata en Chicago en 1968, esa en la que Humphrey fue nominado mientras los manifestantes eran aporreados por la policía fuera del centro de convenciones. Por aquel entonces, ninguno de los dos partidos tenía un

sistema establecido para escoger a su candidato; cada estado elegía a sus delegados para la convención a su manera, algunos con primarias, otros en convenciones, otros con votaciones consultivas, y las élites del partido acababan nominando a alguien que podía reflejar o no lo que se había votado. En 1968 hubo dos candidatos que se presentaron oficialmente a primarias, Eugene McCarthy, contrario a la guerra de Vietnam, y Robert Kennedy, miembro del conocido clan de políticos y que hablaba bien en público.[12] George McGovern, también contrario a la guerra, entró en liza cuando Bobby Kennedy fue asesinado. En la convención, sin embargo, se acabó nominando a Hubert Humphrey como candidato de consenso a pesar de que no había participado en ninguna votación, ante la indignación de las bases.

El partido, inevitablemente, decidió que era el momento de hacer reformas. Cediendo a las presiones de su ala progresista, le encargó a McGovern que escribiera un plan para abrir la formación política a los votantes. Su sugerencia fue crear un sistema de incentivos y requisitos para animar a los partidos estatales a adoptar métodos más democráticos para designar a sus delegados, esto es, primarias. En deferencia a Iowa, se mantuvo el sistema de *caucus* en ese estado. La base legal del sistema (escoger delegados para la Convención), no obstante, no había cambiado; la reforma no crea un proceso electoral nacional, sino que conserva una serie de comicios estatales, cada uno con normas distintas y con las mismas tradiciones absurdas sobre quién vota primero.

New Hampshire era el primer estado del calendario de primarias. La ley estatal que las regula (estatal, insisto) establece que deben ser el segundo martes de marzo, pero que el secretario del estado (quien lleva la administración electoral) puede adelantarlas para asegurarse de que sean al menos siete días antes de cualquier otra primaria presidencial. Una ley de

plazos en la que estos dependen de lo que dicen leyes de otras jurisdicciones es bastante inusual. Que esa ley sea para autoproclamarse el primer estado en votar lo es aún más, pero los demócratas no la cambiaron. [13]

Iowa tiene el privilegio de ir antes de New Hampshire porque tiene *caucus*, y los legisladores de New Hampshire piensan que eso no es una votación de verdad y ni se molestan en adelantarse a ella. No les falta razón, porque el *caucus* no es del todo democrático y es francamente incomprensible, pero el sistema de primarias le daba delegados igualmente. [14]

El motivo por el que Iowa va primero es también accidental. Cuando se creó el nuevo calendario de primarias, los demócratas permitieron que este estado hiciera sus *caucus* antes que cualquier otro porque el proceso de convertir esas reuniones en delegados tomaba semanas.[15] Como era un sistema tan extraño, se consensuó que nadie iba a dar a Iowa demasiada importancia.

Las reformas diseñadas por George McGovern fueron puestas en práctica en 1972. El único que pareció entender el sistema fue el propio McGovern, que se impuso a Edward Muskie, al pobre Hubert Humphrey y al pesado irreprimible de George Wallace (que fue víctima de un intento de asesinato durante la campaña) gracias a una combinación de dar prioridad a los estados con *caucus* y movilizar el voto del sector progresista del partido.

El resultado en las generales no fue, digamos, ideal, pero el sistema de primarias había cuajado. En 1976, tras la dimisión de Nixon, el Partido Republicano copió el modelo, con muy pocas variaciones; Gerald Ford fue escogido candidato, tras derrotar a Ronald Reagan. Jimmy Carter, mientras tanto, se dio cuenta de que nadie estaba haciendo campaña en Iowa, y básicamente se mudó al estado a hacer mítines y eventos durante meses sin

llamar la atención. Cuando ganó por sorpresa los *caucus*, utilizó la publicidad para imponerse en New Hampshire,[16] y de allí alcanzar la nominación y la presidencia.

Curiosamente, ambos partidos tuvieron una primera experiencia atroz con las primarias, nominando a candidatos perdedores, pero ambos mantuvieron el sistema. A pesar de su corta historia y de la incapacidad para filtrar malos candidatos, cambiarlo ha sido casi imposible; otro de esos equilibrios ligeramente incomprensibles del sistema político americano.

PAGANDO CAMPAÑAS: LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS

El último cambio institucional provocado por Richard Nixon de forma involuntaria fue el sistema de financiación de los partidos. Entre sus múltiples virtudes, Nixon era un corrupto entusiasta en esto de financiar campañas políticas, y lo fue desde el principio; los fondos que le forzaron a dar el discurso de Checkers no eran exactamente legales. Tras haber recibido dinero de la junta militar griega durante la campaña de 1968 y recaudar dinero a través de toda clase de trucos deshonestos en 1972 (incluyendo el fondo que pagó a los genios del Watergate), su caída hizo que el Congreso decidiera ponerse serio con cómo los partidos y políticos financiaban sus campañas.

El problema no era la falta de leyes (había varias, la más antigua de 1907), sino que nadie nunca se había preocupado por hacerlas cumplir. Así que en 1974 el Congreso aprobó una reforma en profundidad de la Federal Election Campaign Act con la que creó férreos mecanismos de vigilancia, límites a donaciones, techos de gasto y controles sobre cuánto dinero

podían invertir en campañas los grupos externos (comités de acción política, empresas, sindicatos…).

Parecía buena idea, hasta el Tribunal Supremo decidió, en 1976 (Buckley contra Valeo), que gran parte de la ley era inconstitucional. Limitar el gasto en una campaña electoral equivalía a poner techo al derecho de libertad de expresión, ya que cuanto más gasta un candidato en publicidad, más libertad de expresión está ejerciendo. La corte, además, derogó muchas de las reglas de transparencia en donaciones políticas y recortó los poderes de la agencia que regulaba las campañas electorales. En años sucesivos, el tribunal vaciaría aún más de contenido la ley, eliminando gran parte de los límites a donaciones y gastos de actores externos.

Tras Buckley contra Valeo, el espíritu reformista en la financiación de partidos y campañas básicamente desapareció del mapa. Las dos décadas siguientes arrojan una larga lista de propuestas fallidas, todas ellas derrotadas por un *filibuster* republicano. La única ley que consiguió salir adelante tras ser aprobada por los pelos (McCain-Feingold, 2002), duró también poco. En 2006, el Supremo empezó a derogar algunos artículos; cuatro años después, con Citizens United contra la Comisión Federal de Elecciones, la vació de contenido casi por completo.

El sistema actual es un galimatías considerable y difícil de comprender, fruto de leyes medio derogadas, regulaciones mal vigiladas y muchos muchos abogados especializados en buscar grietas por las que colarse y permitir recaudar más dinero. Es, también, increíblemente importante para entender la competición política en Estados Unidos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las campañas electorales americanas mueven cantidades absurdas de dinero. El gasto total de la campaña electoral de los comicios legislativos de 2022, sólo a escala federal (es decir, sin contar el gasto en campañas estatales o locales), rondó

los 8.900 millones de dólares. Como referencia, esto es lo que costó, aproximadamente, la línea de ferrocarril de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueres entera. El coste total de las elecciones en España de 2019 fue de 49 millones de euros. La población de Estados Unidos es siete veces la española; el gasto equivalente en una campaña electoral americana en España sería de 1.350 millones.

	Demócratas	Republicanos	Total nacional[17]
Candidatos a la Cámara de Representantes	929.238.120	835.467.785	1.764.705.905
Candidatos al Senado	936.396.852	756.788.234	1.693.185.086
Total candidatos	1.865.634.972	1.592.256.019	3.457.890.991
Comités nacionales	250.295.906	325.361.446	575.657.352
Otros comités de partidos	929.998.899	731.790.925	1.661.789.824
Total partidos	1.180.294.805	1.057.152.371	2.237.447.176
Grupos externos	786.659.855	1.134.065.388	1.920.725.243
Total	3.832.589.632	3.783.473.778	7.616.063.410

El gasto en una campaña electoral se reparte, por así decirlo, entre tres actores diferenciados: candidatos, partidos y grupos externos. Cada uno tiene normas de recaudación y gasto distintas, y, con ello, incentivos y estrategias específicos. Veamos.

Los candidatos

Los principales recaudadores, tanto para demócratas como para republicanos, son los candidatos, que controlan cerca de un tercio del gasto total (unos tres mil millones). Desde el punto de vista del político que acude a las urnas, este es el «mejor» dinero, ya que controla directamente cómo gastarlo, sin tener que pedir permiso a nadie. Las campañas dedican esfuerzos ímprobos a recaudar fondos para tener tanta autonomía operativa como sea posible, y de hecho gastan fortunas intentando reclutar más donantes.

En la era de internet, las campañas tienen dos «minas» donde buscar recursos. Por un lado, los grandes donantes, gente con dinero que puede darle un cheque por varios miles de dólares si les lloriquean un poco, les invitan a un evento vip o les hacen la pelota. Por otro, los pequeños donantes, aquellos que siguen la política un poco como una afición y aportan veinte, treinta o cincuenta dólares de vez en cuando, según les envían correos pidiendo dinero o leen cosas que les emocionan o motivan para donar.

Se pueden escribir varios libros sobre estrategias de cómo recaudar dinero, pero lo que hay que tener en mente es que hay límites sobre la cantidad que un individuo puede donar a un candidato directamente. Las normas sobre cuánto puedes dar son (como todo) un galimatías, pero, en general, hablamos de 2.900 dólares por persona y candidato. Esto convierte en ineficiente la recaudación de fondos de personas adineradas, porque requiere mucha atención para la cantidad de recursos que pueden generarte. Como consecuencia, las campañas tienen que tomar decisiones estratégicas sobre si «invierten» en grandes o pequeños donantes. Normalmente, la

mitad de las contribuciones proceden de pequeños donantes (gente que da menos de doscientos dólares), pero varía de un candidato a otro.

Los partidos

El segundo recaudador son los comités de los partidos, es decir, las estructuras «orgánicas» de demócratas y republicanos, que se llevan algo menos de una cuarta parte del total de los beneficios (unos dos mil millones).

La ventaja que tienen los comités es que pueden recibir donaciones individuales mayores que los candidatos: 10.000 dólares al año para comités estatales y locales, 36.500 para el comité nacional y 109.500 para otras cuentas nacionales (Senado y Cámara de Representantes). La desventaja, desde el punto de vista de los candidatos, es que este dinero lo controla el partido y se lo gasta como quiere, y suele ir destinado a elecciones competitivas. Las reglas sobre cómo se asigna el gasto y qué o cómo se puede transferir son muy complejas, pero, en general, partido y candidato pueden coordinarse, es decir, hablar entre ellos y compartir información y estrategias.

Los candidatos nunca protestan demasiado cuando el partido les echa una mano con el dinero; aunque pierden cierto control sobre la campaña, siguen pudiendo influir en cómo se utiliza. El dinero en anuncios compensa el papeleo y, dado que el partido no tiene demasiado personal, suelen dejarlos bastante en paz.

Grupos externos

El tercer grupo son los llamados comités de acción política independientes (PAC), que en 2020 gastaron más de 1.300 millones dólares. Estos son grupos externos a las campañas de los candidatos que hacen publicidad a su favor, pero no pueden coordinarse, esto es, no pueden hablar ni compartir información con los candidatos.

Los PAC son la clase de entidades más difíciles de regular, ya que el Supremo siempre acaba por ver cualquier gasto que hagan como «libertad de expresión». Un donante puede dar tanto dinero como le plazca a uno de estos grupos, y el PAC ni siquiera tiene que hacer pública su lista de donantes. La publicidad salida de estos comités se distingue por no incluir el «I am John Doe and I approve this message» («Soy John Doe y apruebo este mensaje», la coletilla legal que cualquier anuncio político debe llevar si está pagado por el partido o candidato) de los otros dos grupos, pero fuera de ello son a menudo casi indistinguibles de una campaña electoral normal.

A los candidatos no les molesta, estrictamente, que un PAC se líe a hacer publicidad diciendo que su adversario es un fascista o un comunista, pero no es un uso ideal de recursos. Al ser independiente y no poder coordinarse, un PAC puede meter temas en campaña que no interesen al candidato o hablar de asuntos controvertidos (aborto, armas de fuego…) que preferiría evitar.

Os preguntaréis, por supuesto, si la independencia de los PAC es tal o si las campañas hablan informalmente por otros canales. En mi experiencia, los candidatos y sus equipos suelen esforzarse por mantener las distancias, ya que la coordinación es una de las pocas reglas que son fáciles de detectar si te las saltas, lo que puede meterte en un problema legal considerable.

La abogacía americana, eso sí, ya ha encontrado soluciones innovadoras para que PAC y candidato puedan trabajar juntos sin vulnerar la letra de la ley. En Ohio, el PAC que apoyaba J. D. Vance, el candidato republicano al

Senado, se dedicó a colgar todos sus documentos, encuestas internas y análisis estratégicos en una carpeta pública donde cualquiera podía consultarlos. Técnicamente, no estaban trabajando juntos; tan sólo compartían sus actividades en internet. No está nada claro que esta maniobra fuera legal, pero Peter Thiel, el multimillonario que financiaba el PAC, casi seguro tenía buenos abogados para defenderla. Hasta que no haya jurisprudencia al respecto, es jugar con fuego.

Los PAC tienen la desventaja adicional de que son menos eficientes cuando compran publicidad. Una de las provisiones supervivientes de una ley sobre campañas firmada por Nixon es que las televisiones están obligadas a ofrecer descuentos considerables en sus tarifas de publicidad durante los últimos sesenta días de campaña. En un mercado publicitario competitivo, esto puede traducirse en que un PAC tenga que pagar dos o tres veces más por cada anuncio que un candidato. Los descuentos, además, sólo se aplican a los políticos directamente; los partidos tampoco los reciben.

En el furgón de cola tenemos los llamados comités 527, una variedad «añeja» de los PAC independientes. Los 527 están casi siempre asociados a partidos políticos, candidatos o sindicatos; tienen las mismas limitaciones que los súper-PAC en cuanto a la coordinación con candidatos. Su diferencia crucial (que los hace menos populares) es que están obligados a publicar quién los financia y cómo gastan el dinero. Ahora mismo recaudan menos del 10 % del total y son casi residuales en el bando republicano.

¿Confundidos? No es de extrañar. El sistema es extraordinariamente complicado, y más aún cuando uno se da cuenta de que esto sólo describe las campañas federales. Cada estado regula sus campañas locales y estatales, y las normas son con frecuencia muy muy distintas. Toda organización política en este país tiene equipos de abogados y contables

dedicados en exclusiva a descifrar el galimatías legal descrito arriba y quién puede hablar con quién sobre qué durante la campaña.

Estas montañas de dinero, por descontado, no se distribuyen de manera uniforme. Cuanto más competitiva es una campaña, más donaciones y grupos externos atrae. En 2022, el escaño del Senado por Georgia atrajo más de 490 millones de dólares de gasto (255 millones de los candidatos, el resto, externo); en Washington, donde el candidato republicano apenas tenía opciones, el coste total fue de «apenas» 41 millones.[18]

Presidenciales

Las elecciones presidenciales se rigen por reglas similares. La única diferencia es que los candidatos pueden utilizar, si así lo desean, un sistema de financiación pública para cubrir el coste de la campaña, a cambio de limitar su gasto total. Hace décadas que no se utiliza; la subvención en 2020 habría sido de 103,7 millones de dólares; Trump y Biden se gastaron en total 6.496 millones.

El nivel de gasto de los candidatos a la presidencia ha oscilado entre ser más o menos equivalente al de todas las campañas al Congreso juntas (McCain-Obama, en 2008) y poco más de un tercio (Trump-Clinton, 2016). Los republicanos, tradicionalmente, invertían más en el Congreso que en las presidenciales, una estrategia inteligente sabiendo cómo funciona el sistema político.

Inflación y campañas

Si ha habido una constante en las campañas electorales en Estados Unidos es que el gasto no ha hecho más que subir. Las elecciones legislativas de

1998 costaron, ajustadas por inflación, 2.934 millones de dólares. En veinticuatro años, la «inversión» en política se ha triplicado.

Los motivos de esta escalada son variados. El primero, y más obvio, fue Citizens United contra la Comisión Federal de Elecciones, la sentencia del Supremo que abrió la puerta al gasto esencialmente ilimitado por parte de los PAC. En 2008, los últimos comicios presentencia, el gasto en las elecciones al Congreso fue de 3.360 millones. En 2012, esa cifra ascendió a 4.710 millones.

El segundo motor del aumento de la recaudación de los políticos ha sido internet. Ya hemos mencionado a Howard Dean y su «descubrimiento» de los pequeños donantes en 2004. Eso reduce de forma considerable el coste de recaudar fondos para las campañas «insurgentes», haciendo viables candidaturas que movilicen las bases del partido sin depender de grandes donantes. Allá por 2008, la campaña de Obama convirtió esa estrategia en un arte; en 2010, los republicanos finalmente adoptaron la estrategia con la oleada del Tea Party.

La posibilidad de tener a candidatos fuera del núcleo dirigente de los partidos recaudando cantidades prodigiosas de dinero fue clave en la victoria de Obama en las primarias de 2008, y fue el motivo principal de la extraordinaria resistencia de Bernie Sanders en 2016. También permite que legisladores extremistas —comparados con el resto de su partido, como el propio Sanders,[19] Alexandria Ocasio-Cortez, Marjorie Taylor Green o Matt Gaetz— puedan apoyar a candidatos de su cuerda en primarias y generales, empujando a los partidos fuera del centro.

El tercer factor por destacar tiene un nombre propio: Donald Trump y su increíble efecto polarizador en el sistema político americano. Podemos comparar, por ejemplo, las elecciones legislativas de 2014, las últimas de Obama, con las de 2018, las de la «resistencia» contra Trump. El gasto pasó

de 4.788 millones de dólares a 6.700, fruto de un extraordinario aumento del gasto demócrata en más de 1.200 millones que los republicanos apenas fueron capaces de contrarrestar (*sólo* gastaron 590 millones más). El frenesí de gasto se acentuó aún más en 2020 (16.413 millones de gasto total; más del doble que en 2016) y no ha disminuido en absoluto en 2022.

Las elecciones de 2016 fueron un shock para el sistema político americano, uno que motivó que miles de ciudadanos no sólo se interesaran y participaran en política, sino también que gastaran dinero en ella.

PARÉNTESIS: EL GENIO OLVIDADO DE JIMMY CARTER

Durante mucho tiempo, el nombre de Jimmy Carter ha sido utilizado como una especie de sinónimo de fracaso político. Los presidentes de Estados Unidos suelen ser reelegidos, pero su rotunda derrota electoral a manos de Ronald Reagan en 1980 (51-41) le ha marcado para siempre. Lo que se olvida a menudo, sin embargo, es cómo Jimmy Carter ganó la presidencia en 1976, sólo cuatro años más tarde de la abrumadora victoria de Nixon de 1972, con una estrategia dirigida a contrarrestar la nueva coalición del GOP.

Carter era sureño (de Georgia), evangélico y moderado, lejos de las estridencias del ala izquierda demócrata. Era también un veterano de la Marina (ingeniero nuclear en submarinos) que podía hablar como un granjero; su negocio familiar era un campo de cacahuetes. También era, a su manera, un populista, alguien capaz de explicar lo que es crecer en la pobreza o cómo le cambió la vida cuando los programas del New Deal trajeron electricidad a su casa.

Sin embargo, Carter no era un señor del campo al uso o un populista que presumía de ser de pueblo. Era también un hípster sureño que citaba a Bob

Dylan, amaba a los Allman Brothers y hablaba con elocuencia sobre racismo y el error que fue Vietnam. Hunter S. Thompson escribió un elogioso artículo sobre su campaña y lo mucho que le gustaba Carter. Era lo bastante sólido al hablar de derechos civiles como para consolidar el voto negro, y lo bastante moderado, religioso y sureño para mantener el voto blanco en el sur y el Medio Oeste. Y, siendo como eran los setenta, era alguien que tenía también su punto excéntrico, como en su insistencia en contar el día en que vio un ovni.

Una vez en el cargo, Carter fue un presidente efectivo, aprobando leyes bien diseñadas para reactivar la economía americana. Fue él, sin ir más lejos, quien nombró a Paul Volcker presidente de la Reserva Federal, tomándose completamente en serio la lucha contra la inflación. La gran ola desregulatoria que liberalizó enormes sectores de la economía, desde aerolíneas a ferrocarriles, pasando por el transporte por carretera o la distribución de cerveza, fue bajo Carter, no Reagan. El boom del petróleo y el gas es fruto de su liberalización del sector. Curiosamente, la única gran desregulación bajo Reagan fue la de las cajas de ahorros, que acabó en un sonoro petardazo años después. En política exterior, Carter cerró los Acuerdos de Camp David, el tratado de paz entre Israel y Egipto. Fue también quien impulsó la estrategia de desarme nuclear y la condena a las violaciones de los derechos humanos que emplearía Reagan. Gran parte del rearme que se atribuye a su sucesor empezó bajo su mandato.

El problema de Carter, no obstante, es que tuvo muy muy mala suerte. Como presidente, se encontró con la Revolución de Irán, la crisis del petróleo de 1979 y la toma de los rehenes de la embajada en Teherán. Un ambicioso plan de rescate fracasó debido a la inoportuna avería de uno de los helicópteros enviados a esa misión. Durante años, Carter siempre

contaba que estuvo a un helicóptero estrellado de salir reelegido, y, la verdad, razón no le faltaba.

Las elecciones de 1980 fueron un cúmulo de infortunios para Carter. Ted Kennedy decidió inexplicablemente intentar ganarle en las primarias. Aunque fracasó, eso le debilitó enormemente de cara a las generales. Paul Volcker subió los tipos de interés al 20 %, creando una recesión colosal justo antes de los comicios, porque Carter tuvo el buen criterio de nombrar a alguien lo suficientemente independiente para tomarse la inflación en serio y, por desgracia, también lo bastante independiente para hundirlo. Los iraníes sólo accedieron a liberar a los rehenes después de las elecciones, tras la campaña de Reagan, porque, según algunas versiones, este les pidió en secreto que esperaran. John Anderson, un candidato independiente que también se presentó a las generales, sacó casi un 7 % y acabó de rematarlo.

La política, a menudo, tiene estas cosas. Si la Revolución iraní hubiera sucedido un año antes, o el rescate hubiera funcionado, o Volcker hubiera sido menos competente, Carter probablemente habría sido reelegido. En vez de estar hablando de una presidencia fallida y del genio de Ronald Reagan, Carter sería visto como el presidente que reconstruyó el Partido Demócrata en una nueva coalición capaz de cerrar las heridas raciales, gobernar desde el centro y dar paso a un nuevo sur, más dinámico y optimista. Bill Clinton, sólo que dieciséis años antes.

La carrera política de Jimmy Carter, el país que se encuentra y el que deja detrás de sí, de todos modos, me parece un buen ejemplo de dos lecciones que olvidamos con frecuencia. Primero, que la historia y la percepción que tenemos de ella dependen muchas veces de narrativas a toro pasado de los ganadores, que no siempre son del todo ciertas. Segundo, que quién gana y quién pierde suele ser fruto del azar, y que esas victorias o derrotas sólo son

importantes porque las tratamos como tales, a pesar de que los cambios que les atribuimos empezaron mucho antes.

6

La era de la polarización

Tras la desafortunada presidencia de Jimmy Carter, Ronald Reagan llegó al poder con una coalición electoral relativamente parecida a la de Nixon en 1972. Reagan era un hombre inteligente y un político hábil; como buen actor, alguien capaz de vender sus ideas mejor que nadie. Era también alguien mucho más aburrido, como persona, que Nixon, FDR o Ike; era realmente quien parecía ser, sin demasiadas dobleces o complejidades.

Hay dos cosas que distinguen a Reagan como político. Primero, y algo a lo que nunca se da suficiente importancia, fue un tipo con suerte. Durante su primer mandato, tuvo la inmensa fortuna de que Paul Volcker decidiera dejar de torturar la economía una vez bajó la inflación. Los tipos de interés de la Reserva Federal cayeron del 20 % (en verano de 1981) al 8,25 % (principios de 1983). La economía reaccionó creciendo con fuerza, y Reagan fue reelegido con facilidad. Las elecciones de 1984 no son una paliza tan abrumadora como las de 1972, pero se acercan bastante; Walter Mondale, el pobre candidato demócrata, perdió por dieciocho puntos.

Y, segundo, Reagan se encuentra, a finales de su segundo mandato, con el principio del fin de la Guerra Fría. Aunque los republicanos insistieron en que la política de fuerza de los ochenta fue determinante, lo cierto es que muchos de los programas militares de la era Reagan fueron aprobados por Jimmy Carter. La política de contención había sido definida (con un amplio consenso entre ambos partidos) en la era Truman, y las bases finales del

cerco al régimen soviético (como el acercamiento a China) fueron obra de Nixon.[1] Reagan y Bush (padre), por supuesto, tuvieron un papel destacado en asegurarse de que el hundimiento de la Unión Soviética no acabara en (demasiados) conflictos y con Estados Unidos en una posición hegemónica, pero el mérito de esa victoria no es sólo suyo.

Lo que distingue a Reagan, y su legado más importante, fue su capacidad de adoptar la estrategia política de Nixon para ganar elecciones y utilizarla para aprobar legislación. Su intención no era desmantelar la coalición política del New Deal para ganar las elecciones, sino usar su victoria electoral para desmantelar sus reformas sociales y económicas.

Para sacar adelante sus planes, Reagan necesitaba un programa de gobierno que dejara satisfechos a todos los grupos y facciones que componían la nueva coalición republicana. Su estrategia iba a definir al Partido Republicano hasta 2016, el año en que las tensiones internas del GOP acabaron con Trump rompiendo ese equilibrio.

LAS CUATRO ALMAS DEL PARTIDO REPUBLICANO

El realineamiento nixoniano consolidó cuatro facciones en los cimientos del GOP. Dos de estos grupos eran la base tradicional del partido, lo que quedaba de la coalición anterior a 1932 y FDR: la derecha religiosa y la derecha empresarial. El tercero, nacido tras la guerra, eran los anticomunistas, los halcones del partido en política exterior. El cuarto lo formaba la combinación del voto racista del Viejo Sur y el voto resentido populista (no-soy-racista-pero) en los estados del norte; la derecha reaccionaria.

La derecha religiosa

La derecha religiosa es esencial en la fundación del Partido Republicano. El GOP nace como el partido del abolicionismo, un movimiento que empezó en las iglesias del país. Tras el fin de la Reconstruction en 1877, no obstante, dejó su fervor igualitario detrás. Los republicanos se convertirán en el partido de los revivalistas protestantes defensores de los valores tradicionales y partidarios de la ley seca. Las penurias de la Gran Depresión y el fracaso de la *prohibition* hicieron que pasaran a un segundo plano.

No fue hasta los años sesenta cuando volvieron a emerger con fuerza, reaccionando contra el feminismo y la liberalización sexual. En el sur, un sector de, digamos, «emprendedores» religiosos vieron la lucha por los derechos civiles como una oportunidad de crear colegios religiosos «tradicionales» segregados racialmente, atrayendo al movimiento evangélico a una nueva generación de «padres preocupados».

En la segunda mitad de los setenta, los republicanos reestablecieron sus vínculos con la derecha religiosa. El movimiento evangélico y la Moral Majority, esos grupos de padres preocupados por la «educación decadente» y los «valores progres» que se les inculcaba a sus hijos, pasaron a ser recibidos y halagados por legisladores y candidatos presidenciales a cambio de fondos y voluntarios enfervorecidos cuando tocaba ir a votar. El GOP apoyó campañas puramente reaccionarias, como la de Phyllis Schlafly y su batalla (exitosa) para bloquear la enmienda constitucional sobre igualdad de género. Los ochenta fueron una era de pánicos morales y asociaciones por la infancia preocupados por toda clase de amenazas y perversiones: juegos de rol, satanismo, videojuegos, homosexualidad, sida, depredadores sexuales, música con letras sugerentes y canciones con lenguaje soez, películas violentas y con escenas de sexo, anticonceptivos, grafitis, *break*

dance y antiamericanismo en las universidades, todos una amenaza para el futuro de América y la civilización occidental.

Esta agitación y este activismo, por supuesto, no eran estrictamente nuevos; Estados Unidos siempre ha sido un país propenso a la agitación moral y a cruzadas religiosas. La novedad es que durante la era Reagan el GOP, tras años ignorándolos, controlaba la Casa Blanca y les hacía caso. La estrategia del resentimiento, la idea de que los «verdaderos americanos» y la «gente normal» eran una minoría perseguida, hizo que la presencia constante en los medios de estos agravios fuera útil políticamente. La derecha religiosa pasó a formar parte de la retórica antiélites del partido y dejó de ser grupo de militantes radicales que las élites del GOP trataban de minimizar.

El gran objetivo de la derecha religiosa y su principal motivación para mantenerse en el juego político era el aborto. La sentencia de Roe contra Wade de 1973 (uno de los últimos coletazos del Supremo «progresista» pre-Nixon) se convirtió en una fijación conservadora, y se luchó durante décadas para derogarla. La política alrededor de esta sentencia, sin embargo, es un poco más complicada de lo que parece; hablaremos sobre ello más adelante.

Halcones y anticomunistas

La segunda facción relevante del partido eran los anticomunistas, o más concretamente los halcones en política exterior: la facción de Richard Nixon. Los veteranos de su Administración dominaron durante décadas el *establishment* de seguridad nacional del GOP (Cheney, Rumsfeld, Scowcroft, Kissinger, Schlesinger…), siempre con el objetivo prioritario de derrotar al comunismo y liderar el mundo libre. El anticomunismo, por

supuesto, era un credo compartido (con muy pocas excepciones) por ambos partidos, pero el entusiasmo belicista pos-Vietnam se convirtió en patrimonio republicano.

Salvo en muy contadas excepciones, los votantes no suelen decidir a quién apoyan en unas elecciones según sus posiciones en política exterior. Los halcones (y sus sucesores en la era Bush hijo, los neoconservadores) siempre han sido más una facción dentro de la élite del partido que un grupo que puede movilizar votantes. Para ellos, el GOP es un vehículo para implementar sus ideas en política exterior; la ideología del resto del partido les da bastante igual. Su influencia política siempre ha sido mucho mayor que su fuerza electoral real.

Aun así, en la retórica posnixoniana siempre han jugado un papel clave para definir al GOP como un partido patriótico, nacionalista y (a falta de un adjetivo mejor) machote que defiende el país en un mundo en caos. Algo que les fue bien, hasta que la segunda guerra de Irak demolió su credibilidad por completo.

Libre empresa

El tercer grupo tradicional dentro del GOP es la derecha económica, los ricos y los empresarios; el voto de clase más tradicional. Los republicanos son un partido que siempre se ha alineado con las clases altas; su anticomunismo en política exterior se halla asociado, retóricamente y en todo momento, con una defensa del capitalismo y el libre mercado dentro del país. Son la principal base de donantes del partido y la fuente de mucha de esa financiación de grupos externos que hacen campaña por ellos.

Los empresarios, por descontado, no son una clase social homogénea. Hay industrias mucho más reaccionarias que otras (petroleras, digamos,

comparadas con finanzas), y los pequeños empresarios suelen ser mucho más conservadores que los ejecutivos de las grandes compañías. También tenemos una fuerte estratificación según nivel educativo y sector económico. Los directores de una multinacional posiblemente sean conservadores en lo económico y liberales en lo social; los propietarios de concesionarios de coches serán muy intervencionistas en lo económico y a menudo mucho más reaccionarios en temas culturales o inmigración.

Sea como fuere, un programa económico consistente en recortar impuestos a los ricos y dar más poder a las empresas sobre sus trabajadores es políticamente impopular, incluso en Estados Unidos, así que los liberales en lo económico también ven el partido como un matrimonio de conveniencia. El GOP aprobará leyes de su agrado siempre y cuando estén dispuestos a tolerar al resto de hiperventilados que forman la coalición. El resultado es otra facción del Partido Republicano que tiene más prestigio y peso político dentro de este que entre los votantes. Aunque refuerzan un cierto componente de la imagen del partido (individualismo, oportunidad, etcétera), son un grupo asociado al GOP para conseguir victorias legislativas, no una base de votantes capaz de generar mayorías.

La derecha reaccionaria

El Partido Republicano, durante décadas, fue incapaz de ir mucho más allá de los tres grupos anteriores. La única administración que pudo haberlo conseguido, la de Eisenhower, fue vista por muchos conservadores como una rendición a los valores del New Deal, no como una victoria republicana digna de celebrar. No fue hasta que Nixon «reclutó» a esa cuarta facción, mezcla de exdemócratas sureños, resentidos antiélites y la «mayoría silenciosa» de moderados que querían un poco de «orden» ante los excesos

de los sesenta, que el GOP pudo empezar a ganar elecciones de forma consistente.

En los años ochenta, los republicanos convirtieron la apelación al resentimiento en un arte, guiados por una nueva generación de consultores políticos criados a la sombra de Richard Nixon como Roger Stone,[2] Paul Manafort[3] o Ed Rollins.[4] Todos ellos compartían un infatigable cinismo sobre la política, una creatividad inmensa en la búsqueda de maneras de insinuar racismo sin decirlo abiertamente y un talento extraordinario en encontrar temas y material de campaña capaces de sacar de quicio a su oponente. Por supuesto, también tenían un talento especial en agrandar su propio mito de *enfants terribles* de la comunicación política. Fueron ellos los que desarrollaron y fortalecieron el mensaje hacia esos votantes, y se hicieron inmensamente ricos en el proceso.

Los dos miembros más influyentes de esta generación de consultores fueron Lee Atwater y Roger Ailes. Este último empezó su carrera como periodista y se topó con Richard Nixon en 1967, cuando lo entrevistó en un programa sobre el futuro de la televisión. Nixon no creía que fuera un medio con futuro; Ailes le convenció de lo contrario. Fue su productor ejecutivo de televisión durante la campaña, jugando un papel clave en definir el primer borrador del mensaje nixoniano. Tras volver una temporada al periodismo, trabajó en la campaña de Reagan en 1984 y en la de Bush padre en 1988.

Ailes fue quien formuló la teoría del foso de la orquesta de los medios de comunicación: «Si hay dos políticos en el escenario, uno dice que tiene la solución al problema de Oriente Próximo y el otro se cae en el foso, ¿cuál de los dos crees que abrirá el informativo esa noche?». En 1996, tuvo la oportunidad de llevarla a la práctica a gran escala cuando Rupert Murdoch

le encargó lanzar un canal de noticias en televisión por cable llamado Fox News.

Lee Atwater, por su parte, se hizo famoso en 1980, en una campaña a la Cámara de Representantes en Carolina del Sur. Entre sus «innovaciones» se encuentran una encuesta telefónica falsa en la que se preguntaba a los votantes si sabían que el candidato demócrata era miembro de la NAACP —asociación que lideró la lucha por los derechos civiles en los años sesenta —, enviar cartas escritas por el senador Strom Thurmond (sí, otra vez él) acusando al candidato demócrata de querer desarmar Estados Unidos y poner el país en manos de comunistas, y (mi favorita) plantar a un falso periodista en una rueda de prensa de su oponente para que le preguntara sobre su tratamiento psiquiátrico y si seguía recibiendo terapia de electroshock. Ed Rollins, entonces director político de Reagan, se dio cuenta de que el tipo tenía talento y lo fichó de inmediato.

Atwater no le defraudó. Fue él quien filtró a la prensa en 1984 los antecedentes penales de los padres de Geraldine Ferraro, la candidata demócrata a la vicepresidencia, relacionándolos con la mafia. Su obra maestra, sin embargo, fue la campaña de 1988 que dirigió para Bush padre. Su rival era Michael Dukakis, gobernador demócrata de Massachusetts y favorito inicial en los sondeos. Atwater dio con la historia de Willie Horton, un hombre negro de Massachusetts que cometió una violación estando en libertad provisional. La campaña creó dos anuncios: uno genérico, con la historia de los pases de fin de semana de los que se había beneficiado Horton, pero sin mencionarlo directamente; otro, preparado por un grupo externo, centrado en Horton, con fotos de su rostro y con música lúgubre. El mensaje implícito, por supuesto, era que esa gente era la que cometía crímenes; una apelación racista nada sutil pero nunca explícita.

El mensaje de fondo era lo de menos. Atwater buscaba provocar la indignación demócrata y acusaciones de racismo. Eso daría la oportunidad a Bush de negarlo todo (el anuncio con Horton no era de su campaña), pero a la vez hacía que se hablara de crimen y cárceles, algo que favorecía a los republicanos. Era un guiño bien visible a esos votantes hartos de que se les acusara de racismo y que tenían las mismas «preocupaciones» que ellos.

En Estados Unidos esto se conoce como *dog-whistle politics* («política de silbato para perros»). La idea es que las campañas emitan un mensaje que no es explícitamente racista y que no será percibido como racista por un observador casual. Para un votante con prejuicios raciales y que está familiarizado con la retórica y los mensajes de medios conservadores, sin embargo, ese mensaje es obvio y claro. *Escuchan* el mensaje de que el candidato comparte sus preocupaciones, aunque no lo diga en voz alta. Atwater no fue quien inventó esa estrategia, sin duda («derechos de los estados» era la forma elegante de decir segregación, ya en los cincuenta), pero fue el gran maestro de esta práctica.

La carrera de Lee Atwater fue corta. En 1990 le diagnosticaron un tumor cerebral. Durante sus últimos meses de vida se convirtió al catolicismo, dijo leer la Biblia con devoción y se arrepintió públicamente de sus maniobras y estrategias políticas, llegando a pedir perdón a Michael Dukakis por haber sido tan cruel con él. Murió un año después, apenas cumplidos los cuarenta.

Cuenta la leyenda que cuando sus amigos fueron a limpiar la casa tras su fallecimiento, se encontraron en un cajón la famosa Biblia que decía que le había inspirado envuelta en celofán. Atwater nunca la había leído. El hombre estuvo inventando historias hasta el último día de su vida.[5]

Una relación transaccional

Esta división en cuatro facciones ha hecho que el Partido Republicano deba vivir en la ambigüedad. El GOP siempre ha tenido un debate implícito interno sobre quién controla el partido exactamente, qué facción lleva la voz cantante y qué estaban sacrificando para conseguir sacar sus ideas y su programa adelante.

Tradicionalmente, los republicanos eran un partido que hacía campañas populistas, con sus candidatos insistiendo en la importancia de los valores religiosos. Cuando les tocaba gobernar, sin embargo, quien llevaba la voz cantante era el sector empresarial del partido. Los temas que la facción reaccionaria de las bases veía como prioritarios, como la inmigración, eran ninguneados o ignorados. La derecha religiosa era aplaudida y apreciada, pero el GOP no acababa de darle lo que pedía, fuera por el rechazo de los tribunales, fuera porque nunca era un buen momento políticamente. En política exterior, aunque gran parte de las bases era aislacionista, las élites del partido siguieron metiendo a Estados Unidos en guerras con el mismo entusiasmo de siempre.

Durante las presidencias de Reagan y de ambos Bush, las políticas públicas impulsadas por los ejecutivos republicanos cumplieron con este patrón a rajatabla.

GOBIERNOS REPUBLICANOS

Los republicanos nunca llegaron a controlar la Cámara de Representantes durante la presidencia de Reagan y de Bush padre, y sólo tuvieron el Senado seis de los doce años. El GOP, no obstante, jamás tuvo demasiados problemas para legislar, porque en ambas cámaras seguía habiendo un grupo de legisladores demócratas procedentes del sur y de las zonas rurales

dispuestos a apoyar su programa. Los *speakers* en ese periodo (Tip O'Neal, Jim Wright, Tom Foley) hacían ruido y protestaban de vez en cuando, pero las prioridades legislativas del presidente (bajadas de impuestos por encima de todo, pero también recortes en programas sociales) salieron adelante con votos demócratas.

El legado de Reagan en políticas públicas se concentra en tres áreas. Primero, un endurecimiento tremendo de las penas de cárcel por crímenes federales, que fue imitado por los gobiernos estatales. La segunda mitad de los ochenta y principios de los noventa es la época con las peores tasas de crimen de la historia del país, y la Casa Blanca respondió con prisiones. Segundo, un aumento considerable de la inmigración, que había permanecido en niveles muy bajos desde las cuotas de los años veinte y sólo se había empezado a recuperar en la década anterior. Tercero, y más importante, un colosal aumento de los niveles de desigualdad.

Desigualdades

Hasta 1980, América era más o menos tan igualitaria como Europa. El porcentaje del total de ingresos que iba al 1 % con más renta rondaba el 10,7 %; en Europa, esa cifra se situaba en el 8,5 %.[6] A partir de la presidencia de Reagan, las desigualdades se dispararon. En 1992, el 1 % con más ingresos alcanzaba el 14,7 %, mientras en Europa Occidental se mantenía en el 9 %. Esta brecha iba a seguir creciendo en las décadas siguientes, hasta alcanzar el 19 % para los más ricos en América por un 11,4 % en Europa.

La lista de motivos detrás de esta enorme divergencia es larga y va más allá de lo que podemos cubrir aquí. El punto clave, sin embargo, es que el aumento de las desigualdades no es un accidente, sino fruto de decisiones

políticas concretas y conscientes. Nixon, con su decisión de debilitar los sindicatos, fue quien dio el primer paso, pero la enorme, colosal escalada de la desigualdad es el resultado, por encima de todo, de la erosión sistemática de los derechos de los trabajadores bajo Reagan y Bush.

La debilidad del estado del bienestar americano sólo explica parte de estos cambios. El estado de bienestar americano es muy redistributivo; en 2016, las personas en el quintil más bajo de renta veían cómo su nivel de ingresos aumentaba un 85 % una vez se tenían en cuenta transferencias e impuestos, gracias a programas como el crédito fiscal para rentas bajas o SNAP. El problema es que las rentas bajas antes de estas transferencias, los salarios de «mercado», eran excepcionalmente bajas, inferiores incluso a las de los trabajadores europeos en el mismo escalón de la distribución.

En América, la ley asume que la empresa tiene siempre la razón en cualquier disputa, no hay sindicatos fuertes y las regulaciones laborales más básicas brillan por su ausencia. La mayor parte de las desigualdades se producen antes de que el Gobierno intervenga, es decir, son el resultado de un mercado laboral y una estructura económica que favorece enormemente a los que más tienen.[7] Estados Unidos es un país de pobres muy pobres, clases medias ricas y rentas altas increíblemente acaudaladas que se llevan un porcentaje enorme del pastel.

El autor principal de este modelo económico fue, por encima de cualquier otro, Ronald Reagan.

Dos Américas

Dentro de la desigualdad económica reinante, hay otra serie de indicadores económicos y sociales que empiezan a divergir considerablemente a partir de este periodo: las diferencias territoriales.

Durante el siglo XX el nivel de renta de los estados del sur, más pobres, fue convergiendo lentamente con los del norte. Mississippi, a finales de los años treinta, tenía una renta per cápita que rondaba el 30 % de la de Massachusetts; en 1979, se había acercado hasta el 70 %. Esto fue posible gracias a la combinación de enormes transferencias fiscales del Gobierno federal, desarrollo económico e industrialización.

La convergencia se invierte a partir de los ochenta; Mississippi y el resto del sur pierden terreno respecto a los estados más ricos del norte y las dos costas. A finales de la década de 2010, la renta del estado sureño era otra vez un 55 % de la de Massachusetts. Esta regresión no se debió al fin de las transferencias fiscales (casi un 20 % del PIB de Mississippi son ingresos netos provenientes del Gobierno federal),[8] que incluso se han incrementado durante todo este periodo. Y aunque no está del todo claro por qué estamos viendo este cambio de tendencia, forma parte de otro cambio político que se inició en la era Reagan: el creciente poder republicano en las zonas más pobres del país.

A partir de los ochenta, las mayorías políticas en los gobiernos estatales del sur empiezan a moverse hacia el Partido Republicano. El cambio es a menudo muy lento, como vimos al hablar sobre los partidos (Georgia, por ejemplo, no cambia de color hasta 2003, tal era la persistencia de los demócratas conservadores del sur del país), ya que los demócratas en muchas zonas de Estados Unidos se fueron moviendo poco a poco hacia la derecha para proteger sus mayorías. El debate político se hizo cada vez más nacional a partir de los años noventa, sin embargo, y los demócratas conservadores acabaron por desaparecer a escala estatal.

El control de los gobiernos estatales acabó por intensificar el proceso de divergencia regional del país. Los estados juegan un papel crucial en el sistema de protección social americano; son los encargados de implementar

muchas de las leyes y servicios que ha autorizado el Congreso (sólo pensiones y Medicare, la sanidad para mayores de sesenta y cinco años, son plenamente federales) y tienen un poder reglamentario considerable sobre quién puede acceder a ellos. Son también los actores principales en la regulación de mercados de trabajo, desde horarios laborales a salario mínimo, y en gran parte de la actividad económica. Como consecuencia, las decisiones que se toman en estos gobiernos tienen un impacto tremendo, tanto en qué aspecto tendrán las empresas y los trabajos en el estado como en los niveles de pobreza y los servicios a los que tienen acceso los más desfavorecidos.

Pongamos, por ejemplo, el salario mínimo. A principios de los ochenta, la mayoría de los estados tenían un nivel parecido; el salario federal era bastante generoso y el Congreso lo había ido actualizando. Cuando Reagan llega el poder, sin embargo, el Congreso deja de aprobar subidas periódicas, así que su poder adquisitivo empezó a disminuir. Para evitarlo, muchos estados con electorados más progresistas deciden subirlo, creando diferencias regionales importantes.

En 2023, el salario mínimo federal en Estados Unidos es de 7,25 dólares la hora, una cifra que no se actualiza desde 2009. California tiene uno de 15,50 dólares, Connecticut, de 15, Oregón, de 15,45 en Portland y su área metropolitana y de 13,20 en zonas rurales. Mientras tanto, la inmensa mayoría de los estados controlados por republicanos siguen bajo el mínimo federal. Aunque el coste de la vida en Nueva York o Massachusetts es ciertamente más elevado que en Alabama o Arkansas, las diferencias salariales generadas son importantes.

Si hablamos de sanidad, el desajuste es aún más notorio. Medicaid es el seguro médico público gratuito para personas con pocos ingresos. El Gobierno federal cubre, de media, un 90 % del coste del programa, con los

estados pagando el resto. Cada estado puede decidir, dentro de unos parámetros marcados por la ley federal, el nivel de ingresos máximos que una familia puede tener para acceder al programa. En prácticamente todos los estados del norte y oeste del país, esa cifra es un 138 % del umbral federal de pobreza (1.677 dólares al mes para un individuo, 2.859 para una familia de tres miembros).[9] Es un límite estricto, pero más o menos razonable. En Texas, ese límite para una madre soltera con dos hijos es de 331 dólares al mes; en Alabama, 373; en Florida, 580. En ninguno de esos tres estados un adulto sin hijos puede acceder a Medicaid en absoluto.

Este patrón se repite en todos los aspectos del estado de bienestar americano. El TANF (Temporary Assistance for Needy Families) es el programa que da una (exigua) ayuda monetaria a aquellas familias con hijos que tienen pocos ingresos. En Alabama una madre soltera con dos hijos debe ganar menos de 268 dólares al mes para poder inscribirse; en Arkansas, menos de 278. En California, esa cifra aumenta hasta 1.596 dólares; en Nevada, a 1.644. La ayuda máxima que puede recibir una familia así en Alabama es de 215 dólares al mes, comparada con los 878 de California. Las prestaciones de desempleo oscilan entre medias de 473 dólares a la semana (Massachusetts) y 192 (Luisiana); la duración de la prestación varía entre treinta semanas (Massachusetts) y doce (Florida).

La combinación entre mercados y leyes laborales mucho menos estrictos y estados de bienestar mucho más débiles hace que la pobreza sea mucho peor en los estados del sur que en el resto del país. Nueve de los diez estados más pobres de Estados Unidos, prepandemia, estaban allí;[10] sólo uno (Virginia, que vota demócrata en las presidenciales) tenía una tasa de pobreza por debajo del 10 %. Aunque esta tasa se mantuvo a escala nacional más o menos sin cambios entre 2000 y 2019, en la mayoría de los

estados dominados por republicanos y a lo largo y ancho del sur ha aumentado, mientras se ha reducido en estados demócratas.

Al repasar prácticamente cualquier tabla con estadísticas de salud, economía, pobreza, bienestar material o cualquier otro indicador que se vea afectado por intervención estatal, este patrón se repite, una y otra vez. Los estados del Viejo Sur, ahora totalmente dominados por el Partido Republicano, tienen los peores indicadores de movilidad social, salarios, homicidios (con y sin arma de fuego), consumo de drogas y muertes por sobredosis, madres solteras, divorcios,[11] suicidios, criminalidad, esperanza de vida, enfermedades crónicas, población sin seguro médico, obesidad, muertes por sida y básicamente cualquier otra cifra que se pueda imaginar. Uno puede coger un mapa de los estados que formaron parte de la Confederación, superponerlo a casi cualquier estadística y tener una impresión casi perfecta de las diferencias regionales actuales.

Estas diferencias son a menudo colosales. La tasa de homicidios en Mississippi es casi cinco veces mayor que la de Nueva York. Luisiana tiene casi diez veces más asesinatos por habitante que Massachusetts. La mortalidad infantil en Arkansas es prácticamente el doble que la de California. Los estados con mayor esperanza de vida (todos en el norte y en la Costa Oeste) superan a los menos longevos (todos en el sur) en casi siete años. Todas estas diferencias existían en 1980, aunque llevaban décadas cerrándose poco a poco. En los últimos años, sin embargo, no han hecho más que aumentar.

Si miramos las cifras en agregado, Estados Unidos es un país que parece muy distinto a cualquier Estado de la Unión Europea, con indicadores sociales uniformemente peores. Esa impresión, no obstante, es bastante engañosa. Estados Unidos es, en muchos aspectos, dos países distintos, con indicadores sociales y actitudes políticas increíblemente diferenciadas. Los

seis estados de Nueva Inglaterra (la región más demócrata del país) no desentonarían demasiado en cualquier clasificación europea, con la única excepción de que son mucho más ricos (y desiguales) que cualquier país del Viejo Continente. Si expandiéramos la selección a los estados que han votado demócrata estas tres últimas décadas (Costa Oeste, noreste, zona norte del Medio Oeste), la conclusión sería también bastante similar.

Si cogemos los estados del sur, sin embargo, muchas estadísticas son desoladoras. La vieja Confederación con frecuencia tiene indicadores sociales más parecidos a un país en desarrollo que a una democracia avanzada. La esperanza de vida en Mississippi es inferior a la de Brasil, México o Albania. En Europa, únicamente tres regiones rurales búlgaras tienen una esperanza de vida inferior. Su tasa de homicidios es treinta y ocho veces superior a la española; más cercana a la de Brasil o Colombia que a la de cualquier país europeo.

LA POLÍTICA DE LAS DOS AMÉRICAS

Estados Unidos no es un país dividido, sino bifurcado. En algún momento durante las tres o cuatro últimas décadas, regiones enteras se bajaron del tren del desarrollo económico y se quedaron inexplicablemente atrás. Es muy difícil, sino casi imposible, decir hasta qué punto esta fractura es el resultado de fuerzas económicas fuera del control de los gobiernos o el resultado de decisiones políticas conscientes por parte de los líderes de esos estados y sus votantes. Aunque hay procesos similares en otros países desarrollados donde la desindustrialización y el abandono rural han creado zonas económicamente deprimidas, no soy consciente de que exista ningún lugar con una discontinuidad similar. Mi intuición es que la evolución de

todos estos indicadores es inextricable del modelo de desarrollo conservador en estas regiones, obsesionado con costes bajos, mano de obra barata, regulación limitada, inversión pública mínima y servicios sociales entre escasos e inexistentes.

Si desagregamos los datos, este patrón entre zonas deprimidas cada vez más conservadoras y regiones dinámicas cada vez más demócratas se mantiene incluso dentro de los estados del Viejo Sur. Georgia, Texas o Carolina del Norte son cultural y políticamente sureños, y tienen zonas rurales intensamente pobres y deprimidas con indicadores sociales atroces. Estos estados, no obstante, también albergan alguna de las áreas metropolitanas más dinámicas y que más crecen del país (Houston, Dallas, Austin, Atlanta, Charlotte, Raleigh…), que son mucho más ricas que el resto del estado y que con frecuencia (gracias a la amplia autonomía municipal que tienen los condados y ciudades) tienen salarios mínimos más altos, recaudan más impuestos y gozan de mejores servicios públicos.

Estas ciudades, salvo en muy contadas excepciones, están gobernadas por demócratas.[12] No es casualidad que varios estados sureños se hayan ido acercando hacia los demócratas en las presidenciales, hasta el punto de que Biden ganara en Georgia en 2020. En Estados Unidos, la prosperidad económica está fuertemente relacionada con el voto; según una región se enriquece, esta suele moverse hacia la izquierda. En las elecciones de 2020, Joe Biden ganó en unos 500 condados, mientras que Trump se impuso en más de 2.500. Los condados de Biden concentraban un 71 % del PIB del país, comparado con el 29 % de los condados que votaron a Trump. Lo que vemos, en muchos casos, es que el voto de clase es más débil en los estados ricos, pero no porque los pobres voten republicano, sino porque las rentas altas votan demócrata.

Este patrón campo/ciudad se repite en sentido inverso en estados demócratas, donde las zonas rurales más pobres se han ido moviendo poco a poco hacia la derecha. Toda la región de Upstate New York, el enorme territorio semirrural que va desde los suburbios al norte de la ciudad de Nueva York hasta Búfalo, quinientos kilómetros más al este, es muy republicana y a menudo mucho más pobre que la ciudad, el centro de gravedad del estado. Lo mismo sucede con el interior de California o Washington, o con las enormes zonas rurales que rodean las áreas metropolitanas de Detroit, Chicago o Minneapolis. Pensilvania suele ser descrita como «Pittsburg y Filadelfia, con Alabama en medio». Las únicas excepciones de zonas rurales que no han pasado a ser sólidamente republicanas son Nueva Inglaterra (que es un planeta en sí mismo), las reservas indias en el oeste del país y el «cinturón negro» del sur, las regiones de mayoría afroamericana donde estaban las grandes plantaciones esclavistas antes de la guerra.

Vale la pena señalar, sin embargo, que hablamos de pobreza relativa. La renta mediana familiar del estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi (unos 46.000 dólares), es unos dos tercios superior a la española (sobre 28.000 dólares). Estados Unidos es un país muy rico, incluso en sus zonas más desfavorecidas.

Voto y clase social

Este realineamiento político es otra de las herencias de Nixon, pero es importante recalcar que es geográfico, no necesariamente por clase social. El voto de clase en Estados Unidos es mucho más débil que en Europa, pero sigue existiendo.

En general, los demócratas sacan más votos que los republicanos entre las rentas bajas, pero su margen de victoria ha ido disminuyendo con los años.[13] Jimmy Carter se impuso 62-38 en 1976 entre las familias con menos ingresos,[14] y también, aunque por un margen menor (52-42), en 1980.[15] Dukakis, en 1988, ganó entre las familias con ingresos menores a 63.000 dólares (ajustados por inflación, 25.000 dólares entonces), a pesar de ser vapuleado por Bush. Los márgenes han ido variando de una elección a otra (Clinton, en 1996, es quien saca los mejores resultados), pero incluso Trump, el teórico adalid del voto obrero blanco, perdió entre votantes en hogares con menos de 50.000 dólares anuales (63.000 ajustados por inflación) 51-41 en 2016 y 54-44 en 2020.

La distribución geográfica del electorado distorsiona las diferencias de voto por nivel de renta de forma considerable. Estados Unidos tiene diferencias económicas descomunales entre regiones, y estas se acentúan aún más cuando comparas las áreas metropolitanas, que concentran la actividad económica del país, con las zonas rurales, más conservadoras. El voto de clase parece más débil de lo que es realmente, ya que las zonas pobres son más conservadoras que las ricas, pero los pobres en todo el país suelen votar demócrata. La gran diferencia es regional: las clases altas son mucho más conservadoras en el sur que en el norte.[16] Las rentas bajas blancas son también mucho más republicanas en el sur, especialmente pos-Trump.

Los medios y analistas americanos no suelen fijarse demasiado en las interacciones entre clase social y voto. Esto es, en parte, por la extraordinaria aversión que tienen los americanos en general a hablar de clase social, a pesar de ser una de las sociedades más desiguales y estratificadas del planeta. También se debe a que, si buscamos predictores

de voto, hay otros indicadores más potentes que definen y dividen al electorado con fuerza.

LOS EJES DE LA POLARIZACIÓN[17]

Analizar los patrones de voto en un país tan complejo y contradictorio como Estados Unidos es complicado. Las categorías y clasificaciones demográficas no son independientes entre sí, y las variaciones regionales son enormes. Aun así, podemos hablar de seis factores que debemos tener en cuenta en cualquier análisis: raza, urbanización, educación, edad, género y religión.

Raza

Al hablar de voto en Estados Unidos, es casi obligatorio empezar por la raza. Desde los años sesenta, los demócratas se llevan el voto afroamericano de forma apabullante, ganan con diferencias más o menos amplias el voto latino y asiático, y pierden entre votantes blancos.

El margen en el voto blanco favorable al GOP ha ido aumentando con el tiempo, desde cinco puntos en 1976 (Carter, insisto, era un político infravalorado en extremo) hasta los quince de Trump en 2020. Ocasionalmente, un candidato demócrata consigue cerrar este margen lo suficiente para generar una gran victoria electoral (Clinton en 1996), pero desde 2000 no ha bajado de doce puntos.

El voto latino ha sido bastante volátil y fruto de dolores de cabeza constantes para los demócratas. Durante los ochenta, era un bloque fiable para ellos, pero Bush, en 2004, logró cerrar el margen hasta apenas nueve

puntos. Obama revirtió la tendencia, imponiéndose por treinta y seis gracias al giro antiinmigración del GOP y la Gran Recesión. En vez de consolidarse, los márgenes empezaron a reducirse en 2016 y cayeron a veintiún puntos en 2020.

Parte del problema para los demócratas es que muchos votantes latinos se están «emblanqueciendo», es decir, están siguiendo los pasos de italianos e irlandeses y asimilándose desde el punto de vista cultural. Irónicamente, también estamos viendo una tendencia marcada (y en absoluto novedosa) a que muchos hispanos estén «cambiando de raza» e identificándose como blancos, no como latinos.[18]

La idea de «raza» no es un concepto fijo, sino una identidad fluida que, en muchos casos, tiene un fuerte componente de construcción social. Quién es blanco y quién no lo es ha ido variando a lo largo del tiempo, y quién se identifica como tal depende a menudo más de cuestiones de estatus social y entorno que de ascendencia étnica. Esto quiere decir que cualquier predicción sobre éxito o fracaso electoral en Estados Unidos basada en demografía y grupos étnicos está condenada al fracaso, ya que estos grupos son mucho más inestables de lo que parecen.

Incluso con estos cambios, el electorado americano es cada vez menos «blanco» y más diverso, fruto de las nuevas oleadas de inmigración pos-Reagan. Aunque muchos de los recién llegados harán como sus predecesores rusos, judíos, suecos, alemanes, italianos y demás, y en una o dos generaciones serán más americanos que nadie y votarán republicano, el cambio demográfico favorece a los demócratas, al menos a medio plazo.

Los republicanos llevan veinticinco años debatiendo si la estrategia más razonable para el partido es abrirse a estos recién llegados y minorías o doblar su apuesta e intentar maximizar el voto blanco, que sigue siendo mayoritario. Como veremos después, la respuesta del GOP ha sido mucho

más sutil (y efectiva) de lo que parece. Los demócratas, mientras tanto, no han dado el voto blanco por perdido, y también han empezado a cambiar para recuperar terreno.

Campo, suburbio, ciudad

La fractura urbano-rural en Estados Unidos es abrumadora. En las elecciones de 2020, Biden se impuso 66-33 en las ciudades, pero perdió 33-65 en zonas rurales. Ambos grupos de votantes, no obstante, no llegan a alcanzar la mitad de la población (el 22 % del electorado es urbano, el 26 %, rural). El bloque dominante en la política americana son los suburbios, esos barrios infinitos de casas unifamiliares (enormes para cualquier estándar europeo) con un garaje para dos coches (también enormes) que rodean las grandes ciudades del país.

Los suburbios suelen ser más ricos, más blancos y con un nivel educativo más alto que los otros dos bloques, y fueron, desde siempre, el principal objetivo político del GOP pos-Nixon. El mensaje republicano siempre fue más antiurbano que ruralista, recordando a las amas de casa y padres de familia los horrores del crimen y la violencia en la ciudad, cómo *esa gente* (esto es, negros y latinos) recibían todas esas ayudas públicas y que, si no estaban atentos, estos acabarían por mudarse a su vecindario. Este fue el motor de las soberbias palizas electorales de 1972 y de los ochenta, y fue el electorado que dio la victoria a Bush hijo a principios de siglo.

Trump ganó en los suburbios (47-45) en 2016, pero todo parece indicar que durante su presidencia se pasó de frenada. La conducta errática del magnate, junto con sus constantes escándalos políticos, hizo que los votantes con educación universitaria empezaran a cambiar de partido. La sentencia del aborto hizo lo mismo con las mujeres. Finalmente, el

progresivo cambio demográfico de los suburbios, que, como el resto del país, son cada vez más diversos, acabó por darle este bloque a Biden en 2020 por 54-44.

Educación

En tiempos pretéritos, cuando el GOP era un partido en el que los hombres de negocios y de Estado llevaban la voz cantante, los votantes con estudios universitarios eran republicanos. No por mayorías abrumadoras, se entiende (Bush padre gana este grupo 52-46), pero era parte del tópico de ser una persona seria y cabal de clase media.

Hasta Trump. En un cambio de tendencia de voto que pilló a muchos (empezando por Hillary Clinton) por sorpresa, en 2016 los demócratas perdieron por siete puntos entre los votantes que tenían sólo educación secundaria o menos, y ganaron por once puntos entre licenciados universitarios.[19] La tendencia se reforzó aún más en las presidenciales de 2020, con Biden perdiendo por quince puntos entre aquellos que sólo habían cursado secundaria, pero ganando por catorce entre licenciados. Estas cifras son inseparables de la redefinición de Trump de la coalición republicana en 2016, como veremos más adelante.

Como es habitual en todas y cada una de estas categorías, el nivel educativo produce interacciones fascinantes con otros indicadores demográficos. Dado que el nivel educativo se relaciona con el nivel de ingresos, sería esperable ver un debilitamiento considerable del voto de clase en años recientes. Eso ha sucedido, hasta cierto punto; el margen de victoria demócrata entre los que ganan menos de cincuenta mil dólares anuales no está disminuyendo. Lo que vemos, en cambio, es que Biden

ganó también los votantes con ingresos mayores de cien mil dólares anuales por doce puntos y perdió los que estaban en medio por cinco.

Es decir, tenemos una coalición política realmente extraña que atrae votantes de clase trabajadora y votantes pudientes a la vez, pero que genera rechazo entre la clase media, especialmente entre los que no tienen estudios. El votante arquetípico de Trump, en realidad, no es ni un obrero racista ni un médico reaccionario, sino la «pequeña burguesía». Son los contratistas, fontaneros, gente con un pequeño negocio de jardinería o un taller; vendedores, comerciales o supervisores en un supermercado o en una fábrica. No son los «perdedores de la globalización», sino aquellos que ven cómo otros se han beneficiado más de ella.

Aquí tampoco podemos olvidar la distribución geográfica del voto. Los estados sureños y las zonas rurales suelen tener niveles educativos más bajos, con menos universitarios. Los votantes de clase alta en el sur tienen un porcentaje menor de licenciados, así que el efecto de la educación se confunde y mezcla con clase social, religión (ahora hablaremos de ello), racismo y geografía.

Edad y género

Los demócratas perdieron el voto joven en los ochenta (bueno, perdieron todos los votos en los ochenta) y más o menos empataron en las dos décadas siguientes. No fue hasta 2008, con Barack Obama, que el voto de los menores de treinta años pasó a ser abrumadoramente demócrata, y el voto de los mayores de sesenta y cinco, abrumadoramente republicano. Hay una pequeña montaña de interacciones entre variables que refuerzan esta tendencia. Las generaciones jóvenes son más diversas, más urbanas y tienen un nivel educativo más alto que los mayores de sesenta y cinco años.

También suelen votar menos, para eterna desesperación de los directores de campaña demócratas.

Los americanos están obsesionados con esto de las cohortes de edad, sus experiencias y formación política, y los partidos dedican muchos recursos a entender cómo dirigirse a cada una. Si miramos el electorado por generación, no por edad, las elecciones de 2020 arrojaron amplias mayorías demócratas entre *millennials* (nacidos entre 1980 y 1995) y la generación Z (entre 1995 y 2005), empates entre los de la generación X (entre 1965 y 1980) y los *baby boomers* (1946-1964), y victorias republicanas claras en los votantes de la Silent Generation (1928-1945). En realidad, las ideas políticas no permanecen estables en el tiempo, así que esta clase de segmentación dice algo, pero no demasiado, sobre el futuro demográfico de ambos partidos.

El voto de género emerge con fuerza en los años ochenta, con las mujeres votando mucho más demócrata. El efecto se refuerza un poco a partir de 2016 (Hillary Clinton gana el voto femenino por quince puntos), pero no ha ido más allá; Biden en 2020 ganó este grupo por once. La asociación del GOP con la derecha religiosa y su oposición al aborto viene de lejos, así que esta cifra probablemente haya tocado techo en las elecciones presidenciales. Está por ver su efecto en elecciones legislativas y estatales; en 2022, los demócratas sólo lo ganaron por tres puntos.

Religión

Ah, las cruzadas morales. Más o menos un tercio del electorado dice ir a la iglesia al menos una vez al mes. Trump ganó este grupo por diecinueve puntos. El resto del electorado va a la iglesia unas cuantas veces al año, como mucho, o incluso menos; Biden ganó este por dieciocho.

Estados Unidos es hoy mucho menos religioso de lo que era hace apenas dos décadas. En 2000, un 70 % de americanos decían ser miembros de un iglesia o congregación religiosa, una cifra que apenas había cambiado desde 1940. En 2020, la cifra había caído al 47 %.[20] La pandemia aceleró este descenso, que se ha visto reforzado por la actitud reaccionaria de muchas denominaciones y una generación Z mucho más progresista.

Aunque el voto religioso ha perdido peso en agregado, es un componente crucial del voto republicano. Un 46 % de los votantes de Trump en 2020 van a la iglesia a menudo. Cualquier candidato del GOP está obligado a hacerles caso, tanto en las primarias como en las generales.

Este es un país, además, de múltiples confesiones religiosas, así que es importante saber también qué grupos te están votando. Los evangélicos blancos, de muy lejos el grupo más reaccionario, apoyaron a Trump por 68 puntos en 2020; los católicos se dividieron, 50-49, en favor de Biden, gracias sobre todo al voto latino. Ateos, agnósticos y «nada en particular» (que es, extrañamente, una categoría en los sondeos) fueron abrumadoramente al Partido Demócrata.

Mención aparte merece el voto judío. Son un porcentaje minúsculo del electorado (2 %), pero los republicanos llevan mucho tiempo obsesionados con su apoyo, hablando sin cesar sobre cómo son los mejores amigos de Israel y sobre el antisemitismo de la izquierda. Biden obtuvo el voto judío por 43 puntos. A nadie se les escapa que, más que preocupación por Israel, el sector evangélico del GOP tiene sus histerias milenaristas sobre Jerusalén y el apocalipsis en mente, no la causa judía.

Epílogo sindical

En las elecciones de 2016, Hillary Clinton se impuso 54-38 entre los votantes que vivían en hogares donde alguien era miembro de un sindicato. En el resto, empataron. Ese margen de victoria fue clave para darle a Clinton la victoria en votos absolutos (que no en el Colegio Electoral).

Antes de las elecciones de 2016, el GOP había aprobado leyes de *right to work* en dos estados cruciales del Medio Oeste*,* Michigan y Wisconsin, debilitando a los sindicatos considerablemente. Hillary Clinton perdió Michigan por tres décimas, o menos de 11.000 votos, y Wisconsin por siete décimas, apenas 23.000 votos.

En el año 2016, sólo un 16 % del electorado pertenecía a una familia con alguna afiliación sindical, comparado con un 29 % en 1976. Los sondeos poselectorales de Pew dejaron de preguntar sobre ello a partir de 2018. Los sindicatos, como elemento movilizador del voto de izquierdas, han sido borrados del debate.

Conclusiones

Durante los años ochenta y noventa, el electorado americano fue polarizándose, poco a poco, en dos bloques que seguían las líneas maestras de la coalición Nixon. Entre la presidencia de Clinton y los años de la Administración Obama, uno de estos dos bloques, el conservador, se irá radicalizando poco a poco, adoptando posturas políticas cada vez más intransigentes. A partir de 1992, esta coalición conservadora pasa de ganar a perder elecciones de forma consistente, al menos si miramos quién acaba sacando más votos en las presidenciales. Lejos de tomar nota y moderarse, el Partido Republicano siguió radicalizándose hasta acabar escogiendo como candidato a Donald Trump.

En los siguientes capítulos hablaremos sobre esta polarización asimétrica, los motivos que han llevado al GOP a tener a un personaje como Trump al frente del partido y la respuesta demócrata con Biden.

PARÉNTESIS: *WHITE TRASH*

Una de las cosas que más me sorprendió cuando me mudé a Estados Unidos es el concepto de *white trash*, o «basura blanca». Este término se refiere a un cierto tipo de clase social, gente blanca, pobre y con pocos estudios. No significa «pobre» o «clase obrera», sino que incluye también una connotación cultural peyorativa, personajes embrutecidos, vulgares, ociosos, borrachuzos, horteras y sin futuro. Es la gente que hace la compra en Walmart y Dollar General, ve telenovelas, bebe cervezas *light* espantosas, tiene trabajos manuales, escucha country, sale de casa en pijama a hacer recados y habla un inglés vulgar y torpe.

La *white trash* está muy presente en la cultura popular americana, aunque casi siempre que salen en series o programas de televisión están ahí como objeto de burla o ridiculización. Es la clase de gente que salía en *Tiger King*, *Here Comes Honey Boo Boo*, *Dog the Bounty Hunter*, *Duck Dynasty*, *My Name is Earl*, *Shameless* y semejantes. No todo el mundo que es *white trash* es pobre (es más, varios *realities* tratan sobre *white trash* con dinero), pero siempre son vistos con condescendencia, mirándolos como una especie de degenerados extraños que no saben comportarse.

Junto con la *white trash* encontramos otros conceptos o ideas similares, casi siempre para referirse a pobres de raza blanca. Tenemos *hillbilly*, para hablar de pobreza crónica en los Apalaches, o *redneck*, para zonas rurales del sur, o *swamp people*, para la costa de Luisiana. Nancy Isenberg, en un

libro reciente,[21] habla de la historia de este concepto, siempre presente bajo un nombre, y de su persistente y tóxica presencia en la cultura americana.

Detrás del estereotipo de *white trash* encontramos un amplio grupo de americanos que no sólo son vistos con desdén, sino que tienen toda la razón del mundo en sentirse abandonados. La *white trash* vive en zonas del país con economías deprimidas, estados rurales o posindustriales de donde todo aquel que puede se va. Son lugares donde el hospital más cercano puede estar en una ciudad pequeña a una hora de distancia, donde los únicos negocios parecen ser un Walmart, dos gasolineras y restaurantes de comida rápida.

Los americanos educados y las clases medias, casi todos en las grandes áreas metropolitanas de las dos costas, los ven como la clase de cavernícolas retrógrados sin remedio que viven en todas esas regiones del país que nunca van a visitar. Cuando se le dice a una persona que vive o se siente cercana a este grupo, o a esta identidad cultural, clase social o como la queramos llamar, que las élites progresistas de las dos costas los odian por ser quienes son, y los desprecian, y creen que son mejores que ellos, no se le está mintiendo. Están oprimidos, son ninguneados y discriminados abiertamente. En Estados Unidos ser racista en voz alta es inaceptable y objeto de muerte civil casi de inmediato. Lo de mofarse de los *rednecks*, los *hillbillies* y gente parecida, sin embargo, lo tienes cada día en televisión.

La *white trash,* en general, no vota demasiado; están bastante hartos de todo el mundo para preocuparse por esas cosas. El Partido Demócrata actual a menudo parece que les hable como si fueran aborígenes y los desprecia visceralmente. El Partido Republicano tenía en Trump a alguien que era visto como «uno de los suyos», alguien a quien las élites despreciaban, y consiguió ganar muchos apoyos.

Estos días la izquierda política americana está discutiendo internamente con cierta seriedad sobre qué hacer para recuperar el voto de estos grupos, así que al menos han dejado de ser invisibles. Para empezar, deben sacarse de encima la enorme, insufrible condescendencia que padece el progresismo en este país (y en todos) y empezar a hablar a sus potenciales votantes como seres humanos. Deben dejar de comunicarse en códigos extraños (¿equidad?, ¿racismo estructural?, ¿*latinx*?, ¿interseccionalidad?) y centrarse en lo básico: hablar de oportunidades, de trabajo y de respeto. Especialmente sobre respeto, porque si hay algo de lo que están hartos es de que todo el mundo les trate como la mierda. Les queda mucho camino por delante.

Hay un aspecto de Estados Unidos que nunca deja de sorprenderme y que los americanos parecen incapaces de ver con claridad: este es un país increíblemente clasista, y lo es de una forma mucho más explícita, brutal y directa que cualquier país europeo.[22] Este clasismo se oculta tras las inacabables discusiones sobre raza, racismo y todo lo demás que también permean la sociedad americana, pero suele ser siempre ignorado. En el caso de la *white trash*, este estigma social de clase es casi tan potente como el estigma de raza, y es casi completamente invisible en el debate político del país.

7

Los motores de la polarización

A finales de los años setenta, el movimiento conservador americano tenía ante sí una hoja de ruta para consolidar su hegemonía política. Los cuatro pilares del GOP (derecha religiosa, anticomunismo, libre empresa y derecha reaccionaria) formaban una coalición lo suficientemente numerosa como para dominar la presidencia. La victoria de Jimmy Carter en 1976, sin embargo, había dejado claro que esa victoria no era inevitable; si los republicanos querían ganar, necesitaban organizar esos grupos de manera efectiva, anclándolos al partido.

El agotamiento del New Deal se verá acompañado de varios cambios institucionales favorables. La presidencia de Nixon trajo consigo un Tribunal Supremo mucho menos hostil a la presencia de dinero en política, abriendo la puerta a que el GOP pudiera gastar cantidades ingentes de dinero creando las estructuras organizativas necesarias para movilizar votantes. El declive de los sindicatos dejó un vacío considerable en la capacidad de movilización de la izquierda, lo que desencadenó nuevas oportunidades para los republicanos. El resurgir de la Iglesia evangélica en el sur (fruto, en parte, de su oposición a la desegregación racial) dio lugar a un grupo de pastores y votantes listos para ser movilizados. Y, ya en los ochenta, varios cambios en apariencia inocentes en la regulación de los medios de comunicación del país aseguraron que todos estos actores pudieran ser movilizados e informados en radios y televisiones partidistas.

La mejor manera de explicar la dinámica de la creación del movimiento conservador moderno es mirando con cierto detalle a dos de sus principales componentes, la derecha religiosa y los grupos proderecho a tener armas fuego. Eso nos servirá para identificar las dinámicas y estrategias que el GOP adoptará durante estos años.

Empezaremos por la Asociación Nacional del Rifle y sus aliados, un grupo de presión que nace casi de la nada a mediados de los setenta y se centra en proteger un derecho básicamente inventado por un grupo de legisladores y activistas. Hablemos, pues, de la segunda enmienda.

La invención del derecho a tener armas

La segunda enmienda de la Constitución americana tiene un problema: no se sabe a ciencia cierta cuál es su texto original. La versión «oficial» o, al menos, la que el Tribunal Supremo ha utilizado en sus sentencias, es la siguiente:

> *A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.* [Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho a poseer y llevar armas, no debe ser infringido].

El pequeño problema es que este no es el texto que fue enviado a los estados, o, más precisamente, a todos los estados. Esta es la versión que fue ratificada en Nueva York, Pensilvania, Rhode Island y Carolina del Sur:

> *A well-regulated Militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms shall not be infringed.* [Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho a poseer y llevar armas no debe ser infringido].

Si os fijáis, el texto es el mismo, pero no los signos de puntuación. La primera versión tiene comas esparcidas más o menos al azar, cosa que la hace un tanto ininteligible. La coma entre «Arms» y «shall» sugiere que «well-regulated Militia» y «right to bear Arms» es una enumeración, dos cláusulas separadas por una torpe subordinada («being necessary») que justifica la necesidad de la primera. Es gramaticalmente incorrecta, tanto hoy como en el siglo XVIII. Este no es un detalle trivial, porque la versión con una única coma no sólo es gramaticalmente correcta, sino que tiene un significado completamente distinto. Aquí la «well-regulated Militia» es la única parte necesaria para la seguridad de un Estado libre; el derecho a llevar armas es siempre en relación con la milicia, no el sujeto de una oración coordinada que flota en el éter intentando desesperadamente encontrar ese verbo en pasiva al final. Sigue siendo una redacción pésima, pero al menos no le pega doce patadas al idioma.

Durante casi dos siglos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos interpretó la Constitución según este segundo significado. Las comas eran confusas y «well-regulated Militia» estaba allí, en letras bien grandes. Los estados podían regular sus milicias; eso es lo que permitía la enmienda. Limitar la posesión de armas era perfectamente constitucional.

Tradicionalmente, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) era un grupo de presión más o menos aburrido que se dedicaba sobre todo a hablar sobre caza y pesca, pero poco más. La organización había sido creada en 1871 por dos veteranos de la guerra civil aficionados al tiro, y durante casi toda su historia funcionó como una red de asociaciones y clubes para cazadores; como un club de petanca, pero con armas de fuego. La NRA estaba tan poco por la labor de meterse en política que ni siquiera objetó a las leyes de control de armas de 1934. Simplemente no era su trabajo.

No fue hasta 1968 que la ola de asesinatos políticos motivó que el Congreso aprobara la Gun Control Act que la NRA empezó a despertarse. Los líderes de la organización no se opusieron a la ley, cosa que provocó las iras de un sector minoritario de sus miembros, que querían una respuesta política clara. Entre ellos se encontraba John Dingell, un congresista demócrata muy aficionado a las armas de fuego que recomendó a la NRA empezar una campaña para reinterpretar la segunda enmienda. Dingell formaba parte del consejo de dirección de la organización, y en 1974 escribió un memorándum detallando los pasos que debían tomar para meterse en política de manera efectiva: crear una PAC para influir en campañas, anunciar su apoyo o censura a candidatos, realizar un plan para movilizar miembros a favor o en contra de leyes y toda una estrategia de relaciones públicas.

Los líderes de la NRA, sin embargo, no lo veían claro. Su preferencia era seguir hablando de caza, el uso responsable de las armas de fuego y los clubes de tiro, no construir un grupo de presión. No fue hasta 1977 cuando dos activistas de Texas, Neal Knox y Harlon Carter, lideraron una rebelión contra la «vieja guardia» en la convención de la organización en Cincinnati y apostaron por politizar la NRA en defensa de esa «nueva» interpretación de la segunda enmienda.

A principios de la década de 1970, un grupito de profesores de derecho y abogados empezó a enviar docenas de artículos a revistas legales alegando que la interpretación del Supremo sobre la segunda enmienda era incorrecta. El texto, con ese puñado de comas esparcido más o menos al azar, habla de un derecho individual, no colectivo. Tener armas de fuego en casa es algo protegido constitucionalmente.

Muchos de esos artículos estaban financiados mediante becas, cátedras o *think tanks* variados de la NRA. Muchos eran, como se podía esperar,

invenciones o tergiversaciones interesadas de debates constitucionales que nunca tuvieron lugar. Warren Burger, que fue juez jefe del Supremo durante muchos años, declaró que la reinterpretación de la NRA era «uno de los peores casos de fraude, y repito la palabra "fraude", en la opinión pública americana por parte de un grupo de interés que he visto en mi vida».

A la NRA, sin embargo, le importaban menos los argumentos legales que el poder de movilización política de esta clase de debates. El «derecho a llevar armas» se convirtió en su grito de guerra, un instrumento para recaudar fondos, reclutar miembros y llevarlos a las urnas. La NRA pasó de ser un aburrido club para gente con aficiones ruidosas a un poderoso actor político en el centro del debate. Entre 1977 y 1985 triplicaron su número de afiliados, alcanzando los tres millones de miembros. La asociación de cazadores pasó a ser un vociferante coloso con presupuestos gigantes y dirigentes increíblemente bien pagados. Los fabricantes de armas de fuego, por supuesto, lo vieron como una oportunidad de negocio y financiaron todo el proyecto con entusiasmo.

El Partido Republicano rápidamente se percató de que la NRA era un aliado natural para movilizar a sus votantes. La organización apelaba al electorado rural y era escéptica con las élites de Washington. Hablar de armas de fuego les permitía también hablar de crimen y «derecho a la autodefensa», que era otra manera de señalar complicidades racistas sin decir nada en voz alta. Por añadido, la NRA iba a servir para canalizar y motivar a gran parte de ese sector del electorado, digamos, peculiar en su visión del Gobierno federal como un coloso totalitario y opresivo que iba a confiscarles todas sus posesiones, pero sin tener que decir tonterías conspiranoicas abiertamente.

Así que el GOP abrazó la interpretación más montañesa posible de la segunda enmienda y empezó a buscar el apoyo de la NRA en sus campañas.

Entre ellos no tardó en construirse una relación simbiótica, reforzándose mutuamente tanto en su capacidad de recaudar fondos (y enriquecer a sus dirigentes y a la industria armamentística) como en atraer votos.

La Moral Majority y los evangélicos

La historia de cómo el movimiento evangélico americano acabó aliándose con el Partido Republicano es un tanto confusa y está rodeada de amplias dosis de leyenda.

La eclosión del movimiento empieza a finales de los años sesenta. Siguiendo ese patrón tan americano de «despertares» religiosos y oleadas de nueva espiritualidad, paralelo a la revolución cultural del periodo se produce también un redescubrimiento de la vieja tradición religiosa de pastores carismáticos con iglesias activas y militantes. Muchos *baby boomers*, especialmente en los suburbios del sur, abandonan las confesiones protestantes más recatadas y discretas para unirse a «megaiglesias» con miles de feligreses y un ceremonial más activo y dramático.

Los evangélicos, de por sí, no eran en principio un bloque político demasiado especial. Fueron sin duda importantes en 1976, cuando el evangélico y muy religioso Jimmy Carter los movilizó como parte de su estrategia en las primarias.[1] En las presidenciales su voto se dividió casi a partes iguales; Gerald Ford consiguió un 51-52 % de apoyo a escala nacional, pero Carter se impuso en varios estados clave en el sur para ganar las elecciones.

Algunos activistas dentro del movimiento conservador, sin embargo, veían a los evangélicos como un aliado potencial. Sólo necesitaban encontrar una forma de (primero) unificar esa anárquica constelación de

iglesias, pastores y divas en una estructura política coherente, y (segundo) dar también un tema a politizar que los llevara al redil del GOP.

Es aquí donde las leyendas empiezan a divergir. La historia que suelen explicar los mismos evangélicos y sus aliados en el movimiento conservador es que Roe contra Wade, la sentencia del Supremo sobre el aborto, despertó las conciencias de los feligreses y pastores de todo el país y los empujó a una cruzada moral para defender la vida de los niños no nacidos. Los evangélicos hoy son el bloque más conservador en esta materia, con mucha diferencia, hasta el punto de condicionar a cualquier candidato republicano a que hable sobre ello.

El pequeño problema es que Roe contra Wade es de 1973, y Carter no fue un presidente especialmente antiabortista. La Convención Baptista Sureña[2] había aprobado resoluciones en 1971, 1974 y 1976 defendiendo que las mujeres debían tener acceso al aborto y que el Gobierno tuviera un papel limitado en este tema. Tanto Billy Graham como James Dobson, los dos pastores más célebres del país, renunciaron a pronunciarse sobre el tema y dijeron públicamente que la Biblia no decía nada sobre el feto. La impresión general dentro del movimiento evangélico entonces era que el aborto se trataba de una preocupación de la Iglesia católica, no de algo que fuera demasiado con ellos. Aunque algunos sectores de evangélicos en esos años se movilizaban y escribían sobre el tema, fueron activistas católicos quienes lideraron las movilizaciones.

Según la versión de Paul Weyrich, la sentencia del Supremo que motivó a los evangélicos a meterse en política fue otra: Green contra Connally, en 1971. Weyrich, por supuesto, no es un observador imparcial. Uno de los fundadores de la Heritage Foundation (el *think tank* conservador por excelencia), pionero en el arte de crear grupos de presión y recaudar dinero de militantes y millonarios, es uno de los activistas e intelectuales

conservadores más influyentes de la historia del país, y alguien que siempre se atribuyó el mérito de ser quien reclutó a los evangélicos para que se unieran a la coalición republicana. Weyrich siempre insistió en que el nombre de Moral Majority (Mayoría Moral), el grupo de presión que definiría la derecha religiosa americana, fue idea suya, y no de Jerry Falwell.

No sé si recordaréis, unos cuántos capítulos atrás, cómo en muchos estados del sur la respuesta a la desegregación racial en las escuelas fue la proliferación de multitud de colegios privados religiosos, casi siempre regentados por evangélicos, que sólo admitían a blancos. En 1969, un grupo de familias negras en el condado de Holmes, Mississippi, llevó a juicio al Gobierno federal, hartas de que tres academias privadas alegaran su condición de «organizaciones sociales sin ánimo de lucro» mientras se negaban a admitir a estudiantes de color. El condado había desegregado sus escuelas ese año; el número de estudiantes blancos en los colegios públicos cayó de 771 a 28. Green contra Connally fue la sentencia del Supremo que dictaminó que una escuela privada que discriminara por motivos de raza no podía gozar de exenciones fiscales.

Esta era la oportunidad que Weyrich había estado buscando. Green contra Connally hizo que se encendieran todas las alarmas entre los líderes evangélicos, que tenían, casi sin excepción, un próspero negocio de «academias» libres de impuestos para servir las necesidades del viejo racismo sureño. Aunque Green contra Connally databa de la Administración Nixon y el IRS (Internal Revenue Service; la hacienda federal) promulgó las regulaciones para cumplir la sentencia bajo administraciones republicanas, Weyrich aprovechó varios casos célebres de universidades y colegios que habían perdido sus privilegios fiscales y una revisión reglamentaria menor ya bajo Carter para cortejar y atraer al movimiento. En

vez de hablar sobre segregación, les aconsejó que lo hicieran sobre «libertad religiosa» e «intromisión federal en cómo vamos a educar a nuestros hijos». En el fondo, sin embargo, todos sabían que era cuestión de raza y dinero.

La causa de mantener escuelas sólo para blancos libres de impuestos, no obstante, servía para atraer el apoyo de las élites del movimiento evangélico, pero no a sus miembros. Era, además, completamente tóxica en unas elecciones generales, así que Weyrich y Falwell tenían que buscar un mensaje distinto para movilizar a los fieles. Cuando en las legislativas de 1978 tres candidatos antiabortistas se impusieron en las elecciones a gobernador y al Senado en Minnesota (gracias sobre todo al trabajo de activistas católicos), se dieron cuenta de que tenían aquí una oportunidad. Reclutaron a Francis Shaeffer, un excéntrico teólogo que vivía en Suiza, para producir una serie de documentales en contra del aborto que distribuyeron por iglesias de todo el país.[3] Un año después fundaron Moral Majority, con el objetivo de movilizar el voto evangélico en favor de los republicanos en 1980.

La profunda ironía de todo este asunto, por cierto, es que Ronald Reagan había firmado en 1967, cuando era gobernador de California, la ley sobre el aborto más permisiva del país. Los evangélicos usaron la oposición de Carter a una enmienda constitucional para prohibir el aborto, su caballo de batalla, e ignoraron los antecedentes de Reagan. La derecha religiosa americana nunca ha tenido reparos en apoyar a candidatos imperfectos; sólo exigen pureza a sus oponentes.

La historia real sobre la alianza entre evangélicos y republicanos es, casi seguro, una combinación de varios factores, no sólo por las maquinaciones de Weyrich, la indignación moral de los feligreses o los intentos de preservar la segregación racial. Es muy probable que la competencia con

una Iglesia católica revitalizada por el Concilio Vaticano II y movilizada políticamente contra el aborto tuviera mucho que ver. La creciente asociación de los demócratas con los derechos homosexuales y otros derechos civiles, así como su dependencia de un electorado más secular en el norte y las costas, tampoco ayudó. Fuera como fuere, el GOP acabó por apropiarse del movimiento evangélico casi por completo, convirtiéndolo en uno de los bloques electorales más leales del país.

Militancia y movimientos políticos

La evolución/captura de la NRA y su conversión en una organización politizada o la emergencia del movimiento evangélico son dos casos típicos de un fenómeno en la política americana en la era de la polarización: los emprendedores políticos. Los cambios legales impuestos por el Supremo que permiten la aparición de grupos externos a los partidos para recaudar dinero y financiar campañas crearon todo un mundo de oportunidades para aquellos activistas con buen olfato político y dotes para la publicidad. Con una causa, idea o enmienda constitucional por bandera, ahora podías crear un plan de negocio para reclutar miembros y convertirte en un grupo de presión. Dada la ausencia de controles reales sobre la procedencia de fondos, un líder militante voluntarioso ni siquiera necesitaba inspirar a demasiados ciudadanos de a pie para abrir su chiringuito; bastaba con encontrar uno o varios millonarios que le ayudaran a empezar su organización.

La NRA y la constelación de organizaciones adyacentes que viven de la segunda enmienda (Firearms Coalition, Fundación por la Segunda Enmienda, Gun Owners of America, National Shooting Sports

Foundation…) reciben dinero tanto de sus socios y de pequeñas donaciones como de los fabricantes de armas de fuego y empresas adyacentes. Las organizaciones que defienden reducir el gasto público y las regulaciones federales tienen sus militantes y donantes del movimiento libertario, pero también se benefician de montañas de dinero de millonarios variados y grandes fortunas. Las organizaciones que se dedican a defender los valores tradicionales y luchar contra el aborto recaudan entre feligreses de iglesias evangélicas, así como de una cuota de devotos oligarcas reaccionarios detrás. Los líderes de todos estos movimientos sociales son personas muy convencidas de la bondad de su causa, sin duda, pero al mismo tiempo es gente a menudo muy bien pagada. Sus lobistas cobran sueldos la mar de lucrativos, porque esta es una industria competitiva y un profesional con contactos está muy bien valorado. Una de las salidas más habituales al abandonar el cargo para los legisladores del país, tanto a escala nacional como estatal, es de hecho «pasar» al activismo y trabajar de lobista.

Todo este ecosistema de activismo y militancia se sostiene en la movilización de sus bases, y esto exige mantener un nivel adecuado de indignación. La NRA, como organización que quiere crecer en poder e influencia, quiere reclutar más miembros y hacer que estos sean actores políticos efectivos, llamando a legisladores, enviando cartas, trabajando de voluntarios en campañas y, cuando decreta que alguien es contrario a la causa, acudiendo en bloque a las urnas para derrotarlo. El movimiento evangélico vive alrededor del aborto y cualquier indignación moral que les llame la atención, sean transexuales, condones o letras de canciones obscenas. Un buen emprendedor político debe ser capaz de generar un cierto grado de radicalismo y excitación.

El poder de la NRA, de evangélicos o de grupos similares se basa, sobre todo, en su capacidad para bloquear candidatos. Aunque los miembros de la

NRA (y los aficionados a la segunda enmienda, en general) no son mayoritarios dentro del Partido Republicano, cualquier candidato potencial sabe a la perfección que si habla a favor del control de armas va a perder automáticamente su voto. Los evangélicos pocas veces son mayoría (aparte de en algunos distritos del sur), pero suelen tratar a los candidatos proabortistas con el mismo desdén. La cifra exacta de votantes que deciden su apoyo en función de uno de estos temas dependerá del distrito; normalmente se dice que un 10 % de los votantes del GOP se centran en la segunda enmienda y sobre un 20 % en el aborto. En unas primarias ajustadas con múltiples opciones, esto es más que suficiente para hundir a cualquier candidato.

Ahora recordad que el GOP incluye, de un modo u otro, a varias facciones políticas, desde fanáticos antiimpuestos a movimientos antiinmigración. Cada una de estas facciones opera en el mismo ecosistema que la NRA o los evangélicos, uno de emprendedores políticos, dinero abundante, militantes convencidos y amplias oportunidades de negocio. Por fortuna para el GOP, no todas las causas políticas son igual de atractivas ni tienen la misma capacidad de movilización. Por desgracia, hay un buen puñado de causas que han desarrollado grupos de militantes motivados, forzando a sus candidatos a tener que buscar el beneplácito de facciones que tienen a menudo posiciones políticas más bien impopulares en unas elecciones generales.

Los activistas, mientras tanto, tienen poco interés por moderarse o tolerar desviaciones, ya que con frecuencia están compitiendo con otros grupos de activistas por los mismos donantes, lo que los hace aún más exigentes con *sus* legisladores. A la vez, dado que su relevancia depende única y exclusivamente de que el conflicto que motiva a sus bases siga activo,

también tienen incentivos para ganar, pero no muchos, ya que, si consiguen su objetivo, se quedarán sin trabajo.

Un buen ejemplo de esta dinámica lo vimos precisamente en el activismo alrededor de las armas de fuego. Tras la «rebelión» de 1977, la NRA hizo de la segunda enmienda, esa reliquia extraña de la Constitución, su gran caballo de batalla legislativo, y cambiar la interpretación del Supremo, uno de sus grandes objetivos políticos. La ventaja de tener una revisión judicial de la Constitución como objetivo es que es algo increíblemente difícil de conseguir; necesitas presidentes de tu cuerda que nombren jueces que compartan tu extraña teoría sobre la ley fundamental y estén dispuestos a romper con siglos de precedentes legales. Esto es, tienes décadas de activismo por delante y múltiples batallas legislativas que ganar antes de quedarte sin nada de lo que quejarte.

Gracias a varias carambolas políticas y judiciales, sin embargo, el Supremo se topó en 2008 con un caso sobre armas de fuego (el distrito de Columbia contra Heller) y finalmente adoptó la interpretación de la segunda enmienda como derecho individual, no colectivo. John Paul Stevens, uno de los cuatro jueces en la minoría, siempre dijo que fue la peor sentencia de sus treinta y cinco años en el Supremo. No se atiende a precedentes ni al hecho de que cuando la segunda enmienda fue aprobada muchas ciudades tenían normas estrictas sobre armas de fuego. No se fija en las consecuencias de permitir que las armas sean completamente imposibles de regular. Es una sentencia política, por encima de todo; una de las primeras grandes victorias de la reconquista conservadora de los tribunales.

Lo irónico del asunto es que Heller no fue obra de la NRA, sino de un pequeño grupo de abogados libertarios cansados de que los cobardes del movimiento proarmas no llevaran nada a juicio. El modelo de negocio de la

NRA era luchar por la segunda enmienda, no ganar la batalla (una vez has ganado, ¿cómo recaudas más dinero?).

El Supremo, años después, repitió la jugada con su fallo sobre el aborto (Dobbs contra Jackson, 2022), en otra de esas sentencias que reescriben la Constitución desmontando décadas de precedentes judiciales. Como en Heller, la victoria conservadora ha dejado a gran parte del movimiento evangélico sin objetivos claros ni nada que realmente movilice a sus votantes; la cruzada *antiwoke* es un sustituto relativamente pobre. Lo que Dobbs ha conseguido, sin embargo, es animar al otro lado a organizarse y hacer campaña para revertir la sentencia; el magnífico resultado demócrata en las legislativas de 2022 tuvo mucho que ver con la reacción contra ella.

Cosa que me lleva a hablar precisamente de otro pilar del movimiento conservador de esta era: el activismo judicial.

«Federalistas» judiciales

El movimiento conservador americano, en los años posteriores a Roe contra Wade, siempre estuvo obsesionado con ganar el control del Tribunal Supremo. Su impresión era que la judicatura había interpretado en todo momento la Constitución y las leyes con un sesgo excesivamente progresista, creando e inventándose derechos donde antes no existían y contradiciendo el espíritu de la Constitución.[4] Los conservadores, además, estaban hartos de que jueces nombrados por presidentes republicanos acabaran abrazando causas progresistas en vez de ser estrictamente reaccionarios, como en el caso de Kennedy con el matrimonio homosexual o en los giros a la izquierda de Souter, O'Connor o John Paul Stevens.[5]

Así que decidieron organizarse.

El primer paso fue la creación, en 1982, de la Federalist Society (Sociedad Federalista), una «asociación de profesionales del derecho» de corte conservador. La principal tarea de esta organización es poner en contacto a jueces, profesores de derecho y estudiantes prometedores para que intercambien ideas y conexiones y ejerzan de mentores profesionales. En la práctica, lo que sucede es que los catedráticos y profesores conservadores en las facultades de derecho de élite del país se dedican a identificar y reclutar para la causa a aquellos alumnos con sólidos valores republicanos para que se unan a Federalist. La organización trabaja con ellos para buscarles entrevistas y ponerlos en contacto con jueces, también conservadores miembros del club, para que hagan de *judicial clerks* (secretarios judiciales, un cruce entre becario y asesor) un par de años en puestos clave al licenciarse en la universidad. Aquellos juristas que sean excepcionalmente buenos y prometedores serán recomendados con fervor para ser *clerks* en el Supremo, la «marca» de ser una mente legal de primera categoría en Estados Unidos.

Una vez pasado el paréntesis judicial, los miembros de Federalist tienen la clase de credenciales que abren puertas en cualquier bufete de abogados del país o en casi cualquier departamento de Derecho en facultades de élite. Tienen, además, una red de contactos gigantesca, una organización profesional excepcionalmente bien financiada detrás y, como Federalist no acostumbra a reclutar idiotas, talento de sobra para hacer carrera en el sector privado. A los miembros sólo les queda trabajar para embellecer su currículum y esperar a que sucedan dos cosas: una vacante judicial y un presidente republicano en la Casa Blanca.

Es entonces cuando la cinta transportadora del movimiento judicial conservador entra en funcionamiento: la Federalist Society comparte con el presidente y con los republicanos en el Senado su lista de recomendaciones

judiciales. El presidente nomina y la Cámara Alta se pone a confirmar jueces a destajo. Gente de fuera de la judicatura para jueces de distrito, jueces de distrito para jueces de apelación y jueces de apelación para el Supremo, todos en fila, (casi) todos miembros de Federalist.

Este mecanismo era bien conocido en épocas pasadas, pero los Bush (tanto padre como hijo) tenían ciertas ideas y preferencias sobre a quién nombrar juez. Ninguno de los dos presidentes tragaba con todo lo que venía de Federalist, que era un lobby influyente, pero no dominante, en el proceso de nominaciones judiciales. Trump, en cambio, básicamente externalizó a su favor todo su proceso de seleccionar jueces; es más, hizo de ello una de las promesas de su campaña para granjearse el apoyo del movimiento conservador. A finales de 2023, los seis jueces conservadores en el Supremo son miembros de Federalist, el resultado de años de esfuerzo y movilización política.

Os preguntaréis, por cierto, de dónde sale todo este dinero que debe de costar montar una organización así, lanzar campañas televisivas, movilizar a las bases republicanas, influir en los senadores para que les hagan caso, etcétera. No es barato (hablamos de cientos de millones de dólares gastados a lo largo de varias décadas), pero nadie tiene la respuesta. Literalmente: Federalist mantiene su lista de donantes en secreto, así que nadie sabe realmente de dónde viene el dinero que ha puesto a seis activistas conservadores en el Supremo. Esos seis jueces, por descontado, tienen un incentivo colosal para derogar como inconstitucional cualquier ley que exija a Federalist hacer pública esa información.

Como nota adicional, hay tres jueces en el Supremo que trabajaron en Bush contra Gore, el caso que decidió las elecciones presidenciales de 2000: Neil Gorsuch, John Roberts y Amy Coney Barrett. Los tres, sobra decirlo, estaban en el equipo legal de George W. Bush.

De medios e igual trato

En 1949 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), una de esas agencias regulatorias nacidas en la sopa de letras del New Deal, estableció la llamada Fairness Doctrine, o «doctrina de igual trato»,[6] con el fin de regular los contenidos de los medios de comunicación que emitían bajo una licencia federal.

La Fairness Doctrine se basaba en la idea de que las emisoras de radio utilizan un bien público regulado (una frecuencia en el espacio radioeléctrico), así que tienen ciertas obligaciones hacia la comunidad. Para la FCC, eso significaba la obligación de cubrir temas de interés público, es decir, noticias, y hacerlo de forma que representaran de manera equitativa todos los puntos de vista, sin primar unos intereses u opiniones sobre otros. Estados Unidos no tiene medios de comunicación estatales, pero la Fairness Doctrine permitía garantizar el derecho a la información a través de la regulación federal.

Esta clase de regulaciones son el origen de la tradición periodística de imparcialidad en Estados Unidos. Aunque durante gran parte de su historia la prensa del país fue furiosamente partidista, la Fairness Doctrine creó toda una escuela de neutralidad en los medios que acabó extendiéndose también a los periódicos. Las cadenas de televisión americanas, también bajo la regulación de la FCC, tuvieron desde el principio esta vocación/imposición implícita de servicio. Las emisoras ganaban dinero con su programación de entretenimiento, pero una parte de esos beneficios debían ser invertidos en una división de informativos, que era lo que daba prestigio a la organización.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos siempre consideró válida y constitucional la Fairness Doctrine (¡sorpresa!) para emisiones de radio y televisión.[7] Eso quería decir que, si un candidato, partido, empresa o lo que fuese era criticado en antena, podía acudir a la FCC para quejarse y forzar que la emisora les cediera una cantidad de tiempo equivalente de forma gratuita para poder responder.

A los conservadores, la Fairness Doctrine siempre les pareció una normativa dudosa. No estaba demasiado claro si la FCC tenía, para empezar, autoridad legal para aprobarla, y también había cierta confusión sobre si el Congreso había aprobado algo parecido, indirectamente, en una enmienda legislativa posterior. Tras varios años de equívocos, informes y declaraciones confusas, en 1987 los consejeros de la FCC nombrados por Ronald Reagan decidieron que era hora de abolir estas regulaciones para expandir y reforzar la libertad de expresión. La mayoría demócrata en el Congreso votó a favor de reinstaurar la norma poco después, pero Reagan vetó la ley. Estados Unidos podía tener emisoras de radio y televisión partidistas.

Los conservadores americanos reaccionaron de inmediato. Conseguir licencias televisivas era complicado y la radio en FM estaba saturada, pero el mercado de emisoras de onda corta tenía un vacío considerable. En 1988, un avispado ejecutivo llamado Ed McLaughlin tuvo la idea de contratar a un tipo que trabajaba en una emisora local de Sacramento que se había hecho famoso por sus astracanadas y ganas de meterse en polémicas. Su modelo de negocio era ofrecer los derechos de emisión de su programa, un *talk show* en directo, a cualquier radio que quisiera emitirlo de forma gratuita. Lo único que exigía a cambio era el control de cuatro minutos cada hora para publicidad, que McLaughlin gestionaría directamente.

La personalidad radiofónica en cuestión era un tipo calvo de voz estentórea, fanfarrón, egocéntrico e increíblemente carismático que definiría todo el movimiento conservador durante décadas: Rush Limbaugh.

Vaya por delante, Rush era un locutor extraordinario. El hombre tenía una voz fantástica y la usaba como nadie; pausas, giros, inflexiones, gritos, susurros, era un maestro en mantener al oyente en vilo, siguiendo cada una de sus palabras. Sus monólogos (larguísimos: el programa duraba tres horas, casi siempre con él hablando en solitario) eran coloristas, fascinantes, siempre ofreciendo comentarios acerados, irreverentes, ingeniosos de la actualidad. Hay mucha mucha gente en la radio que ha copiado la fórmula de Rush, pero nadie ha sido capaz de igualarle.[8]

Por desgracia, Rush Limbaugh dedicó sus amplias dosis de talento a destruir el discurso político americano por completo. Un segmento recurrente en sus inicios era una celebración de las personas que habían muerto de sida. Lo hacía al ritmo del «I'll Never Love This Way Again» de Dionne Warwick para mofarse de los «homosexuales militantes» en Nueva York. Rush, años después, pidió perdón por estos numeritos, cosa que sería de alabar si hubiera dejado de comportarse como un cretino. Nunca dejó de hacerlo.

Durante los años noventa, Rush se dedicó a acusar a los Clinton de homicidio (hay toda una estirpe de teorías de la conspiración detrás) o a explicar por qué era imposible distinguir a su hija Chelsea de un perro. Limbaugh era también abiertamente racista (se pasó la campaña de 2008 poniendo una cancioncita con el título «Barack the Magic Negro»), homófobo, misógino, belicista, antiecologista, autoritario y reaccionario en todas las causas que os podáis imaginar. ¿Os habéis preguntado de dónde sale el término «feminazi»? Esta es una de las «aportaciones» de Rush Limbaugh al debate.

Lo que distinguía a Rush, sin embargo, no era tanto que fuera de derechas (porque sus posturas políticas no eran demasiado distintas a las del GOP), sino su retórica, su actitud hacia la política, su increíble toxicidad. Rush Limbaugh fue pionero en hablar de demócratas, liberales y progresistas como los enemigos de la verdadera América. Sus monólogos no eran sobre políticas públicas o ideas o defensas de los valores conservadores (aunque fingían serlo), sino interminables diatribas contra las «élites culturales» de las dos costas que querían «transformar América» y «atacar nuestros valores». Limbaugh vendía y traficaba con el resentimiento, con la idea de que los intelectuales y socialistas de Washington, Los Ángeles y Nueva York estaban todos en el ajo, conspirando para subvertir el país. Lo que Nixon decía en voz baja, Rush lo hacía aullando a un micrófono, gritándole a la audiencia exactamente lo que quería oír.

Como maestro de la radio que era, Rush ofrecía una sensación de comunidad, de formar parte del club de los que sabían la verdad sobre el país, defendiéndolo contra la maquinaria pijoprogre que todo lo controla. Grandilocuente, infatigable, dominante desde su tribuna radiofónica, Limbaugh mentía casi tanto como hablaba, pero lo hacía con la autoridad del que se cree intocable. No hay cifras exactas sobre las audiencias del programa de Rush Limbaugh en sus años de gloria (entre 1990 y 2012) porque Estados Unidos tiene, inexplicablemente, pocos datos públicos fiables en este aspecto.[9] Lo que está claro es que las bases republicanas adoraban a Rush, y los líderes del partido, ya desde los noventa, hicieron auténticas piruetas para conseguir su aprobación y aplauso.

Las élites del GOP eran demasiado educadas, demasiado importantes como para caer en el burdo racismo de Rush o repetir sus consignas maniqueas. No dudaron lo más mínimo, sin embargo, en guiñar el ojo,

aprobando de forma implícita lo que hacía y decía, porque era útil para su agenda política. Rush era el cavernícola populista que indignaba a las masas contra los demócratas; el Partido Republicano era la única alternativa a ellos. Esta alianza, este pacto con el diablo, es lo que ha definido al Partido Republicano durante las tres últimas décadas.

La influencia de Limbaugh va más allá de dar un arsenal retórico al populismo conservador de medio mundo. El éxito inmediato de Rush demostró que había una demanda insatisfecha colosal en el mercado mediático americano de medios de opinión conservadores. Del mismo modo que la «liberalización» de las donaciones políticas trajo consigo a miles de emprendedores buscando hacer de la agitación social y el activismo su modelo de negocio, el final de la Fairness Doctrine y el éxito de Limbaugh provocaron una explosión de medios y conservadores indignados. La victoria de Bill Clinton en 1992 les dio lo que cualquier todólogo populista airado necesita como el aire, un enemigo, y durante su presidencia fueron a la guerra para salvar a América.

Los Clinton, por descontado, distan mucho de ser perfectos, y la presidencia de Bill tuvo un puñado de escándalos más o menos importantes. La cantidad de libros, documentales y horas de radio y televisión dedicados única y exclusivamente a demonizarlos desde 1992 hasta la fallida campaña presidencial de Hillary en 2016 fue absolutamente descomunal. Hay una industria entera de teorías de la conspiración que va desde que orquestaron múltiples asesinatos a que Hillary es una lesbiana que lleva décadas en un matrimonio falso con Bill, pasando por toda clase de acusaciones sobre canales pedófilos y absurdos similares. Si eras conservador en la América de los noventa y consumías medios de derechas, la era Clinton no fueron ocho años de paz, prosperidad nunca vista y superautopistas de la

información, sino una especie de caos político inenarrable bajo una presidencia opresiva y corrupta.

Fox News

De toda la constelación de medios y líderes de opinión que emergieron durante esa época, ninguno ha conseguido tener el peso e influencia de Fox News. El magnate de prensa y televisión australiano Rupert Murdoch había entrado en el mercado televisivo americano en 1986 con Fox, una cadena de televisión generalista que buscaba competir con NBC, CBS y ABC. No fue hasta 1995 cuando tuvo la idea de crear un canal de noticias por cable que sirviera de contrapunto a CNN y los informativos tradicionales, que seguían con la misma línea editorial apartidista/centrista tradicional americana. Para lanzar la cadena, Murdoch recurrió a nuestro viejo conocido Roger Ailes y su talento único para dominar la conversación política.

Ailes, como Limbaugh, era un maestro de la comunicación, y construyó una cadena con una fuerte identidad visual e imagen de marca, con gráficos ruidosos, fondos llenos de animaciones y movimiento, transiciones con toda clase de ruidos, logos y letras volando, y ayudas y refuerzos visuales por doquier.

Durante la mayor parte del día Fox News funciona como un canal de noticias más o menos tradicional, con un sesgo conservador, pero sin grandes aspavientos más allá de algunas decisiones editoriales peculiares. A partir de las seis de la tarde, en el horario de máxima audiencia, Fox emite programas de «opinión» y «análisis» abiertamente partidistas. En ellos, los presentadores «explican» las noticias, siempre con una fuerte dosis de crítica a los «medios generalistas», que están ignorando la historia o dando «visiones sesgadas» de lo que está pasando.

Ailes siempre fue muy bueno identificando voces con talento, y Fox ha demostrado en toda su historia una gran habilidad contratando a presentadores con la mezcla ideal de carisma y capacidad para generar polémica. También ha sido capaz de dotar a la cadena de una fuerte identidad propia con una audiencia leal a la marca, no a sus presentadores. Cada vez que una estrella de Fox era víctima de un escándalo inasumible para la cadena (como Bill O'Reilly, acoso sexual), se volvía demasiado loco y caía en las teorías de la conspiración dementes (Glenn Beck) o mentía de forma tan maliciosa como para provocar una indemnización millonaria por difamación (Tucker Carlson), siempre encontraban a alguien que los reemplazara sin perder audiencia. La lealtad hacia la cadena es brutal; los votantes republicanos sólo se fían de Fox como fuente de noticias fiable, y suelen recibir sus noticias únicamente de Fox News.[10] En un estudio de Pew Research, dos tercios de los votantes republicanos veían a la cadena como una fuente fiable; ningún otro medio recibía la confianza de más de un tercio de esos votantes.

Esta lealtad en ocasiones ha sido letal para sus espectadores. Tras la epidemia de la COVID-19, varios estudios académicos encontraron una relación causal clara entre ver Fox News y la tasa de vacunación. Estados Unidos ha sido el único país del mundo desarrollado donde la identificación partidista se ha convertido en un predictor fiable de la probabilidad de morir por coronavirus. Fox News llenó sus informativos de escépticos y políticos hostiles a la campaña de vacunación que se pasaron toda la pandemia minimizando los riesgos del virus para proteger a Trump.[11] El exceso de mortalidad entre votantes republicanos debido a la COVID fue un 43 % superior al de los votantes demócratas.[12]

Curiosamente, Fox News no tiene demasiados espectadores. Sus programas de más audiencia suelen rondar los dos millones y medio de

televidentes; incluso en sus mayores momentos de gloria durante la campaña presidencial de 2020, Tucker Carlson apenas pasaba de tres millones. Estas audiencias son mucho mayores que las de MSNBC (la segunda cadena más vista en *prime time*) o CNN, pero son muy inferiores a los entre diecisiete y dieciocho millones que suman los tres noticiarios de las cadenas generalistas.

Los espectadores de Fox News, no obstante, no sólo son mucho más leales y están mucho más politizados que los de cualquier otro medio, sino que además son casi literalmente las bases del Partido Republicano: la gente que vota en primarias. Esta audiencia es a menudo cómicamente distinta al electorado en general en sus ideas y opiniones políticas. En los sondeos, de forma consistente, detestan a Biden, adoran a Trump, creen que Estados Unidos está en declive y la economía ha entrado en barrena (cuando el presidente es demócrata) o que todo va bien y a mejor (cuando es republicano). Aunque esta interpretación sesgada de la realidad también existe en las bases demócratas, es mucho más intensa entre la audiencia de la cadena.

La influencia de Fox News se basa, por tanto, menos en sus cifras de audiencia y más en la «calidad» de esta. Es una cadena de las bases para las bases que marca la agenda del Partido Republicano más que cualquier otro medio. Fox News refleja e influye en lo que piensan las bases conservadoras en Estados Unidos. Todo lo que dicen los políticos del GOP suele tener su origen en Fox News. Si a eso le sumamos la con frecuente malsana obsesión del resto de los medios generalistas por responder a lo que está cubriendo Fox, poniéndose a la defensiva cada vez que la cadena de Murdoch les critica por estar sesgados, el resultado es un canal abiertamente partidista que tiene una capacidad descomunal para definir la agenda política del país.

Curiosamente, este aparato mediático de radio, televisión e internet conservador no se ha visto replicado en la izquierda. Durante los noventa, hubo algún intento de replicar el modelo de radio conservadora con Air America, pero nunca fue rentable. En televisión, la izquierda no ha tenido un Rupert Murdoch dispuesto a lanzar un canal de noticias. Es posible que las bases progresistas sean un poco menos susceptibles o aficionadas a la propaganda (y, de hecho, hay varios estudios en este sentido); es posible también que algunos medios tradicionales hayan reaccionado a Fox moviéndose un poco hacia la izquierda (ese es el caso de MSNBC). Sea como fuere, no existe un ecosistema de izquierdistas hiperventilados radicalizando a los votantes de primarias demócratas y empujando al partido lejos del centro.

Más allá de las audiencias y del efecto de Fox sobre los votantes, los medios políticos aparecidos en los noventa también jugaron una parte importante en transformar la política en entretenimiento. Los canales de noticias de veinticuatro horas, los interminables programas de radio sobre actualidad o la horda de medios en internet necesitan crear tramas, narrativas e historias para mantener a la audiencia interesada. Nadie se poner a ver CNN, MSNBC o Fox para escuchar debates detallados sobre los efectos del mandato individual en el mercado de seguros médicos o la progresividad fiscal de un impuesto sobre el valor añadido. La audiencia quiere ver conflicto, peleas, discusiones, quién gana y quién pierde. Quiere escuchar a «expertos» hablar sobre estrategia o sondeos, y el drama de una votación ajustada.

Una de las grandes innovaciones de Fox fue atreverse a cubrir la política como una competición deportiva o un espectáculo teatral, una lucha de *wrestling* donde es más importante ganar y montar un número que lograr aprobar leyes de calado. Prestar demasiada atención a la política acaba por

trivializarla. Cuando Trump entra en escena, en 2016 (alguien que participó como invitado especial en varias peleas de *wrestling,* por cierto), esta tendencia a primar el espectáculo sobre la sustancia del debate acabaría por tener consecuencias.

La gran ironía de la historia de Rush Limbaugh y Fox News es que su legado en políticas públicas concretas, en cambiar el rumbo del país en algún tema específico, es prácticamente inexistente. Rush, aun con todos sus aires de intelectual, nunca fue alguien que tuviera propuestas o ideas concretas (aparte de hablar de *freedom*); se oponía a los demócratas, pero no ofrecía nada más. Durante las últimas tres décadas el GOP ha perdido más elecciones de las que ha ganado y ha sido derrotado repetidamente en las guerras culturales, del matrimonio gay a la inmigración. El estado de bienestar ha seguido creciendo, incluyendo la primera ley de sanidad federal bajo Obama.

El legado de Rush y Fox ha sido odio y división para el país y enormes cantidades de dinero para ellos mismos, no victorias políticas.

La reacción demócrata y la era de los presidentes débiles

Mientras los republicanos se dedicaban a organizar, apaciguar, radicalizar y administrar su coalición como buenamente podían, los demócratas no se quedaron exactamente de brazos cruzados.

Los partidos americanos no cambian de manera estratégica, sino que evolucionan de forma orgánica. Durante los ochenta, los demócratas fueron perdiendo lentamente sus bastiones en el sur, según sus legisladores más conservadores se jubilaban, cambiaban de partido o eran derrotados por candidatos republicanos. Con los sindicatos, que habían sido la espina

dorsal del partido, en completa decadencia, los demócratas buscaron una coalición alternativa al GOP.

Se toparon con dos problemas principales. Primero, muchos de sus aliados naturales, como el naciente movimiento LGBTIQ, tenían un peso electoral escaso, generaban rechazo en votantes moderados y sus militantes se concentraban en las zonas urbanas, donde ya estaban ganando. Segundo, con el voto blanco cada vez más férreamente en manos republicanas, las décadas de escasa inmigración les habían dejado sin nada que pudiera compensar sus pérdidas.

En 1992, sin embargo, el partido tuvo varios golpes de suerte. Para empezar, la primera guerra de Irak hizo que George Bush alcanzara unas cotas de popularidad nunca vistas. Muchos notables demócratas se asustaron y decidieron o no presentarse a las primarias o retrasar su candidatura. Eso permitió que un talentoso pero casi desconocido gobernador de Arkansas, moderado, populista y con un marcado acento sureño llamado Bill Clinton decidiera presentarse a las elecciones y acabara por ganar la nominación por sorpresa. Clinton era lo que se conocía como un *new democrat*, miembro de una cohorte de políticos jóvenes mucho más liberales en lo económico que el *establishment* tradicional del partido.

En segundo lugar, la economía se metió inesperadamente en una recesión, haciendo que la popularidad del presidente se resintiera. George Bush era la antítesis del político populista, así que en vista del aumento del déficit rompió su promesa electoral y subió los impuestos. Con ello, ofendió en gran medida al sector económicamente liberal del GOP, que lo vio como una traición del sagrado legado de Reagan.[13]

Bush, además, en el fondo era un aristócrata de Connecticut, así que nunca fue amigo de dar coba a la derecha religiosa o al populismo rancio del ala rushista del partido. Eso dio a los demócratas un tercer impulso,

cuando un señor llamado Ross Perot, un excéntrico magnate del petróleo de Texas, se presentó a las elecciones como candidato independiente apelando, precisamente, a esos dos grupos a los que había alienado Bush. La campaña de Perot fue increíblemente anárquica y chapucera y su candidato a vicepresidente protagonizó alguno de los momentos más absurdos jamás vistos en un debate electoral,[14] pero estaba lo bastante bien financiada como para conseguir un 19 % del voto. Por desgracia para el GOP, la mayoría de esos votantes provenían del Partido Republicano, y Clinton llegó a la Casa Blanca con un 43 % de apoyo.

En ese momento pareció una victoria accidental, y más aún cuando en las legislativas de 1994 el Partido Republicano consiguió el control de la Cámara de Representantes por primera vez en cuarenta años. Clinton era visto como un presidente impopular, superado por Washington, incapaz de sacar adelante ninguna de sus prioridades. La estrategia sureña del GOP finalmente había culminado en mayorías en el Congreso; las ventajas estructurales del partido en el Senado y el giro conservador del país auguraban años de dominación completa conservadora.

El sistema político americano da ciertas ventajas estructurales al GOP, gracias a su tendencia a sobrerrepresentar zonas rurales y un Tribunal Supremo con dos décadas de nombramientos republicanos detrás. La coalición republicana está distribuida de una forma mucho más eficiente electoralmente (los demócratas tienen la mala costumbre de apilarse todos en las ciudades) y la «mayoría silenciosa» nixoniana era, francamente, bastante mayoritaria. El votante medio en Estados Unidos estaba bastante a la derecha del centro; el GOP podía ganar elecciones con comodidad siempre que gobernara con moderación.

Newt Gingrich, el nuevo *speaker* republicano de la Cámara de Representantes, no era alguien que creyera en la moderación. Su teoría de

gobierno era que si el sistema político favorece a la derecha, su obligación era gobernar tan a la derecha como fuera posible, ya que podían ganar elecciones igualmente sin apelar al centro. Newt, en vez de buscar acuerdos bipartidistas con el presidente, optó por la confrontación. No más acuerdos ni consenso; era hora de ir a la guerra.

Como *speaker*, Gingrich adoptó un mensaje de hostilidad hacia los demócratas, acusándolos de ser corruptos, antipatriotas y querer destruir América. Esta clase de palabrería es casi habitual en el Estados Unidos pos-Trump, pero en 1995 era revolucionaria en boca de un político. Newt buscaba siempre la confrontación, el bloqueo y primar el perfil ideológico del GOP a cualquier clase de acuerdo, imponiendo una férrea disciplina de partido. La era de la polarización había llegado.

Durante la campaña, Gingrich había prometido reducir el gasto público. En vez de buscar una solución pactada con la Casa Blanca, los republicanos adoptaron una posición intransigente y rechazaron cualquier acuerdo presupuestario, forzando el primer gran cierre del Gobierno federal de la historia.[15] A este los republicanos añadieron un súbito frenesí de activismo y leyes antiinmigrantes, incluyendo un referéndum en California para reducir su acceso a las escuelas que indignó al voto latino.

El problema, sin embargo, es que corrían el riesgo tanto de pasarse de frenada como de que Bill Clinton simplemente se moviera a la derecha y los dejara sin espacio alguno en el centro. Clinton aprobó, con votos republicanos, una reforma draconiana del estado de bienestar (que la izquierda nunca le ha perdonado) y se puso a hablar de las maldades del rap y de la decadencia de los valores familiares, robando espacio electoral al GOP. Esto, sumado a la reaparición de Ross Perot como candidato (que acabó sacando un 8,4 % del voto), le llevó a ser reelegido con comodidad

en 1996 (49-41), aunque los demócratas no recuperaron el control del Congreso.

Mi impresión, de todos modos, es que la figura de Newt Gingrich es menos importante de lo que parece. Su estrategia de confrontación era lógica como respuesta a lo que le exigía su propio partido. También lo era dado el hecho de que el sistema electoral favorece al GOP de tal manera que un empate en votos se traduce en una victoria. El *speaker* fue la cara visible de la división partidista y la política de la confrontación en Estados Unidos, pero, más que una estrategia, lo que estaba haciendo era responder a incentivos. Años de activismo conservador, «emprendedores» de la indignación y medios de comunicación cada vez más vociferantes habían empujado al Partido Republicano hacia la derecha; Gingrich tan sólo era un reflejo de su propio grupo parlamentario.

De forma más significativa, el Partido Republicano bajo Gingrich era, por primera vez, una coalición política coherente. Tras años de realineamiento político, el GOP finalmente estaba ganando en el sur, y las fracturas sociales que definen el voto en Estados Unidos (campo-ciudad, renta, raza, género) se habían consolidado en dos bloques coherentes. Dicho en otras palabras: la era de congresistas republicanos moderados de Massachusetts que estaban a la izquierda de legisladores demócratas conservadores de Alabama había tocado a su fin. Los Rockefeller Republicans, esos patricios centristas moderados con aires de hombres de Estado típicos del noreste del país (y llamados así por Nelson Rockefeller, gobernador republicano de Nueva York en los sesenta), se había extinguido casi por completo, y los *dixiecrats* habían pasado a la historia.[16]

Estados Unidos tenía, por primera vez, algo parecido a un sistema de partidos compuesto por dos formaciones políticas ideológicamente coherentes, y sus dirigentes estaban actuando en consecuencia. A pesar de

que los partidos americanos siguen sin tener la estructura interna y centralizada de sus equivalentes europeos, tanto demócratas como republicanos empezaron a comportarse y votar como ellos. En los años setenta, los partidos americanos votaban en bloque en menos de un 60 % de las ocasiones; durante la presidencia de Obama, esa cifra superó el 90 %.[17]

Los líderes republicanos (el problema es mucho menos pronunciado en el lado demócrata) también han descubierto que mantener el control de su propio grupo parlamentario es cada vez más complicado. Los legisladores que representan a distritos más conservadores (no es inusual ver distritos con representantes ganando 70-30 estos días) suelen ser mucho más radicales que el resto del partido, pero sus líderes necesitan sus votos para poder legislar. En años recientes, los *speakers* y los jefes de mayoría republicanos han tenido que dedicar enormes esfuerzos y energías a apaciguar y contentar a sus extremistas, a menudo sin éxito. Echar a su propio *speaker* es casi una tradición del GOP.

Inevitablemente, este cambio ha sido una fuente constante de problemas. La Constitución de Estados Unidos no es sólo presidencialista, sino que está diseñada explícitamente para operar sin partidos políticos coherentes. La aparición de dos formaciones que actúan casi como bloques parlamentarios hace muy difícil alcanzar acuerdos. Dada la estricta división de poderes y la estructura bicameral del Congreso, acabamos por tener un sistema político con múltiples puntos de bloqueo y actores con capacidad de veto.

Elecciones en la era de la polarización

Desde 2000 hasta 2016 (una vez Ross Perot deja de incordiar), el patrón de las elecciones en Estados Unidos iba a ser el siguiente. Tenemos, primero, un Partido Republicano que, debido a presiones internas, tiende a situarse

considerablemente más lejos del centro que los demócratas.[18] El GOP inició su lenta marcha hacia la derecha a finales de los años ochenta, y no ha dejado de irse hacia el monte desde entonces; los legisladores republicanos hoy son mucho más reaccionarios y conservadores que en la era Nixon.

Segundo, esta tendencia del GOP a escorarse se ve compensada en gran parte por las ventajas estructurales que el sistema electoral e institucional da a la derecha en Estados Unidos. Dada la ventaja intrínseca de los republicanos en el Senado, el Colegio Electoral y la Cámara de Representantes (gracias a un uso entusiasta de *gerrymandering*, del que hablaremos luego), el partido puede presentar candidatos más conservadores que la media del electorado y seguir siendo competitivo. Muchas de las posiciones del GOP en temas como el aborto, el control de armas, los impuestos a los ricos o la sanidad son tremendamente impopulares, pero los sesgos en el sistema político les permiten obtener mayorías igualmente.

Tercero, el Partido Demócrata ha aprendido a ser lo suficientemente flexible en lo ideológico como para poder ganar elecciones incluso con el viento en contra. El partido, además, ha sido capaz de evitar (casi) siempre la espiral radicalizadora a la que se ha visto sometido el GOP y suele escoger candidatos relativamente centristas en sus primarias.

La menor radicalización en la izquierda se debe, en gran medida, a la propia evolución de la coalición demócrata. El movimiento sindical americano (preextinción) era populista en lo económico pero muy moderado en temas sociales y culturales. Los pocos sindicalistas que quedan (casi todos en el sector público) son, inevitablemente, aún más partidistas que el *statu quo*. Los votantes afroamericanos, el bloque más leal de votantes del partido, son en general más religiosos que el resto del

electorado y bastante moderados en materia económica, algo que hace muy difícil que un candidato realmente izquierdista pueda prosperar.[19] Esta tendencia se repite, con más intensidad, entre los votantes latinos, que el partido ahora teme perder.

Por último, el cambio de tendencia en el voto según el nivel educativo y el voto suburbano han añadido muchos votantes relativamente moderados en lo económico, aunque un poco hiperventilados en temas culturales. Dada la abierta hostilidad de la derecha republicana a derechos civiles e inmigración, los demócratas tienen un bloque fiable, aunque poco amigo de nominar radicales como candidatos.

El resultado de combinar estos tres factores ha sido casi tres décadas de elecciones increíblemente igualadas. Aunque el Partido Demócrata, a partir de 1992, ha sido capaz de ganar el voto popular en las presidenciales con bastante consistencia (los republicanos sólo han sacado más votos en una ocasión desde entonces, en 2004), nunca han dado con una fórmula consistente para sacar mayorías en el Congreso. Los republicanos, aunque se las han apañado para ganar la presidencia de chiripa en dos ocasiones (2000 y 2016), han tenido una marcada tendencia a escoger candidatos espantosos en el Senado, así que sólo han controlado la Cámara Alta ocasionalmente.

Durante este periodo de igualdad, ambos partidos han tenido sus momentos de euforia cuando, tras una gran victoria electoral, sus dirigentes creían que habían dado con la estrategia mágica para abrir una nueva era de hegemonía política. En 2004, tras la (modesta) victoria de Bush ante Kerry (2,4 de margen), los republicanos creyeron que estaban ante una nueva era de patriotismo y valores americanos en la que el conservadurismo compasivo y su énfasis en la igualdad de oportunidades les iba a garantizar la victoria. La crisis financiera de 2008 les puso con rapidez en su sitio. Los

demócratas, tras la reelección de Obama en 2012 (3,9 puntos) también creyeron ver una nueva era de dominio progresista anclado en el voto joven, femenino, LGBTIQ, la pujante minoría latina y los nuevos movimientos sociales. La victoria de Trump en 2016 (quedando 2,1 puntos por debajo de Clinton) les despertó abruptamente de sus ensoñaciones.

Las elecciones de 2000 merecen una nota adicional. Al Gore se impuso en el voto popular por medio punto, un margen extraordinariamente pequeño en condiciones normales. En Florida, el estado que resultó decisivo en el Colegio Electoral, el margen fue de 0,009 puntos (537 votos). La batalla legal por el recuento ha sido objeto de decenas de libros y varias películas; hay demasiadas historias como para repetirlas todas aquí. Es otra de esas elecciones donde el resultado fue tan ajustado que todo fue determinante para decidir el ganador final, desde el espantoso diseño de las papeletas electorales en algunos condados a la legislación estatal que prohibía votar a cientos de miles de personas con antecedentes criminales.

Quienes acabaron decidiendo el resultado final, de todos modos, no fueron los votantes del estado, que nunca acabó por completar un recuento decente. Quien dio la presidencia a Bush, en una decisión 5-4, fue el Tribunal Supremo. Los cinco jueces que votaron a favor de parar el recuento habían sido nombrados por presidentes republicanos. De los cuatro jueces que votaron en contra, dos habían sido elegidos por Clinton, uno por Ford y otro por Bush padre. El Alto Tribunal, una vez más, se metía en política reflejando las opiniones de políticos que hacía años que habían dejado el cargo.

Debido a la disciplina de voto, los partidos ahora sólo tienen la oportunidad de aprobar legislación ambiciosa cuando tienen la «trifecta», es decir, las dos cámaras del Congreso y la presidencia. Esto ha ocurrido en diez de los últimos veinticuatro años: los demócratas, de 2008 a 2010 y de

2020 a 2022, y los republicanos, de 2002 a 2006 (gracias al 11-S e Irak) y de 2016 a 2018. En estos periodos de control unificado, los republicanos siempre han hecho lo mismo: bajar impuestos a los ricos, mientras que los demócratas han conseguido reformar la sanidad, leyes de cambio climático, regulación financiera, planes de estímulo fiscal y grandes programas de infraestructuras, entre otras cosas.

Es decir, los demócratas han sido mucho más efectivos sacando adelante su agenda cuando han tenido la oportunidad, mientras que las bases republicanas han vivido, muy a menudo, en un mar de frustraciones.

La coalición republicana y sus críticos

El juego de radicalismos, populistas y demagogia escondía la principal debilidad del Partido Republicano.

El GOP en la era Nixon (hasta 2012), como hemos visto, estaba construido sobre una especie de pacto con el diablo. Las élites del partido acudían a elecciones apelando a esos cuatro grupos que componían sus bases. En las urnas, la derecha religiosa y los populistas resentidos eran los que aportaban la mayor parte de los votos. Una vez en el poder, sin embargo, eran las élites económicas y los halcones en política exterior los que llevaban la voz cantante y sacaban adelante la mayor parte de su agenda. Los otros dos grupos, mientras tanto, se llevaban promesas de cambios futuros (nominaciones al Supremo), guiños cómplices y poco más. Ni las administraciones republicanas ni las mayorías conservadoras en el Congreso prohíben el aborto, ilegalizan la sodomía, cierran las fronteras o dan su merecido a las élites progresistas. No devuelven América a quienes merecen dirigirla, el hombre blanco indignado de los suburbios. Los

candidatos republicanos insinúan que van a hacerlo, se hacen fotos con activistas durante las campañas y actúan como si les importara mucho, pero una vez en el poder nunca producen los resultados prometidos.

Siempre tienen excusas. A veces es que no tienen suficientes votos. Otras, que no controlan la Casa Blanca o hay otras prioridades más urgentes. Lo que hacen es ponerse de perfil o no dar prioridad al asunto en la agenda, o incluso distanciarse de las ideas más radicales para parecer moderados.

La evolución del descontento creciente de las bases republicanas con sus élites no es una historia lineal ni uniforme. La presidencia de Bush padre acabó con amplios sectores del partido hartos del presidente, tanto en el lado económico (debido a su subida de impuestos) como social. Durante los noventa, las iras republicanas fueron parcialmente aplacadas por el alocado liderazgo de Newt Gingrich como *speaker*, aunque se vieron frustradas tras las repetidas derrotas legislativas bajo su mandato. Bush hijo fue escogido como el candidato de la derecha religiosa y un (relativo) centrista en lo económico. Una vez en la Casa Blanca, su gobierno estuvo dominado por lo peor de los halcones en política exterior y los ultraliberales económicos más radicales.

Los ataques terroristas del 11-S provocaron un (comprensible) fervor patriótico en todo el país que los neoconservadores utilizaron para invadir Afganistán e Irak. El sector más reaccionario de las bases republicanas vio los atentados y la guerra contra el terrorismo como un conflicto civilizatorio, una lucha entre el islam y Occidente, y abogó por una guerra total, apocalíptica y sin reglas. Esto fue lo que acabó por crear Guantánamo, Abu Ghraib, los *black sites* de la CIA, detenciones extrajudiciales, tortura y una guerra inacabable contra un enemigo cada vez más irreal. Bush, sin embargo, siempre fue ambivalente al abrazar el componente de guerra total,

y rehuyó convertir el conflicto en una excusa para movilizar el fervor nativista y antiinmigrante que le reclamaba la derecha.

La guinda para las bases del partido fue la decisión de Bush hijo de dar prioridad a la privatización de la seguridad social en 2004, tras ser reelegido. Era la constatación de que los líderes del GOP preferían arriesgar todo su capital político en un proyecto ideológico (y claramente impopular) del ala liberal del partido antes que escuchar a sus votantes. El plan fracasó no tanto por la oposición demócrata como por el pánico del propio partido al ver que sus militantes no les seguían.

El principal problema para el GOP, no obstante, fue que el *establishment* de política exterior resultó estar compuesto por unos patanes incompetentes; Irak y Afganistán se convirtieron en interminables ocupaciones militares. La crisis financiera de 2008 y la enorme tunda que se llevaron los republicanos en las urnas tras presentar a otro presunto moderado que era más «viable» como candidato en las generales generaron aún más descontento.

Las elecciones de 2012 fueron las que colmaron el vaso. En medio de un frenesí mediático conservador contra el «radical» Obama y un partido que fue incapaz de detener su principal logro político, la ley de sanidad, las élites del GOP «decidieron» presentar a otro moderado a la presidencia. Mitt Romney no era mal candidato (y habría sido un buen presidente), pero se enfrentaba al mejor político que había producido el país en décadas, y perdió. Tras años de desastres tanto para el partido como para la nación, las bases republicanas encaraban las presidenciales con una actitud muy distinta a la que el *establishment* esperaba.

Así que tocará hablar, finalmente, de Trump, las primarias de 2016 y las elecciones que rompieron Estados Unidos.

8

Obama y las reglas del juego

La profetisa

A mediados de agosto de 2008, el senador John McCain, héroe de guerra, hombre de acción y candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, tenía un problema grave. El segundo mandato de George W. Bush había resultado ser un desastre, con dos guerras inacabables y los mercados financieros cerca del pánico. Los demócratas, tras unas primarias interminables, habían nominado a Barack Obama, el político más formidable que había producido el partido en décadas. Los sondeos ponían a McCain entre cinco y ocho puntos por detrás de su oponente, con una marcada tendencia a la baja.

John McCain siempre había sido un hombre impulsivo. Con las elecciones cada vez más cuesta arriba, su única opción para remontar era un golpe de efecto, escogiendo un candidato inesperado a la vicepresidencia. Su idea inicial fue ofrecerle el puesto a Joe Lieberman, senador demócrata por Connecticut y gran amigo suyo, pero su equipo de campaña le disuadió, temeroso de que el partido lo rechazara en la convención. Como segunda opción, le sugirieron a un gobernador republicano competente, como Mitt Romney o Tim Pawlenty, pero el senador creía que eran demasiado aburridos. Alguien en la campaña (nadie está seguro de quién fue, y todos niegan haber tenido la idea) sugirió optar por alguien fuera de la órbita de

Washington: Sarah Palin, de Alaska, una gobernadora joven, guapa y casi desconocida.

Cuentan que, en la reunión en la que iban a tomar la decisión, McCain miró a su mujer, Cindy, tras escuchar argumentos a favor y en contra de Palin. Ella le dijo: «John, es una apuesta arriesgada». El senador, que siempre había sido un jugador empedernido, le contestó: «Ojalá no hubieras dicho eso. A la mierda. Hagámoslo».[1] El 29 de agosto la anunciaron como candidata a la vicepresidencia.

Años después, en su lecho de muerte, el propio McCain dijo arrepentirse de esa decisión. Sarah Palin resultó ser un avatar casi perfecto de la audiencia de Fox News, mal informada, ocasionalmente racista y obsesionada con teorías de la conspiración. Indisciplinada e incontrolable, se pasó toda la campaña insinuando que Obama era musulmán, diciendo que era amigo de los terroristas y apelando a los instintos nativistas de las bases del partido. Al sector reaccionario del GOP y a sus militantes más conservadores, por supuesto, les encantaba. Sus mítines atraían enormes multitudes, entusiasmadas con que alguien no sólo apelara a sus prejuicios, sino que los repitiera en voz alta. McCain siempre había intentado ser un hombre de Estado, un político honorable; Palin era un trol de Twitter con un megáfono más potente.

Lehman Brothers se declaró en bancarrota el 15 de septiembre, y la economía entró en barrena poco después. Poco importaba ya la campaña; Obama iba a ganar las elecciones independientemente de lo que dijera o hiciera Palin.

Durante esas últimas semanas, la gobernadora se dedicó a soltar lo primero que se le pasaba por la cabeza en mítines y a dar entrevistas desastrosas, mientras era parodiada de forma inmisericorde en *Saturday Night Live*. Para el votante medio, se convirtió en un chiste irritante. Para

las bases republicanas, sin embargo, Palin representaba algo muy distinto. Hartos de la estulticia y mediocridad de su partido, Palin era una visión de lo que el GOP podía ser si alguien les hacía caso. Ese era un futuro que les gustaba. No iban a olvidarlo.

OBAMA Y LAS REGLAS DEL JUEGO

A Barack Obama le gusta recordar que el día en que llegó a la presidencia se encontró con el peor escenario económico desde 1932. La economía caía en picado, el sistema financiero estaba al borde del abismo, el país tenía dos guerras abiertas y una agenda política casi interminable. El presidente, al menos, tuvo la suerte de llegar al cargo no sólo con una enorme mayoría en la Cámara de Representantes (257-178), sino con una mayoría en el Senado casi a prueba de *filibusters*, 59, que se ampliaría a 60 cuando Arlen Specter, uno de los últimos republicanos moderados del noreste (Pensilvania), anunció que cambiaba de partido en abril de 2009.

Esto permitió a Obama hacer algo que ningún presidente había hecho desde Reagan, gobernar y aprobar leyes. Los demócratas fueron capaces de sacar adelante una cantidad considerable de medidas, como un estímulo fiscal y una reforma en profundidad del sistema financiero. El gran objetivo de Obama, sin embargo, fue conseguir algo que ni Roosevelt ni Truman ni Nixon ni Clinton fueron capaces de aprobar: la primera ley de sanidad universal de la historia del país.

Fueron necesarios meses de negociación para diseñar un sistema aceptable para todas las facciones del Partido Demócrata. La ley fue aprobada con sesenta síes raspados en el Senado y salió por los pelos de la Cámara de Representantes (220-215), en un ejercicio titánico de contar

votos y sacar una ley tan a la izquierda como fuera posible. Cuando perdieron un senador en el último momento (por el fallecimiento de Ted Kennedy), los demócratas incluso tuvieron que recurrir a una maniobra legislativa poco ortodoxa para llegar a su aprobación definitiva esquivando un *filibuster* de última hora.

La ACA (siglas de Affordable Care Act, la denominación oficial) u Obamacare (el nombre por el que todo el mundo la conoce) es, en el fondo, una ley bastante conservadora. Su diseño original estaba basado en el sistema de sanidad universal aprobado por Mitt Romney en sus tiempos de gobernador de Massachusetts (en 2006), que salía, a su vez, de una propuesta de la Heritage Foundation de 1989.[2] Bajo la ACA, las aseguradoras, los hospitales y las consultas privadas siguen en el centro del sistema. Los dos pilares para reducir el número de familias sin cobertura médica son subsidios para la clase media y una expansión de Medicaid, el seguro público gratuito para personas con pocos ingresos.

Poco importaba. Desde el primer minuto de la presidencia de Obama, el Partido Republicano se negó en redondo a pactar cualquier cosa con el presidente, o ni siquiera a fingir que tenía la más mínima intención de llegar a acuerdos. Azuzados por sus bases (Rush Limbaugh llegó a decir que su deseo era que Obama fuera un fracaso como presidente), el plan de estímulo fiscal no consiguió ni un voto republicano en la Cámara de Representantes y sólo tres en la Cámara Alta. Uno de ellos (Specter), fue acosado con tal virulencia por las bases del GOP que decidió cambiar de partido.[3]

Durante el verano de 2009, empezaron a aparecer grupos de activistas conservadores por todo el país protestando en contra de la «agenda socialista» del presidente. El movimiento fue bautizado de forma fortuita por Rick Santelli, un reportero del canal de finanzas CNBC, cuando habló histéricamente sobre la necesidad de que hubiera un *tea party* («fiesta del

té»)[4] antiimpuestos y antitiranía, como en la gloriosa época de los padres fundadores. Recurriendo a lemas y banderas de la época revolucionaria, armados con la indignación ante la posibilidad de que alguien que no lo mereciera pudiera ver a un médico y con copiosas donaciones y ayuda organizativa de los grandes donantes del movimiento conservador, los activistas del Tea Party se convirtieron rápidamente en la voz dominante dentro de la política republicana. El mensaje de estas bases era claro: resistencia y oposición furibunda a toda la agenda demócrata, utilizando cualquier herramienta o táctica que tuvieran a su alcance.

El modelo constitucional americano se basa en un sistema de contrapesos, con múltiples puntos de veto. Gobernar requiere buscar consenso y negociaciones constantes, no dos partidos actuando como falanges disciplinadas dispuestas a subvertir cualquier arreglo institucional que les permita bloquear o sacar adelante su agenda. Es un sistema a la antigua, que depende de la buena fe de los presentes y la existencia de partidos ideológicamente difusos. El GOP de 2009, no obstante, era más pequeño y mucho más homogéneo de lo que lo había sido durante la era Clinton, y básicamente hizo el país tan ingobernable como fuera posible, convirtiendo el Senado en la cámara legislativa más disfuncional del mundo.

Los demócratas llegaron a las legislativas de 2010 con gran parte de su agenda a medio hacer, una recuperación económica todavía anémica y agotados por sus batallas internas para aprobar Obamacare. El resultado fue una tremenda paliza electoral en la que perdieron sesenta y tres escaños (y la mayoría) en la Cámara de Representantes. En el Senado sólo perdieron seis legisladores, manteniendo la mayoría gracias a la recurrente costumbre republicana de seleccionar candidatos espantosos en estados donde podían ganar.

Bloqueando en el Congreso

La victoria republicana hizo que John Boehner fuera escogido *speaker* de la Cámara de Representantes. Boehner había llegado al Congreso en 1990 y formaba parte de la camada de jóvenes radicales que irían a apoyar el «Contrato con América» de Newt Gingrich. Conservador, disciplinado y ambicioso, hizo carrera en el grupo parlamentario en el Congreso; un legislador sólido y leal al partido. Como jefe de la mayoría republicana, su trabajo iba a consistir en bloquear absolutamente todas las prioridades de la Administración Obama. Eso exigía decir no constantemente, y John Boehner era muy muy bueno diciendo no.

El primer conflicto entre la mayoría republicana y Obama fue a mediados de 2011, con las negociaciones del techo de la deuda. En Estados Unidos, de forma un tanto incomprensible, el Congreso debe autorizar por separado tanto el gasto público como las emisiones de deuda; los presupuestos y leyes de gasto del Congreso (apropiaciones, en jerga legislativa americana) sólo se ocupan de lo primero, mientras que una ley que regula el techo de la deuda se ocupa de lo segundo. Como en casi todos los países desarrollados, los presupuestos casi siempre tienen déficits, así que el Departamento del Tesoro tiene que emitir *T-bills* (esto es, *treasure bills* o deuda pública) constantemente tanto para afrontar gastos corrientes como para pagar intereses en deuda pasada. Dado que Estados Unidos es increíblemente rico y tiene una base fiscal colosal, el Gobierno federal nunca había tenido problema alguno en colocar deuda.

Hasta que el Tea Party llegó al Congreso.

Embriagados por su victoria electoral, proclamando representar la voz del pueblo, el Partido Republicano se negó a subir el techo de la deuda si no

era a cambio de enormes recortes de gasto. Los demócratas (y los mercados financieros) reaccionaron horrorizados; si el Gobierno federal excedía su límite de endeudamiento, el Tesoro se vería obligado a dejar facturas sin pagar, incluyendo intereses en la deuda pública. Eso significaría, primero, que Estados Unidos se vería obligado a declarar la primera suspensión de pagos de su historia y, segundo, que los bonos del Tesoro americano, los activos más seguros del mundo, se convertirían en activos de riesgo, provocando una crisis financiera de consecuencias imprevisibles. El GOP estaba apuntando con una pistola cargada al corazón de la economía del país y amenazando con pegarle un tiro si Barack Obama no cedía a sus demandas.

Los demócratas, tras meses de negociaciones, acabaron por ceder, aceptando recortes de gasto público automático durante los siguientes diez años. El Tea Party tenía su primera gran victoria presupuestaria, a costa de amenazar con destruir la economía mundial y ganarse la reputación de ser unos chiflados insensatos. El mensaje era claro: el Partido Republicano estaba dispuesto a explotar las instituciones hasta el mismo límite para conseguir lo que querían, incluso poniendo en peligro el prestigio y la prosperidad del país.

Maniobras electorales

El mayor impacto político de las legislativas de 2010 fueron las monumentales palizas que se llevaron los demócratas a escala estatal y sus enormes consecuencias institucionales. El partido perdió seis gobernadores y veintiuna cámaras legislativas,[5] dejando a los republicanos con veinte trifectas, con estados clave como Wisconsin, Florida, Pensilvania, Michigan y Ohio.

Cada diez años Estados Unidos revisa sus mapas electorales para acomodar cambios de población y migraciones. Los encargados de dibujar estos mapas son, casi siempre, los legislativos estatales. 2010 fue un año de censo, así que tocaba revisarlos. Los partidos políticos americanos tienen una larga tradición de manipular las instituciones para sacar réditos electorales y los republicanos iban a explotar sus nuevas mayorías legislativas tanto como fuera posible.

Los americanos llaman al concepto de redibujar los distritos electorales para sacar ventaja electoral *gerrymandering*, en (dudoso) honor de Elbridge Gerry, un gobernador de Massachusetts que en 1812 dibujó un mapa electoral descaradamente partidista. La *Boston Gazette,* en un editorial, señaló que uno de los distritos tenía forma de salamandra (*salamander*), que cariñosamente bautizaron «gerrymander*»*. Los federalistas, el partido víctima del nuevo mapa, se apresuraron a popularizar el término, que acabó entrando en el vernáculo político del país.

Dada la peculiar tendencia de los votantes americanos a segregarse por barrios y ciudades de forma pronunciada (a menudo con el resultado de discriminación racial), es relativamente sencillo diseñar mapas electorales que otorguen una ventaja abrumadora a los candidatos de un partido sobre otro. Basta con manipular estas fronteras o bien para concentrar a todos los votantes de un partido en pocos distritos (*packing*, en jerga política americana) o para desperdigarlos y que sean minoritarios en múltiples circunscripciones (*cracking*). Si los responsables del proceso tienen un sentido del humor un poco perverso, siempre tienen la opción de cambiar el mapa para que el candidato rival ya no viva en el distrito (*kidnapping*) o incluso de poner a dos legisladores rivales dentro de un mismo distrito para forzar una pelea de primarias entre ellos (*hickjacking*).

Los *gerrymanders* republicanos tras 2010 fueron absolutamente brutales. El más célebre y despiadado de todos ellos fue en Wisconsin, donde el GOP se las arregló para crear un mapa electoral que lo hacía prácticamente inmune a los resultados de las urnas. En 2018, los demócratas ganaron las elecciones estatales con un 54 % del voto. Los republicanos, no obstante, consiguieron 63 de los 99 escaños en la Cámara de Representantes estatal. En Virginia, los republicanos mantuvieron ese año el control de la Cámara de Representantes tras sacar sólo un 44,5 % del voto; en Pensilvania, lo hicieron con un 45,6 %. El GOP se aficionó tanto a esta práctica que incluso hizo *gerrymanders* tremebundos en estados donde los demócratas no van a ganar nunca, como Arkansas, Kentucky, Tennessee u Oklahoma. Los *gerrymanders*, por descontado, no se limitaron a la política estatal; los republicanos también utilizaron sus mayorías para redibujar con el mismo entusiasmo los distritos del Congreso.

Inevitablemente, muchos de estos mapas electorales acabaron en los tribunales. La Voting Rights Act de 1965 incluía múltiples medidas para proteger el derecho a voto, con varias cláusulas destinadas a evitar *gerrymanders* que discriminaran por raza.

Si alguien echaba de menos al Tribunal Supremo en esta historia, aquí es cuando vuelve a aparecer. En 2012, la corte decidió reescribir, otra vez, preceptos constitucionales según le parecía conveniente. Primero, en Shelby County contra Holder, eliminaron varios artículos que exigían que muchos estados sureños necesitaran una revisión federal previa antes de redibujar distritos electorales. Estos procedieron, cómo no, a crear mapas discriminatorios sin reparo alguno. Poco después (Rucho contra Common Cause, 2019), el Supremo declaró que hacer *gerrymanders* para beneficiar a un partido sobre otro era perfectamente aceptable. Si los políticos quieren limitarlos por ley, es cosa suya, pero la Constitución no dice nada sobre el

derecho a representación política. Algo que es cierto en el sentido estricto, excepto que esto exige una lectura increíblemente limitada de la decimocuarta enmienda (igualdad ante la ley) y contradice sentencias anteriores del propio tribunal. Ignorar o reescribir esta cláusula constitucional es, tristemente, una tradición del Supremo.

A pesar de los obstáculos y las trabas judiciales para controlar estos mapas, la Civil Rights Act sigue prohibiendo dibujar distritos que discriminen racialmente, así que esos mapas suelen acabar en los tribunales. En algunos estados es casi una costumbre tener varios mapas en rápida sucesión en las semanas y meses previos a una campaña electoral, con legisladores, activistas, gobernadores y candidatos litigando hasta el último momento quién va a votar y dónde.

Los demócratas también intentan hacer *gerrymanders* de vez en cuando en los estados que controlan por completo. El partido, no obstante, es mucho más cauto en este aspecto, y no suele hacer mapas tan salvajes como el GOP. En algunos estados donde son dominantes, como California, los demócratas han decidido hacer «lo correcto» y establecer por ley una comisión independiente que se encargue de dibujar distritos electorales cada diez años, sin intervención de los legisladores. Es una actitud loable y honesta, pero muchos activistas no pueden evitar verlo como una forma de desarme unilateral. California es tan demócrata estos días que un *gerrymander* agresivo no generaría demasiados escaños adicionales (la delegación, en 2023, era 40-12 demócrata), pero la timidez del partido en otros estados como Nueva York probablemente les costó el control de la Cámara de Representantes en 2022.

Ningún legislativo puede hacer *gerrymandering* en unas elecciones donde el distrito es todo el estado, pero eso no ha evitado que los republicanos tomen medidas para hacer que las urnas sean casi irrelevantes.

Volviendo a Wisconsin (que ha sido un epicentro de estas prácticas), en el año 2018 el demócrata Tony Evers ganó las elecciones a gobernador. La respuesta del GOP fue aprobar a todo correr un puñado de leyes para reducir el poder del Ejecutivo y retirarle competencias. El Supremo estatal, también controlado por republicanos, les dio la razón.

Otra de las innovaciones republicanas en materia electoral ha sido recuperar parcialmente la vieja tradición demócrata de imponer restricciones creativas sobre quién puede votar. El método más habitual (y que en muchos estados es una herencia directa de los tiempos de Jim Crow) consiste en retirar el derecho a voto a cualquier persona que tenga antecedentes penales, con límites variables sobre qué clase de faltas o delitos te dejan sin sufragio. En tres estados del sur (Alabama, Mississippi y Tennessee), más de un 8 % de la población adulta no puede votar. El sistema judicial de esos estados sigue conservando muchas de las viejas costumbres racistas del pasado, así que los afroamericanos suelen ser condenados con mayores penas que otros grupos y pierden su derecho al sufragio con mucha más frecuencia.

Esta clase de restricciones suelen ser impopulares en el electorado, y en 2018 Florida votó en referéndum derogarlas. Los legisladores estatales (obviamente republicanos) respondieron aprobando una ley para «implementar» esta medida que exigía a los expresos pagar la totalidad de sus costas judiciales antes de recuperar el sufragio. Casi un 90 % de estos floridanos que han cumplido penas (cerca de novecientas mil personas) siguen sin poder votar.[6]

Otro método empleado para excluir votantes consiste en imponer el requisito de presentar alguna forma de identificación oficial. Estados Unidos carece de un sistema de documentos de identidad, más allá del pasaporte (que es caro de obtener) y el carné de conducir. Dado que la

mayoría de los que no conducen son pobres y suelen votar demócrata, el GOP, con la excusa de combatir el fraude electoral, se ha aficionado a imponer esta clase de restricciones. Los republicanos también son propensos a imponer límites artificiales a cuándo y cómo una persona puede registrarse para votar, así como a limitar el número de colegios electorales y las horas de votación en los distritos donde sacan malos resultados. En Estados Unidos hay una fuerte correlación entre el tiempo de espera en las urnas, el nivel de renta del distrito y la raza mayoritaria del barrio.

Estas restricciones, obviamente, distan mucho de las draconianas medidas en el sur bajo Jim Crow. Su efectividad, además, ha sido bastante dudosa; la imposición de leyes restrictivas suele movilizar a sus oponentes, a menudo negando su efecto. El *gerrymandering*, mucho más sutil, ha demostrado ser más efectivo garantizando mayorías conservadoras.

Independientemente de su efectividad, estas medidas reflejan la mentalidad dentro del movimiento conservador americano: una persistente desconfianza, cuando no hostilidad, hacia el sistema democrático. Esta no es, como hemos visto, una tradición nueva; Estados Unidos tiene una larguísima historia de instituciones contramayoritarias negando el resultado de las urnas y una tradición más larga aún de autoritarismo bien poco disimulado en muchas regiones.

La emergencia de un personaje como Donald Trump, autoritario, sin respeto alguno por las instituciones y lo suficientemente antidemócrata como para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones, entonces, dista mucho de ser una anomalía. El Partido Republicano ya había utilizado estrategias para hacer que las elecciones fueran casi irrelevantes en muchos estados, y no habían dudado en utilizar sus mayorías artificiales para mantenerse en el poder.

El intento de Trump de subvertir la presidencia era una versión más radical, chapucera y esperpéntica de estas maniobras. La diferencia es que, mientras el GOP en los estados se ha dedicado a explotar agujeros legales para aferrarse al poder, Trump vulneró la ley abiertamente y acabó recurriendo a la violencia cuando sus intentos de subvertir el resultado mediante fraude fracasaron.

El Supremo y la financiación de campañas

El *calvinball* constitucional del Tribunal Supremo no se ha limitado a mapas electorales o instituciones, sino que se extendió a la financiación de las campañas. En 2002, una inusual coalición de legisladores de ambos partidos aprobó una ley que revisaba las reglas de donaciones a candidatos y establecía normas claras sobre publicidad y transparencia de grupos externos (sobre todo los PAC). El Supremo inicialmente aceptó la ley como constitucional (McConnell contra la Comisión Federal de Elecciones, 2003). Bush, sin embargo, aprovechó un par de vacantes en el tribunal para nombrar a dos jueces conservadores y, en 2009, con Citizens United contra la Comisión Federal de Elecciones, no sólo desmantelaron la ley, sino que hicieron el sistema aún menos restrictivo.

Cualquier empresa o millonario puede dedicar ahora una cantidad ilimitada de dinero a financiar un PAC. Este puede emitir publicidad y campañas variadas, incluyendo pedir el voto a favor de un político, siempre y cuando no esté coordinando sus acciones con el candidato. Las donaciones pueden realizarse, además, a través de organizaciones interpuestas que ni siquiera tienen la obligación de hacer públicas sus cuentas.

El aprecio del GOP por utilizar el control de las instituciones en su favor se extendió a la vigilancia de las campañas electorales. La FEC (Comisión Federal de Elecciones, por sus siglas en inglés), la agencia independiente con jurisdicción sobre el tema, está dirigida por un comité compuesto por seis miembros nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Por ley, ningún partido puede tener más de tres comisionados, y la FEC sólo puede iniciar una investigación si una mayoría del comité así lo decide. Los republicanos llevan décadas poniendo en la agencia energúmenos que creen que, en política, cuanto más dinero, mejor, así que este organismo lleva años sin lanzar investigación alguna. Las leyes sobre financiación de campañas políticas en Estados Unidos son poco menos que papel mojado.

La aparición de megadonantes se ha visto en parte contrarrestada por la emergencia de las pequeñas aportaciones vía internet. En un contexto de creciente polarización, estos donantes han tendido un papel ambiguo en el equilibrio de fuerzas dentro de los partidos, ya que los candidatos que han atraído el fervor de las bases no siempre lo son por motivos ideológicos.

Durante las primarias de 2008, por ejemplo, Barack Obama tuvo una ventaja considerable en pequeñas donaciones respecto a Hillary Clinton, a pesar de ser más centrista que ella. En 2016 y 2020, Bernie Sanders, claramente el candidato más radical, fue el que más recaudó. No obstante, en el mismo 2020, el muy centrista Pete Buttigieg estaba justo detrás, al igual que Elizabeth Warren. Irónicamente, esta campaña acabó por demostrar que el dinero a veces no aporta demasiado; Biden se impuso con facilidad, a pesar de sólo ser cuarto (y a mucha distancia de sus rivales) en dinero recaudado.

Los republicanos, mientras tanto, no dependieron demasiado de los pequeños donantes ni en 2008, cuando McCain ganó las primarias un poco por defecto, ni en 2012, ya que Romney no tuvo demasiada competencia.

Paradójicamente fue en las elecciones en las que uno de los candidatos hablaba sin cesar sobre lo rico que era y lo poco que necesitaba el dinero de nadie cuando el GOP empezó a recibir montañas de dinero de sus bases, con Donald Trump. Por primera vez en décadas, las bases republicanas estaban lo suficientemente entusiasmadas con su candidato para darle dinero.

UN PARTIDO ENFURECIDO: EL GOP DURANTE LA ERA OBAMA

A principios de 2013, las bases republicanas estaban inquietas. Un sector considerable del partido era de la opinión de que la derrota de Mitt Romney y el pobre resultado del GOP en el Congreso se debieron al excesivo centrismo del candidato presidencial, y creía que debían redoblar sus esfuerzos para dinamitar el «socialismo» de la Administración Obama.

Los republicanos, a pesar de su fracaso en las urnas, mantenían el control de la Cámara de Representantes (gracias al *gerrymandering*, los demócratas sacaron más votos), así que un grupito de legisladores del ala más montañesa del partido decidió que era hora de intentar repetir la jugada del techo de la deuda. En vez de pedir recortes, iban a exigir al presidente que retrasara la entrada en vigor de las provisiones principales de su odiada ley de sanidad un año, con la idea de ir recortando el dinero para su implementación más adelante.

Los demócratas no picaron el anzuelo. Obama acababa de salir reelegido e insistió, con razón, en que ya había hecho su parte con el acuerdo de 2011. Wall Street y el sector económicamente liberal del GOP no querían correr el riesgo de jugar con fuego una segunda vez, y presionaron a los moderados

del partido a favor de un acuerdo. Boehner, el *speaker* republicano de la Cámara de Representantes, acabó por ceder.

Indignados, varios senadores radicales del GOP liderados por Ted Cruz pidieron a sus colegas en la Cámara Baja que, en vez del techo de la deuda, utilizaran la baza del gasto. Si Obama no aceptaba unas cuentas públicas donde la ACA se quedaba sin dinero, los republicanos se negarían a aprobar los presupuestos, forzando un cierre del Gobierno federal. El presidente, por segunda vez, les contestó educadamente que podían irse a tomar viento, así que el 1 octubre de 2013 el Gobierno federal se quedó sin autorización legislativa para seguir gastando dinero y cerró sus puertas.

Para sorpresa de (casi) nadie, los votantes echaron la culpa al Partido Republicano, exactamente como sucedió con el cierre de Gingrich dos décadas atrás. Tras una serie de sondeos desastrosos para el GOP, con la popularidad de Obamacare en alza y la Cámara de Comercio criticando al partido, los republicanos se dieron por vencidos. El 17 de octubre votaron reabrir el Gobierno.

Tras el desastre, los conservadores se metieron en una feroz pelea interna en busca de culpables. El *establishment* del GOP señaló de inmediato a Ted Cruz, el hombre que había tenido la genial idea no sólo de orquestar el cierre, sino de inmiscuirse en la gestión interna del grupo parlamentario en la Cámara Baja saboteando la disciplina de partido. Cruz se revolvió criticando la cobardía de sus colegas y su falta de apoyo y apelando al fervor de las bases.

Ted Cruz es alguien cordialmente detestado por sus compañeros de partido, hasta el punto de que su colega Lindsay Graham bromeó con que alguien podría asesinarle en el Senado y ni uno sólo de sus colegas en la cámara testificaría en contra del sospechoso. En este caso, sin embargo, tenía razón en un punto importante. La militancia republicana estaba cada

vez más indignada con los líderes del partido y esta hostilidad creciente corría el riesgo de convertirse en un problema sustancial. A mediados de 2012, en un sondeo de Pew, sólo un 28 % de los votantes republicanos e independientes leales al partido creía que el partido estaba haciendo un buen trabajo en defensa de sus ideales.[7] Esta cifra, además, no había dejado de empeorar desde la victoria de las legislativas de 2010.

El motivo era obvio: la maquinaria de radicalización política nacida bajo Reagan y ampliada y «perfeccionada» durante la presidencia de Clinton seguía en activo, siempre buscando nuevos enemigos. Los años de Bush hijo fueron de frenesí antimusulmán en la extrema derecha. La llegada a la Casa Blanca de alguien llamado Barack Hussein Obama simplemente hizo más fácil transferir los nuevos odios al viejo enemigo tradicional demócrata.

Los radicalizadores tenían nuevas herramientas. A la combinación habitual de Fox News, *think tanks*, radios conservadoras y prensa en internet se sumó el dinero casi ilimitado, tras Citizens United, que el movimiento conservador tenía ahora para financiar sus movimientos sociales. Encontrar, organizar y radicalizar militantes indignados era además mucho más fácil y barato gracias a internet y la emergencia de las redes sociales; y estos militantes estaban ahora mucho más «enchufados» en saber quién era el nuevo candidato o legislador en soltar la última astracanada viral que «el *establishment* no quiere que escuches».

Las redes sociales también fueron un problema para los demócratas, aunque, dado que el centro de gravedad del partido es considerablemente más centrista, era algo más o menos controlable. Para el GOP, un partido que tenía sus cimientos en el cenagal reaccionario de resentidos del Viejo Sur y la derecha religiosa, fue un desastre.

Durante la presidencia de Obama, el Partido Republicano se vio crecientemente atrapado entre lo que sus bases querían escuchar y lo que podían hacer realmente. Los militantes, azuzados por Fox y allegados, se obsesionaron con derogar Obamacare, forzando a líderes y candidatos a prometer desmantelar la ley. Obama, por supuesto, podía vetar cualquier derogación, y los republicanos ni siquiera llegaron a tener mayorías suficientes en el Senado para aprobar nada. Los medios conservadores se lanzaron en campañas obsesivas sobre «invasiones» de inmigrantes (que nunca existieron: Obama deportó más inmigrantes que cualquiera de sus predecesores), obligando al GOP a adoptar posturas maximalistas antiinmigración. Cuando el Congreso fracasaba en «cerrar la frontera con México», esos mismos medios se hartaban de atacar la debilidad republicana. Gente como Rush Limbaugh, Mark Levin, Michael Savage o Sean Hannity se inventaban grandes estrategias sobre cómo un Partido Republicano con agallas podía utilizar cosas como el cierre del Gobierno federal para obligar a los demócratas a rendirse. Cuando esos intentos naufragaban, los culpables eran los «cobardes» del *establishment* del GOP.

A este descontento se añadía la persistente desigualdad de poder político entre las facciones republicanas. Aunque los reaccionarios eran probablemente mayoría dentro del partido, quienes gobernaban eran los halcones en política exterior y la Cámara de Comercio, no ellos. Los primeros no sólo la pifiaron horriblemente en dos guerras, sino que además rechazaron las histéricas demandas de tierra quemada de los nativistas enfurecidos; los segundos acabaron la presidencia de Bush destinando más de un billón de dólares a rescatar Wall Street. A los reaccionarios se les había acabado la paciencia.

A mediados de 2015, la posición del *establishment* republicano era aún más débil. Una amplia mayoría de sus bases (55 %) creía que sus líderes en

el congreso estaban haciendo un mal trabajo.[8] Sólo un 35 % pensaba que el partido les representaba al hablar de gasto público, un 34 % al hablar de inmigración y un 29 % al hablar de matrimonio homosexual. Únicamente un 37 % de los votantes conservadores consideraba que los líderes estaban cumpliendo sus promesas; un 75 % quería que adoptaran una posición más agresiva contra Obama. Las bases detestaban al presidente (su aprobación entre los republicanos rondaba el 10 %), pero no confiaban en su propio partido, que les había decepcionado una y otra vez.

John Boehner, tras años intentando lidiar con todo este descontento, fue obligado a dimitir de su cargo de *speaker* en octubre de 2015. Su puesto lo ocupó Paul Ryan, un ideólogo del ala más económicamente liberal del partido, demostrando que sus líderes seguían sin entender qué demonios pasaba.

Iban a descubrirlo pronto. El 16 de junio de 2015, Donald Trump anunciaría su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

9

La pesadilla de 2016

LAS PRIMARIAS REPUBLICANAS

Los americanos suelen reelegir a sus presidentes. Si uno quiere llegar a la Casa Blanca, su mejor opción es esperar el momento en que su ocupante no puede presentarse de nuevo. Es poco habitual, además, que un partido consiga ganar la presidencia con dos candidatos seguidos, así que venir de la oposición te da mayor probabilidad de victoria.

Con estos antecedentes, no era de extrañar que la lista de candidatos en las primarias republicanas fuera inusualmente extensa. Todo el mundo remotamente conocido que hubiera salido alguna vez en Fox News y tuviera delirios de grandeza[1] se postuló a la presidencia, dando a las bases del partido un amplio abanico de opciones entre las que escoger.

Desde el principio, los candidatos se alinearon en tres categorías más o menos diferenciadas. Por un lado, estaban los candidatos del Tea Party, el ala más ideológica de los republicanos. Esta incluía tanto a políticos centrados en el voto evangélico (Mike Huckabee, Rick Santorum) como a otros más identificados con un gobierno limitado y con reducir el gasto público (Rand Paul, Marco Rubio, Scott Walker). Ted Cruz, mientras tanto, intentaba combinar ambos aspectos en una (muy irritante) persona. El segundo grupo eran los moderados, el *establishment* del partido; proempresa pero sin estridencias, religiosos pero sin integrismos, y

apelando a la competencia y el buen gobierno antes que a la ideología. Este grupo lo formaba gente como John Kasich, Carly Fiorina, Chris Christie, Bobby Jindal o Rick Perry. Su candidato más fuerte, y favorito a ganar las primarias, era Jeb Bush, exgobernador de Florida, hijo y hermano de presidentes.

El tercer grupo se componía de dos independientes, personas que venían de fuera del partido, sin experiencia política y sin haber ocupado un cargo público. Ben Carson era un neurocirujano famoso: nacido en una familia pobre y profundamente religioso, era la clase de historia de fe y superación personal que las bases del GOP adoran. El otro, obviamente, era Donald Trump.

Donald J. Trump

Hijo de un inmobiliario de cierto éxito de Nueva York, Donald Trump dio el salto a la fama al encarnar lo que puede describirse como la personificación hortera de los excesos de los años ochenta. Escandaloso, agresivo, adicto a la publicidad, se pasó dos décadas encadenando proyectos faraónicos, portadas en los tabloides y sonoros fracasos empresariales. Trump se las arregló para quebrar equipos de fútbol, inmobiliarias, casinos e incluso una aerolínea sin nunca llegar a arruinarse del todo, colocando sus pérdidas a sus acreedores y litigando hasta que se hartaban de él.

A finales de la década de los noventa, sin embargo, a Trump se le habían acabado los bancos a los que embaucar. Irreprimible, decidió especializarse en lo que siempre había sido su mayor talento: ser famoso y meter mucho ruido. En vez de construir edificios, se dedicó a dejar que otros los vendieran en su nombre bajo licencia, ejerciendo de «consultor» o «portavoz» en multitud de proyectos de éxito variado.

Su gran retorno a la escena fue en 2004, con la emisión de *The Apprentice* en NBC. En el programa, un *reality show* muy muy guionizado creado por Mark Burnett (productor también de *Supervivientes*, *La Voz* y *Shark Tank*, entre otros muchos programas similares), Trump tomaba el papel de gran capitalista decisivo y dominante, un titán de las finanzas que ponía a prueba a concursantes en la jungla de los negocios de Nueva York.

La serie era, en gran medida, una patraña; Trump nunca había sido un gran hombre de negocios, la Trump Organization era más un chiringuito publicitario que una inmobiliaria y lo único que realmente hacía sin perder toneladas de dinero era gestionar un puñado de campos de golf. Burnett, sin embargo, era un productor brillante, y *The Apprentice* se convirtió en un éxito colosal. Trump estaba en todas partes, vendiendo de todo, disfrutando de la adulación de los medios.

La persona de Trump, la de hombre de éxito maleducado, autoritario y con un desdén palpable contra todo aquel a quien cree menos inteligente que él (es decir, todo el mundo), encajaba bien en los medios conservadores. La cansina tendencia de los periodistas a creer que todos los empresarios saben de economía daba cierto empaque a sus palabras. Hacia finales del mandato de Bush, Trump era un invitado habitual en muchos programas, criticando la incompetencia de la Administración en Irak y Afganistán, los bancos y Wall Street. Allá por 2010, se convirtió en un crítico del Gobierno de Obama y empezó a flirtear con una carrera presidencial. En esa época, *The Apprentice* seguía siendo inmensamente rentable, y según parece NBC le comunicó que si se metía en política no podría seguir con el programa. Trump se conformó con montar esa minicampaña insinuando que Obama no había nacido en Estados Unidos, soltar bobadas racistas y convertirse en un héroe del sector más reaccionario y nativista del GOP.

Su oportunidad llegaría cuatro años después.

No está claro cuál era la intención de Trump al meterse en la campaña presidencial de 2016; a estas alturas, parece evidente que este hombre no es de hacer grandes planes. Sus instintos políticos y su sentido de la oportunidad, sin embargo, demostraron ser impecables.

Empezó por adoptar la retórica y actitud de los comunicadores reaccionarios conservadores, los modos, usos y el lenguaje de Rush Limbaugh y sus imitadores. El mensaje de fondo era la vieja estrategia nixoniana de apelar al resentimiento de la audiencia, la política del agravio y el desdén a los que «se creen mejores» y «nos dicen lo que debemos ser». Trump, que siempre había sido un comunicador natural, tenía la arrogancia exacta para vender esta clase de discursos excepcionalmente bien.

Hay tres cosas que le distinguían del resto de comunicadores y candidatos. Primero, Trump no hablaba como un político, sino como algo que sólo puede describirse como un cuñado radiofónico enfurecido, más o menos la esencia del voto reaccionario dentro del GOP. Tenía también un talento inconmensurable para generar polémicas, algo que los medios de comunicación adoran. Finalmente, su imagen pública era la de un magnate, un hombre de negocios decisivo y valiente; la idea que se tiene de un millonario de éxito, alguien que podía postularse a la presidencia.

Explotando un vacío

El genio de Donald Trump durante las primarias republicanas de 2016 fue explotar el enorme, gigantesco nicho reaccionario en el ala derecha del partido. Como hemos visto, el GOP representaba a la audiencia de Rush Limbaugh, Fox News y familia, pero sus candidatos nunca se atrevían a hablar como ellos. Los políticos republicanos desdeñaban la vulgaridad de

aquellos que los apoyaban, cuando no temían ser tildados de extremistas. El «ello» del partido, por ponerlo en términos freudianos, era esa caverna histriónica, reaccionaria y resentida posnixoniana escondida en las sombras del GOP. El «superego» era ese *establishment* cobarde y moralizante que quería mantener las apariencias y hacer amigos en Washington. Trump entra en campaña poco menos que pegando una patada en la puerta y aullando a las bases que la era de los complejos se ha terminado; él será el candidato que dice lo que nadie se atrevía a decir.

El contenido de sus declaraciones siempre ha sido menos importante que quién iba a sentirse ofendido por ellas, y Trump era increíblemente eficaz ofendiendo a gente. Ya desde el primer día, al llamar a todos los inmigrantes mexicanos del país violadores y asesinos, quedó claro que el hombre estaba en esta campaña para jugar y que iba a liarse a guantazos con absolutamente todo el mundo, por muy sagrado o importante que fuera. Trump insinuó que los aficionados a la segunda enmienda quizá podían solucionar «a su manera» la candidatura de Hillary Clinton, se dedicó a insultar a los padres de un soldado muerto en Irak, alabó repetidamente a dictadores de otros países, se mofó de un periodista discapacitado, insistió en que Obama era musulmán o dejó caer repetidamente que si perdía las elecciones no iba a aceptar el resultado. En lo que habría sido una herejía imperdonable en boca de cualquier otro candidato, declaró que John McCain no era un héroe de guerra porque a él le gustaba la gente que era capturada por el enemigo.[2]

En una campaña normal, cualquiera de estas polémicas habría bastado para descartar a un político para siempre, otra víctima más de las brutales primarias presidenciales. Trump, en vez de mostrar dudas o arrepentimiento después de cada astracanada, se recreaba en ellas, retando a sus rivales a bajar al barro con él. Cuando el ruido disminuía, no tardaba en encontrar

otro charco donde meterse, otro escándalo que generar u otro grupo al que ofender e insultar para seguir en el centro de la escena. Trump luchaba, peleaba, combatía; era alguien que decía lo que pensaba, sin esconderse, sin respetar la corrección política. Era Rush Limbaugh metido en política; uno de los nuestros.

El instinto de Trump, que resultó ser acertado, fue que, dentro de esas cuatro «almas» o facciones del GOP —halcones, religiosos, liberales económicos y reaccionarios—, los últimos eran el grupo más grande y nunca habían tenido un candidato que apelara directamente a ellos. Los otros tres bloques tenían candidatos que los representaban, pero nadie estaba buscando el apoyo de los reaccionarios abiertamente, a pesar de que formaban, con mucha diferencia, el grueso de la audiencia conservadora en internet, radio y televisión. Los republicanos insinuaban racismo, sugerían sexismo y flirteaban con la xenofobia, pero nunca se atrevían a hablar de ello sin tapujos. Trump no tenía más que sacar el megáfono y llamarlos a filas para conseguir, sin competencia alguna, una cuarta parte del voto republicano. En una campaña con dieciséis candidatos a la presidencia, era una ventaja formidable.

La torpeza del establishment

A principios de junio de 2015, los sondeos daban un empate técnico entre Jeb Bush, Scott Walker y Marco Rubio, los tres rondando el 10 %. Era la clase de primarias que haría a cualquier miembro del *establishment* sentirse bien consigo mismo: un moderado, un conservador favorito del Tea Party y una estrella emergente latina del partido. Sí, Ben Carson iba cuarto a poca distancia, alguien que era obvio que no estaba remotamente preparado para ser presidente, pero eso no quería decir gran cosa.

Un mes y medio más tarde, sin embargo, empezaron las primeras dudas. Ben Carson seguía ahí, con tozudez, cerca del 10 % en las encuestas. Marco Rubio y Scott Walker estaban resultando ser candidatos un tanto inanes; Jeb Bush seguía líder, aumentando ligeramente la distancia con sus perseguidores. El problema era que el candidato que iba segundo era Donald Trump, ese señor que empezó la campaña haciendo declaraciones racistas.

El 18 de julio es cuando Trump suelta su astracanada sobre John McCain. El partido se le lanza encima; los expertos lo ven como un error fatal para su campaña, el *establishment* cree que por fin se van a librar de ese advenedizo para siempre. Pocos días después, todos los sondeos indican que Trump ha subido entre cinco y diez puntos en menos de dos semanas y se coloca líder por delante de Jeb Bush.

Trump nunca abandonaría esa posición en los sondeos. Con la excepción de un pequeño interludio en noviembre en el que Ben Carson (también para el horror del *establishment*) le adelantó en las encuestas, Trump se mantuvo líder todo 2015, moviéndose entre el 25 y el 30 % del voto. Carson metió la pata en un par de preguntas de política exterior y empezó a caer rápidamente; Trump, mientras tanto, no sólo parecía ser inmune a cualquier tontería que se le ocurriese decir en voz alta, sino que acabó absorbiendo parte del voto del cirujano. A principios de enero, su intención de voto alcanzaba el 35 %.

La reacción del resto de candidatos republicanos ante este desastre inminente fue pelearse entre ellos. En vez de criticar a Trump, se dedicaron a intentar consolidar una base de apoyo para poder competir, pescando en el 65 % de electorado restante. Ted Cruz fue a por el voto evangélico de Ben Carson; Marco Rubio, a por el voto moderado del pobre Jeb Bush, que a esas alturas languidecía con un 5 % del voto; Chris Christie, a por Marco

Rubio, con un entusiasmo tal que acabó demoliéndole por completo en uno de los debates; por su parte, John Kasich intentó convertirse en una especie de camión escoba de los votos de candidatos moderados fallidos. El problema, sin embargo, es que nadie parecía entender que estaba perdiendo. En Iowa seguía habiendo once republicanos con campañas activas en los *caucus* el 1 de febrero. En New Hampshire había nueve presidenciables aún dando mítines y dividiendo el voto el día de las primarias.

Donald Trump quedó segundo por un puñado de votos en Iowa, un estado con muchos votantes evangélicos que favorecía a Ted Cruz.[3] Una semana después, en New Hampshire se impuso con un 35 % del voto; cuatro oponentes (Cruz, Rubio, Kasich y Bush) sacaron más de un 10 %. El 20 de febrero, Trump volvió a ganar en Carolina del Sur con un 32 %. Incluso con la posibilidad obvia y real de que consiguiera la nominación a base de sacar un tercio de los votantes en todas partes, aún quedaban cinco contrincantes dividiendo sus apoyos.

El 1 de marzo era el «supermartes», el día en que once estados votan a la vez. Trump consiguió otra vez un 34 % del total del voto; Ted Cruz, Marco Rubio, John Kasich y Ben Carson (que inexplicablemente seguía deambulando por el país) se repartieron otra vez el resto. En general, en las primarias republicanas, a diferencia de las demócratas, «el ganador se lleva todo»; el candidato que saca más votos en el estado se lleva la totalidad (o un porcentaje muy muy elevado) de los delegados de la Convención. A esas alturas la ventaja de Trump era prácticamente insalvable, tras acumular casi una decena de victorias raspadas pero suficientes para acumular apoyos. Aun así, Cruz, Rubio y Kasich siguieron en campaña durante todo el mes de marzo, con Trump ganando primarias, una y otra vez, con un 35-40 % del voto. Sólo entonces Marco Rubio se dio por aludido y abandonó la campaña

(habiendo ganado en un estado, Minnesota), pero para aquel entonces la victoria de Trump era inevitable.

Parte del problema se derivaba de los cambios en el sistema de financiación de campañas. Preinternet y pre-Citizens United, las elecciones primarias americanas seguían el modelo de «el partido decide». Las élites demócratas y republicanas ejercían tanto de filtro como de ancla a los candidatos presidenciales gracias a su capacidad de controlar el acceso a dinero y recursos organizativos de la formación. Un candidato, para ser viable, necesitaba donantes; el *establishment* era el que tenía acceso a las listas de correo y los contactos entre votantes de renta alta que podían apoyar la campaña. Cuando un político dejaba de ser viable, los notables del partido podían cerrar el grifo, dejándolo sin recursos.

Internet y la existencia de PAC con donantes con cantidades infinitas de dinero cortocircuitó este mecanismo por completo. No había un grupo de notables republicanos (un par de gobernadores o gente del comité nacional) que pudiera darle una palmadita a Ben Carson después de quedar octavo en Iowa y decirle que esto se había terminado y era hora de volverse a casa. Carson tenía una enorme lista de pequeños donantes que le dieron más de 64 millones de dólares durante la campaña, una cifra mayor de la que llegó a recaudar Trump.[4] Marco Rubio, mientras tanto, tenía PAC financiando su aventura con casi 62 millones de dólares. Incluso cuando estaba más que claro que el entusiasmo de las bases no estaba allí y las donaciones caían a cero, Rubio podía seguir compitiendo con la vaga esperanza de resucitar su candidatura. Lo único que podía forzar a un presidenciable a irse de los comicios era la vergüenza o el ridículo, e incluso con esas Jeb Bush acabó gastando casi 160 millones de dólares (123 millones de PAC) antes de aceptar lo inevitable. Los oponentes republicanos de Trump fracasaron en coordinar sus campañas para detenerlo, pero, a diferencia de ciclos

anteriores, tampoco había nadie con autoridad suficiente para forzar su retirada.

Mensaje y estrategias

Uno de los aspectos más fascinantes de la campaña de Trump, y algo que el Partido Republicano sigue sin entender en las primarias de 2024, fue su posicionamiento ideológico. Trump tenía posturas claras en sólo dos temas, comercio e inmigración, en los que adoptó un tono estrictamente nacionalista. Rompiendo con más de un siglo de ortodoxia del partido, se oponía por completo al libre comercio y abrazaba el proteccionismo, alegando que el resto del mundo se «aprovechaba» de Estados Unidos. En inmigración, el GOP siempre había sido ambiguo, aunque generalmente favorecía nuevas llegadas. Trump hizo suyo el mensaje estridentemente nativista de las bases del partido, recuperando y ampliando según le convenía sus obsesiones antimusulmanas e insistiendo en que iba a construir un muro en la frontera con México.[5]

En el resto de la agenda, sin embargo, Trump o bien mantuvo una posición ideológica poco definida (a veces defendiendo una cosa y la contraria de un día para otro sin inmutarse) o bien se posicionó claramente a la izquierda del resto de candidatos. Para sacarse de encima a Carson, por ejemplo, le acusó de querer desmantelar Medicare, el seguro público de sanidad para mayores de sesenta y cinco años. En los debates, afirmó en varias ocasiones que iba a derogar Obamacare y que la reemplazaría por una ley más generosa. Habló de subir impuestos a los ricos repetidamente, se proclamó defensor de los derechos LGBTIQ e incluso insistió en que iba a acabar con las guerras «estúpidas» en las que Estados Unidos se había metido y a apostar por una política aislacionista. Aunque el tipo, gracias a

su patológica falta de disciplina, con frecuencia acabó por criticar cosas que había defendido, rompió con ortodoxias y tabúes del GOP una y otra vez.

Le funcionó, porque las bases republicanas estaban lejos del consenso dominante de los líderes del partido. Un porcentaje decisivo del votante de primarias republicano era conservador en muchos temas sociales (inmigración, aborto, raza), pero no en lo económico: todas esas ideas de retrasar la jubilación, privatizar Medicare y el sistema de pensiones y desmantelar el estado de bienestar por completo le generaban rechazo, y no hablemos ya de la idea de dejar que las fábricas se mudaran a otros países. Lo que querían era oír que «esa gente» (inmigrantes y quienes «no lo merecen») no recibiría ayudas, pero no a alguien que dijera que su pensión era demasiado generosa y debía ser reducida. Ted Cruz, Marco Rubio y el resto del GOP se pasaron meses hablando sobre libertad, mercados y reducir el gasto público, pero ese mensaje sólo entusiasmaba a las élites y los donantes más acaudalados del GOP, no a sus votantes.

Desde el punto de vista de la comunicación política, la campaña de Trump fue también un ejercicio magistral de atraer la atención. El candidato y su equipo entendieron a la perfección qué medios de comunicación marcaban la agenda del debate (Fox y CNN, con MSNBC en segundo plano) y cuáles eran sus necesidades e incentivos para cubrir un evento o unas declaraciones. Las cadenas de noticias buscaban dramatismo, conflicto, historias; no había nada más atractivo para ellas que un candidato haciendo o diciendo algo inesperado, corriendo riesgos, dándoles una narrativa que contar y analizar. Trump, una criatura de los *reality shows*, sabía que el objeto del conflicto era mucho menos importante que la pelea en sí, de modo que, durante toda la campaña, no hizo más que meterse en un berenjenal tras otro, pelearse con todo el mundo y siempre, siempre,

siempre mantener tramas en las que fuera protagonista, sin importar si era algo aparentemente dañino para él o no.

Sus dos armas favoritas para meterse en la agenda eran, por un lado, Twitter, donde siempre ejerció de trol consumado, y, por otro, sus discursos de campaña. Trump siempre ha sido un orador peculiar. Los políticos convencionales tienen un *stump speech*, un discurso más o menos fijo de longitud variable que repiten en casi todos los actos y eventos en los que participan. El texto que utilizan ha sido calibrado y pulido cuidadosamente por asesores y refleja, en teoría, el mejor mensaje del candidato. Trump tenía un *stump speech*, pero sus intervenciones eran más parecidas a un monólogo que a un ejercicio de oratoria; un cruce entre un cómico haciendo *stand up* y un presentador radiofónico dando un largo sermón en antena. Bravucón, ruidoso y, por encima de todo, imprevisible, Trump nunca suena como un político convencional y disfruta improvisando, dándoles a los medios siempre algo nuevo o inesperado con que obsesionarse, sea una salida de tono, un insulto creativo a un oponente o (una de sus maniobras favoritas) críticas a lo sesgados e injustos que eran los medios con él.

A las televisiones por cable les encantaba. Durante todo el ciclo electoral, CNN se hartó de retransmitir discursos de Trump de forma íntegra, ansiosos de ser los primeros en informar sobre la última tontería o *vendetta* del futuro presidente. Gracias a ello, los espectadores de la cadena vieron una cantidad francamente cómica de monólogos de un señor contándoles lo horrible que era CNN.

Gran parte de las noticias acerca de Trump en la campaña eran negativas, por supuesto. El tipo estaba enzarzado en toda clase de vendettas con actores, oponentes o famosos, controlando la polémica por alguna fascistada que hubiera soltado o siendo investigado por fraude. Nada pareció afectarle demasiado. La estrategia de la campaña (no está claro si

consciente o accidental) era lo que Steve Bannon[6] llamaba «inundar la zona de mierda»: básicamente tener tal cantidad de polémicas y tanto drama detrás que acabara por ser casi imposible para los medios explicar con claridad qué estaba sucediendo y para los votantes seguir cualquier escándalo. Trump era un circo de cinco pistas donde siempre había vehículos chocando, trapecistas cayéndose y objetos ardiendo mientras los leones se comían al domador. Era un desastre constante. Era imposible no prestarle atención.

Los escándalos, además, reforzaban el mensaje de resentimiento y victimismo nixoniano, que era el hilo conductor de su campaña. Le atacaban porque era «valiente» y se atrevía a decir cosas que otros se callaban. Era la voz del pueblo, sin complejos, alguien que no se debía ni a donantes ni al partido; era un millonario que se pagaba la campaña de su propio bolsillo.[7] Cuando le atacaban a él, atacaban a sus votantes, la gente que no quiere callarse. En la burbuja de Trump, ser objeto de críticas de los «medios izquierdistas» era la demostración de que algo estaban haciendo bien.

Tras meses de errores, pifias, peleas absurdas entre candidatos y polémicas constantes, a principios de mayo Trump se impuso de forma decisiva en las primarias de Indiana. Ted Cruz y John Kasich anunciaron el final de su campaña. Contra todo pronóstico, un millonario de Queens sin experiencia política alguna era el candidato republicano a la presidencia.

Es importante recalcar, no obstante, que la victoria de Trump no fue un accidente, sino la consecuencia de múltiples tendencias políticas a largo plazo que dejaron al GOP en posición vulnerable ante un demagogo como él.

El realineamiento tras la revolución nixoniana crearon un Partido Republicano que dependía del apoyo del sector más reaccionario del país

para ganar elecciones. El caótico, fragmentado sistema de primarias le abría una puerta a competir y ganar en un partido dividido. Las fracturas internas del GOP y la progresiva radicalización de sus bases tras años de frenesí antiélites le daban un punto de partida electoral. Un sistema de financiación electoral caótico garantizó que sus contrincantes no pudieran coordinarse. Años de desgobierno y aumento de las desigualdades, especialmente en los estados gobernados por el GOP, crearon un poso de indignación listo para ser explotado. Unos medios de comunicación confundidos, hipnotizados por el caos de su campaña, convirtieron a Trump en el centro del debate. Y un Partido Republicano cada vez más radicalizado, autoritario, caótico y acorralado por sus propias bases acabó por escogerlo.

Todas estas tendencias, estos hilos que llevan a las primarias de 2016, tienen mucho de azar. Nadie tenía ni idea, cuando se abolió la Fairness Doctrine, de que personas como Rush Limbaugh o Tucker Carlson iban a dominar el mensaje republicano. El Supremo, cuando desregulaba el dinero en las campañas, no era consciente de que iban a fragmentar el GOP hasta tal punto que un chiflado capaz de arruinarse gestionando casinos podría tomarlo sin resistencia. El bloqueo institucional en Washington pareció una estrategia útil hasta que hizo que los políticos republicanos quedaran como unos incompetentes. La «mayoría silenciosa» ayudaba a ganar elecciones, aunque nadie pareció preguntarse qué pedirían los reaccionarios para seguir votando republicano hasta que fue demasiado tarde.

Las primarias republicanas de 2016, se dice, fueron una OPA hostil contra un partido político. Un actor externo al GOP, en contra de la voluntad de sus dirigentes, ganó el control de la organización por completo. Una OPA, sin embargo, sólo es posible contra una empresa vulnerable, mal gestionada o muy débil. Los republicanos no eran las víctimas del trumpismo. Eran su causa.

LAS PRIMARIAS DEMÓCRATAS DE 2016

Para el Partido Demócrata, las primarias presidenciales de 2016 representan otra clase de trauma completamente distinto; unas en las que el candidato preferido por el *establishment* acabó por imponerse, pero que fracturó el partido en el proceso.

Cuando Hillary Clinton anunció su candidatura a la presidencia en abril de 2015, la impresión general fue que su nominación era tan merecida como inevitable. Clinton tenía la experiencia, el temperamento y la inteligencia para el cargo, había sido una excelente secretaria de Estado y tenía a las élites del partido detrás. Iba a ser la primera mujer candidata a la presidencia y, tras ocho años de crecimiento económico bajo Obama, la favorita para ganar las elecciones.

Su candidatura, sin embargo, se topó con tres problemas de inmediato. Primero, que las primarias fueran vendidas como poco más que una coronación era algo que irritaba profundamente a un sector considerable de las bases demócratas, especialmente si la ganadora iba a ser una ex primera dama que ya había perdido unas primarias ocho años antes. Segundo, la izquierda del partido seguía guardándole un cierto rencor a los Clinton, tanto por su centrismo en los noventa como por el apoyo a la guerra de Irak bajo Bush hijo. Tercero, y más importante, Hillary se topó con Bernie Sanders.

La candidatura de Sanders, senador socialista independiente por Vermont, no era, estrictamente, algo nuevo. Los demócratas, desde que hay primarias, siempre tienen un candidato del ala izquierda del partido compitiendo por la nominación. La espectacular derrota de George McGovern en 1972, no

obstante, siempre actuó como un recordatorio de que nominar al candidato más progresista no era una gran idea, así que en años sucesivos el partido ha respetado y aplaudido a sus héroes de la izquierda, pero les ha negado la candidatura.

En 2016, sin embargo, el sector progresista contaba con un arma nueva para hacer que su candidato fuera viable, los pequeños donantes. En 2008, las bases, hartas de la guerra (y del apoyo de Hillary Clinton a esta), se habían volcado con la candidatura de Obama. Esta vez iban a apoyar a alguien que realmente les representaba.

En realidad, Hillary Clinton ganó las primarias de 2016 con bastante facilidad; su margen final, 55-43, fue muchísimo mayor que el de Obama ocho años antes (este se impuso por una décima, 48,1 a 48). Clinton siempre estuvo por delante en los sondeos, a considerable distancia de Sanders; Bernie sólo se le acercó un poco en febrero, tras ganar en el estado vecino a Vermont, New Hampshire. La izquierda americana, sin embargo, se entusiasmó con Sanders, regando su campaña de donaciones y voluntarios. Ser pro-Bernie se convirtió en una seña de identidad generacional, de un nuevo progresismo hípster con ganas de escoger a un excéntrico tipo con acento de Brooklyn para la presidencia. La campaña, en ocasiones, parecía más un fenómeno de fans que una actividad política; los mítines de Sanders eran enormes y entusiastas.

Eso no evitó que el 1 de marzo de 2016, el «supermartes», Clinton hubiera poco menos que cerrado la nominación. Sanders era competitivo en estados del norte y en aquellos que celebraban *caucus* en vez de primarias (un *caucus* exige «votar» a una hora determinada y favorece a los candidatos con activistas más movilizados), pero perdió de forma abrumadora en los estados del sur, especialmente entre votantes afroamericanos. A mediados de marzo era obvio para cualquiera que supiera

contar que el senador de Vermont no tenía opciones de conseguir suficientes delegados para ganar la nominación.

En las primarias preinternet, eso habría bastado para dar por concluido el proceso. Sanders se habría quedado sin apoyo institucional del partido y sin donantes, y habría dejado la campaña a finales de mes. Con 229 millones de dólares en el banco, sin embargo, Bernie no tenía incentivo alguno para detenerse. Siguió compitiendo hasta junio, ante la poco disimulada irritación del resto del partido, incluso cuando Clinton había conseguido suficientes delegados para ser la candidata.

Al terminar los comicios, Sanders anunció su apoyo incondicional a Clinton, y habló sobre la amenaza que representaba Trump. Tras casi un año de campaña contra Hillary, sin embargo, un amplio sector de sus votantes estaba decepcionado, cansado y más que irritado con el *establishment* y la condescendencia de la ganadora. Hillary nunca acabó de perdonar a su rival por alargar tanto la campaña y no hizo mucho por cerrar heridas, negándose a incluir a Sanders en la elaboración del programa electoral.

En 2016, los demócratas habían escogido, a diferencia del GOP, a la candidata más moderada. Las bases del partido, sobre todo los votantes afroamericanos y latinos, estaban firmemente en el centro. Pero esa victoria había dividido a los demócratas y alienado a muchos de sus voluntarios y militantes más entusiastas. En noviembre, cuando Clinton se quedó fuera de la Casa Blanca por un puñado de votos, se arrepentirían de ello.

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2016

En lo que llevamos de libro hemos hablado de varias elecciones en las que la diferencia entre los candidatos fue tan minúscula como para hacer

imposible cualquier discusión sobre causalidad. Dado que cualquier factor capaz de mover el resultado unas décimas era suficiente para cambiar el resultado final, todos los factores fueron, en el fondo, igualmente importantes para decidir quién se impondría en las urnas; todo era decisivo.

Las elecciones presidenciales de 2016 son el ejemplo paradigmático de esta clase de resultados. Hillary Clinton recibió 65,86 millones de votos, un 48,2 % del total. Donald Trump obtuvo 62,98 millones, un 46,1 %.

La carambola en el Colegio Electoral de Trump fue extraordinaria. Pensilvania, Wisconsin y Michigan sumaban 46 votos en dicho cuerpo de compromisarios. El candidato republicano ganó en Pensilvania por 44.292 votos (siete décimas, en porcentaje), Wisconsin por 22.748 (ocho décimas) y Michigan por 10.704 (dos décimas). Clinton, sin esos tres estados, tenía sólo 227 de los 270 necesarios para alcanzar la presidencia. Esos 77.744 votos decidieron las elecciones. Dado que los tres estados decisivos, los que daban la mayoría en el Colegio Electoral, estaban a la derecha del votante mediano nacional, Trump pudo ganarlos por la mínima e imponerse. Era la clase de escenario improbable, irreal, que los politólogos se inventan como historia de miedo en primero de carrera al hablar de sistemas electorales. Una combinación casi imposible, imposible de repetir.[8]

Que Donald Trump ganara las elecciones por pura chiripa, sin embargo, no debe hacernos olvidar que operaba en un sistema y contexto político que lo puso en ese lugar. Lo importante de esta historia no es que se quedara a dos puntos de Clinton, sino cómo consiguió un 46,1 % del voto y por qué se impuso en tres estados norteños industriales que habían sido feudos tradicionales del Partido Demócrata.

En las elecciones de 2016 confluyeron todas estas tendencias nacidas del «cambio constitucional» de 1965 y de la contrarrevolución nixoniana, con los cambios institucionales bajo Reagan y sus sucesores. También fueron el

resultado de una campaña electoral extrañísima, donde todas las patologías de los medios de comunicación y del Partido Demócrata acabaron por condenar a Clinton.

Una campaña electoral extraña

Una vez que demócratas y republicanos escogieron a sus candidatos, las elecciones presidenciales de 2016 tenían un favorito claro: Hillary Clinton.

El Partido Republicano en bloque estaba convencido de que habían nominado al peor candidato posible, un patán irresponsable y mentiroso que consideraban, en palabras de Rick Perry, un cáncer para el movimiento conservador. Ted Cruz, en un discurso muy inusual en la convención del partido, llegó a pedir a sus miembros que «votaran siguiendo sus conciencias», negándose a apoyar a Trump. Las hemerotecas están plagadas de líderes republicanos con declaraciones parecidas, horrorizados por que ese hombre representara al partido en las urnas. Los demócratas, mientras tanto, veían a Trump como un racista histriónico y extremista, alguien que generaría rechazo entre los votantes moderados de los suburbios y que llevaría a latinos, afroamericanos y asiáticos a apoyar en masa a Clinton. Los sondeos daban una ventaja sideral a Hillary en las generales, y los opinadores, periodistas y expertos en Washington veían la campaña como poco menos que un trámite, un paseo militar de los demócratas hacia la Casa Blanca.

Visto en perspectiva, sin embargo, había un buen puñado de factores que indicaban que la campaña no iba a ser tan fácil como parecía.

Tenemos, primero, el estado de ambos partidos al terminar las primarias. Por muy horrorizadas que estuvieran las élites del GOP, lo cierto es que el candidato nominado generaba un entusiasmo considerable en las bases, así

que iban a tener activistas y voluntarios activos toda la campaña y muy poca abstención. Los sondeos, además, sugerían que una parte del electorado de Trump eran votantes que habían estado «desconectados» del partido durante años pero que se habían movilizado gracias a él. Quizá no estuvieran convirtiendo a nadie, pero Trump había sacado a gente de la abstención. En el lado demócrata, mientras tanto, el partido se enfrentaba al problema opuesto: la candidata era alguien que desmotivaba a las bases, y probablemente iba a empujar a algunos activistas hacia la abstención o hacia terceros partidos.

Otro factor que pasó desapercibido entonces fue la economía. Tras el desastre financiero de 2008, Estados Unidos llevaba años creciendo a buen ritmo, con buenos datos de paro, PIB, productividad y sueldos. A finales de 2015, no obstante, dos sectores sufrieron una fuerte contracción, energía y agricultura, debido a la caída del precio del petróleo y al fortalecimiento del dólar. Esa contracción tuvo un impacto considerable en un puñado de estados cuyas industrias dependían de suministrar a estos sectores, y creó una bolsa de descontento considerable.

Algunos de estos estados, como Dakota del Norte o Iowa, importaban poco electoralmente, ya que los republicanos los iban a ganar igual. En otros, la minirrecesión de 2015 sí fue importante; Pensilvania es a la vez industrial y un productor de gas natural; Wisconsin y Michigan no sólo tienen agricultura, sino que producen maquinaria agrícola y minera. Durante la campaña, los demócratas alardearon de éxitos económicos y de un país resurgente, y tenían motivos para ello. Lo que pasó desapercibido fue que ese mensaje seguramente era dañino en esos estados clave que estaban de facto en recesión.

Los expertos y analistas también subestimaron el profundo odio y la desconfianza que gran parte del electorado sentía contra los Clinton.

Habitualmente en una campaña presidencial los candidatos tienen que dedicar tiempo y energía a definir de forma negativa a sus oponentes. Para ello buscan defectos, errores o fracasos durante su carrera, declaraciones altisonantes o pifias fuera de contexto, e intentan asociarlas con su rival. Una de las ventajas de un candidato como Obama, un recién llegado a la escena nacional, es que el electorado no tiene una idea o imagen preconcebida de él, así que definirlo es complicado; las presidenciales tienden a favorecer a gente que no lleva mucho tiempo en Washington por este motivo.

Hillary Clinton, obviamente, llevaba mucho tiempo en Washington. Los medios de comunicación conservadores del país la habían criticado, demonizado e insultado junto con su marido sin cesar durante décadas, la clase de ataques que intentan definir negativamente a un candidato que se graban en la memoria de los votantes. Aunque Clinton, en la época en que fue secretaria de Estado de Obama, era una de las políticas mejor valoradas de Estados Unidos (un 66 % de aprobación en Gallup), su retorno a la política electoral recuperó todos esos ataques.

La Hillary Clinton candidata resultó ser increíblemente impopular. Durante la campaña, su aprobación osciló entre –10 y –15, una cifra sólo igualada hasta entonces por Bush padre camino de su derrota en 1992. El único consuelo de Hillary fue que Donald Trump era aún más detestado por los votantes que ella, con cifras que oscilaban entre –25 y –35. Dado que un porcentaje amplio del país tenía fuertes ideas preconcebidas sobre Hillary, su techo electoral era relativamente bajo y apenas podría aprovechar los horrendos números de su contrincante.

Además de a la tirria de los votantes, la candidata demócrata tuvo que enfrentarse al desdén de gran parte de la élite mediática del país, que siempre vio a los Clinton como unos advenedizos, cursis o paletos. Durante

la campaña, muchos columnistas no pudieron evitar resucitar esos viejos odios y obsesiones hacia ellos. Maureen Dowd, del *New York Times* (alguien que ha pasado toda su carrera odiando a los Clinton), la llamó la «Daisy Buchanan de la política americana», en referencia al personaje de *El gran Gatsby* que destruye todo lo que tiene a su alrededor sin importarle ni sufrir las consecuencias. Hillary solía ser analizada como alguien retorcido, con una agenda oculta, que se siempre se hacía la víctima, con un plan o motivo ulterior. Las noticias sobre su candidatura andaban en todo momento al borde de la misoginia, con los medios actuando incrédulos ante el hecho de que esta mujer fuera a ser presidenta.

Parte del problema, además, se derivaba de que para la prensa «centrista» atizar a los Clinton era una especie de marca de imparcialidad. Adiestrados y entrenados durante la presidencia de Bill, cuando Fox, Limbaugh y demás se dedicaron a perseguir decenas de crímenes imaginarios contra ellos, la prensa siempre los percibió como políticos inherentemente sospechosos, nunca lo bastante honestos. Cualquier escándalo debía ser analizado, comentado y diseccionado, por irrelevante que fuera. Eran los Clinton y siempre tenían dramas y escándalos asociados. Algo habrían hecho.

La campaña de 2016 tuvo decenas de escándalos y polémicas alrededor de Donald Trump: el fraude de Trump University, su largo y publicitado historial de no pagar impuestos, sus astracanadas constantes, su racismo, su historial de bancarrotas y escándalos. Tuvimos incluso, en plena campaña, al candidato admitiendo en una grabación lo mucho que le gusta acosar a mujeres, mientras una decena larga de ellas le acusaban de agredirlas sexualmente. Hillary Clinton, mientras tanto, tuvo un único escándalo con algo parecido a sustancia en toda la campaña: el uso de un servidor de correo electrónico privado en sus tiempos de secretaria de Estado.

La prensa se obsesionó con los correos electrónicos de Hillary. Según un análisis del Shorenstein Center de Harvard, los dichosos e-mails («but her e-mails» se convirtió en una muletilla recurrente en la prensa equidistante), en solitario, recibieron más cobertura en los medios que todos los escándalos de Trump combinados.[9] Otro estudio concluyó que el servidor de correo de Clinton fue mencionado seis veces más que Trump admitiendo ser un acosador sexual y casi siete veces más que Trump siendo acusado por el fraude de la Trump University, su tinglado para hacer cursillos inmobiliarios con el que estafó a miles de personas y que se cerró tras un acuerdo extrajudicial millonario.[10] Los medios dedicaron cuatro veces más espacio a los «escándalos» de Clinton que a todas sus posiciones o propuestas políticas. Trump, un candidato notorio por sólo hablar de un tema (inmigración), recibió más atención por ese tema en solitario que por todos sus escándalos en agregado.

Durante toda la campaña, los medios le siguieron el juego a Trump. No sólo cubrieron incesantemente el único tema de políticas públicas del que le gustaba hablar, sino que hicieron poco caso a sus múltiples escándalos, restándoles importancia. Mientras tanto, ignoraron por completo la enorme lista de propuestas concretas de Clinton, al tiempo que diseccionaban cada rumor y detalle nuevo sobre los e-mails como si fuera de una importancia capital. Fuera porque la dieran como ganadora, fuera porque tenían una tirria bien conocida y poco disimulada a los Clinton, los medios hicieron un trabajo atroz.

A este cúmulo de torpezas se le suma la intervención de terceros países en la campaña, esto es, la trama rusa. Los servicios de seguridad del Kremlin se entrometieron en la campaña en cuatro lugares específicos. Primero, a través de Paul Manafort, director de campaña de Trump, recibieron información confidencial de su estrategia política y sondeos.

Manafort fue despedido en agosto de 2016, en cuanto se hicieron públicas sus conexiones con oligarcas rusos, aunque todo parece indicar que nunca consiguieron gran cosa. Segundo, en junio de 2016, Manafort, Jared Kushner y Donald Trump Jr. se reunieron con varias personas con contactos en los servicios secretos rusos en la Trump Tower. Tampoco parece claro que sacaran nada. Tercero, tenemos las factorías de troles y la publicidad pro-Trump en Facebook, seguramente usando datos y estrategias salidas de los sondeos de Manafort. Aunque resultón, el número de anuncios y su alcance fue muy limitado y a buen seguro insuficiente como para ser de ayuda.

La única intervención rusa que sí tuvo un impacto en la campaña fue WikiLeaks. Un grupo de hackers asociados a los servicios de seguridad rusos se infiltraron en el servidor de correo electrónico del Comité Nacional Demócrata, así como en los de varios altos cargos y asesores del partido. No encontraron nada demasiado relevante o escandaloso, pero aun así se pusieron en contacto con Roger Stone, un asesor y amigo de Trump, para coordinar su distribución.[11] El día en que se publicó la infame cinta de *Access Hollywood* en la que el candidato republicano alardeaba de meter mano a mujeres al azar, WikiLeaks anunció que haría públicos todos esos correos electrónicos. No tenían nada que ver con el otro escándalo de los correos del Departamento de Estado, pero, por puro golpe de suerte, se trataba de algo parecido que dejó a la prensa otro tema con el que obsesionarse. La campaña demócrata acabó siendo sobre e-mails, una y otra vez.

Esta «intervención», por supuesto, fue limitada, y su efectividad, de haberla, se debió más a la buena fortuna de que era medio adyacente a otro escándalo que a un intento genial e infalible para subvertir unas elecciones. El *affaire* ruso fue menos importante por su efectividad (probablemente

escasa) que por el hecho de que todo el mundo en la órbita de Trump pareciera estar dispuesto a coger el teléfono a cualquier llamada del Kremlin.

La gota que colmó el vaso en los escándalos de Clinton, sin embargo, fue probablemente el FBI. El director de la agencia, James Comey (republicano y veterano de la Administración Bush hijo), había exonerado a la candidata demócrata del asunto de los e-mails en una rueda de prensa en julio, diciendo que su (larga) investigación no había encontrado delito alguno. El 28 de octubre, apenas diez días antes de las elecciones, el mismo Comey envió una carta al Congreso informando de que habían encontrado en el ordenador portátil de Anthony Weiner, el exmarido de una asesora de Clinton, una serie de correos electrónicos que podían formar parte de esos e-mails del servidor privado de correo que tantos dolores de cabeza les habían causado.

La prensa, otra vez, perdió la cabeza por completo. *The New York Times* dedicó toda su primera página a noticias y análisis sobre los e-mails. Tras varias jornadas de frenesí informativo sobre el tema, y cuando empezaba a dejar las portadas, Comey dio otra rueda de prensa para anunciar a tres días de las elecciones que en el portátil no había nada y que el FBI ya no estaba investigando, recordándoles a los votantes, otra vez, el dichoso escándalo.

En la mayoría de los análisis sobre estrategias electorales es difícil decir, a ciencia cierta, si una intervención o suceso tuvo un impacto electoral claro. En este caso, sin embargo, su impacto en los sondeos fue inmediato y probablemente suficiente para darle la victoria a Trump. Nate Silver, en su análisis poselectoral, señaló que Clinton estaba seis puntos por encima de Trump el día en que la carta de Comey fue publicada; una semana después, esa ventaja se redujo a tres puntos.[12] La segunda carta llegó demasiado tarde como para apreciar su impacto en los sondeos, pero, viendo el

resultado final, es muy posible que también afectara al resultado. Dada la ventaja intrínseca de Donald Trump en el Colegio Electoral, la diferencia entre perder por tres puntos o por 2,1 era la diferencia entre ganar o perder las elecciones. Sin Comey, es probable que Trump nunca hubiera llegado a la Casa Blanca.

Instituciones y el peso de la historia

Detrás de toda esta historia de anomalías electorales, medios miopes y campañas incompetentes se oculta la realidad mucho más prosaica de que Trump estaba allí, a tiro de Clinton, a diez días de las elecciones.

Tenemos, por un lado, una América rural, estancada, cada vez más hostil tanto al progreso social como a cualquier intervención del Gobierno. Tenemos, a su vez, una América dinámica, urbana y cosmopolita, vibrante y próspera, cada vez más progresista y abierta al mundo. Esta división precede a las elecciones de 2016. En su base, sigue estando la esclavitud y sus consecuencias, de cómo ese pecado original ha contaminado la política de Estados Unidos.

El GOP tenía a esta América reaccionaria dentro de su coalición desde 1972, siempre cerca del partido, pero nunca del todo visible en la superficie. Los republicanos siempre se las habían arreglado para mantenerla bajo control, dentro del partido, pero justo debajo de la superficie, con candidatos de las otras facciones ganando primarias y elecciones. Lo que sucedió en 2016 fue que Trump trajo a estos grupos a primera línea, haciendo explícito lo que hasta entonces había sido ruido de fondo.

La toma del GOP por parte de sus radicales en las primarias fue el resultado de la debilidad de los partidos políticos en Estados Unidos, una consecuencia del diseño institucional del país. Esta debilidad se acrecentó a

partir de los años setenta debido a la combinación de la democratización del sistema de primarias, los cambios en los sistemas de financiación electoral y el ecosistema de activistas y medios conservadores que alimentaba la radicalización de las bases.

El sesgo conservador inherente al sistema constitucional americano fue lo que hizo posible la victoria de un candidato reaccionario en las generales. En condiciones normales, cuando en un sistema bipartidista uno de los dos partidos se radicaliza alejándose del centro, las derrotas electorales bastan para disciplinarle. En Estados Unidos, el extraño sistema electoral, la preeminencia del Senado y (especialmente pos-2010) los agresivos *gerrymanders* en muchos estados hacen que el votante decisivo del electorado no esté en el centro, sino escorado hacia la derecha. Si el estado decisivo para ganar unas presidenciales es consistentemente más conservador que el votante mediano del país a escala nacional, esto permite al GOP presentar candidatos alejados del centro que pueden seguir siendo competitivos en las urnas.

Los republicanos, como consecuencia, no «aprenden» que la radicalización ideológica es impopular, porque ganan elecciones incluso con candidatos radicales. La idea de que si envías a un extremista perderá por goleada nunca acaba de implantarse en el partido del mismo modo que entre los demócratas; para el GOP, «defender nuestros ideales» es visto como una ventaja electoral. A esto le sumamos que, en un partido con militantes ideologizados, es racional enviar al candidato más radical posible que aún pueda ganar elecciones. Las bases republicanas prefieren correr el riesgo de perder que nominar a alguien que los traicione en el cargo por «pragmatismo». El sistema político americano les permite hacerlo con un riesgo mucho menor que los demócratas.

Volvemos, entonces, a la extraordinaria carambola de las elecciones de 2016. Trump nunca ha sido el candidato más racional ni disciplinado ni estratégico de la política americana, eso es indudable. Sea por suerte, sea por instinto, en 2016 su campaña acabó encontrando al votante decisivo de los tres estados que estaban escorados en el punto exacto de la distribución ideológica del país para ganar una mayoría en el Colegio Electoral. El delegado mediano de nuevo en estos colegios estaba escorado a la derecha, y dieron con él con el mínimo número de votos posible para ganar la presidencia. Es el equivalente político de disparar una flecha en medio de un huracán a través de un bosque en llamas con los ojos vendados y dar en el blanco. Un ejercicio de puntería casi imposible, no sé si fruto del talento o de una potra inigualable.

Con esta perspectiva, la victoria de Trump es simultáneamente mucho menos preocupante de lo que parece y mucho más grave de lo que aparenta. Es menos preocupante porque en realidad fue un churro, el resultado de una combinación de media docena de acontecimientos afortunados, golpes de suerte, torpeza de su rival y una prodigiosa puntería electoral. Es más grave de lo que aparenta, sin embargo, porque los factores institucionales que crearon el escenario para que ganara siguen existiendo, y en muchos casos están acentuando los problemas que crearon su candidatura.

Trump, además, ya ha ganado una vez; su mera existencia y los cambios que ha producido dentro del GOP aumentan el riesgo de que esa victoria se repita.

10

Mirando al futuro

Las elecciones presidenciales de 2020 podrían haber sido vistas como un retorno a la normalidad tras la caótica presidencia de Trump. Joe Biden se impuso con claridad con 4,5 puntos de ventaja (51,3 a 46,8 %), sacando una mayoría clara e incontestable en el Colegio Electoral. Los más de siete millones de votos entre ambos candidatos parecen un muro infranqueable, un repudio claro y decidido al trumpismo.

El electorado de 2020 fue distinto al de 2016 en varios detalles cruciales. Para empezar, la participación fue considerablemente superior, pasando de un 60,1 % a un 66,6 %, con más de 27 millones de nuevos votantes.[1] La presidencia de Trump resultó ser un catalizador tremendo de movilización política en Estados Unidos, tanto a la derecha como a la izquierda.

Los dos bloques demográficos que definieron a ambos partidos en 2016 experimentaron algunos cambios sustanciales.[2] Trump pasó de ganar el voto masculino 52-41 a apenas arañar un 50-48. La polarización racial también disminuyó; el margen de Trump en el voto blanco se redujo de 15 a 12 puntos, mientras que la ventaja demócrata en el voto latino cayó de 38 a 21. Incluso el voto por edades vio una tendencia similar, con los demócratas ganando los menores de treinta años por 6 puntos menos (bajando de 30 a 24), pero recortando su déficit entre mayores de 65 en cinco (de 9 a 4 puntos).

La única variable demográfica en la que la polarización aumentó considerablemente fue en el voto según el nivel educativo. El margen de victoria de Trump entre votantes sin educación superior se amplió de 7 a 15 puntos, mientras que la ventaja de Biden con universitarios subió ligeramente, de 11 a 14. Ese extraño voto de clase en el que las rentas inferiores a 50.000 y por encima de 100.000 dólares votan demócrata y el grupo central vota republicano no sólo volvió a repetirse, sino que el margen para Biden entre los más acomodados pasó de 4 a 13 puntos.

Aunque una victoria por más de 4 puntos parece inapelable, lo cierto es que, desde el punto de vista del Colegio Electoral, fue más precaria de lo que parece. Pensilvania, Arizona, Wisconsin y Georgia suman 57 delegados, suficientes para darle a Biden una mayoría de 306-232. Sin embargo, el candidato demócrata sólo ganó Pensilvania por 1,16 puntos, Wisconsin por 0,63, Arizona por 3 décimas y Georgia por 2. Su margen total en estos cuatro estados fue de 123.473 votos. Si algo menos de 62.000 electores (0,04 de todos los votantes del país) hubieran cambiado de Biden a Trump, este habría sido reelegido.

Es decir: la ventaja estructural republicana en el colegio electoral era tal que una victoria demócrata en el voto popular por 4,4 puntos habría sido *insuficiente* para ganar las elecciones. Trump estuvo a un puñado de votos de repetir su increíble carambola electoral de 2016 por segunda vez. Estados Unidos volvía a la normalidad con Biden, pero la historia no ha terminado.

UN PAÍS MOVIÉNDOSE EN DOS DIRECCIONES

La política americana en años recientes es una historia de señales contradictorias. Tenemos un sistema político cada vez más fracturado, en el que las decisiones y medidas aprobadas en los estados republicanos son cada vez más conservadoras, mientras que los estados controlados por los demócratas se han desplazado poco a poco hacia la izquierda.

En años recientes, por ejemplo, once estados han aprobado programas de bajas pagadas por maternidad, todos (con la excepción de Colorado) en el norte o en las costas, todos gobernados por demócratas.[3] A su vez, catorce estados (de nuevo, casi todos en el norte y las costas) cuentan en la actualidad con bajas por enfermedad pagadas. Seis estados (todos demócratas) ofrecen almuerzos y desayunos gratuitos a todos los estudiantes en colegios públicos. La divergencia en salarios mínimos según el estado ha seguido aumentando; el mapa, de nuevo, sigue de cerca la misma división norte/sur y costas/centro del país. Muchos estados (treinta y uno) han aprobado complementos salariales para rentas bajas, que son más generosos cuanto mayor es la mayoría demócrata en ellos. Los más progresistas cuentan con créditos directos a familias con hijos (once estados).

Aparte de programas concretos, los estados del norte y las costas han adoptado, sin excepción, regulaciones ambientales más estrictas y tienen leyes sobre aborto, identidad sexual o derechos de inmigrantes mucho más abiertas y permisivas. Por supuesto, estos mismos estados suelen tener sistemas fiscales más progresivos, recaudan más y tienen mayores niveles de gasto público. Son, casi sin excepción, más prósperos que los estados del sur, con niveles de renta y salarios más altos.

La América conservadora, mientras tanto, ha seguido avanzando en dirección contraria. Ha seguido bajando impuestos cada vez que ha podido, acompañándolos de recortes en servicios y gasto público. Ha desregulado la

economía, hecho más difícil organizar sindicatos, eliminado programas de asistencia y restringido el acceso a programas federales de asistencia como Medicaid. Ha eliminado regulaciones medioambientales. En cuanto ha tenido la oportunidad, ha impuesto restricciones draconianas al aborto, creado toda clase de medidas para eliminar la «propaganda de género» y la «ideología LGBTIQ». El resultado no ha sido, como hemos visto, mayor crecimiento económico, sino indicadores sociales atroces, esperanzas de vida menores y mucha más desigualdad.

Estas dos Américas van en direcciones opuestas, y ese movimiento político no sólo parece haberse acelerado, sino que la hostilidad entre ambas va en aumento. Uno de los fenómenos que han caracterizado la presidencia de Trump fue la profundización del partidismo negativo, votantes que tienen como principal motivación no las virtudes de su propio partido, sino la hostilidad contra la formación contraria. En 1994, el porcentaje de votantes demócratas que tenían una visión «muy desfavorable» del Partido Republicano rondaba el 17 %; en la otra dirección, un 21 % de republicanos tenía una opinión muy desfavorable de los demócratas. En 2012, estos porcentajes han aumentado a un 46 % para los demócratas y un 43 % entre los republicanos.[4] Tras la presidencia de Trump, en 2022, la cifra se disparó al 54 % y al 62 %.

Todos los votantes, en todos los países, tienen una bien conocida tendencia a defender las ideas y medidas que su partido defiende; no apoyan a un partido según sus ideas. En Estados Unidos, en tiempos recientes, los votantes se definen por ser «antialguien» más que por apoyar a un partido.

Hay, sin embargo, algunas señales que invitan al optimismo y que sugieren que esta tendencia quizá esté empezando a cambiar.

Migraciones

Estados Unidos es un país donde la gente se muda con frecuencia de una región a otra en busca de una nueva vida, un cambio de aires o nuevas oportunidades. Aunque la tasa de migración interna ha disminuido en los últimos años,[5] hay un sólido flujo de mudanzas desde los estados del noreste, el Medio Oeste y California hacia los estados del sur y suroeste del país. El motor de estos traslados es la persistente incompetencia de muchas de las regiones más ricas de Estados Unidos no para generar crecimiento económico, sino para reducir el coste de la vida en sus ciudades o, más específicamente, mantener bajo control el coste de la vivienda.

Esto ha producido una de las paradojas más absurdas de la economía americana, donde la enorme productividad de sus zonas más dinámicas ha generado una riqueza que ha acabado en los bolsillos de caseros e inmobiliarias. También ha empujado a un número considerable de familias de clase media de estados progresistas a mudarse a lugares como Arizona, Georgia, Carolina del Norte o Texas, donde a pesar de cobrar sueldos menores pagarán mucho menos en vivienda. No ahorrarán dinero en impuestos, ya que la estructura fiscal más regresiva de los estados del sur hace que la clase media suela tener una presión fiscal igual o mayor que en el noreste o en California, pero podrán vivir en una casa más grande pagando menos.

¿Os acordáis de que en las zonas urbanas dinámicas del sur del país se votaba progresista? Este es, precisamente, uno de los motores tras estos cambios. El área metropolitana de Austin, Texas, creció casi un 26 % entre 2010 y 2023. Raleigh, en Carolina del Norte (parte del Research Triangle), creció un 20 %; Charleston, Carolina del Sur, un 19 %; Houston, un 17 %;

Nashville y Charlotte, un 15 %; Denver o Las Vegas, un 14 %, y Atlanta, un 12 %.[6]

Aunque muchas de estas ciudades representan un porcentaje pequeño de la población del estado, son el motivo por el que muchos estados del Viejo Sur están, poco a poco, empezando a votar demócrata. Biden fue el primer candidato de su partido en ganar en Georgia desde 1992[7] y se quedó a apenas un punto de hacerlo en Carolina del Norte. Texas lleva años moviéndose, poco a poco, hacia los demócratas, aunque Biden fue derrotado allí por más de cinco puntos. El crecimiento de las ciudades sureñas seguramente no acabe cambiando de color a Carolina del Sur o Alabama, pero si está reduciendo, poco a poco, la polarización a escala nacional.

Estos cambios han aumentado también la polarización dentro de los estados. Las peleas políticas entre zonas rurales y urbanas ocupan gran parte del debate en muchos lugares, forzando a los republicanos a responder ante estos nuevos bloques de votantes progresistas. En algunos estados (como Arizona o Virginia), el GOP empezó a perder elecciones, lo que los obligó a moderarse para recuperar el poder; en otros (Georgia, Texas) han recurrido al *gerrymandering* y a limitar los poderes de los gobiernos locales. Es fácil ver en estas disputas cómo la acritud de la política nacional está llegando a los estados; en realidad, es la política estatal la que está moviéndose hacia el centro, con elecciones que vuelven a ser competitivas tras años de gobiernos monocolor.

Partidos cambiantes: los republicanos

Estos cambios demográficos y peleas políticas estatales contribuyen, a su vez, a que los partidos estén cambiando, aprendiendo lentamente cómo

adaptarse a este nuevo contexto.

El Partido Republicano, aún con su vociferante líder y su enorme coro de voces mediáticas empujando hacia la radicalización, ha empezado a entender que el trumpismo, como estrategia política, es probablemente una calle sin salida. Un sector del GOP es consciente de que la victoria de 2016 fue básicamente un accidente y que cualquier candidato demócrata moderado que no fuera Hillary Clinton habría ganado.[8] Las abultadas derrotas del partido en 2018 y 2020 y el decepcionante resultado de 2022 sólo han confirmado esta impresión.

A partir de 2016, el partido ha seleccionado multitud de candidatos, de trumpistas irreprimibles (racistas, iracundos, resentidos, autoritarios) a toda clase de moderados y modernizadores. El sector reaccionario de las bases no es mayoritario, pero sí es capaz de atraer una pluralidad de los votos, así que el partido presentó más trumpistas que otra cosa en 2018 y 2020, con resultados uniformemente nefastos. El sector moderado, en muchos distritos, entendió que era mejor coordinar esfuerzos, y en 2022 logró nominar a más modernizadores, que acabaron sacando mejores resultados que el sector reaccionario del partido. En 2024, este cambio gradual seguirá produciéndose, y el GOP poco a poco irá encontrando un mensaje alternativo que le dé más posibilidades de victoria.

Observando los sondeos y los candidatos republicanos que han conseguido abrirse paso tras Trump (Glenn Youngkin, Ron DeSantis, Brian Kemp, Joe Lombardo, J. D. Vance), hay ciertas pistas y rasgos clave que sugieren cómo será el partido. El primer caladero de votos son los latinos, un grupo demográfico enorme (un 10 % del electorado en 2020) y en el que el GOP ha ganado muchísimo terreno estos últimos años. Los hispanos, según se han ido asimilando al *mainstream* cultural, se han hecho más conservadores, un patrón que se repite en todas las oleadas migratorias. Los

republicanos han entendido que no son un grupo homogéneo y que, si concentran sus energías en atraer a latinos evangélicos, venezolanos, cubanos, ecuatorianos y a aquellos socialmente más conservadores pueden ganar mucho terreno. A su vez, para los latinos de segunda y tercera generación, la inmigración es un tema mucho menos relevante, así que la insistencia demócrata en hablar sobre ello es, de hecho, casi contraproducente, al igual que su obsesión con el bilingüismo. El mensaje republicano de «americanidad» les parece más atractivo.

Los republicanos, además, se han dado cuenta al fin de que el liberalismo económico puro es un mensaje político agotado. El partido sigue, por ahora, buscando y experimentando con una variedad de mensajes económicos populistas que van del proteccionismo económico a una apuesta más clara por hablar de educación y movilidad social. Han recuperado también su vieja obsesión por el crimen y la seguridad ciudadana, que vuelve a primer plano tras años de obsesión con el terrorismo, y en política exterior han dejado atrás el intervencionismo neoconservador.

Todos estos ajustes y cambios, no obstante, se enfrentan a fuertes resistencias internas por parte de las facciones tradicionales del partido. La derecha religiosa, tras la derogación de Roe contra Wade, está empujando al partido hacia una actitud de intransigencia tanto sobre el aborto como sobre otras materias de identidad sexual y religiosa. Uno de los instintos políticos más firmes y acertados de Trump fue siempre mantener una cuidadosa ambigüedad, cuando no distancia, con esta clase de extremismos. El GOP se encamina a años de tensiones internas entre candidatos que saben que este es un tema tóxico que daña al partido (los sondeos indican claras mayorías a favor del aborto) y un bloque evangélico iracundo.

La base empresarial y financiera tradicional del partido, mientras tanto, está increíblemente incómoda con el proteccionismo pos-Trump, así como

con su decisión de abandonar sus intentos de derogar Obamacare, privatizar las pensiones o recortar Medicare. El GOP no quiere expandir el estado de bienestar, pero muchos candidatos después del Gobierno de Trump han dejado de hablar de eliminarlo. Gran parte de la estructura organizativa del movimiento conservador depende de ellos, y son recursos que pueden echar en falta.

Finalmente queda el núcleo trumpista del GOP, una mezcla de reaccionarios, populistas antiinmigración, extremocentristas autoritarios, conservadores confundidos y gente que siente verdadera devoción por su líder. Es difícil estimar el tamaño exacto de esta facción. Una encuesta del *New York Times* de julio de 2023 estimaba que este grupo rondaba el 37-38 % del partido, dividido entre lo que llaman el «ala derecha» alineada con Fox News (sobre una cuarta parte de las bases) y «populistas de clase obrera» (12 %), que son esos votantes del noreste y el Medio Oeste centristas en lo económico pero muy conservadores en inmigración.[9] Esto sigue bastante de cerca al 37 % de las bases republicanas que declara que en las primarias de 2024 sólo tienen intención de votar a Trump, sin alternativa posible.

Los trumpistas, como era de esperar viendo a su líder, son notoriamente incoherentes desde el punto de vista ideológico. El ala populista, por ejemplo, no es contraria al aborto o al matrimonio homosexual como lo es el núcleo evangélico que se alimenta de Fox. Lo que les une es su devoción por el expresidente y su notable rencor contra el resto de las facciones del GOP.

El problema es que el resto del Partido Republicano es aún más ideológicamente incoherente. Los moderados no se oponen al aborto, mientras que los conservadores tradicionales sí. Los liberales económicos no tienen problemas con temas culturales y comparten con los

conservadores su devoción por bajar impuestos, pero se encallan en temas sociales. Los libertarios son aislacionistas en política exterior, algo que no comparten con el resto. Por mucho que haya más antitrumpistas que trumpistas, sus candidatos en primarias siempre se acaban topando con el problema de que Trump (o candidatos similares) empieza con un suelo del 35 % de votantes adictos a Fox News, totalmente aislados en la burbuja de los medios conservadores e invariablemente devotos al líder.

Romper esta burbuja se ha convertido en una tarea tan infructuosa como desesperante. A pesar de ser acusado de múltiples delitos graves, perder elecciones constantemente, generar un rechazo absoluto entre gran parte del electorado de las generales y ser un cretino egocéntrico que dio un golpe de Estado, las bases trumpistas son leales hasta la náusea. En un sondeo de CBS en agosto de 2023, los votantes de Trump llegaban a decir que se fiaban más de que el expresidente les dijera la verdad que de su propia familia.[10] Un 35 % del electorado de primarias del GOP decía que iba a votar al expresidente incluso si era condenado por cometer uno o varios delitos,[11] algo más que probable en vista de sus abrumadores problemas judiciales. Dado que el consumo mediático de este grupo de votantes es casi íntegramente de medios dentro de la burbuja de Fox y canales afines, son a menudo inmunes a cualquier estímulo externo.

La estrategia obvia para el resto de los candidatos del GOP sería moverse al centro, cortejar a los populistas y tejer una cierta alianza entre libertarios, tradicionalistas y moderados. El problema es que hay demasiados políticos sedientos de gloria aspirando a liderar este proyecto. En las presidenciales tenemos de nuevo más de media docena de alternativas a Trump, todos confiando en que Iowa y New Hampshire actúen como primera vuelta de las primarias. Si nadie lo remedia, el partido repetirá los errores de 2016.

A la fragmentación interna del GOP se añade la misma dinámica que hemos visto en capítulos anteriores de minorías ruidosas y disciplinadas que obligan a los candidatos a moverse hacia los extremos, sólo que amplificada con un bloque mucho más grande y alborotador pro-Trump. No hay ningún candidato en unas primarias republicanas que pueda permitirse perder de entrada un tercio de los votantes, así que cuando alguien le pregunta si Trump ganó las elecciones en 2020 y fue víctima de un fraude, no va a tomarse esa cuestión como una teoría de la conspiración absurda, sino que, o bien contestará de forma ambigua, o bien dirá lo que los trumpistas quieren escuchar.

El GOP tuvo la oportunidad, a principios de 2021, de sacarse a Trump de encima para siempre. En el segundo *impeachment* contra el ya expresidente tras el asalto al Capitolio, el partido tenía la opción de declararlo culpable en el Senado e inhabilitarlo de cualquier cargo público. Para hacerlo, era necesario el voto afirmativo de 67 senadores, incluyendo 17 republicanos. Sólo siete votaron condenarlo.

Fue un error grave. Todo parece indicar que el GOP no podrá redefinirse de manera efectiva mientras Trump siga en escena, a pesar del altísimo coste electoral que supone su presencia. La ventaja institucional del partido es tal que pueden seguir siendo competitivos incluso con este lastre (¡Trump casi gana incluso quedando a 4,5 puntos de Biden!), pero por ahora seguirán atados a los caprichos de un majadero racista, autoritario y mentiroso que intentó derrocar el sistema constitucional americano por completo.

Partidos cambiantes: los demócratas

Para ser un partido famoso y notable por su falta de disciplina interna, los demócratas se adaptaron al escenario trumpiano con sorprendente rapidez. Para empezar, las primarias presidenciales de 2020 fueron un ejercicio encomiable de responsabilidad colectiva de todas las facciones del partido. La campaña empezó con un candidato con una base de apoyo sólida y leal en el ala izquierda del partido, de nuevo Bernie Sanders, compitiendo contra otra progresista (Elizabeth Warren) y un número claramente excesivo de candidatos moderados. El temor, para muchos observadores, fue que Sanders consolidara los votos progresistas (sobre un 25-30 % del partido) y procediera a imponerse por mayoría simple una y otra vez con el resto del partido dividido, en una inversión de la marcha de Trump hacia la nominación en 2016.

Las primarias demócratas, sin embargo, otorgan delegados de forma más o menos proporcional a los resultados de cada estado (no como «el ganador se lleva todo» del GOP), así que Bernie, a pesar de obtener buenos resultados en Iowa, New Hampshire y Nevada, no fue capaz de sacar ventaja. Los moderados del partido, mientras tanto, no dividieron su voto demasiado tiempo. Carolina del Sur, la cuarta primaria del calendario, dejó claro que Joe Biden era el candidato con más apoyo, así que Pete Buttigieg y Amy Klobuchar se retiraron para dejarle vía libre. El «supermartes», menos de una semana después, dejó claro que Sanders no podía ganar las primarias. Con la COVID-19 a las puertas y el recuerdo de los rencores tras el desastre de 2016, el senador de Vermont se echó a un lado con rapidez.

El partido, además, resultó ser bastante más resistente que el GOP a los cantos de sirena de multimillonarios intentando capturar la nominación. Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, se gastó más de mil millones de dólares en su campaña de primarias, sólo para ser ridiculizado por todos los presentes en varios debates electorales (Warren, de forma más

memorable) y dejarle al final con menos de un 7 % del voto. Tom Steyer, otro magnate financiero algo menos famoso que Bloomberg (y bastante más pobre) se gastó casi doscientos millones, con aún peores resultados. Ninguno de los dos tenía el carisma caótico de Trump, pero la energía con la que el partido se los sacó de encima fue encomiable.

La reacción de Biden tras ganar la nominación con relativa facilidad fue muy distinta a la de Hillary. Biden invitó a todas las facciones del partido a participar en la elaboración del programa, trabajando con el equipo de Sanders para buscar propuestas que pudieran llevar a las generales. El *establishment* del partido entendía, al fin, que a veces es buena idea escuchar a aquellos que no les votan.

La adaptación no se limitó a las presidenciales. Ya en 2018, el partido recuperó el control de la Cámara de Representantes (a pesar del *gerrymandering*) con un mensaje centrado en defender los valores democráticos y poner coto a los escándalos inacabables de la Administración Trump. Hablar de decencia, tolerancia y democracia era un mensaje electoral potente.

Los demócratas también entendieron que movilizar el voto anti-Trump no era una estrategia viable a largo plazo, así que también han intentado combatir su populismo. Aunque el componente populista de Trump es menos prominente de lo que parece (y como presidente gobernó como un republicano convencional, bajando impuestos a los ricos e intentando desmantelar Obamacare), los demócratas son más que conscientes de que si quieren ganar elecciones deben ser más competitivos fuera de las grandes áreas metropolitanas del país en las dos costas. Para ello, han atacado dos bolsas de votantes: los suburbios y el voto obrero.

La estrategia para ganar terreno en los suburbios se basa en aprovechar los errores del GOP. La sentencia del aborto, Dobbs contra Women’s

Health, una de las grandes victorias del movimiento conservador en tiempos recientes y gran legado de los jueces del Supremo nombrados por Trump, ha servido para movilizar de forma masiva el voto femenino de clase media y alta. Dobbs no prohíbe el aborto directamente, sino que elimina su protección constitucional a escala federal. Como consecuencia, son los estados quienes deciden por separado cómo regularlo, algo que crea multitud de oportunidades para promover u oponerse a legislación, intentar someter protecciones al aborto a referéndum y, en general, motivar votantes.

El cada vez más virulento racismo y antielitismo de Trump, así como la hostilidad creciente del GOP a la libertad sexual y a los derechos LGBTIQ, ha servido también para movilizar a votantes con educación universitaria. Este bloque no suele preocuparse demasiado por temas de igualdad económica, pero está muy motivado ante cualquier ley que afecte a los derechos civiles; el tópico de que lo *woke* es una distracción de «gafapastas» blancos acomodados tiene bastante de cierto. Los demócratas han tenido primero que aprender cómo acomodar estas movilizaciones sin hacer que la retórica posmoderna convierta sus campañas en algo incomprensible y, después, buscar formas para compatibilizar este activismo (y sus poco disimuladas tendencias mesiánicas) con sus aliados tradicionales en el movimiento sindical. Joe Biden, como señor mayor un poco de vuelta de todo, fue capaz de evitar los peores excesos retóricos, hablando desde la empatía más que desde la confrontación.

Los intentos del Partido Demócrata por recuperar el voto obrero tradicional han tenido resultados un tanto ambiguos, cuando no decepcionantes. Parte del problema es que un amplio porcentaje de miembros del partido y sus élites tienen una miopía muy americana de pensar que el «voto obrero» o de la «clase trabajadora» sólo se refiere al

voto obrero blanco, tomando a latinos y afroamericanos como un bloque o grupo de interés separado. La izquierda americana siempre ha tenido esta actitud condescendiente de creer que aquellos votantes de renta baja son probablemente racistas, así que el punto de partida de sus estrategias suele ser pedirles que no lo sean, algo que generalmente no atrae ni simpatías ni votos.

Los demócratas están también contemplando aterrados cómo un sector nada irrelevante de la clase trabajadora latina e incluso algunos afroamericanos están respondiendo a los cantos de sirena del GOP. En las legislativas de 2018, los demócratas ganaron los votantes latinos sin título universitario por 44 puntos. Ese margen se desplomó a 19 puntos en las presidenciales de 2020 y las legislativas de 2022, dejando claro que hay una fuga de agua que debe ser cerrada con urgencia.

Por ahora, el partido está aún experimentando con estrategias electorales y candidatos. Primero, han recurrido a la táctica vieja y conocida de presentar a gente con buenas historias pero sin aspavientos ideológicos. Este es el caso de Mark Kelly, senador por Arizona, un político sólido que no se desvía demasiado de la agenda del partido y que fue astronauta antes de ser candidato.[12] También es el caso de Raphael Warnock, alguien que fue reverendo en la iglesia de Martin Luther King y que fue escogido senador por Georgia como un moderado y hombre de fe. En ambos casos, los demócratas tuvieron la suerte de que el GOP colaboró nombrando candidatos espantosos para competir con ellos, jaleados (cómo no) por Trump. En Arizona nominaron a Blake Masters, un ultranacionalista amante de la segunda enmienda, mientras que en Georgia escogieron a Herschel Walker, una exestrella de fútbol americano incapaz de hilar dos frases seguidas con una cantidad descomunal de escándalos familiares.

Los candidatos que considero más interesantes, sin embargo, y que quizá marquen el camino a seguir, son una cohorte de demócratas que pretenden practicar un nuevo populismo de izquierdas, muy centrado en la idea de respetar el esfuerzo, el trabajo y no dejar a nadie atrás. El más célebre (y hábil) de este grupo es John Fetterman, candidato al Senado por Pensilvania; un tipo enorme (203 centímetros), calvo y con perilla que intenta evitar ponerse traje y corbata si no es por obligación legal. Fetterman empezó su carrera política como alcalde de Braddock, un pueblo pequeño cerca de Pittsburgh, y es alguien agresivamente normal; la clase de persona que imaginas en un bar viendo un partido de los Steelers, no en el Senado. Tras una campaña ingeniosa e irreverente (asistida por otro candidato espantoso del GOP; Mehmet Oz, un médico televisivo), ganó su escaño con cierta solvencia, a pesar de sus problemas de salud.

En la otra punta del país, Marie Gluesenkamp Perez consiguió ganar en un distrito muy conservador en Washington con una campaña centrada en temas similares. De treinta y cinco años, hija de un inmigrante mexicano y propietaria de un taller mecánico, se pasó las semanas previas a las elecciones hablando de lo difícil que es llevar un pequeño negocio, su aprecio por los coches y (de nuevo) lo profundamente normal que era. Gluesenkamp es muy moderada (su distrito es muy conservador) y, aunque es latina, no se dedica a repetirlo constantemente; cuando lo menciona, es hablando con orgullo de lo que ha podido construir en este país. También (en un patrón que resultará familiar) tuvo la suerte de que su oponente en las elecciones, Joe Kent, era un lunático ultraderechista antivacunas que insistió toda la campaña en que Trump ganó las elecciones de 2020 y en que los encarcelados tras el asalto al Congreso son «presos políticos».

La estrategia más interesante, sin embargo, y la que creo que más recorrido puede tener a largo plazo, es la de no esconderse. Los periódicos

desastres electorales del GOP en la era Trump han acabado por dar a los demócratas el control completo de varios gobiernos estatales, y no han dudado en utilizarlos para aprobar su agenda política. Los dos casos más notorios están en el Medio Oeste. Gretchen Whitmer, en Michigan, y Tim Waltz, en Minnesota, han expandido el acceso a la sanidad, invertido en infraestructuras, aumentado el gasto en educación y guarderías, y aprobado bajas pagadas por enfermedad, subidas del salario mínimo y otras prioridades progresistas.

Que un partido apruebe leyes que lleva en su programa electoral cuando llega al poder puede parecer normal, pero los demócratas siempre han sido propensos a huir de su propia sombra, viendo esto de gobernar como un riesgo, no como una oportunidad de dar motivos para que la gente te vote. Por ahora, esta actitud posibilista se ha limitado a un puñado de estados (Michigan, Minnesota y Colorado, especialmente) que no tienen políticas sociales tan desarrolladas como California o Nueva York y tenían mucho margen para aprobar leyes. Como de costumbre, del éxito o fracaso electoral de estos gobernadores se extraerán lecciones, y el partido copiará la estrategia o la descartará sin más.

Por último, los demócratas están, poco a poco, buscando y encontrando tácticas para eliminar algunas de las ventajas institucionales a las que se enfrentan. En Wisconsin, hogar de *gerrymanders* imposibles, el partido se ha centrado en intentar ganar las elecciones judiciales al Tribunal Supremo, que se votan por todo el estado. En 2022, tras años de pacientes campañas electorales (los jueces tienen mandatos de diez años y, como mucho, se puede votar por uno de los siete que componen la corte cada año), el tribunal finalmente acabó con una mayoría progresista en 2022. La expectativa es que declaren el mapa legislativo que da supermayorías al GOP inconstitucional.

En otros estados como Missouri, Iowa, Utah o Michigan, los demócratas han recurrido a utilizar iniciativas populares para reformar la Constitución estatal, creando comisiones independientes que se ocupen de dibujar los distritos electorales en lugar de que lo haga la mayoría legislativa de turno. Esta clase de maniobras no son factibles en todas partes (muchos estados no tienen referéndums por iniciativa popular, y menos aún que permitan reformas constitucionales), pero suelen ser aprobadas con facilidad una vez llegan a las urnas. A los votantes, en general, les gusta tener representación política efectiva.

A los republicanos, obviamente, no les apetece perder sus ventajas institucionales, y a menudo han opuesto una feroz resistencia. En Wisconsin, un grupo de legisladores republicanos (de ese Legislativo que controlan artificialmente) ha amenazado con lanzar un *impeachment* contra la jueza progresista recién escogida. Aunque la vacante sería cubierta por alguien nombrado por Tony Evers, el gobernador demócrata, nada les impide seguir eliminando jueces progresistas para retrasar el caso hasta las siguientes elecciones. En Utah, los legisladores «interpretaron» el resultado del referéndum dándole a la comisión independiente un rol consultivo, pero manteniendo el control del proceso en manos de los políticos. En Missouri, los republicanos respondieron a una reforma constitucional que fue aprobada por un 62 % con otro referéndum dos años después desmantelando la medida y que daba el control del proceso a una comisión nombrada por el gobernador. El único consuelo para los demócratas es que tanto Utah como Missouri son tan republicanos (Trump ganó por 21 puntos en Utah y 16 en Missouri) que tampoco es que vayan a perder gran cosa.

Por encima de todo, los demócratas parecen por fin haberse percatado de que tienen que reconfigurar su mayoría para reducir sus desventajas institucionales. Necesitan recortar distancias en zonas rurales y

posindustriales del Medio Oeste. Necesitan recuperar parte del sur. Necesitan dar una respuesta al autoritarismo creciente de una parte del GOP que se centre en los valores tradicionales del país, en el respeto, la libertad y el optimismo que siempre han definido lo mejor de Estados Unidos. Saben que, ahora mismo, sumar la mitad más uno no les basta.

Optimismo y pesimismo

No hay que ser demasiado observador para percatarse de que, tras tantos capítulos hablando sobre polarización, un sector importante de ambos partidos parece estar intentando mirar hacia el centro. En el lado republicano, lo hacen a pesar de Donald Trump, expandiendo la cada vez más agotada coalición nixoniana para atraer el voto latino, moviéndose hacia el centro en temas económicos y reconduciendo el resentimiento de décadas pasadas hacia un nuevo nacionalismo casi incluyente. Para los demócratas, el viraje al centro consiste en intentar encontrar un nuevo mensaje económico basado en una política industrial decidida, redefinir su agenda social en clave de libertad, no sólo derechos, y ofrecer una agenda de gobierno mucho más protrabajador, dejando atrás el tímido neoliberalismo de la era Clinton.

Como veíamos en los sondeos al principio del capítulo, esta moderación empieza a ser visible en los márgenes del propio electorado. La polarización del voto según raza está disminuyendo ligeramente, al igual que la polarización regional. Aunque años de radicalización de las bases republicanas (y, en mucho menor grado, demócratas) han hecho que el centro esté más vacío de lo que solía, el GOP se ha quedado sin margen por

la derecha y los demócratas por la izquierda. Ambos han tenido que moderarse, por mucho que a veces sea de forma sutil.

Los cambios demográficos del país están contribuyendo a esta tendencia. Por un lado, el voto «no blanco» (latino, sobre todo, pero también asiático) ha resultado ser un bloque menos fiable de lo esperado para los demócratas. Los republicanos han sido (relativamente) hábiles explotando esta oportunidad. Del mismo modo que el voto afroamericano ha actuado como un elemento moderador en el lado demócrata (sobre todo bloqueando la nominación de Sanders en dos ocasiones), el voto latino probablemente acabe por moderar a los republicanos.

El cambio generacional es otro factor que podría contribuir a reducir la polarización. Como hemos visto, *millennials* y generación Z son considerablemente más progresistas que las generaciones anteriores. Como suele ser habitual, son también más propensos a cambiar de estado, y sus migraciones a las ciudades más asequibles del sur y del suroeste son claves en los cambios políticos en esas regiones. Estas mudanzas son especialmente significativas para jóvenes afroamericanos, con una «pequeña Gran Migración» de vuelta al sur que posiblemente dio a Biden el margen de victoria en Georgia.

Demócratas y republicanos, además, están comenzando a entenderse y pactar más a menudo en el Congreso cuando creen que nadie les está mirando. Tras años (¡décadas!) de polarización legislativa creciente, se están empezado a aprobar más leyes con apoyo de ambos partidos. Estas normas suelen ser en temas técnicos que no atraen demasiada atención de los medios, pero con frecuencia son sobre materias importantes que requieren mucho trabajo previo para alcanzar un consenso.

En años recientes, se votó una reforma de la ley que rige el recuento de las presidenciales,[13] una reforma de la política de educación federal, una

del sistema de salud para veteranos, dos grandes leyes sobre infraestructuras, una ambiciosa ley de política industrial y una norma para combatir varias tácticas deshonestas de seguros médicos privados. Durante la era COVID, los enormes (y muy muy efectivos) planes de estímulo de emergencia fueron escritos a cuatro manos entre los demócratas y la Administración Trump, y aprobados con mayorías abrumadoras. Joe Biden ha sido especialmente hábil sacando votos republicanos en varias leyes ambiciosas, y el GOP ha sido menos obstruccionista de lo que muchos esperábamos. Aunque el Congreso sigue siendo espectacularmente disfuncional en muchos temas y las batallas partidistas suelen hundir cualquier ley que sea polémica o atraiga la ira de las bases republicanas,[14] el sistema político es menos disfuncional de lo que aparenta.

Queda, además, la inevitable realidad de que Donald Trump no es eterno. El expresidente tendrá setenta y ocho años cuando se celebren las elecciones de 2024, y nunca ha sido un hombre de costumbres demasiado saludables. Su campaña presidencial está siendo acompañada por múltiples investigaciones judiciales, la mayoría de ellas sobre delitos increíblemente graves (esto es, dar un golpe de Estado) y acusaciones serias, creíbles y más que suficientes para enviarle a la cárcel. De llegar a las presidenciales como candidato (algo probable, si atendemos a las encuestas de primarias), no partirá como favorito. Una nueva derrota electoral, de producirse, representaría un revés quizá definitivo al dominio de Trump sobre el Partido Republicano. El GOP, finalmente, tendría la oportunidad de rearmarse, dejando de lado el nefasto legado de una presidencia fallida.

Como hemos visto a lo largo de todas estas páginas, sin embargo, el problema del Partido Republicano, y de Estados Unidos, no es la persona de Donald Trump. Su ascensión a la presidencia no fue un accidente, sino la culminación de décadas de podredumbre y corrupción acumuladas dentro

del GOP y disfunciones estructurales, largamente ignoradas, del sistema político americano. Así que, del mismo modo que hay señales que invitan al optimismo, a un cambio de tendencia a mejor de la política americana, también hay señales preocupantes de que Trump quizá sólo sea el principio.

Tenemos, primero, una cada vez más explícita y abierta tendencia de un sector del Partido Republicano a abrazar el autoritarismo. El GOP, tanto en los estados como en el Congreso, no ha dudado en recurrir a impulsar arreglos y reformas legales abiertamente antimayoritarias para sacar ventaja política, hasta el punto de hacer las elecciones en algunos estados casi irrelevantes. Dado el torpe y anticuado diseño constitucional americano, muchas de sus instituciones dependen para su buen funcionamiento del consentimiento de los partidos, un acuerdo implícito de respetar las elecciones y aceptar las reglas del juego. El GOP, especialmente desde los años de Gingrich como *speaker*, ha decidido abandonar muchos de estos consensos. Maniobras como el *filibuster* y abusar del calendario de nombramientos judiciales dieron al partido el control de la institución contramayoritaria por excelencia, el Tribunal Supremo, y no han tenido ningún reparo en anular o desmantelar leyes pasadas bajo el más mínimo pretexto constitucional.

Sabemos, además, que una reversión autoritaria no es una idea descabellada, precisamente porque ha sucedido en el pasado. La Constitución americana, con un texto casi idéntico al actual, era también la Constitución del régimen de Jim Crow. Como no me cansaré de repetir, Estados Unidos sólo se convirtió en una democracia plena en todo su territorio a partir de 1965, y las leyes que forzaron ese cambio son únicamente leyes, no preceptos constitucionales. Este es un país que ha concedido derechos sociales y políticos a millones de personas para retirarlos años después. Y eso ha sucedido en momentos en que los

partidarios de este autoritarismo no sólo eran minoría, sino que acababan de perder una guerra, con el consentimiento del resto de actores.

Estados Unidos es demasiado rico para revertir en una dictadura, pero no es descabellado que caiga en una «democradura», un régimen representativo imperfecto con instituciones que dejan a la oposición en abrumadora desventaja. Tucker Carlson, un expresentador de Fox News respetado e influyente en el GOP, es un admirador público y declarado de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, alguien que se ha convertido en un modelo para muchos dentro del movimiento conservador. Cuando Trump da un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, este desprecio por el resultado de las urnas no es algo que aparezca de la nada. Y, viendo la persistente lealtad de las bases del partido hacia el expresidente incluso cuando está siendo investigado por conspirar contra el régimen constitucional que tanto dicen apreciar, está claro que la pulsión autoritaria no ha desaparecido.

A estas tendencias autoritarias debemos sumarles la realidad, a veces inexplicable para un observador europeo, de que medio Estados Unidos parece estar sumido en una verdadera espiral autodestructiva. Ya he mencionado estadísticas como que la esperanza de vida en Mississippi (71,9) es, a mediados de 2023, más baja que la de Bangladesh (72,4),[15] o que la mortalidad infantil del país es un 70 % más alta que en el resto de los estados desarrollados de la OCDE,[16] básicamente porque la tasa en el sur triplica la de los estados del norte. Podría volver a dedicar páginas y páginas a estadísticas similares.

El fenómeno de las dos Américas, las enormes diferencias políticas y sociales entre norte y sur, campo y ciudad, regiones ricas y regiones pobres, no es nuevo. Lo que sí lo es, y que parece haberse acelerado en tiempos recientes, es cómo una de ellas ha decidido darle la espalda a cualquier

atisbo de progreso, se opone políticamente a cualquier medida que pueda ayudarla e insiste sin cesar en que la verdadera esencia del país, lo que deseaban los padres fundadores, es ella.

La América conservadora vive obsesionada con demonizar y exagerar los múltiples (y muy reales) problemas de las grandes ciudades de Estados Unidos; el crimen, el libertinaje, la corrupción, la presunta degeneración moral y la decadencia generalizada. Afirman que esas ciudades son el origen de todos los problemas de América. Mientras tanto, tienen tasas de crimen, divorcio, hijos fuera del matrimonio, madres solteras y esencialmente cualquier indicador sobre «moral» peores que todas las regiones que tanto gustan de criticar. Los estados conservadores se están quedando atrás, pero persisten en defender su superioridad de forma incesante. Muchos de estos indicadores, obviamente, están relacionados con la pobreza, y establecer causalidad es complicado. La existencia de una enorme minoría política que no es crítica sino hostil al progreso y aparentemente incapaz de ver o entender sus propios problemas es preocupante, sobre todo cuando su respuesta es abrazar un populismo reaccionario y autoritario cada vez más destructivo.

Tras tanto hablar sobre resentimiento, radicalización y conflicto racial en el Viejo Sur, por supuesto, es tendencioso, y probablemente erróneo, «culpar» a los votantes de problemas persistentes de esta América que se ha quedado atrás. El sistema político e institucional americano es lo que favorece la creación de la dichosa coalición posnixoniana que coloca a los republicanos en posición de dominar políticamente a estos votantes y regiones. Pero son las élites políticas del GOP las que apostaron por esta estrategia, explotando la reacción contra los derechos civiles de la forma más nihilista posible. Años de radicalización y propaganda no han hecho más que empeorar el problema. Por absurdo que parezca, la América

reaccionaria, autodestructiva y anclada en el pasado es tanto una realidad económica como el resultado de años de estrategias y disfunción políticas.

Para acabar, toca una obviedad: las diferencias políticas entre demócratas y republicanos son reales y profundas, y la división del país en dos campos políticos enfrentados es un reflejo de una verdadera división social. El hecho de que la polarización política sea sobre todo el resultado del viraje del GOP hacia el extremismo no hace que esta sea menos significativa o importante.[17]

Sabemos, porque eso es lo que han dejado claro los resultados electorales una y otra vez durante las últimas tres décadas, que esta América conservadora, reaccionaria, obsesionada con su pasado es minoría. Sabemos también que incluso dentro del partido que les cobija son una minoría, un grupo ruidoso, histérico y movilizado que ha dado su lealtad a un cretino autoritario como Trump. La tragedia de Estados Unidos, en gran medida, es que sus instituciones, su sistema político, están construidas de tal modo que estos extremistas, esta minoría de la minoría, pudo ganar el poder en 2016, y puede volver a hacerlo ahora.

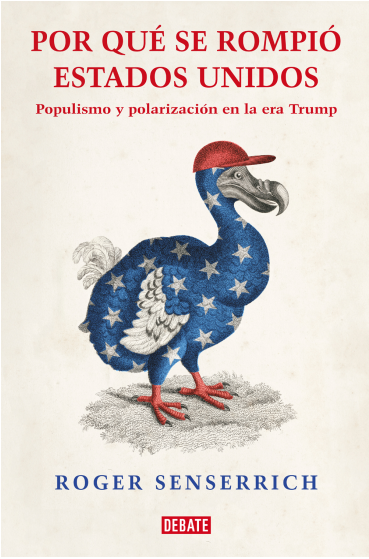
A MORE PERFECT UNION

Volvamos una última vez a esas dos ideas de patriotismo de las que hablábamos al principio: la de la Constitución como un documento acabado y la de América como una nación que vive para expandir y ampliar los ideales del proyecto constitucional. La historia de Estados Unidos es la de un debate entre estas dos ideas, la de un país que mira adelante, buscando nuevos horizontes, y la de otro que mira hacia dentro, que debe profundizar en los ideales sobre los que fue creado.

Este es un país contradictorio, enorme, absurdo, que siempre parece moverse en dos sentidos opuestos, intentando renovarse y destruirse a cada paso. Desde su fundación, Estados Unidos ha avanzado, poco a poco, en el camino de convertirse en un lugar más justo, más abierto y más libre, la «more perfect union» del preámbulo de la Declaración de Independencia. Es posible, incluso probable, que Trump sólo sea un paréntesis, un pequeño accidente en este camino.

Lo que no podemos olvidar, no obstante, es que este no es un resultado inevitable. Estados Unidos es un país donde no siempre han ganado los buenos.

El experto en política estadounidense Roger Senserrich nos explica en este ensayo cómo el germen de los escándalos de Trump responde a las raíces históricas de una democracia que ha estado a punto de quebrarse a sí misma.



¿De dónde viene la crisis política estadounidense? ¿Es algo nacido al abrigo del trumpismo o más bien una tendencia histórica? *Por qué se rompió Estados Unidos* parte de la insólita victoria de Trump en las urnas el 8 de enero de 2016. Un mandato que estuvo plagado de escándalos, disputas internas y fracasos legislativos, y acabó con una derrota que arrastró a una muchedumbre para dar el conocido golpe de Estado en el Capitolio. Este libro indaga con precisión y rigurosidad en el germen de este momento decisivo y explica sus raíces históricas, políticas e institucionales.

Roger Senserrich sostiene que Trump no es una anomalía. En realidad, su llegada al poder es fruto de un sistema político disfuncional que opera bajo una Constitución anticuada, que no resulta del todo suficiente para abordar los grandes temas que preocupan a los ciudadanos del siglo XXI. Es también producto de una guerra civil cerrada en falso y una democracia incompleta, que hasta la lucha por los derechos civiles de los años sesenta ni siquiera incluía a todos sus ciudadanos. Y es, sobre todo, consecuencia de una serie de decisiones del Partido Republicano bajo el mandato de Richard Nixon, así como de las leyes y los cambios institucionales que han acabado por polarizar la política americana hasta límites inéditos en los últimos doscientos años.

Los partidos políticos y la sociedad americana están cambiando a marchas forzadas, se desdibujan las izquierdas y las derechas clásicas, surgen nuevos conceptos como lo *woke*… En este libro, Roger Senserrich esboza el futuro de un país en crisis que se juega dejar (o no) de ser referente del mundo occidental. ¿Hay motivos para el optimismo?

Roger Senserrich (Maracay, Venezuela, 1979) es politólogo y escritor con casi dos décadas de experiencia en política americana. Durante estos años ha trabajado como lobista para múltiples ONG en temas como urbanismo, salud pública, política fiscal y educación, tanto en ámbito estatal como federal, y ha participado en decenas de campañas electorales como asesor, director de comunicación y estratega.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, actualmente ocupa el cargo de director de comunicaciones y políticas públicas en el Connecticut Working Families Party. Es miembro fundador de *Politikon*, colaborador de *Vozpópuli* y autor del boletín *Four Freedoms* sobre política americana. Cuando no está persiguiendo legisladores o tratando de ganar elecciones, se relaja con libros y videojuegos. Vive en un barrio residencial de New Haven con su mujer, su hija y una gata llamada Kennedy.

«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro».

Emily Dickinson

Gracias por tu lectura de este libro.

En **penguinlibros.club** encontrarás las mejores recomendaciones de lectura.

Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros.

penguinlibros.club

Penguin Random House Grupo Editorial

penguinlibros

Primera edición: marzo de 2024

© 2024, Roger Senserrich Sogues
© 2024, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

Diseño de la cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial / Andreu Barberan
Imagen de la cubierta: © Doug Chayka con imagen de Istock

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright.*
El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento,
promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del *copyright* al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-19642-64-6

Composición digital: La Nueva Edimac, S. L.

Facebook: PenguinEbooks
Facebook: debatelibros
X: @debatelibros
Instagram: @debatelibros
YouTube: penguinlibros
Spotify: PenguinLibros

Notas

Capítulo 1. La (no) excepción de Trump

[1] Con la excepción de Canadá y Australia.

[2] Una de las peculiaridades del Gobierno federal americano es que si el Congreso no aprueba una ley autorizando el gasto, el Gobierno *cierra* por completo. Los empleados se quedan en casa sin cobrar, y los que tienen trabajos esenciales (controladores aéreos, técnicos de seguridad nuclear…) tienen que seguir trabajando sin sueldo.

[3] Hamilton es el más conocido, pero no el único. *1776*, ganador de varios Tony en su temporada de estreno a finales de los sesenta y readaptado con un nuevo montaje en 2023, es otro ejemplo notable. Más desconocido es el excepcional (y casi profético) *Bloody Bloody Andrew Jackson*.

[4] La vigesimoséptima enmienda prohíbe que los miembros del Congreso se suban el sueldo durante la legislatura, de forma que todas las subidas entran en vigor tras las siguientes elecciones.

[5] Curiosamente, sólo hubo *una* enmienda constitucional salida de esta época, la vigesimocuarta, que prohíbe la imposición de una *poll tax* (un «impuesto para votar») para poder participar en elecciones federales.

[6] Como referencia, el primero es desde la fundación hasta la presidencia de Andrew Jackson; el segundo dura hasta la guerra civil; el tercero se

consolida al final de la Reconstrucción y dura hasta el New Deal, en los años treinta; el quinto será el que nos ocupe en buena parte de este libro.

[7] La expresión viene de un célebre ensayo de Richard J. Hofstadter atizando al entonces candidato republicano a la presidencia Barry Goldwater.

CAPÍTULO 2. Problemas de origen

[1] Los presidentes, por supuesto, han hecho todo lo posible para aumentar sus poderes formales, a menudo con éxito.

[2] La elección directa de senadores sólo llegó en 1913, con la ratificación de la vigesimoséptima enmienda de la Constitución. La historia detrás de su aprobación es fascinante; en ocasiones los legislativos estatales tenían problemas serios para escoger senadores, hasta el punto de dejar escaños vacantes durante años, y de compra de votos y corrupción generalizada. En la actualidad, algunos intelectuales conservadores quieren derogarla y volver al viejo sistema, cosa que me parece hilarante.

[3] Curiosamente, para admitir a Missouri como esclavista y a Maine, que se estaba separando de Massachusetts, como *free-soil*.

[4] No ha funcionado demasiado bien.

[5] Queda en manos de la Cámara de Representantes, que vota por delegación estatal. Si un tercio de los estados se ausentan, no se puede votar, cosa que casi garantiza que se acabe con el *speaker* de presidente interino. Una maravillosa receta para el desastre.

[6] Incluyendo un vicepresidente, Aaron Burr, matando a un exsecretario del Tesoro, Alexander Hamilton, en venganza por su papel en las elecciones de 1800.

[7] La «cláusula de supremacía», que reza que la Constitución es la «ley suprema del país».

[8] «Derechos de penumbra», en el lenguaje del mismo tribunal.

[9] Curiosamente, dos enmiendas no fueron ratificadas de inmediato. Una de ellas, referente a los sueldos de los legisladores, entró en vigor en 1992 como la vigesimoséptima enmienda; la otra, sobre asignación de escaños en el Congreso, se quedó sin adoptar, ya que no fue ratificada por suficientes estados.

[10] Quizá podamos añadir también la vigesimoséptima enmienda en 1971 si contamos el establecimiento de la edad de voto en los dieciocho años.

[11] Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Mississippi, Luisiana, Tennessee, Texas y Virginia. Esta lista va a aparecer muy a menudo.

[12] El texto es parte de un discurso pronunciado el 21 de marzo de 1861 en Savannah. Una escultura de este señor, por cierto, está expuesta en el Capitolio en Washington. Es una de las dos personalidades que el estado de Georgia envió para que lo representara en 1927. Hay un puñado de estatuas de confederados en la colección, incluyendo la de su presidente, Jefferson Davis.

[13] Con una notoria excepción: personas encarceladas en régimen de trabajos forzados.

[14] Esta enmienda constitucional tiene implicaciones, digamos, interesantes al hablar de Trump y los que participaron en su intento de golpe de Estado.

[15] Luisiana escogió uno, pero el Senado impidió que llegara a ocupar su escaño.

[16] Nótese que *parroquia* es una división administrativa en este estado, equivalente a un condado.

Capítulo 3. La Constitución de 1877 y las dos Américas

[1] Los datos de esta sección provienen de un informe de la OCDE: Jan Luiten van Zanden, *et al*., eds., *How Was Life?: Global Well-being since 1820*, OECD Publishing, París, 2014, <https://doi.org/10.1787/9789264214262-en>.

[2] Los autores del informe citado dan 1.361 dólares (de 1990) ajustados por paridad de poder adquisitivo. Ajustar paridad e inflación es complicado, así que me temo que no es posible afinar estos datos demasiado. Dado que las magnitudes son más importantes que la precisión, creo que es suficiente.

[3] Joyce Dargay, Dermot Gately y Martin Sommer, «Vehicle Ownership and Income Growth, Worldwide: 1960-2030», *The Energy Journal*, vol. 28, 4, 2007, pp. 143-170, <http://www.jstor.org/stable/41323125>.

[4] Los datos de población vienen del Maddison Project, <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/>.

[5] Los datos sobre el PIB son también de Angus Maddison, *Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

[6] Junto con Argentina, el otro gran destino para los europeos que hicieron las maletas. Canadá, Australia y Nueva Zelanda han sido históricamente destinos importantes (Canadá lo es ahora), pero nunca a la misma escala.

[7] En España ese porcentaje era del 16 % en 2022; 12 % nacidos fuera de la Unión Europea. Estados Unidos mantuvo este ritmo de inmigración

durante un siglo entero.

[8] Elizabeth M. Grieco *et al*., «The Size, Place of Birth, and Geographic Distribution of the Foreign-Born Population in the United States: 1960 to 2010», *Population Division Working Paper*, 96, 2012.

[9] San Patricio siempre ha sido celebrado con más devoción en Estados Unidos que en Irlanda; en su configuración actual de desfiles, bebida y orgullo irlandés, la celebración data de la década de 1870.

[10] Mark Hugo López, Ana González-Barrera y Gustavo López, «Hispanic Identity Fades Across Generations as Immigrant Connections Fall Away», Pew Research Center, 2007.

[11] Este no es un fenómeno único, por cierto. Casi todos los CEO de la primera ola de Silicon Valley (Bill Gates, Steve Jobs, Paul Allen, Eric Schmidt, Steve Case, etcétera) nacieron en la década de 1950. Empezar a trabajar justo cuando estalla una revolución tecnológica ayuda mucho.

[12] Wilson era gobernador de Nueva Jersey, pero había nacido en Virginia.

[13] Los republicanos hicieron de las pensiones y del cuidado de los veteranos de guerra una de sus señas de identidad en esta época, una manera de recordar incesantemente el conflicto.

[14] Estos fueros los comicios en que un candidato socialista sacó el mejor resultado de la historia del partido en Estados Unidos; Eugene Debs, con un 6 % del voto.

[15] Que el Supremo invalidó poco después, claro.

[16] Wilson incluso nacionalizó los ferrocarriles durante la guerra, un paréntesis bastante olvidado en la historia del país.

[17] Salió mal. El fracaso de los catorce puntos de Wilson y el Tratado de Versalles, sin embargo, tuvieron poca influencia en la política americana hasta que en 1941 se vieron forzados a intervenir para arreglar el problema.

[18] Una obra clásica sobre la materia es el libro de J. Morgan Kousser, *The Shaping of Southern Politics: Suffrage Restriction and the Establishment of the One-Party South, 1880-1910*, Yale University Press, New Haven, 1974.

[19] Union *brothers and sisters* es la forma tradicional de referirse a los compañeros en un sindicato. Muchas *unions* en Estados Unidos se llaman *brotherhoods*, hermandades.

[20] El Senado en esa época seguía escogiéndose por designación directa, no por votación electoral.

[21] La única excepción fue «bebidas alcohólicas de carácter terapéutico», cosa que provocó una enorme proliferación de farmacias. Walgreens, la segunda mayor cadena del país, tuvo sus años de mayor crecimiento en esa época.

[22] La letra de «Battle Hymn of the Republic» abre con la frase «Mis ojos han visto la gloria de la llegada del señor», y tiene un montón de aleluyas patrióticos.

[23] Woodrow Wilson sólo obtuvo un 42 % del voto en 1912, ganando gracias a la división republicana, y fue reelegido en 1916 con un 49,2 % de las papeletas.

[24] 347-88, si contamos los votos del Partido Progresista, que era un partido alineado con Roosevelt en Wisconsin, y del Farmer-Labor (Laborista-Granjero), que era otro partido de izquierdas en Minnesota. Wisconsin en esa época tenía un puñado de alcaldes socialistas en varias ciudades.

[25] La sentencia es A. L. A. Schechter Poultry Corp. contra Estados Unidos, de 1935.

[26] West Coast Hotel Co. contra Parrish, revirtiendo el precedente de una sentencia de 1923, Adkins contra el Children’s Hospital.

[27] Los otros grupos detestados por la FHA eran los judíos rusos, los italianos del sur y los mexicanos.

[28] El uso del condicional, por cierto, se debe a que esos mapas ya no existen. La FHA los destruyó en 1969, tras ser acusada de discriminar racialmente.

[29] Eleanor Roosevelt tenía por costumbre hacer campañas por libre que disgustaban a su marido, y era considerablemente más progresista que él.

[30] Otro personaje que reaparecerá luego. Su discurso, por cierto, es merecidamente famoso.

[31] Personaje que volverá a salir de aquí a unas páginas; uno de los candidatos fallidos a vicepresidente más importantes de la historia.

[32] Que será la figura central del próximo capítulo y es, probablemente, el político americano más importante tras la Segunda Guerra Mundial.

Capítulo 4. Derechos civiles, Nixon y la invención del resentimiento

[1] Sí, ese es de verdad su *middle name*, y sí, el personaje de los Simpson es porque a Matt Groening le parecía gracioso.

[2] La evaluación crítica del discurso desde entonces ha cambiado radicalmente. Fue sexto en una encuesta de expertos de comunicación sobre las intervenciones públicas más importantes del siglo XX.

[3] Warren no era un santo, por cierto; en los años treinta, como fiscal general, estuvo a cargo del programa de esterilización de presos del estado por motivos eugenésicos y confiscó tierras a inmigrantes japoneses.

[4] Sí, los matrimonios interraciales fueron ilegales en gran parte del sur del país hasta 1967.

[5] Caro, de hecho, le dedicó un libro entero, *Means of Ascent*. Su intención era incluirlo en el segundo volumen de su biografía de Johnson, pero la historia era tan extraordinaria que acabó en un libro entero.

[6] Sí, este es el tipo que intentó sabotear a Truman sin éxito en 1948. Thurmond, durante su *filibuster*, leyó las leyes electorales de todos los estados de la Unión en orden alfabético, la Declaración de Independencia y el discurso de despedida de Washington, entre otras cosas.

[7] El papel de Eisenhower en el movimiento de los derechos civiles está muy infravalorado, como el resto de su presidencia. Aunque llegó al poder sin ser un antisegregacionista convencido, era un buen hombre (no como su vicepresidente o como Lyndon Johnson), y cambió de opinión (a mejor) con los años.

[8] Eugene Kiely, «Blacks and the Democratic Party», FactCheck.org, 2008, <https://www.factcheck.org/2008/04/blacks-and-the-democratic-party/>.

[9] Los defensores de Goldwater insisten en que no era racista, pero que tenía la profunda convicción moral de que en aquellos estados en los que los segregacionistas eran mayoría, estos debían poder aprobar leyes estatales discriminatorias sin intervención federal. Personalmente, tolerar el racismo de este modo me parece aún peor.

[10] En realidad, gobernador de facto. Wallace había ocupado este cargo ocho años y no se podía presentar a la reelección, así que «presentó» a su mujer. A mediados de 1968, su esposa murió de cáncer, dejándole sin poder alguno. Wallace se presentó a gobernador otra vez (y ganó) en 1970.

[11] Wallace ganó en cinco estados: Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. Siempre es la misma lista.

[12] El libro es, por cierto, bastante racista, y todos los estrategas republicanos posteriores insistirían con vehemencia en que no estaban

usando el manual de Phillips. Mentían.

[13] La ley estaba considerablemente a la izquierda de la reforma de la sanidad de Obama de 2010. El Watergate, por desgracia, hizo imposible su aprobación. Sanidad era probablemente el único asunto de política doméstica que despertaba un interés genuino en Nixon. La muerte de sus hermanos le influyó muchísimo.

[14] Johnson era también un psicópata, pero su amoralidad la reservaba para los vietnamitas.

CAPÍTULO 5. Partidos políticos, sindicatos y leyes electorales

[1] Los datos de afiliación sindical varían de una fuente a otra; he utilizado los de Barry T. Hirsch, «Sluggish Institutions in a Dynamic World: Can Unions and Industrial Competition Coexist?», *Journal of Economic Perspectives*, 22 (1), 2008, pp. 153-176, usando la Current Population Survey del censo. En general, los estudios señalan magnitudes y tendencias parecidas, así que la historia no varía mucho de una estimación a otra.

[2] La fuente, en este caso, es <http://www.unionstats.com/>, que lleva el propio Hirsch.

[3] Algo que las campañas electorales hacen muchísimo en Estados Unidos, a una escala mucho mayor que en Europa. Es muy efectivo si se hace bien.

[4] Datos de la NLRB, vía L. Mishel, L. Rhinehart y L. Windham, «Explaining the erosion of private-sector unions: How corporate practices and legal changes have undercut the ability of workers to organize and bargain», *Economic Policy Institute*, 2020,

<https://www.epi.org/unequalpower/publications/private-sector-unions-corporate-legal-erosion/>.

[5] Datos del Bureau of Labor Statistics, <https://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf>.

[6] The *New York Times*, 20 de julio de 1972.

[7] El sistema de partidos en los primeros tiempos de la República era bastante fluido. Los federalistas se extinguieron en 1820, pero los demócratas republicanos se dividieron en 1824, dando pie a los demócratas de Andrew Jackson y al Partido Whig. Estos sufrieron divisiones internas debido a la esclavitud, y desaparecieron en la década de 1850 para dar paso al Partido Republicano, que era férreamente abolicionista.

[8] El resto de los cargos electos, desde juez de paz a gobernador o presidente, suelen funcionar de forma similar, con el candidato más votado declarado como ganador.

[9] Nótese que las primarias presidenciales funcionan de modo distinto: los votantes escogen delegados que irán a la convención. Ahora hablaremos sobre ellas.

[10] En el caso de McClellan, sin ir más lejos, la facción progresista del partido en Arkansas lo intentó y perdió.

[11] Existe un cálculo relativamente preciso sobre la posición política exacta de los legisladores, el índice DW-Nominate, creado por Keith T. Poole y Howard Rosenthal a mediados de los ochenta. No es del todo perfecto, pero da una idea muy aproximada sobre la distribución de la cámara. La evolución de estos índices puede consultarse en voteview.com.

[12] De acuerdo, Robert Kennedy era, probablemente, mejor político que su hermano, pero no aguantó el mito de los Kennedy.

[13] El calendario de primarias demócrata sufrirá cambios importantes a partir de 2024 para que voten primero estados algo más representativos,

pero sigue siendo *ad hoc*.

[14] Tras la debacle en el recuento en 2020, Iowa usará primarias también en años venideros.

[15] Requiere celebrar *caucus* adicionales en otra fecha en cada Colegio Electoral para escoger delegados al condado que, a su vez, hacen un *caucus* para elegir a los delegados del distrito, que se reunirán en otro *caucus* para nominar a los delegados estatales que harán un último *caucus* para escoger a los presidenciales.

[16] George Wallace, que realmente era un pelma, ganó en Mississippi, pero nadie se lo tomaba ya en serio.

[17] Datos de OpenSecrets, informes de gastos de campaña. El total del gasto es mayor, ya que incluye también anuncios «apartidistas», el gasto de algunos comités (como los 527 de los que hablaré más adelante) y otros flecos.

[18] El estado de Washington tiene 7,7 millones de habitantes; aun así, el coste de una campaña donde la ganadora, Patty Murray, se impuso por quince puntos fue comparable al de unas elecciones generales en España. Los diez distritos del Congreso de la Cámara de Representantes en ese estado costaron otros 43 millones.

[19] Bernie Sanders estaría a la derecha del Partido Popular en muchos temas, empezando por sus propuestas sobre sanidad. La izquierda del partido demócrata no está demasiado a la izquierda, según estándares europeos.

Capítulo 6. La era de la polarización

[1] Hay una explicación plausible de que el fin de la Unión Soviética fuese el resultado, al menos en parte, de la enorme caída del precio del petróleo en la década de los ochenta que dejó a los rusos sin divisas. Esa caída vino en cierta medida del rechazo soviético a recortar producción (nunca fueron miembros de la OPEC) y de la decisión de Occidente de reducir su dependencia del petróleo, algo que fue también una de las prioridades de Carter.

[2] Que acabó asesorando a Trump años después, condenado por varios delitos e indultado por el propio Trump.

[3] Ídem.

[4] Que acabó dirigiendo un PAC pro-Trump pero que no ha acabado (aún) en la cárcel.

[5] La historia la explica Ed Rollins en el fantástico documental *Boogie Man: The Lee Atwater Story*. Mary Matalin, que trabajó tanto para Reagan como los dos Bush y Dick Cheney, fue quien encontró la Biblia. El marido de Matalin es James Carville, quien dirigió la campaña de Bill Clinton en 1992. Matalin estaba dirigiendo la campaña de George H.W. Bush ese año. La política americana es increíblemente incestuosa.

[6] Los datos están sacados de Thomas Blanchet, Lucas Chancel y Amory Gethin, «How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts», *WID.world Working Paper*, 6, 2019, y <https://wid.world/data/>.

[7] En Thomas Blanchet, Lucas Chancel y Amory Gethin, «Why is Europe More Equal than the United States?», *WID.world Working Paper*, 19, 2020, hay datos para aburrir sobre este tema.

[8] Las balanzas fiscales en Estados Unidos, en porcentaje de PIB, son múltiplos de las españolas.

[9] Sí, estas cifras son muy altas comparando con los sueldos en España. Estados Unidos es un país muy muy rico.

[10] Mississippi, Luisiana, Carolina del Sur, Arkansas, Virginia Occidental, Kentucky, Tennessee y Alabama. El sur siempre domina estas listas.

[11] Con la única excepción de Nevada, que tiene la peor tasa de todos por motivos obvios.

[12] Los republicanos, en 2023, no gobernaban ninguna ciudad de más de un millón de habitantes en todo el país.

[13] Los datos provienen de las encuestas poselectorales de CBS/NYT, recogidas aquí: <https://ropercenter.cornell.edu/data-highlights/elections-and-presidents>.

[14] Menos de 8.000 dólares, o unos 42.000 dólares de 2023.

[15] Menos de 10.000 dólares anuales, o 35.600 ajustados por inflación.

[16] Larry Bartels, «What's the Matter with *What's the Matter with Kansas*», 2005, <https://my.vanderbilt.edu/larrybartels/files/2011/12/kansas_Bartles.pdf>.

[17] Los datos de este apartado están extraídos del sondeo de votantes validados de Pew, probablemente la encuesta poselectoral más respetada de Estados Unidos, para las elecciones de 2016 y 2020. Para comicios anteriores, uso datos del *New York Times*, <https://www.nytimes.com/elections/2008/results/president/national-exit-polls.html>.

[18] Un estudio reciente es Alexander Agadjanian, «How Many Americans Change Their Racial Identification over Time?», *Socius*, 8, 2022, <https://doi.org/10.1177/23780231221098547>.

[19] El margen se extiende a treinta y siete puntos para los que tienen estudios de posgrado. Los demócratas, irónicamente, siempre han ganado

en este grupo desde al menos 1992; el tópico del intelectual progre no es del todo erróneo.

[20] «U.S. Church Membership Falls Below Majority for First Time», Gallup News, 2023, <https://news.gallup.com/poll/341963/church-members-falls-below-majority-first-time.aspx>.

[21] Nancy Isenberg, *White Trash: The 400-Year Untold History of Class in America*, Viking, 2016. [Hay trad. cast.: *White trash [escoria blanca]. Los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses*, Madrid, Capitán Swing, 2020].

[22] Con la excepción del Reino Unido.

Capítulo 7. Los motores de la polarización

[1] Jimmy Carter fue profesor del equivalente evangélico a la catequesis (escuela bíblica) toda su vida, y siguió dando clases hasta 2020.

[2] Southern Baptist Convention, el grupo evangélico más importante del país. Nació en 1845, fruto de una escisión de los baptistas del norte que insistían en abolir la esclavitud.

[3] Whatever *Happened to the Human Race?* es el más famoso. Schaeffer, por cierto, era fanáticamente anticatólico y creía que el Renacimiento era la fuente de todos los males de Occidente. Es el inventor del concepto «humanismo secular» que sigue siendo utilizado por la derecha de manera obsesiva.

[4] Como hemos visto, aparte del pequeño paréntesis de la corte Warren, con todos los jueces nombrados por FDR y Truman, más el «error» de Eisenhower, esto ha distado mucho de ser el caso.

[5] Izquierda relativa, especialmente en el caso de O'Connor. Souter fue una pifia de impresión de Bush padre, que creía estar nombrando a un conservador y le salió un progresista. Stevens era conservador cuando fue nombrado por Gerald Ford; lo suyo es más un caso del GOP moviéndose a la derecha.

[6] Fairness no tiene una traducción exacta al castellano; se suele traducir como «justicia», pero en este caso el sentido es más específico que esa idea.

[7] No así en periódicos, ya que, al no requerir licencia (no viven bajo el límite del espacio radioeléctrico), no estaban regulados.

[8] La única excepción, probablemente, es Tucker Carlson en Fox News, otro artista brillante hasta que, de tanto mentir, le echaron.

[9] La mejor estimación es que rondaba entre los quince y veinte millones semanales, o sobre uno o dos millones de media en cualquier momento de emisión. Pero los datos provienen de la empresa que producía el programa, así que son dudosos y casi seguro exagerados.

[10] <https://www.pewresearch.org/short-reads/2020/04/08/five-facts-about-fox-news/>.

[11] Hay múltiples estudios sobre el tema. Este es un buen ejemplo: Matteo Pinna, Léo Picard y Christoph Goessmann, «Cable news and COVID-19 vaccine uptake», *Scientific Reports*, 12, 2022, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-20350-0>.

[12] Jacob Wallace, Paul Goldsmith-Pinkham y Jason L. Schwartz, «Excess Death Rates for Republican and Democratic Registered Voters in Florida and Ohio During the COVID-19 Pandemic», *JAMA Internal Medicine*, julio de 2023.

[13] Reagan subió impuestos varias veces, pero el GOP ha decidido convencerse de que eso nunca sucedió.

[14] El almirante James Stockdale, un héroe de guerra en Vietnam. Era un hombre brillante, pero un candidato espantoso. Su respuesta a la primera pregunta del debate fue: «¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí?».

[15] Técnicamente, en 1990 hubo otro cierre de tres días tras la subida de impuestos de Bush padre, también forzado por Gingrich. Fue durante el fin de semana y se solucionó antes de que parara la Administración.

[16] El último representante republicano de Massachusetts cayó en 1996; en Connecticut duraron un poco más, hasta 2006. En 2023, en toda Nueva Inglaterra hay una única legisladora federal republicana, la senadora Susan Collins, de Maine.

[17] Los datos provienen de CQ. La cifra disminuyó considerablemente durante la pandemia, pero ha vuelto a dispararse bajo Biden. Un buen resumen en <https://library.cqpress.com/cqalmanac/file.php?path=Party%20Unity%20Tables/2015_Party_Unity.pdf>.

[18] Existen múltiples estudios; Pew tiene un buen resumen aquí: Drew DeSilver, «The polarization in today's Congress has roots that go back decades», Pew Research Center, marzo de 2022, <https://pewrsr.ch/3tMrxsF>.

[19] Véase Bernie Sanders en 2016 y 2020.

Capítulo 8. La profetisa

[1] «Fuck it. Let's do it». La historia la explica Jeremy Peters en su libro sobre el GOP.

[2] Escrita por Stuart Butler; Heritage lleva años insistiendo en que no tienen nada que ver, pero el diseño es idéntico.

[3] Las otras dos fueron Olympia Snowe y Susan Collins, las dos senadoras de Maine.

[4] Referencia al motín contra los impuestos del té en Boston en 1773 y que se considera el inicio de la revolución americana.

[5] Todos los legislativos estatales del país excepto Nebraska son bicamerales.

[6] La práctica es esencialmente una *poll tax*, un «impuesto para votar», y fue recurrida ante los tribunales. El Supremo rechazó ni siquiera tomar en consideración el caso.

[7] «A Closer Look at the Parties in 2012», Pew Research Center, 23 de agosto de 2012.

[8] «Negative Views of New Congress Cross Party Lines», Pew Research Center-U. S. Politics & Policy, 21 de mayo de 2015.

Capítulo 9. Las primarias republicanas

[1] En un partido político, esto quiere decir «mucha gente».

[2] John McCain, que aparte de un héroe de guerra era un rencoroso, se vengó de Trump años después, cuando fue el voto decisivo que impidió la derogación de la ley de sanidad de Obama.

[3] Trump insistió en que había ganado y en que Cruz se impuso de manera fraudulenta. Estábamos más que avisados.

[4] «Election 2016: Campaign Money», *The New York Times*, 22 de junio de 2016, <https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/election-2016-campaign-money-race.html>.

[5] Y en que lo iban a pagar los mexicanos, un giro retórico tan fantasioso como inspirado.

[6] Un ultraderechista que acabó como asesor de Trump en la Casa Blanca; fue despedido, cazado cometiendo un fraude millonario e indultado por Trump el último día de su mandato.

[7] Esto era falso, por supuesto. Trump, que siempre ha sido notoriamente tacaño, apenas utilizó su fortuna durante la campaña y dependió de pequeños donantes.

[8] Jill Stein, candidata de los verdes, sacó 49.941 en Pensilvania, 51.463 en Michigan y 31.072 en Wisconsin, manteniendo la gloriosa tradición del partido de restar suficientes votos a los demócratas para provocar su derrota electoral iniciada por Ralph Nader en Florida en 2000 (97.488 votos).

[9] Thomas E. Patterson, «News Coverage of the 2016 General Election: How the Press Failed the Voters», Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, 7 de diciembre de 2016.

[10] Rob Faris *et al*., «Partisanship, Propaganda, and Disinformation: Online Media and the 2016 U.S. Presidential Election», Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University, 16 de agosto de 2017.

[11] Roger Stone acabó siendo condenado a cuarenta meses de cárcel por obstrucción a la justicia al negarse a declarar sobre el caso. Fue indultado por Trump.

[12] Nate Silver, «The Comey Letter Probably Cost Clinton the Election», *FiveThirtyEight*, 3 de mayo de 2017.

Capítulo 10. Mirando al futuro

[1] Hay que recordar que la población de Estados Unidos, a diferencia de otras economías desarrolladas, sigue creciendo a buen ritmo; entre las dos

elecciones aumentó en casi nueve millones.

[2] Los datos son, nuevamente, de Pew.

[3] Estados Unidos, increíblemente, no tiene bajas pagadas por maternidad o enfermedad.

[4] «As Partisan Hostility Grows, Signs of Frustration with the Two-Party System», Pew Research Center, 9 de agosto de 2022.

[5] William H. Frey, «Americans' local migration reached a historic low in 2022—but long-distance moves picked up», Brookings Institution, 9 de agosto de 2023.

[6] Hay un puñado de ciudades de Florida creciendo increíblemente rápido, pero el grueso de esas llegadas lo componen *baby boomers* jubilados.

[7] Y sólo porque Ross Perot sacó un 13 % del voto. El último demócrata en ganar sin terceros de por medio fue Jimmy Carter.

[8] Por desgracia, en las primarias de 2016 sólo había una alternativa a Clinton y Sanders, Martin O'Malley, exgobernador de Maryland, pero se retiró tras sacar sólo un 0,6 % del voto en Iowa. O'Malley, por cierto, era la inspiración del personaje de Tony Carcetti en *The Wire*.

[9] «Six Kinds of Republican Voters», *The New York Times*, 17 de agosto de 2023.

[10] Sondeo de YouGov para CBS, 16-18 de agosto de 2023, <https://www.scribd.com/document/666053809/cbs-20230820-SUN>.

[11] Sondeo de YouGov para Yahoo News, 17-21 de agosto de 2023, <https://www.scribd.com/document/667014349/20230821-trump-tabs>.

[12] Está casado, además, con Gabby Giffords, una congresista demócrata que fue tiroteada por un ultraderechista.

[13] Con el objetivo de cerrar las ambigüedades que hicieron posible el intento de golpe de Trump, nada menos.

[14] Las élites del partido demócrata no tienen reparo alguno en ignorar a sus bases cuando les conviene.

[15] En España estamos por encima de ochenta y dos años.

[16] Ashish P. Thakrar *et al*., «Child Mortality In The US And 19 OECD Comparator Nations: A 50-Year Time-Trend Analysis», *Health Affairs*, 37 (1), 1 de enero de 2018, pp. 140-149, <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.0767>.

[17] «The Polarization in Today's Congress Has Roots That Go Back Decades», Pew Research Center, 22 de abril de 2022, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/03/10/the-polarization-in-todays-congress-has-roots-that-go-back-decades/>.

Índice

Por qué se rompió Estados Unidos

1. La (no) excepción de Trump

2. Problemas de origen

3. La Constitución de 1877 y las dos Américas

4. Derechos civiles, Nixon y la invención del resentimiento

5. Partidos políticos, sindicatos y leyes electorales

6. La era de la polarización

7. Los motores de la polarización

8. Obama y las reglas del juego

9. La pesadilla de 2016

10. Mirando al futuro

Sobre este libro

Sobre Roger Senserrich

Créditos

Notas